

EL RETORNO DEL GENERAL

-EL BUSSIMO, LA OTRA CARA DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA-

Julio Alberto Aibar
III Promoción del Doctorado
En Ciencia Política
Tutor: Dr. Benjamín Arditi

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FLACSO
-SEDE MÉXICO-
DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA**

T 320.98243 A288r
FLACSO - Sede México - Biblioteca Iberoamericana



62983

El retorno del general

EL RETORNO DEL GENERAL
-EL BUSSIMO, LA OTRA CARA DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA-

Postulante: Julio Alberto Aibar
Tutor: Dr. Benjamín Arditi.
Seminario: Cultura, política y sociedad.
Coordinadora: Dra. Nora Rabotnikof.
Lectores: Dr. Fernando Gonzales, Dra.
Rozaba Winocur, Dr. Julio Labastida.

México, D.F., agosto de 2003

T
320.98243
A288r



62983

*a Lulú,
porque la amo*

Agradecimientos

No sirvo para muchas cosas, “para nada”, sentenció alguna vez una novia. Si eso se aplica a mi capacidad para expresar lo que siento, no tengo más que darle la razón. Trataré, no obstante, de hacerlo.

Agradezco al Ministerio de Cultura y Educación de Argentina por la beca que me permitió estudiar y a la FLACSO, por la ayuda en momentos en que mi país era expulsado del primer mundo, en donde nunca estuvo. A Marthita, Heleno, Nicasio y Laurita, por su disposición a dar una mano cada vez que los necesité. A Silvia Morón que, casi sin conocerme, me recibió en su casa con toda su calidez cuando, sin conocer a nadie llegué a esta ciudad.

A todos los compañeros del doctorado, especialmente a los del seminario que, con sus comentarios, me ayudaron a mejorar este trabajo. Al gordo Moi que, de no ser por su muerte absurda, debería estar junto nosotros.

A los profesores Luis Salazar, Fernando Cortes, Martín Puchet, Andreas Scheler y Rubén Hernández.

A mis amigos de aquí, Antonia, Kari, Gise, el Cholo y su familia, el Choca, la Dani, Fernando, Claudia, Emma y Miguel, por su compañía, solidaridad y afecto. A mis amigos de allá, el Cuchi, Dani, Pacho, Bachi, el Loco, Ramón y Ariel, que nada saben de hegemonía y esas cosas, pero que, con su calidad humana, dejan “dislocado” hasta al más erudito.

A mis viejos y a mi abuela, por su confianza, sacrificio y solidaridad. A mi hermano y hermana, con sus respectivas familias, por su apoyo. A la madre, abuela y tía de Lulú, por el apoyo logístico prestado en momentos en que extrañaba desesperadamente a mi niña.

A Fernando, Rosalía y Julio, por la atenta lectura de este documento y por sus sugerencias. Un gracias enorme e infinito a Nora y Benjamín, personas excepcionales, verdaderos “maestros” en el sentido argentino del término. Extrañamente generosos en un mundo de mezquindades y competencias absurdas y despiadadas. Con ellos pude trabajar en total libertad y, si algún mérito tiene este trabajo, se debe sin dudas a su conocimiento, talento y perseverancia. En lo académico, incomparables, en lo personal, entrañables.

Finalmente a Claudia, por su afecto y compañía (aguante, debería decir). Porque los momentos más importantes de mi vida en México los pasé en su compañía.

Indice

Introducción General	9
-----------------------------------	---

Capítulo 1

Hegemonía y discurso	19
- El carácter discursivo de lo social y la constitución de identidades políticas.....	21
- Posición de sujeto y articulación.....	29
- Articulación y hegemonía.....	32
- Hegemonía y dislocación.....	36
- Dislocación, mito y exterior constitutivo.....	39
- Utilidad del análisis de discurso para el caso del bussismo.....	45

Capítulo 2

El discurso de la muerte	46
- Pte 1: Contexto desde el que surgió el disc. de la dictadura. Antecedentes y génesis del disc. Bussista.....	47
- El diagnóstico de la situación: "La República enferma".....	52
- El programa: un conjunto de medidas urgentes y "necesarias".....	57
- La lucha por la dirección política.....	63
- La configuración del lugar de enunciación y la lógica interna del discurso de Bussi.....	64
- Parte 2: El discurso del "Proceso de Reorganización Nacional".....	66
- El combate a la subversión, la denominada "guerra sucia".....	70
- La reforma económica del Proceso.....	74
- Parte 3: La gobernación de Bussi: "una expresión particular del espíritu del Proceso".....	78
- La lógica del discurso de Bussi gobernador de facto.....	79
- El primer momento: Refundación e instalación del mito.....	83
- El programa de la dictadura en Tucumán.....	86
- El segundo momento: La consolidación del mito.....	88
- La conclusión del mandato: la sutura del mito de una sociedad que no necesita de sutura.....	91
- Caracterización de la situación.....	92
- La resignificación del programa.....	98
- Similitudes y diferencias entre el Proceso de Reorganización Nacional y el Proceso Provincial.....	100

Capítulo 3

El alfonsinismo y la definición de la democracia	101
- Parte 1: El nacimiento del discurso democrático: antecedentes de la construcción de una hegemonía.....	103
- Parte 2: la derrota militar en Malvinas: Dispersión y constitución de una nueva hegemonía.....	118
- Parte 3: De la moralidad pública a la ética de la solidaridad.....	134
- Parte 4: la casa... ¿estaba en orden?.....	153

Capítulo 4

El bussismo, una forma diferente de entender a la democracia	162
- Parte 1: la campaña electoral de 1987 y el ingreso de Bussi a la política.....	165
- Parte 2: El "bautismo de votos" y la fatídica elección del gobernador.....	181
- Parte 3: La consolidación del bussismo y la fundación de Fuerza Republicana.....	194
- Parte 4: Una "esperanza en marcha", que desesperó al General.....	205
- Parte 5: El gobierno de Ortega y el largo camino hacia las elecciones de 1995. Bussi al gobierno.....	211
- Parte 6: ¿Rebote autoritario o expresión border-line de la democracia? Interpretaciones del bussismo.....	217

Capítulo 5

Balance y discusión final	224
- Resumen de los discursos de Bussi militar, del alfonsinismo y del bussismo en democracia.....	225
- El discurso de Bussi durante la dictadura militar.....	225
- El alfonsinismo.....	228
- El bussismo en democracia.....	233
- Esquema comparativo a partir de distintas dimensiones de análisis.....	239
- Discusión de las distintas lecturas que se hicieron del bussismo.....	242
- Conclusiones preliminares.....	255
- Nómina de desaparecidos en la provincia de Tucumán.....	264
- Bibliografía.....	268
- Periódicos y revistas.....	271

Introducción

EL RETORNO DEL GENERAL

*"Te prometemos que
en la alegría y la risa
del festival nadie osará
dar una interpretación siniestra
a tu repentina vuelta
a la forma humana".
Apuleyo*

"Una vez vi como un detenido desnudo era enterrado vivo, dejándole solamente la cabeza fuera del pozo, apisonando la tierra después de mojarla para compactarla; esto duraba 48 horas. Ocasionaba calambres muy dolorosos y afecciones a la piel. En dos oportunidades presencié fusilamiento en este campo, el que efectuaba el primer disparo era el General Bussi".¹ Ese mismo General, 18 años después, asumía por segunda vez el cargo de gobernador de Tucumán, solo que en esa ocasión, elegido por el voto de los ciudadanos.

Esta tesis se propone estudiar, tomando como referencia fundamental al análisis del discurso y a la teoría de la hegemonía propuestas fundamentalmente por Laclau y Mouffe, el surgimiento y la consolidación en democracia del fenómeno del bussismo, fuerza política dirigida por uno de los personajes más siniestros de la dictadura que gobernara Argentina entre los años 1976-1983. Se tratará de responder, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿cómo surgió el bussismo?, ¿cuáles fueron los principales recursos discursivos con los que interpeló a los tucumanos?, ¿porqué pudo haber contado con el apoyo electoral que contó?, y si se trató de un rebrote autoritario. Pero, antes de estudiar al Bussi político (Cap. IV), nos parece imprescindible reconstruir el discurso de Bussi durante la dictadura militar (Cap. II), ya que éste constituyó parte del capital simbólico que el militar puso en juego en su incursión en la arena política y al discurso democrático del "alfonsinismo" (Cap. III), dominante en la época de su surgimiento. Esta reconstrucción nos permitirá desde una perspectiva comparada detectar las continuidades y diferencias entre unos y otros discursos,

¹ Pasaje del testimonio presentado ante la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas - CONADEP- por el gendarme Omar Eduardo Torres, Legajo N° 6667 (CONADEP, *Nunca Más*, 1984: 216-217).

para finalmente, polemizando con otras lecturas de fenómeno, ofrecer una caracterización del mismo (Cap. V.).

Pero antes de adentrarnos en la problemática específica que nos ocupará, vale la pena realizar una sintética reseña de la vida pública del General. Bussi nació en la pequeña localidad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, y llegó a Tucumán en diciembre de 1975, para hacerse cargo del Operativo Independencia. Este operativo -que se inició el 5 de febrero de 1975- fue ordenado por el decreto 256/75 del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y tenía por objetivo, según reza su Artículo 1º, “el exterminio del accionar subversivo” en la provincia de Tucumán.

La selección de Bussi para sustituir al General Acbel Vila -primer comandante del Operativo Independencia-, se realizó en base a su reconocida dureza y al conocimiento de las más avanzadas tácticas antiguerrilla, aprendidas durante su estancia como observador y colaborador de los marines estadounidenses en Vietnam.

El General Vila, en el acto organizado para despedirlo, declaraba: “la guerrilla ha sido aniquilada, por lo que se ha asegurado la seguridad y tranquilidad de la población” (*La Gaceta* 03/12/1975).² Sin embargo, y a pesar del terror que había reinado durante su gestión al frente del Operativo, a Tucumán le esperaba la etapa más cruenta de su historia. Durante la comandancia de Bussi, y sobre todo a partir del golpe de Estado de marzo de 1976 que lo llevó a ocupar la gobernación, la represión se incrementó notablemente y se extendió de los cerros -lugar donde según el propio ejército se encontraba la guerrilla- a toda la provincia.

“A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina” (CONADEP, 1984: 213). Este primer centro de detención se ubicaba en la localidad de Famaillá, distante a 35 Km. de la capital y fue conocido por el nombre “La Escuelita”. A partir de esta experiencia, se

² Las palabras de Vila serían confirmadas por los informes del Servicio de Inteligencia del Estado -SIDE- que confirmaban que a inicios de 1976, “las bandas estaban aniquiladas y solo quedaban en el monte 4 ó 5 delincuentes dispersos” (FAMUS, *Operación Independencia*, 1988: 200).

establecieron en la provincia otros trece centros clandestinos de detención: la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, la Escuela de Educación Física, la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, la Escuela “República del Perú”, “El Reformatorio”, “El Motel”, Nueva Baviera, la comisaría de Monteros, los ex ingenios Lúles, Bella Vista y Fronterita. Estos centros de detención, “fueron pasando de pequeñas casas o sótanos muy bien disimulados a grandes instalaciones” (CONADEP, 1984: 214).

Por ahí pasaron cientos de personas que vivieron los tormentos de la tortura y todo tipo de vejaciones. Muchos de ellos engrosaron las listas de desaparecidos, otros, las de “muertos en combate”. Al momento en el que Bussi dejaba la gobernación de Tucumán la cifra de desaparecidos ascendía a 503 y la de supuestos guerrilleros “muertos en enfrentamientos”, llegaba a 242. Si a estos se le agregan los detenidos, la cifra de víctimas directas de la dictadura en Tucumán asciende a cerca de 4000. Sin contar los despedidos y cesanteados de sus trabajos y las víctimas de expropiaciones e incautaciones injustificadas, en Tucumán – que en esa época contaba con cerca de 800.000 habitantes- 5 de cada 1000 habitantes, sufrieron directamente los efectos de la represión.

El artículo 5° de la Ley antisubversiva aplicado en el ámbito académico significó el despido, encarcelamiento de docentes y cierre de carreras y cátedras. Más de 160 estudiantes, docentes, graduados y no docentes desaparecieron desde que se inició el Operativo Independencia, luego de que se creara en el ámbito universitario el Servicio de Seguridad y Vigilancia (SSV), que actuara en forma coordinada con el destacamento de inteligencia N° 142 y el Servicio de Inteligencia del Estado –SIDE-, y se habilitaran dos dependencias de la Universidad de Tucumán, la Escuela Universitaria de Educación Física y el Pabellón Universitario San Javier como campos de concentración.

En este periodo también se registra el secuestro y desaparición de gran cantidad de dirigentes gremiales, especialmente de la Federación de Obreros, Empleados y Trabajadores del Azúcar -FOETRA- y de la Federación de Obreros y Trabajadores de la

Industria Azucarera -FOTIA-, muchos de los cuales nunca se supo que tuvieran vinculación alguna con la guerrilla.

Pero todo este accionar represivo fue acompañado por una gestión que, en términos de obra pública, marcaría importantes diferencias con los gobiernos democráticos que le precedieron y sucedieron. Contando con un sustancial incremento de los fondos de coparticipación, que llegaron a duplicarse durante los dos primeros años del gobierno de facto, la administración de Bussi, llevó a cabo entre otras las siguientes obras: remodelación de 52 establecimientos asistenciales y construcción de 4 hospitales públicos. Construyó más de 70 kilómetros de caminos de llanura, 14 complejos polideportivos; instaló 46 mil metros de cañerías con lo que llegó el agua potable a 3.700 pobladores; terminó la construcción de la planta potabilizadora “El Cadillal”, 80 escuelas y el dique de embalse La Angostura.

Esa obra pública -una de las principales banderas que levantara el bussismo en las campañas electorales posteriores-, se realizó también con el apoyo financiero del Fondo Patriótico Azucarero.³ Con sus aportes, “es posible afirmar que, mensualmente, la administración bussista dispuso de 6 millones de dólares extraordinarios, es decir, más allá de los recursos legítimos” (López Echagüe, 1991: 207).⁴

Pero la tan mentada capacidad realizativa del General, tenía su lado oscuro: todo se hizo ignorando la denominada “ley de Contabilidad” (licitaciones públicas) y a través de un Consejo de Control Operativo que jamás dio explicaciones de sus actos.

La provincia de Tucumán -“ejemplo” de la dictadura militar-, empezaría en los años posteriores al Proceso a experimentar una de sus crisis económicas más profundas. Es en este contexto en el que la obra pública de la gestión del primer gobierno de Bussi se hacía más relevante. Este último aspecto, frecuentemente olvidado por toda la oposición al bussismo, fue uno de los pilares de sus campañas electorales y funcionaba como un

³ Esta organización, creada el 26 de agosto de 1976, por decreto ley número 4.536, estaba integrada por las principales industrias azucareras de la provincia.

⁴ Los fondos provenientes de la coparticipación federal eran, en esa época, de 5.000.000 de dólares.

parámetro de una gestión “eficiente”, que contrastaba notablemente con las administraciones posteriores.

En el año 1987, tres años después de la caída de la dictadura, Bussi -a pesar de haber sido beneficiado por las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” dictadas por el gobierno de Alfonsín- es citado por la justicia tucumana para declarar por un caso de sustracción de menores. A la salida de los tribunales unas veinte personas lo esperaban para expresarle su reconocimiento por lo realizado durante su gestión en los años setentas. Este hecho fue tres meses antes de las elecciones realizadas en octubre de 1987. A partir de allí, según sus propias declaraciones, Bussi comienza a considerar la posibilidad de lanzar su carrera política. Dos meses más tarde -veinte días antes de las elecciones-, presenta su candidatura a gobernador de la provincia representando al Partido Bandera Blanca, agrupación política marginal que estaba a punto de perder su personería jurídica por no haber alcanzado el mínimo de votos exigidos por la ley (el 2% del padrón electoral).

Casi sin campaña electoral (solo había sacado unas cuantas solicitudes en los diarios locales), consigue la suma de 100.000 votos, lo que representaba el 20 % del padrón. Meses después rompe con Bandera Blanca y funda el partido Fuerza Republicana. De ahí en más, su partido experimentó un crecimiento sostenido hasta alcanzar la gobernación de Tucumán en el año 1995, con el 48% de los votos.

El desempeño electoral de Bussi provocó la indignación de las personas y Organismos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la sorpresa de las elites políticas. La idea dominante de la época, de que cualquier persona relacionada con el Proceso recibiría un enérgico rechazo por parte de la población, se basaba no solo en que la violación sistemática de los derechos humanos eran hechos ampliamente conocidos, sino además en el rotundo fracaso del proyecto económico de los militares, los casos de corrupción que habían salido a la luz y, sobre todo, en la derrota en Malvinas (1982), hecho que aceleró la salida de los militares del poder. Muy pocos esperaban que uno de los hombres emblemáticos de la brutalidad criminal del Proceso de Reorganización Nacional, pudiera participar del juego democrático y, mucho menos, que tuviera un buen desempeño

electoral.⁵ Sin embargo, tiempo después, diferentes estudios trataron de explicar el fenómeno del bussismo y las razones de su surgimiento.

En el capítulo final de este trabajo (Cap. V) se polemiza con estas lecturas del bussismo pero, como ya se señalara, antes se considera necesario indagar cual era el capital simbólico-político con el que contaba al momento de su presentación como candidato. Por eso se analiza el periodo que va desde que se hace cargo del Operativo Independencia -diciembre de 1975-, luego su asunción como gobernador de facto de la provincia de Tucumán -marzo de 1976- hasta el momento en que deja ese cargo a finales de 1977. A continuación se estudia el periodo de apertura e instalación de la democracia en Argentina, para dar cuenta del contexto, aparentemente desfavorable, en el que nació el bussismo. Después, se aborda al bussismo como fenómeno político que irrumpió en la arena política democrática, modificando el sistema de partidos que había dominado en la provincia de Tucumán durante más de 50 años. Finalmente, se realiza un análisis comparativo de los discursos bussistas entre sí (durante la dictadura y en democracia) y con el que se denomina en el Cap. III discurso democrático.

La estructura de la tesis sigue el siguiente capitulado:

En el **capítulo 1** se plantea el marco teórico con el que se cree mejor se puede dar cuenta del bussismo. En él se desarrollan los conceptos básicos de la teoría de la hegemonía y el análisis de discursos, las nociones de discurso, articulación, hegemonía, mito, dislocación y posición de sujeto.

En el **capítulo 2**, se analiza la producción discursiva de Bussi, primero como comandante del V Cuerpo de Ejército con asiento en Tucumán y Comandante en Jefe del Operativo Independencia y después como gobernador de facto de la misma provincia. En primer lugar, se indaga cual fue el contexto en el que tuvo lugar el discurso autoritario de Bussi y como se iba preanunciando el golpe de Estado de 1976. Para ello se presentan brevemente los discursos producidos por el gobierno justicialista de Isabel Martínez de Perón, del

⁵ Cerca de novecientas denuncias por violación a los derechos humanos, asesinato, sustracción de menores, usurpación de la propiedad, abuso de autoridad, etc., se registran en las distintas instancias de la justicia argentina e internacional. Esto le otorga a Bussi el triste privilegio de ser el militar argentino sobre el que más denuncias pesan en su contra.

principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical -UCR- y de la guerrilla. Se presta especial atención a los argumentos con los que se justificó la intervención del ejército en asuntos de seguridad interna y las reacciones que esa decisión produjo en el ámbito político. Después se analizan más en detalle el discurso del ejército y especialmente de Bussi durante el Operativo Independencia. A partir de ese análisis se puede comprobar como se definió en primera instancia al enemigo (“la subversión apátrida”) y las posteriores redefiniciones que justificaron la intervención del ejército, no solo en el terreno militar, sino fundamentalmente en el político, que se consumó con el golpe de Estado. A partir de ese momento se estudia a grandes rasgos el discurso del Proceso de Reorganización Nacional que, según nuestra perspectiva, se organizaba en torno al significante *Orden* y cuyo contenido se expresaba en los mitos de la “guerra contra la subversión” o “guerra sucia” y en el de la “economía del libre mercado”. Este estudio permite identificar el marco general en el que se inscribió el discurso específico del Proceso de Reorganización Provincial, que tenía en Bussi a su principal ejecutor. Se sostiene que, a diferencia del Proceso Nacional, los mitos que sostuvieron el discurso bussista fueron una expresión más virulenta de la “guerra sucia” y el de la capacidad realizativa, en términos de obra pública.

En el capítulo 3, se estudian los primeros indicios de apertura política (1981), el derrumbe de la dictadura militar, la constitución de una nueva hegemonía política en Argentina y los primeros síntomas de su dislocación. Se postula que esa hegemonía estuvo organizada por el significante *democracia*, que tenía en el alfonsinismo a su principal exponente. Se trata de demostrar que después de la derrota de Malvinas (1982), en Argentina se produjo la dislocación definitiva del orden dominante, que abrió posibilidades para la constitución de un nuevo orden y que ese nuevo orden se comenzó a constituir a partir de la denuncia de un supuesto pacto entre sindicalistas -que buscaban mantener el control de los sindicatos- y militares -que trataban de evitar ser sometidos a la justicia por la violación a los derechos humanos y por lo actuado en la guerra de Malvinas-. La denuncia del pacto permitió introducir pautas demarcatorias fundamentales en la política argentina de la época y reconfiguró el campo que se había constituido como anti dictadura. Alfonsín, sin haber sido el primero que denunció el pacto, fue quien pudo sacar un mayor rédito político de él; en primer lugar por las posiciones críticas que mantuvo durante el régimen militar, y en

segundo lugar, por haberlo incorporado y articulado a la lucha por la definición del régimen democrático que se venía. Se sostiene que el mérito del alfonsinismo fue haber introducido una novedad política al proponer que esta debía tener como referencia fundamental e irrenunciable a la democracia, definida no solo como un conjunto de reglas. La democracia, en la versión alfonsinista, pudo organizar el campo político porque sirvió de superficie de inscripción de un conjunto de demandas que iban desde la libertad y garantía de los derechos civiles y políticos, hasta las mejoras de tipo salarial. Esta ampliación de la definición de la democracia, le permitía al alfonsinismo interpelar a una cantidad importante de personas y grupos y ubicarse con ventajas ante PJ, que no podía resolver sus conflictos internos y que se limitaba a apelar a la memoria de los logros del pasado, conseguidos en las mejores épocas de Perón. Esta ventaja se concretó en el triunfo de la UCR en las elecciones de 1983. Con el radicalismo en el gobierno, Alfonsín se propuso resolver, simultáneamente, dos de los problemas que más le preocupaban: el de la democratización de los sindicatos y el de los juicios y la reestructuración de las fuerzas armadas. La lectura que hacía el alfonsinismo era que el problema que nunca había podido resolver la Argentina, era el de la imposibilidad de construir un centro de gravedad político, que rompiera con el empate crónico al que llevaba la capacidad de veto de las corporaciones (ejército y sindicatos). Ese empate crónico conducía a la parálisis y a la recurrente interrupción del régimen democrático. La idea de emprender lo más pronto posible las reformas en los ámbitos militar y sindical, se basaba en el supuesto de que en ambos estamentos, habían sectores proclives al cambio que se plegarían a las propuestas reformistas del gobierno, con lo cual se rompería la lógica corporativa. El gobierno quería aprovechar la legitimidad que le había dado la ciudadanía en las urnas. Ambos proyectos fracasaron: la ley sindical fue rechazada en el Congreso, y los sindicalistas, montados en el pésimo desempeño de la economía, se fortalecieron como oposición. En cuanto a las reformas militares, algunas fueron aprobadas, pero su objetivo central, que era saldar las cuentas con el pasado no fue alcanzado. Para responder a esta demanda, el gobierno propuso dos mecanismos: que se distinguieran niveles de responsabilidad en la violación a los derechos humanos, dejando libre por medio de la invocación de la obediencia debida a aquellos que habían actuado bajo órdenes de superiores, y que las denuncias fueran atendidas en primera instancia por la justicia militar con una instancia civil de apelación. La

primera de estas estrategias fracasó al momento en que se introdujo una enmienda propuesta por el senador Sapag de la provincia de Neuquén, que excluía de la obediencia debida a los crímenes de lesa humanidad y al secuestro de niños, pues la mayoría de los casos denunciados se encuadraban en esas figuras. La segunda tuvo un revés cuando los tribunales militares se negaron a encarar seriamente el juicio a sus pares, con lo que la mayoría de los casos fueron apelados y pasaron a la justicia civil. Esto llevó a que un sector de militares se sublevara e impusiera las leyes de obediencia debida y punto final, hechos que llevaron a que el gobierno se enfrentara con sectores que reclamaban el juicio y castigo a los represores y que anteriormente lo habían apoyado.

Mientras los enemigos se fortalecían, el gobierno se ganaba cada vez más opositores. La situación económica, de mala pasó a ser gravísima, con dos brotes hiperinflacionarios, el gobierno de la UCR perdió por amplio margen las elecciones con Carlos Menem y tuvo que entregar el mando cinco meses antes de lo previsto.

En el capítulo 4, se estudia el surgimiento y la consolidación del bussismo como fuerza política. En primer lugar, se trata de reconstruir el contexto político y social de la época en la provincia de Tucumán. En función de ello, se analiza el desempeño del gobierno peronista en la provincia, el rol de la oposición y el conjunto de demandas sociales que se planteaban en el año 1987, en que se presenta Bussi por primera vez a elecciones para disputar el cargo de gobernador. Una vez planteado el contexto, se estudian cuáles eran las demandas a las que su discurso hacía de soporte. Esto sirve para explorar cuáles fueron las personas y grupos que se sintieron interpelados por la propuesta bussista y que después pasaron a ser su base electoral y organizativa. Independientemente de que una buena parte de la propuesta bussista consistía en un llamado a realizar una reedición de un pasado supuestamente glorioso, en este capítulo se sostiene que entre el Bussi militar y el Bussi político se pueden advertir importantes diferencias. En la sección final de este capítulo, se presentan sintéticamente, las diferentes lecturas o interpretaciones que se realizaron sobre el bussismo, las cuales serán retomadas críticamente en el Cap. V.

En el **capítulo 5**, se realiza un resumen de los discursos analizados en los Cap. II, III y IV, para después de detectar cuales fueron los referentes que organizaron a cada uno de ellos. Una vez ubicados, esos referentes se analizan y comparan las distintas cadenas de equivalencias que articulaban y como estas servían para caracterizar la situación, proponer un programa e intervenir en la lucha por la dirección política. A partir de estos elementos se comparan las diferentes formas en que se definían los lugares de los respectivos amigos y enemigos y donde residía su capacidad interpelatoria. Ello permite realizar una lectura crítica en la que se cuestionan los diferentes estudios que se hicieron del bussismo, reseñados en la sección final del Cap. I, para finalmente ofrecer una caracterización del fenómeno estudiado.⁶

⁶ Muchos de los trabajos con los que polemizamos tratan de demostrar que Bussi sigue siendo el mismo asesino del Proceso, cosa con la que estamos perfectamente de acuerdo. Sin embargo, e inclusive más allá de las intenciones del propio Bussi, las significaciones de los discursos no dependen exclusivamente de lo que el emisor anuncia, sino también de la superficie discursiva en la que ese discurso se inscribe.

Capítulo 1

Hegemonía y discurso

"Resulta tan difícil pensar la política porque 'la política' es a su vez objeto de la lucha política. Vale decir, la lucha política es siempre también una definición por definir que es la política. Determinar el terreno de un conflicto ya forma parte del conflicto mismo. Crear una definición socialmente aceptada de lo que entendemos por política es, por así decir, una cuestión de poder."

(Lechner, 1986: 3).

En este trabajo se propone una lectura del bussismo desde la perspectiva del análisis del discurso desarrollada por la que se dio en llamar la *teoría de la hegemonía*. Esta perspectiva, ofrece las herramientas conceptuales para dar cuenta del surgimiento de esa formación política, de sus características particulares y de las modificaciones que en el campo político introdujo su constitución como alternativa en el contexto democrático.

La noción de hegemonía -que se sustenta en una concepción discursiva de lo social- se desarrolló como una crítica a las concepciones esencialistas de las identidades y como un intento por abandonar las determinaciones lineales y en "última instancia" y ha sido definida por Laclau y Mouffe (1987), como "un tipo de relación política, una forma, si se quiere, de la política". ⁷

Siguiendo a Sigal y Verón (1988), se puede decir que la acción política, como todo comportamiento social, no es comprensible fuera del orden simbólico que genera y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales. Por eso creemos que uno de los caminos para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción lo constituye el análisis del

⁷ La forma hegemónica es una de las formas posibles de la política, pues no toda actividad política tiene que ser o tener aspiraciones hegemónicas. Un ejemplo de ello era la lucha de la Madres de Plaza de Mayo que en sus inicios levantaban la consigna "aparición con vida", la cual no tenía intención de ser una demanda que articulara a otras.

discurso. “Estudiar la producción discursiva asociada a un campo determinado de relaciones sociales es describir los mecanismos significantes sin cuya identificación la conceptualización de la acción social y, sobre todo, la determinación de la especificidad de los procesos estudiados es imposible” (:13).

A partir de estos supuesto básicos, se propone explorar cuales eran las condiciones que permitieron la producción del discurso bussista, cuales los referentes que lo organizaron, y donde residía la capacidad interpelatoria que la llevó en poco tiempo a ser una de las principales fuerzas políticas en la provincia de Tucumán.

En esta tarea serán centrales los conceptos de discurso, identidades políticas, posición de sujeto, articulación, sobredeterminación, punto nodal, hegemonía, dislocación, exterior constitutivo y mito, que a continuación se desarrollan.

El carácter discursivo de lo social
y la constitución de identidades políticas

La teoría de la hegemonía, como se señaló en la introducción de este capítulo, se sustenta en una concepción discursiva de lo social, entendiendo por discurso no solo al lenguaje hablado y escrito, sino, en una perspectiva muy cercana a la de los juegos de lenguaje Wittgenstein, a toda acción portadora de sentido.⁸

Lo social es aquello cargado de significaciones y las significaciones son a su vez construidas socialmente, es decir, por medio de un juego relacional de mutua constitución. Pero, como señala Laclau (1985), no se trata “de concebir lo discursivo como constituyendo un nivel, ni siquiera una dimensión de lo social, sino como siendo coextensivo a lo social en cuanto tal”, lo que significa “que lo discursivo no constituye una superestructura, ya que es la condición misma de toda práctica social o, más precisamente, que toda práctica social se constituye como tal en tanto es productora de sentido” (:39)⁹

Con esto se quiere decir que la acción social misma no es determinable fuera de la estructura simbólica e imaginaria que la define, siendo la “validez de este principio teórico independiente de la cuestión de saber si los actores, cuando actúan, saben lo que hacen y si cuando discurren, saben lo que dicen” (Sigal y Verón, 1988: 13).

Por eso, sostener que las prácticas sociales son tales porque tienen (y producen) sentido, no implica atribuirles racionalidad ni reconocer que las personas involucradas en esas prácticas sean totalmente conscientes de ellas, tampoco que puedan dar cuenta de todo lo que dicen o hacen en los términos de una lógica racional; aunque esta posibilidad esté siempre presente. Sentido, entonces, debe ser entendido aquí como sinónimo de significación y no como una orientación determinada de los discursos.

⁸ Para Torfing (1998), “discurso se refiere a un conjunto de prácticas que no pueden ser reducidas ni a sus componentes semánticos ni a los pragmáticos” (: 41).

⁹ Con una perspectiva similar, Sigal y Verón dirán que el análisis del discurso “no se sitúa en un plano pretendidamente ‘superestructural’, como si se tratara de un nivel que ‘acompaña’ o ‘refleja’ (más o menos bien) el desarrollo de los procesos ‘concretos’ o ‘materiales’ del comportamiento social (:14).

El juego relacional de constitución mutua entre lo social y la significación debe guardar cierta sistematicidad y regularidad e inscribirse en una configuración discursiva que lo preexiste para que la significación advenga. Por eso, ni un objeto ni una acción pueden crear por sí mismos su propia significación, se precisa, como lo señaló Wittgenstein que “el lugar ya esté preparado para la acción” (Brand, 1981: 59). En consecuencia, las significaciones sociales son posibles porque hay un discurso específico que se los permite, pero que también les impone sus límites.

Un ejemplo claro de ello es la dificultad que tiene el Modelo Médico para mantener una de las características que lo define, el mercantilismo, en sociedades que no están organizadas de un modo capitalista. Observaciones realizadas por antropólogos dieron cuenta que la intervención terapéutica de un médico europeo en una tribu aborígen del África, en lugar de generar una deuda en los asistidos, estos últimos se sentían acreedores y con derecho a reclamar una retribución por parte del médico. Esto era sí porque para los aborígenes, la enfermedad la habían puesto los dioses en sus cuerpos como castigo por algún acto, y si el médico había sacado la enfermedad de sus cuerpos estaba obligado a protegerlos de por vida porque eso los exponía a que los dioses irritados los castigaran más severamente (Clavreul, 1983).

En pocas palabras, el significado particular de las palabras, acciones o cosas, se dará según su inserción en formas precisas de articulación discursiva.

En este sentido, Laclau y Mouffe (1990) dan un ejemplo de cómo las cosas nunca se nos presentan como meras entidades existenciales: “Una piedra existe independientemente de cualquier sistema de relaciones sociales, pero es, por ejemplo, un proyectil o un objeto de contemplación estética sólo dentro de una configuración discursiva específica. Un diamante en el mercado o en el fondo de una mina es el mismo objeto físico; pero, de nuevo, es sólo una mercancía dentro de un determinado sistema de relaciones sociales” (:101).

Pero, así como el discurso es el que constituye a los objetos, también constituye a los sujetos. Es la configuración discursiva la que hará de ellos, un estudiante, un artista o un

asesino. Desde una perspectiva más esencialista se puede argumentar que alguien que quite la vida a otro es un asesino, independientemente de la configuración discursiva en la que se inscriba este acto. Sin embargo, para las religiones cristianas por ejemplo, la disposición de Abraham a matar a su hijo por pedido de Dios, no hizo de él un asesino ni de Dios un bárbaro. Todo lo contrario, ese acto fue interpretado como una muestra sublime de fe. Bussi mismo, a pesar de estar probado que directa o indirectamente quitó la vida a cientos de personas, no es por todos considerado un asesino, para algunos inclusive fue un salvador ante la “amenaza subversiva”.

El discurso del derecho es quizá la expresión más elaborada de la construcción discursiva del acto. Para el derecho, la posibilidad de juzgar “objetivamente” un acto esta dada por la observancia y consideración del conjunto de situaciones y circunstancias que lo rodearon. La criminalidad (o no) del acto no está dada de antemano o por el acto mismo (si es que este existe), sino por las circunstancias que lo hicieron posible. Ahora bien, esas circunstancias no son otra cosa que construcciones discursivas, por lo que podemos decir que el acto mismo termina siendo un producto de su inscripción en esas construcciones discursivas.

Es decir, la operación de articulación de objetos, acciones o de unidades discursivas, conceptualizadas por Laclau como la transformación de *elementos* en *momentos* del discurso, transforma su estatuto, pero también altera la identidad del discurso preexistente que los incorpora.

La observación o deducción matemática de astros, que no existían en el discurso de los astrónomos, y su posterior incorporación a sus sistemas planetarios, llevó a que estos astros pasaran a tener existencia dentro del discurso astronómico, pero también llevó a que esos sistemas se modificaran; que se pasara de pensar en un sistema geocéntrico a uno heliocéntrico, por ejemplo. Es decir, se produjo un cambio doble de identidad, el de los nuevos astros y el del sistema planetario al que se incorporaron.

Esto no quiere decir que toda incorporación en un entramado discursivo produce un cambio tan radical como el ejemplo dado anteriormente, en algunos casos lo que se experimenta es una ampliación o contracción del campo discursivo ya existente. En el año 1983, cuando se produjo el cambio de régimen político en Argentina, llegó a la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín, quien encarnaba un campo discursivo que se organizaba en torno al significativo democracia, el que a su vez articulaba una cadena discursiva en la que se encontraba incluida la igualdad de todos los argentinos ante la ley. Años después, y producto de las presiones de un sector de militares de rango medio y bajo que se encontraban procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso. Esta ley, que finalmente fue aprobada, eximía de responsabilidades y culpas a los sectores del Ejército que habían actuado bajo ordenes de las comandancias, invocando la figura de la obediencia debida. La defensa del proyecto de ley en el Congreso la realizó el propio Alfonsín, y la presentó como totalmente compatible y hasta necesaria para la democracia, en tanto aportaba a la pacificación (la que se consideraba como condición imprescindible para la democracia). La aprobación y aplicación de la ley llevó a que centenares de militares que habían violado los derechos humanos quedaran totalmente absueltos de esos cargos ante la justicia. Este hecho no implicó que el régimen político dejara de ser considerado democrático, pero sí llevó a que debilitara la articulación entre “igualdad ante la ley” y democracia y abrió un espacio de conflicto con aquellos sectores que anteriormente se encontraban identificados con la definición de democracia que el propio alfonsinismo había ayudado a configurar años atrás y que demandaban el cumplimiento del principio “igualdad ante la ley.”

No se sostiene con esto que la ley de obediencia debida cuestionaba con su simple promulgación la igualdad de todos los argentinos ante la ley, lo que se está afirmando es que así fue interpretada por importantes sectores de la población. De hecho, el propio Alfonsín la había propuesto tímidamente en su campaña electoral, pero, como todo discurso es objeto de interpretación, la mayoría de sus votantes había obliterado esta parte de su propuesta.

Por eso, referirse al carácter relacional del discurso y a la posible transformación doble de las identidades, implica tomar distancia de las posiciones esencialistas que consideran que las identidades se constituyen a sí mismas; pero también lleva a alejarse de aquellas perspectivas estructuralistas para las cuales las cosas y los sujetos son puros efectos de estructura, en la que hay una determinación lineal y mecánica de la estructura hacia lo estructurado. Pues, si bien los sujetos se constituyen en tanto hay un discurso social que los interpela, estos son quienes sostienen, recrean y reinventan los discursos sociales por medio de la repetición, la interpretación y la creación, que les permite la facultad del habla.¹⁰

Este doble carácter (de efecto y productor) del sujeto del discurso es lo que lo llevó a Lacan a reconocer en el hombre no solo un ser hablante, sino también un ser hablado (*parletre*). La primera de estas características hace imposible el sueño totalizador de un discurso final, cerrado y autosuficiente, pues los sujetos siempre tendrán la posibilidad de decir, pensar, interpretar o hacer algo que no estaba instituido en el discurso, y con ello dar cuenta de su carácter inacabado; pero hace también imposible que el sujeto enunciator o productor de discursos posea un control absoluto de lo que dice. “En cuanto habla, en cuanto piensa que utiliza la lengua, en realidad es la lengua quien lo utiliza a él, en cuanto habla dice más de lo que quiere, y, al mismo tiempo, dice siempre otra cosa” (Miller, 1991: 33).

Ahora bien, la transformación de *elementos* en *momentos* por medio de su articulación a un entramado discursivo hace, como se señaló anteriormente, que la identidad de esos elementos se modifique, pero eso no implica que los elementos pierdan toda la significación que tenían antes de su articulación: siempre quedará un remanente que no será absorbido por la cadena articulatoria. Es por este plus de significación que es más apropiado hablar de cadenas de equivalencias -cuando no referimos a la articulación de sentido- y no de simple identidad entre los términos.¹¹

¹⁰ Recordemos que para Saussure, el habla es el uso privado de la lengua y es la instancia en la cual los sujetos pueden introducir novedades lingüísticas.

¹¹ Si lo que se estableciera entre los términos fuera una relación de identidad, la cadena colapsaría (Laclau, 1999: 97).

Buena parte de la lucha política consiste ya sea en explotar el remanente de sentido de los términos articulados o bien en reducirlo a su mínima expresión. En el discurso que dio Alfonsín el 3 de diciembre de 1983 al asumir la presidencia de Argentina, articuló a la democracia (que era el elemento organizador de la política en el momento), el signifiante ética. “Seremos una ética más que una ideología”, decía el presidente, agregando que por ética entendía moralidad en la administración de la cosa pública. La mayor parte de los organismos defensores de los derechos humanos, tomaron la propuesta de Alfonsín pero, lejos de quedarse con la definición que éste proponía de la ética, explotaron parte de su significado residual e intentaron redefinirla a partir de lo que eran sus principales demandas. Su respuesta fue que el proceder ético era necesario, pero que éste pasaba principalmente por esclarecer el pasado y por llevar adelante el juicio y castigo de los que habían violado los derechos humanos.

Pero, antes de pasar al siguiente punto, es necesario hacer tres aclaraciones: 1) que se asuma el carácter relacional de lo social, no implica que se deba asumir un relativismo absoluto; 2) que la posibilidad de significación este dada por la inserción de los objetos en una superficie discursiva, no implica que esos objetos no existan más allá de lo discursivo, y 3) decir que la constitución de los sujetos es discursiva, no implica que el discurso pueda producir de ellos cualquier cosa.

Con relación al primer punto, se puede argumentar que asumir la doble relatividad del signo lingüístico, esto es, que la relación signifiante-significado es arbitraria y que la definición del signo solo puede hacerse a partir de lo que no son, no implica que esta relatividad sea absoluta. Los signos lingüísticos, una vez integrados a las prácticas discursivas e instituidos, adquieren una cierta estabilidad y su carácter relativo deja de ser total. De hecho, la inteligibilidad de todo discurso depende en parte de un proceso de sedimentación histórica de las significaciones. Que un análisis deconstructivo pueda poner al descubierto el carácter contingente de esas sedimentaciones no implica que se esté desvalorizando su valor histórico o social. Por eso, decir que las acciones sociales adquieren significaciones de acuerdo a las superficies discursivas en las que se inscriben no lleva a tener que aceptar todo acto como válido.

Una crítica que frecuentemente se le ha realizado a los relativismos es que a partir de ellos es imposible fundar una ética que rechace, por ejemplo, al asesinato. Que postular la inexistencia de universales puede llevar a que sea imposible condenar todo tipo de atrocidad. Esta crítica podría tener asidero si se adoptara un relativismo extremo. Sin embargo, este no es el caso del análisis de discurso al que nos estamos refiriendo. Es más, por ejemplo, la posibilidad misma de considerar al acto de quitar la vida a otro como un crimen y a este como algo moralmente negativo, es porque ciertas configuraciones discursivas permitieron que así fuera. Las personas y la humanidad no nacieron con el principio del “no matarás” incorporado. Negar el carácter esencial y atemporal de este principio puede llevar incluso a revalorizar su papel histórico y posibilitar una crítica a aquellas formaciones sociales o políticas que manifiestan estar de acuerdo con él mientras en la práctica lo violan sistemáticamente.

Pero aún quienes defienden la esencialidad del principio de que todo acto de quitar la vida a otro es un asesinato inscriben esos actos en entramados discursivos por medio de la observación y consideración de las circunstancias en la que esos actos se consuman, desestabilizando de hecho la esencialidad del principio.

Un mecanismo al que frecuentemente apelan algunos esencialismos de tipo humanista para separar hechos aberrantes de lo humano es calificarlos a estos o a quienes los realizan de animales, monstruosos o diabólicos (estos fueron algunos de los calificativos que se les dio por ejemplo al nazismo y al stalinismo), en lugar de asumirlos como enteramente humanos y a partir de ahí pensar cuales fueron las condiciones históricas concretas que los hicieron posibles, cuales los discursos que los justificaron y cuales harían más difícil su retorno.

En definitiva, rechazar cualquier fundamento último no implica que no se pueda asumir posiciones éticas.

El segundo punto en cuestión se relaciona con otra de las críticas que más insistentemente se han levantado contra el análisis del discurso, en tanto este sería una nueva forma de idealismo, en la medida en que “los objetos no hablados, escritos o pensados no existen”

(Geras, 1987: 66), por lo que se trataría de "una versión renovada, ahora sociológica, del idealismo trascendental" (Borón, 1996: 24).

Lo primero que hay que señalar al respecto es que esta crítica yerra en suponer que el análisis de discurso que aquí nos ocupa niega lo que pueda estar afuera del universo discursivo. Volviendo al ejemplo del descubrimiento de los planetas que diéramos anteriormente, desde el análisis del discurso no se afirmaría que no existían antes de que se les observara o que su existencia se dedujera matemáticamente, lo que sí se puede afirmar es que, en la medida en que no estaban integrados a discurso alguno, carecían de significaciones para los hombres. Incluso algo que pueda ser visible no dará cuenta de su existencia si no se encuentra articulado a usos lingüísticos particulares. Esto es lo que Staten (1984), parafraseando a Wittgenstein llamó significado en el uso: "El argumento de Wittgenstein es que un cuadro -incluso un cuadro mental- no puede determinar su propio significado sino que su significado se determinará por su uso o aplicación, su inserción en una cierta sucesión. Inserto en *esta* sucesión, el cuadro será una muestra de una cosa; inserto en *esa* sucesión, lo será de otra" (:73). La sucesión a la que se refiere Staten es lo que aquí se llama discurso.

Finalmente, reconocer la capacidad performativa del discurso no implica que este pueda construir cualquier cosa a partir de cualquier cosa. Es decir, el discurso no tiene una capacidad creativa o transformadora ilimitada, aunque esas limitaciones no estén dadas necesariamente a priori. Algunas limitaciones provienen del propio discurso, otras, de las características físicas de los objetos. Las limitaciones que provienen del discurso son aquellas restricciones que su propia cristalización y sedimentación histórica imponen, lo que no niega que estas restricciones puedan ser removidas con el tiempo. Las limitaciones que se derivan de las características físicas de los objetos son aquellas que, para emplear el mismo ejemplo que dan Laclau y Mouffe (1990), nos impiden hacer de un diamante un tapado de piel, por ejemplo.

Posición de sujeto y articulación

Que el sujeto sea constituido por medio de la interpelación discursiva entraña el supuesto de que necesita de un *otro* para que esa constitución sea posible. Esto implica un descentramiento fundamental, pero además, se producen otros descentramientos que están dados por el hecho de que un sujeto nunca es interpelado por un solo discurso (o por un único lugar de un mismo discurso). De hecho, su constitución se logra por la cristalización de múltiples interpelaciones. Un mismo sujeto puede ser interpelado por un discurso político que hace de él un liberal, pero al mismo tiempo puede ser interpelado por un discurso religioso que lo hace católico, por uno familiar que lo hace padre y así sucesivamente. Por eso a Laclau y Mouffe (2000) les pareció apropiado pasar de la categoría sujeto a la de posición de sujeto, que alude a las distintas interpelaciones (muchas ellas contradictorias e incoherentes), que coexisten en una misma persona o grupo.

Aplicada al terreno político esta distinción se toma sumamente importante ya que amplía aún más el espectro de la contingencia. Si por ejemplo en un país los militares dan un golpe de Estado de derecha, es esperable que todas las personas simpatizantes de la izquierda reaccionen desarrollando estrategias de resistencia, sin embargo, si en estas personas prevalece la posición de padres, antes que las de simpatizantes políticos, también se puede esperar que no reaccionen para no exponer a sus familias a la represión.¹²

En la lucha política, la cuestión de las posiciones de sujeto entra permanentemente en juego. Las alianzas y frentes, por ejemplo, son priorizaciones de posiciones coincidentes o similares ante algunos temas, sin que las diferencias para con otras cuestiones se disuelvan. En otras situaciones la lucha puede pasar por “fijar”, por reducir al otro a una de sus posiciones, de acuerdo a si se lo identifica como enemigo o aliado. Cuando se da el primero de los casos, el enemigo será identificado en la (o las) posiciones que se suponen negativas, mientras que, cuando se lo identifica como un aliado, se destacarán las posiciones que supuestamente lo favorecen. Un ejemplo paradigmático de ello fue la lucha al interior del

¹² El no haber considerado la posibilidad de que una misma persona puede actuar a partir de diversas posiciones, muchas de ellas manifestamente contradictorias (como el comunista que es a su vez fervientemente católico), pudo haber sido uno de los factores que llevó a que las élites políticas de la provincia de Tucumán, subestimaran las capacidades de Bussi para desempeñarse en la arena política democrática.

peronismo en donde la derecha trataba de asimilar a la figura de Perón todas las posiciones que fueran más cercanas a ellos, negando las que los oponían, mientras que la izquierda hacía lo propio. Una de las consignas que levantaba la derecha era “Ni yanquis ni marxistas, peronistas”, mientras la izquierda reivindicaba “Perón, Evita, la patria socialista”.

El marxismo clásico tuvo el mérito teórico de cuestionar el centramiento del sujeto en sí mismo al considerar que éste era un producto de la ubicación en la que se encontrara al interior de una estructura productiva, sin embargo, al tener en cuenta solo esta relación y no considerar que podían existir otras instancias de estructuración, o bien al reducirlas a todas ellas a la economía, hicieron de la posición de clase una posición esencial.

Ahora bien, que existan posiciones múltiples de sujeto no implica que entre estas no haya relaciones. Laclau y Mouffe (2000) previenen ante el error en el que han caído quienes solo han considerado la dispersión de las posiciones de sujeto, que llegaron a pensar que la dispersión implicaba separación efectiva, pasando de un esencialismo de la totalidad a un esencialismo de los elementos. Para los autores, la dispersión es solo un momento del análisis, que debe estar seguido por otro que de cuenta de la relación entre las partes o elementos y que se deriva del mismo supuesto que da cuenta de la dispersión, esto es, que “toda posición de sujeto es una posición discursiva”, por lo que no se puede “prescindir de las formas de sobredeterminación de unas posiciones sobre otras” (:154).

Que intervengan formas de sobredeterminación no significa que opere una supradeterminación lineal, mecánica o “en última instancia”, con la cual se estaría retornando a un plano de lo fundamental y otro de lo fundado. Si se quiere decir que hay relaciones múltiples y articulaciones no predeterminadas ni azarosas entre posiciones “que se refuerzan mutuamente y actúan unas sobre otras” (:156).

Si retomamos el ejemplo anterior y nos quedáramos en el momento del análisis de la dispersión, lo que se veía es que el peronismo es una conformación tan heterogénea que entre las partes parecería no haber relación alguna. Sin embargo, si en un segundo momento

desplazamos el análisis y prestamos atención a las regularidades que en esa formación se presentan, podemos dar cuenta de cómo, a pesar de la dispersión, el peronismo pudo constituirse en una fuerza política que en determinados momentos pudo presentarse más o menos cohesionada, aunque en ella se reunieran sectores en pugna.

¿Cuál sería entonces el punto de sobredeterminación, que enlaza a la derecha con la de izquierda del peronismo? En las consignas – “Ni yanquis ni marxistas, peronistas” y “Perón, Evita, la patria socialista”- el significante Perón hace de soporte común de posiciones que conducen a políticas contrapuestas. Es lo que sobredetermina el campo peronista y permite la relación de las partes.

Pero esa relación pudo ser sostenida más fácilmente cuando Perón se encontraba en el exilio. Su ausencia facilitaba la vaciedad imaginaria que era rellenada con contenidos particulares -muchas veces contrapuestos-, pero también con algunos puntos de encuentro. Ambos sectores luchaban para que Perón regresara a la Argentina -“Perón vuelve”, era la consigna común-, pero mientras que para la izquierda ese regreso podía significar el establecimiento del socialismo, para la derecha era una posibilidad de poner freno al “avance marxista”.

Articulación y hegemonía

La noción de sobredeterminación conduce directamente a la categoría central de hegemonía, la que puede ser definida como una “relación de tipo político” (Laclau y Mouffe, 1987: 96). Una práctica hegemónica supone el establecimiento de articulaciones que producen modificaciones de los elementos en relación, con lo que las identidades ya no podrán ser reducidas a una presunta posición de clase, estructura parental o ubicación social. Pero además de ello, la articulación hace posible que alguno(s) de los elementos de la relación pueda hacer de superficie de inscripción del resto de los elementos, en procesos similares a los que para la teoría psicoanalítica intervienen en la formación de los sueños y que Freud denominara condensación y desplazamiento. Estos procesos complementarios consisten en la concurrencia de una multiplicidad de ideas (condensación) y en la transferencia (desplazamiento) de la carga afectiva y de representación de unas hacia otras, que esa concurrencia hace posible.

En la política, una práctica hegemónica tiene lugar cuando una (o unas) demanda social particular transforma su contenido inicial para hacer de soporte de otras demandas sociales. Esa transformación en un elemento articulador no está determinada de antemano, depende de la lucha política, y su instauración es por excelencia el momento político. En ese sentido se puede afirmar que la lógica de la hegemonía es la lógica de la política, ya que es el momento en que diversas demandas actúan reforzándose mutuamente en un intento de proveer de sentido a una situación determinada e imponer su lectura como horizonte significativo e inteligible.

Esto da lugar a que una demanda social pueda ser interpretada en su contenido específico o bien por su capacidad potencial para transformarse en el espacio de representación de otras demandas. Si se prioriza este último aspecto, su efectividad dependerá de la capacidad que tenga para reorganizar el campo político y hacer del suyo un espacio de representación en el que se integren otras demandas sociales y de su disposición a abandonar cada vez más la especificidad de su reclamo, por medio de un proceso de vaciamiento, que le permita representar una diversidad. Este proceso de vaciamiento de una particularidad, para que

luego asuma la representación de una universalidad, es lo que Laclau (2002: 360) llama lógica de significante vacío en torno a la cual se estructura la categoría de hegemonía.

La noción de significante vacío fue tomada del concepto de *point de capiton* o punto nodal de Lacan que da cuenta de la operación que estructura un campo discursivo determinado, para luego dar lugar al momento de sutura o cierre provisorio. Un significante puede hacer de punto nodal no porque sea originalmente rico y saturado de significaciones, sino por lo contrario, porque se presenta como carente de significaciones específicas. Es decir, las posibilidades estructurales del punto nodal están dadas por la paradoja de que para poder contener una multiplicidad de sentidos tiene que tener la menor cantidad posible de significaciones particulares.

Entonces, para que una práctica política se constituya como hegemónica, una de sus componentes o demandas deberá aparecer como un horizonte ilimitado de inscripción de otras demandas. Pero es claro que solo deberá parecer, es decir, ser transformado en un imaginario que lleve al desconocimiento del carácter relacional y arbitrario del campo que organiza y de las identidades que configura.

Las posibilidades de que un discurso sea un eficaz organizador de un campo político y pueda constituirse en hegemónico, dependerán en gran medida de que algo de él permanezca desconocido, donde lo que se desconoce, más que algún contenido particular del discurso, es el carácter arbitrario del momento de su institución. Si la arbitrariedad de las articulaciones siguieran siendo evidentes, la configuración de la hegemonía sería imposible.

En este sentido, podemos decir que en el discurso de la última dictadura argentina -que se organizaba alrededor del significante Orden-, lo desconocido era la arbitrariedad de la relación entre ese significante con la eliminación de la guerrilla, por ejemplo, y no éste último hecho en sí, que no solo era reconocido, sino que además era abiertamente reivindicado por el régimen militar. El desconocimiento de la arbitrariedad de la relación

orden implica *eliminación de la guerrilla* (Orden → eliminación de la guerrilla), hacia que esta última pareciera natural e inclusive necesaria.

Pero ese desconocimiento es también condición para que la significación advenga, ya que es lo que permite que la cadena discursiva no sea un libre e inacabado discurrir, que en algún punto se detenga y de lugar a la ilusión de un cierre. Sin la intervención de los puntos nodales, que amarran el discurso y producen un cierto desconocimiento, la cadena discursiva no tendría fin, pues “hablando estrictamente no hay una palabra adecuada para definir algo y es siempre en relación a otros significantes que uno formula algo” (Miller, 1990: 37).

Entonces, la ilusión, que es “indispensable a la constitución del vínculo social” (Laclau, 1998: 97), es el “cemento” que liga una serie de demandas, aspiraciones y toda la diversidad que hay en su seno, haciendo aparecer las articulaciones como necesarias y naturales.

Pero, por más que la paradójica ilusión de infinitud y clausura opere en la constitución de una hegemonía, la capacidad articuladora de los puntos nodales tiene sus límites, pues, como todo signifiante, para instituirse necesita diferenciarse y establecer relaciones de exclusión con otros. Por ello las aspiraciones de universalidad de toda hegemonía serán fallidas desde el inicio, e implica que para que una demanda tenga algún sentido social, deberá renunciar a las pretensiones de significarlo todo, por más inclusiva que sea, algo deberá quedar afuera.

Se puede encontrar un ejemplo de una constitución hegemónica en la política argentina de principios de los años ‘80s. Ante las crecientes muestras de descomposición de la dictadura gobernante, la demanda de democracia fue el punto de articulación de otras demandas como las de aumento de salarios, de acceso a la educación, a la salud, a la justicia. Para poder articular esa otra serie de demandas, la democracia perdió parte de su particularidad y tuvo que dejar de ser planteada como un simple cambio de reglas del juego político. Con ello la democracia no perdió toda su significación original, pero ésta significación pasó a

ser insuficiente para definirla. Pero, además la democracia no podía definirse por sí sola, por más elementos que ella articulara, tenía que ser presentada en una relación de exclusión con algún otro, y lo que cumplió esa función en este caso fue el régimen autoritario. La dictadura militar era, en términos de Staten (1984) el exterior constitutivo de la democracia. La instancia externa que hacía posible (y amenazaba) su existencia.

Cabe ahora agregar que no todas las demandas existentes tienen las mismas posibilidades de constituirse en el eje articulador del campo político en una situación determinada. Además de la posibilidad de vaciarse de su contenido particular, una demanda tendrá más posibilidades de éxito si goza de credibilidad. De no ser así, sus propuestas chocarán con los principios básicos que informan la organización de un grupo y muy difícilmente esa demanda podrá presentarse como el horizonte ilimitado (Laclau, 1990: 66).

La demanda de *liberación*, que había sido una de las organizadoras del campo político en la década de los '70, y que era planteada en términos antitéticos con la *dependencia*, fue nuevamente propuesta para cumplir ese rol en los momentos en que la dictadura argentina comenzaba a desmoronarse. Sin embargo, sin ser rechazada, no pudo cumplir con ese rol articulador, en alguna medida porque no podía constituir un espacio en el que cupiera todo el campo anti régimen, pero además porque estaba asociada a una izquierda que no se caracterizaba por haber hecho de la democracia uno de sus ejes políticos fundamentales. A ello se agregaba que se la ligaba a un pasado que la mayor parte de la población rechazaba en ese momento.

Hegemonía y dislocación

El proceso de disolución de una hegemonía sucede cuando la posición de articulación empieza a absorber cada vez menos demandas y pierde su dimensión de horizonte. En otras palabras, cuando se pone en evidencia el carácter relacional y arbitrario de la articulación que había logrado establecer y de las identidades que había constituido.

Este proceso tiene lugar por algo que a primera vista puede parecer paradójico: cuanto más potente parece ser la construcción hegemónica, cuando más universal se muestra la superficie de inscripción de demandas diversas y más inagotable su capacidad para absorber particularidades, mayor será la debilidad de las articulaciones que establezca. La arbitrariedad de las equivalencias se harán evidentes y aparecerán más claramente las incoherencias, contradicciones, cuando no las oposiciones. Es decir, las posibilidades de expansión de las cadenas de equivalencias son frecuentemente inversamente proporcionales a su cohesión interna.

Podemos decir que este fue el caso de la articulación que se estableció cuando comenzó la caída de la dictadura en Argentina. El campo político organizado por la democracia no solo implicaba el cambio en las reglas del juego político, además absorbió una cantidad innumerable de otras demandas: ética, moralidad, justicia, justicia social, estabilidad económica, libertad, solidaridad, desarrollo, orden, movilización social, soberanía, pacificación, democracia sindical, bienestar, salud, educación, alimentación, entre otras, se articulaban en una cadena que parecía extenderse sin fin.

Por un lado, esto representaba una ventaja para Alfonsín, que era quien encarnaba la nueva hegemonía, pues, cuanto más se extendía la cadena, posibilitaba una mayor inclusión de demandas y con ello también una mayor capacidad para interpelar a las personas y grupos que las sostenían, pero, por otro lado, en la medida en que incorporaba a sectores muy heterogéneos, también implicaba una mayor inestabilidad de la formación hegemónica.

Una vez que el radicalismo llegó al gobierno, la heterogeneidad se expresó en el frente gubernamental en parálisis, pujas internas crónicas y políticas erráticas. Los grupos más

progresistas, proclives a la movilización social y a la pronta implementación de reformas estructurales presionaban para avanzar en esa dirección, mientras los más conservadores trataban de producir la menor cantidad de cambios. Esta lógica, que está presente en todo proceso político, se expresó con especial virulencia en los primeros años de la democracia.

A la heterogeneidad, se agregaba la creencia de que la con vuelta a la democracia se solucionarían todos los problemas, llevando a una revolución de las expectativas y una explosión de las demandas, creencia que en alguna medida fue promovida por el propio radicalismo en la campaña electoral y que después se volvió virtualmente incontenible cuando estuvieron en el gobierno.

Sin embargo, ni la heterogeneidad de la composición del frente gobernante, ni la revolución de expectativas son suficientes para explicar la dislocación de la hegemonía que se había establecido.¹³ De hecho, el menemismo que le sucedió en el gobierno, también nucleaba en sus filas a sectores heterogéneos (desde sectores marginales, hasta representantes de grupos financieros) y no solo pudo mantenerse en gobierno durante un periodo, sino que además logró modificar las reglas electorales e imponerse por segunda vez en las elecciones. Por eso, creemos que a los dos elementos mencionados se le sumaba la falta de un centro político, social o temático, que gravitara más que los otros y que diera mas consistencia al campo, cosa que el gobierno de Menem si tuvo. Parafraseando a Portantiero (1983), podemos decir que, en el frente gobernante se reproducía la situación de empate crónico que había dominado en la Argentina en el último siglo.

Ahora bien, toda desarticulación abre un espacio para la emergencia de nuevas demandas particulares, que pueden competir por medio de la lucha política para ocupar el espacio de articulación. Las demandas sociales surgen como una respuesta a la necesidad de interpretar o significar una situación que ha cambiado. La dislocación de un orden establecido genera la posibilidad de reconsiderar y constituir una nueva forma de representación que sea capaz de instaurar un nuevo sentido de orden. Por eso, la noción de

¹³ Estos dos elementos no solo son necesarios, sino imprescindibles para el establecimiento de cualquier hegemonía. No hay hegemonía sin heterogeneidad y sin que de algún modo despierte expectativas políticas.

dislocación alude por un lado a un momento de fragmentación pero, por otro, hace referencia a una apertura, a una oportunidad que hace factibles nuevas formas de la política. Este efecto ambiguo que produce la dislocación de una estructura no significa que todo se vuelva posible o que todo marco simbólico desaparece, pues "la situación de dislocación es la situación de una falta que involucra una referencia estructural" (Laclau, 1990: 43), por lo que, si tiene lugar una nueva conformación hegemónica, esta no se constituirá de la nada, se tratará más de un desplazamiento que de un cambio radical. Es necesario aclarar finalmente que esto no quiere decir que a un momento de dislocación le suceda necesariamente una nueva rearticulación hegemónica, también está presente la posibilidad del caos y la disolución.

Dislocación, mito y exterior constitutivo

Las demandas sociales aparecen cuando un sector social percibe o siente que “algo anda mal”. Por ello, se puede decir que son una respuesta crítica a ciertas dislocaciones pero, por otro lado, en la medida en que reclaman una solución, son también un intento de sutura del espacio dislocado.

Si la demanda tiene éxito en su esfuerzo suturante (lo que no necesariamente significa que su reclamo sea satisfecho), puede pasar a ser un principio de lectura de la situación dislocada y, a partir de ahí, constituir un mito. El mito, que no debe ser entendido aquí en un sentido despectivo, tiene lugar cuando una demanda es percibida como el principio de lectura y solución a un universo de problemas que no tienen relaciones necesarias entre sí. Es un principio de rearticulación de los elementos dislocados en un cierto momento de cualquier configuración social. En ese sentido, toda sutura es por un lado un momento de cierre, pero implica también una instancia que desutura los elementos que hasta ese momento habían permanecido organizados de otra forma.

Entendido, en una perspectiva cercana a la de Foucault (1984), en tanto el mito determina “lo que puede conocerse, lo que debe hacerse y lo que puede esperarse” (:38), su trabajo será esencialmente hegemónico y puede ser entendido como un efecto de las articulaciones que establecen los puntos nodales. Pero además, la elaboración mítica, es una forma de eludir las incoherencias, sortear las inconsistencias y naturalizar las arbitrariedades presentes en toda cadena discursiva y construcción de significados.

La noción de mito puede servir para estudiar las características de su contenido particular, o bien, para dar cuenta de su capacidad articulatoria, es decir sus potencialidades para constituirse en superficie de inscripción de otros mitos. Siguiendo a Barros (2000), se puede llamar al primero *contenido mítico* y al segundo *espacio mítico*.

Definido así el mito, parecería que puede ser confundido con la noción de discurso, sin embargo existen entre ellos importantes diferencias. Si entendemos que discurso es “una ‘totalidad relacional’ de secuencias significantes” (Torfing, 1998: 40), el mito puede ser

entendido como el contenido particular de un discurso dado; dicho en términos de Barthes (1999), “todo lo que justifique un discurso puede ser mito” (1999). Además, si entendemos que el trabajo del mito es esencialmente hegemónico, no todas las articulaciones discursivas compartirán esta característica, pues “una práctica articuladora solo puede ser considerada como hegemónica si implica la subversión de prácticas opositoras que compiten intentando articular lo social de manera distinta” y lleva a la “construcción de fronteras políticas”. Por lo que “la hegemonía debe ser definida como un intento de extender un conjunto relativamente unificado de discursos, como el horizonte dominante de lo social” (Torfing, 1998: 44).

Lo paradójico es que el establecimiento de una hegemonía, que puede ser considerado como el momento político por excelencia, al ser llenado de contenido mítico, puede ser también entendido como un momento de declinación de lo político, en el sentido en que “el mito tiene a su cargo fundar, como naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad, lo que es contingencia”. Pero también es probable que ahí resida su eficacia, en su capacidad para tomar la diversidad social, simplificarla y presentarla organizada: “El mito no niega las cosas, su función, por el contrario, es hablar de ellas; simplemente las purifica, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la explicación, sino de la comprobación. Al pasar de la historia a la naturaleza, el mito efectúa una economía: consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, suprime la dialéctica, cualquier superación que vaya más allá de lo visible inmediato, organiza un mundo sin contradicciones puesto que no tienen profundidad, un mundo desplegado en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí mismas” (Barthes, 1999: 238/9).

Ahora bien, para que una práctica se constituya en hegemónica y un contenido particular pase a ser el mito que organiza un espacio dislocado, el mito tiene que estar “constitutivamente dividido/partido” (Laclau, 1996 :38). Por un lado, cada configuración mítica tiene una identidad que la hace diferente y distinguible de los otros mitos pero, por otro lado, en tanto establece una cadena de equivalencias a su interior, sus elementos o demandas deben cancelar parte de sus diferencias, sin llegar por eso a ser idénticos.

En el periodo que se abre después de la derrota del ejército argentino en Malvinas, las diferentes demandas particulares de los diversos sectores sociales y políticos suspendieron sus diferencias, no entre ellas, pero sí ante la dictadura militar que empezaba a derrumbarse y entraron en una relación de equivalencias en la cadena discursiva organizada por el significativo democracia. Las relaciones que se establecían entre las diferentes demandas no eran el producto de que sus aspiraciones estuvieran intrínsecamente vinculados, sino porque ellas eran entendidas como equivalentes en tanto se oponían al gobierno militar.

En ese sentido, lo que permitió el establecimiento de las equivalencias al interior del mito era un elemento que a la postre quedaría fuera del campo que se acababa de establecer. Ese elemento exterior instituía fronteras políticas y representaba aquello a lo que el campo anti-régimen se oponía, pero, por otro lado, negaba la constitución plena de los elementos al interior del campo. Es decir, el exterior constitutivo por un lado permitía la configuración de identidades políticas, pero por otro lado negaba la posibilidad de su constitución autónoma y plena.

El exterior constitutivo del ejemplo de las formaciones políticas argentinas en el momento de la caída de la dictadura, tuvo la forma discursiva de enemigo, sin embargo, no todas las relaciones que las prácticas hegemónicas establecen se expresan en estos términos. De hecho, sus posibilidades están dadas por la coexistencia de dos lógicas: una, la de la exclusión y otra que podemos denominar de la diferencia, que frecuentemente se presenta en el discurso político con el término adversario.

La diferencia fundamental está en que con el enemigo no hay relaciones de articulación, mientras que con los adversarios sí. Ello no niega que en otras situaciones políticas el enemigo deje de serlo y pase a ser un adversario o viceversa. Esto fue lo que pasó por ejemplo durante la guerra de Malvinas. Parte de los grupos políticos que habían llegado al enfrentamiento armado con los militares, ante la guerra se ofrecieron de voluntarios para integrar un frente común, que hiciera frente a las fuerzas británicas. En ese sentido, se puede decir que se había instituido un nuevo enemigo, ante el cual y en una

situación de guerra, las fuerzas políticas mencionadas y las fuerzas armadas argentinas podían articularse como equivalentes.¹⁴

Esto indica que, a pesar de la intensidad que pueda haber en la distinción del enemigo que lleva a la exclusión mutua de los términos, esta distinción no pierde su carácter arbitrario y formal. No hay nada esencial en ella y sus posibilidades de articulación estarán siempre abiertas. Esta precisión nos acerca a lo que para Carl Schmitt constituye el criterio de demarcación de lo político, con el que se pueden superar las definiciones esencialistas, tautológicas o derivadas de supuestas competencias u objeto.

Siguiendo este precepto, Schmitt postula que, “la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo” (1999 :56). A ello agrega que, “el sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación”, y que, según lo cual, “el enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo (...). Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo” (57).¹⁵ Es decir, lo político aparece allí donde la distinción amigo-enemigo opera, y donde el enfrentamiento de las partes alcanza o sobrepasa ciertos grados de intensidad.¹⁶

Según el propio Schmitt, lo anterior constituiría un criterio autónomo de distinción, en la medida en que no se deriva de otros criterios, eliminando, por otro lado, la idea de que a lo político le corresponda un objeto particular.

¹⁴ La dictadura argentina no aceptó esta propuesta y siguió considerando a estos grupos un enemigo con el cual ni en situación de guerra podían establecer alianzas.

¹⁵ Esto hace posible una lectura de Schmitt, probablemente más allá de Schmitt: si la mismidad se inaugura en la distinción de un otro como diferente, y si esa distinción es arbitraria en tanto no hay en el otro nada esencial en lo que uno pueda fundamentar la diferencia, invirtiendo la fórmula se podría decir que tampoco hay nada esencial en ese uno. Lo que se pone al desnudo es entonces no la radical extrañeza del otro, sino la más bien la radical extrañamiento del uno mismo. Esta marca una diferencia fundamental entre Schmitt y por ejemplo Menguele. Mientras este último buscaba desesperadamente con su ciencia en los últimos rincones del cuerpo “el” elemento, un dato de los tejidos, músculos, huesos o genes, que hicieran evidente y demostrara la diferencia el otro, sabía de antemano que dicho elemento no existía, que había que crearlo. La “ciencia” se mostraba en este punto, mucho más ideológica que la política.

¹⁶ Se puede decir que, en este sentido, la intensidad del conflicto cambia la cualidad de la relación.

Ahora bien, para Schmitt, el enemigo es el “distinto”, el “extraño”, el que amenaza la propia existencia. La pregunta que se podría hacer aquí es: ¿cuánto puede un extraño amenazar mi propia existencia, en la medida en que permanezca en calidad de extraño?, o bien, ¿cuanto puede interpelar mi integridad si no hay posibilidad alguna de semejanza?

En contraposición a Schmitt podríamos afirmar que solo puede constituirse una relación amigo-enemigo entre quienes al menos en algún punto se asemejan. Esa semejanza puede estar dada por lo que las partes tienen, quieren o desean.

No es casual que en las distinciones antagónicas se apele a la idea de expropiación, en tanto hay alguien que se apropia de algo que legítimamente le pertenece a la otra parte: la burguesía se constituye en enemiga del proletariado porque le expropia parte de “su” trabajo, los judíos son el enemigo del pueblo alemán porque le “chupan su sangre”, los inmigrantes son enemigos de los austriacos -en la versión de Haider-, en la medida en que ocupan “sus” puestos de trabajo.

Es decir, solo se puede ver una amenaza en quien real o imaginariamente disputa algo, pero donde ese algo no es cualquier cosa, sino aquello que constituye su ser. En este sentido, la distinción amigo-enemigo puede fundarse tanto en elementos materiales (un salario, tierra, agua), como en cuestiones simbólicas (religión, costumbres).

La intensidad del conflicto estaría dada, en este caso, por cuanto juega en la constitución de la identidad de cualquiera de las partes, el elemento en disputa. Si se tratara de aquellas cosas que las personas o grupos de personas consideran no negociables, la intensidad del conflicto puede ser superlativa, caso contrario, la disputa puede no llegar a alcanzar siquiera un estatuto político.

Pero hay otra forma lógica en que el enemigo no se asimile al extraño total: que la constitución de la propia identidad se asienta en la posibilidad de identificar a un otro como enemigo. Esta forma de coconstitución es reconocida por el propio Schmitt, pues para él, “lo que no puede negarse es que los pueblos se agrupan como amigos o enemigos” (:58). Es

decir, el enemigo es en este caso constituyente, pero es también constitutivo, en tanto no se puede prescindir de él.

De todo lo anterior no debe entenderse que en el extraño haya algo esencial y propio que lo haga enemigo, más que el hecho de tener (o que quiera tener) algo que para la otra parte le sea propio. En la medida en que el enemigo no esencial dispute ese algo que se considere como entrañablemente propio (lo que constituye), puede esencializarse y convertirse en enemigo absoluto.

Por eso, para definir al enemigo, no hace falta que este tenga lo que la otra parte considere le pertenece, con el simple hecho de pretenderlo, puede poner al desnudo la fragilidad y contingencia de la constitución de la mismidad, y ello sería suficiente como para que se lo llegue a considerar una amenaza en términos existenciales (en tanto denuncia que lo que supuestamente le pertenece no le pertenece de un modo esencial e inmanente).

La externalización y extrañamiento, la acentuación de la diferencia es solo posible en un segundo movimiento, cuando una vez identificado como amenaza se lo exterioriza - extraña y se hace de él un enemigo. Este segundo movimiento es lo que permite por un lado acentuar la distinción (establecer distancia) y por otro inaugurar la mismidad.

La idea del enemigo como extraño y diferente se asienta en la tesis del temor a lo desconocido, la que se sostiene en aquí es la del temor a lo conocido-extrañado. Al interior de esta dupla de semejante-extraño se juegan las posiciones de, por ejemplo, el racismo y la aceptación de la diversidad, ya que sea cual fuera la posición adoptada, ninguna de ellas puede prescindir de la otra parte.¹⁷ Esto indica que si bien la figura del enemigo juega el papel de exterior constitutivo, su exterioridad nunca es total.

¹⁷ Si bien el racismo acentúa la diferencia y lo extraño, podemos encontrar en casi todos sus discursos alusiones a la interioridad y semejanza. El extraño siempre es presentado como infiltrado, que a modo de virus enferma, contamina y disgrega la pureza y unidad del pueblo. Por el contrario, en los discursos de la diversidad, comienza por aceptarse la diferencia, pero en algún punto se asume la semejanza e interioridad, en por ejemplo, el hecho de que todos, por igual, tenemos el derecho a ser diferentes.

Utilidad del análisis

de discurso para el caso del bussismo

Los conceptos desarrollados en los apartados precedentes, serán de suma utilidad para dar cuenta del surgimiento y consolidación del bussismo en la arena política de la argentina después de la apertura democrática. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es imprescindible analizar el discurso de Bussi en el periodo en que se desempeñó como gobernador de facto en la provincia de Tucumán (marzo de 1976 - diciembre de 1976). El estudio de este periodo, la forma en que se organizó y articuló el discurso de la dictadura, los contenidos específicos de esas articulaciones, las consecuencias de las configuraciones del enemigo, la economía, la mutación de las identidades políticas y las dislocaciones que posibilitaron nuevas formas de articulación, permitirán entender cual era el capital simbólico- político con el que contaba Bussi al momento de su retorno y cuales las demandas sociales que representaba.

Por otro lado, es necesario estudiar la apertura y la instalación de la democracia en Argentina, como al fenómeno político que representaba más cabalmente este periodo: “el alfonsinismo”. Tener en cuenta este periodo político no solo es necesario por ser el momento histórico en el que hizo su aparición el bussismo, sino, y fundamentalmente, porque los supuestos dominantes en el periodo democrático naciente parecían hacer imposible la aparición y desarrollo de una fuerza política como la que lideró el General.

Finalmente, se abordará al bussismo como fuerza política en democracia, tratando de dar cuenta de su producción discursiva por medio de la descripción de los mecanismos sociales significantes en los que se sustentaba y configuraban su especificidad. Al igual que en los casos anteriores, se indagaran cuales fueron los significantes que organizaban este discurso, cuales los que se encadenaban en calidad de equivalencias, quienes, porqué eran sus enemigos y cuales las eran las dislocaciones que su propuesta venía a rearticular.

Capítulo 2

El discurso

de la muerte

Como se adelantó en la introducción de esta tesis, en el presente capítulo se analiza el discurso de Bussi durante la dictadura militar. Este análisis parte del tiempo en que Bussi es nombrado al frente del Operativo Independencia, aborda el momento en que después del golpe es nombrado gobernador de Tucumán y finaliza cuando abandona ese cargo. Se consideró necesario, no obstante, estudiar a grandes rasgos el discurso de la dictadura, en tanto este constituía el marco general en el que el discurso de Bussi se encontraba inscripto. Esto permite además detectar cuales fueron las similitudes y las diferencias entre un discurso y el otro, resaltando el carácter peculiar con el que la dictadura caracterizaba la situación en Tucumán y el trato especial que de esa caracterización se derivó. Sin embargo, y debido a que no se puede dar cuenta de una determinada formación discursiva exclusivamente desde su lógica interna, se introduce en primer lugar una breve descripción del contexto político previo al golpe de Estado de 1976.¹⁸ Este es entendido a modo de antecedente o de pre-texto que proveyó de una serie los insumos discursivos, conceptos y hábitos que fueron aprovechados por la dictadura para legitimar su accionar.

¹⁸ Aclaración: se trata de una descripción sucinta del contexto y no de un análisis de los discursos anteriores al golpe.

Contexto desde el que surgió el discurso de la dictadura.

Antecedentes y génesis del discurso bussista

Remontarse a los orígenes, es siempre construir un mito. Construir un mito es consolidar una ideología.

-Jean Clavreul, 1983-

Si se estuviera que caracterizar en dos palabras la situación argentina anterior al golpe de Estado de 1976, estas serían: violencia política.¹⁹ Las esperanzas que se depositaban de que con el regreso de Perón, se lograría la reconciliación y la “unidad nacional”, se comenzaron a desvanecer antes de que el afeitado líder bajara del avión que lo traía desde España. Todo lo contrario a lo que se pensaba, con Perón en Argentina después de un largo exilio, los niveles del conflicto en lugar de reducirse se incrementaron. Los acontecimientos del aeropuerto de Ezeiza, en los que la derecha peronista masacró a un sector de la juventud, no serían más que una muestra premonitoria de lo que vendría después. Es que tanto para la izquierda como para la derecha más radicalizadas, la vuelta de Perón se presentaba como una oportunidad histórica para dirimir definitivamente los conflictos que dividían a los argentinos. Claro está que, si se pensaba en algo definitivo, no se esperaba que fuera por la vía pacífica, aunque se proclamara la pacificación. En palabras de Aricó (1999), en el período aludido “Había una compulsión irrefrenable hacia la confrontación militar que, como es lógico, daba razón de ser a las tendencias militaristas nunca superadas en las organizaciones de masas y en la dirección de Montoneros. Se tornó evidente que la reconversión del discurso de la guerra en un discurso de paz, que se produjo con la instalación del gobierno institucional (de Cámpora – 1973), no fue mucho más allá de las declaraciones explícitas y que la cultura política del movimiento nunca había dejado de privilegiar la violencia armada” (: 60).

Las cosas se tornaron más graves cuando Perón, en lugar de buscar un acuerdo o al menos una neutralización de las tendencias militaristas de las partes, las incrementó tomando partido por una de ellas. Rodeado en el balcón de la casa presidencial por López Rega -uno

¹⁹ No es que con el golpe la violencia se detuvo, por el contrario, esta adquirió un carácter brutal, solo que a diferencia del período anterior esta última podría ser caracterizada como violencia o terrorismo de Estado.

de los mentores de la organización de ultraderecha Triple A²⁰- y por el sindicalismo más reaccionario, Perón expulsó a Montoneros de una concentración en la que dirigía la palabra como presidente de Argentina por tercera vez, dejando en claro cual había sido su elección. De ahí en más, las relaciones de Perón con “la maravillosa juventud” -como le gustaba llamar a Montoneros antes de su regreso-, se deterioraron aceleradamente. Poco tiempo después, las escasas esperanzas que podían haber quedado en pie de una resolución pacífica de la lucha por la dirección del peronismo desaparecieron: el 1º de julio de 1974, muere Perón, con lo que el gobierno y el PJ quedaron en manos de su esposa Isabel, íntima de López Rega. Muerto el líder, la lucha por la conducción del peronismo recrudeció: la ultraderecha aprovechó la situación para lanzar una ofensiva criminal contra la militancia combativa, mientras la izquierda veía con agrado como se caían las últimas posibilidades de contención del conflicto social. Para unos y otros se entraba en un momento decisivo, una agudización de las contradicciones, que no dejaban lugar para las posiciones intermedias.²¹ Nuevamente se puede apelar Aricó (1999) para pintar la situación del momento: “la necesidad de una resolución violenta se imponía como un costo necesario (...). Una solución violenta siempre necesita de un fundamento que no admita réplica. Si la sociedad argentina no tenía otra alternativa que el fascismo o el socialismo, había que avanzar en el sentido de profundizar la radicalización del conflicto para evitar el aniquilamiento. Las soluciones intermedias no solo no existían sino que tampoco eran deseables. Si algo caracterizó a la sociedad -a sus componentes- en el período 1974-1976 es la falta de confianza en las soluciones intermedias; porque en el fondo no se las quería, tampoco se las podía ver. Ni la clase política, ni la intelectualidad, ni la iglesia, ni las fuerzas armadas, ni la civilidad en general, se mostraron proclives por encontrar soluciones intermedias, que evitaran una espiral de violencia para todos incontenible” (: 62).²²

²⁰ Alianza-Argentina-Anticomunista.

²¹ “La “agudización de las contradicciones” eran sintetizadas por la frase “cuando peor, mejor” frecuentemente empujada por la izquierda.

²² En la apreciación del autor, la idea de una salida violenta inevitable “era una idea profundamente incorrecta”. Pues, en “realidad allí se confunden dos planos. Se confunde un plano epocal, referido a las limitaciones, de las clases y de los países que no deja de ser cierto, con un plano histórico-concreto referido a las limitaciones políticas concretas de una coyuntura o de un momento preciso. Es la típica conversión de un discurso general en un discurso táctico. La idea de que la violencia es inevitable y necesaria en las sociedades para destruir un sistema de dominación, que es una apreciación de validez teórica general, se transforma en un discurso genérico acerca de la imposibilidad de prever o aceptar otras soluciones”. (Aricó, 1999: 62).

El accionar de la Triple A y la confianza en que la compulsa se definiría a su favor, llevaron a que Montoneros decidiera retomar la lucha armada (abandonada con el establecimiento del gobierno constitucional de Cámpora) y pasara a la clandestinidad. Paralelamente, las movilizaciones sociales crecían en proporción directa a las dificultades que tenía el gobierno para encontrar salidas a la crisis económica.

A finales de 1974, tuvo lugar un hecho protagonizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP-, un grupo guerrillero de orientación trotskista que fundara Mario Santucho años antes en Tucumán. En horas del mediodía, en pleno centro de la capital tucumana realizaron un atentado en el que perdieron la vida el capitán del ejército, Antonio Viola y su hija María Cristina de tres años de edad. Reproducimos el parte que el ERP realizó después del atentado, para que se tenga una idea cabal de los términos en los que se planteaba el conflicto: “El automóvil operativo se aproxima hasta la misma altura del objetivo, quedando medio auto adelantado. Situación extraordinaria. Siempre en los chequeos el sujeto descendía; en esta oportunidad la que descendió fue la esposa, esperando él al volante a la espera para guardar el auto en el garaje. Al frenar el automóvil operativo disparan el primer escopetazo que da en el parante delantero izquierdo del parabrisas, el sujeto se agacha en ese momento y los balines dan de rebote a la pibita de tres años que estaba atrás. El compañero de la ametralladora desciende y metiendo el arma por la ventanilla, dispara una ráfaga corta (4 tiros) que dan en el sujeto que igualmente desciende, la ametralladora se traba, los disparos le dan a la altura de la base del pulmón izquierdo desde atrás. Al bajarse del auto le disparan el segundo escopetazo que pasa sobre el sujeto – tiro rasante a la altura del capot- sujeto agachado. El sujeto corre hacia la calle San Lorenzo. El compañero de la ametralladora dispara con pistola un tiro, yerra, adelanta y dispara otro que frena al sujeto. Mientras ha descendido el compañero de la escopeta y el auto se corrió 10 metros para adelante, el auto de apoyo se aproxima lentamente. El compañero ametralladorista remata con un tiro en la cabeza, retorna al auto; inmediatamente el compañero de la escopeta le dispara a quemarropa un escopetazo y otro tiro de gracia con un revólver calibre 38. El compañero que maneja el auto de apoyo observa el momento que la hija de 5 años corre hacia delante del automóvil.

OBSERVACIONES: Las heridas de la hija de 5 años no hallan explicación, salió de rebote de los tiros de gracia. Las de la hija menor, son las del primer escopetazo que se disparó, desviadas al atravesar la chapa. Luego de la ejecución, la retirada se cumple correctamente”. (Documento interno del Ejército Revolucionario del Pueblo, titulado “Ejecución de la Oficialidad Enemiga”. U-Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Fecha 1/12/1974).

El impacto social que produjo este hecho fue aprovechado por las FF.AA., quienes presionaron a Isabel para que se les permitiera intervenir en asuntos de seguridad interior. Se firmó entonces el Decreto 256/75, del 5 de febrero de 1975, por el que se dio inicio al Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Los contenidos del mismo se conocieron en el siguiente comunicado de prensa de la presidencia de la Nación, del 10 de febrero de 1975: “El Poder Ejecutivo, fiel intérprete del mandato que le confirieron las mayorías populares, ha decidido la intervención del Ejército en la lucha contra la subversión apátrida. Una vez más, las FF.AA. están unidas e identificadas con el pueblo en defensa de nuestro propio modo de vida. El pueblo supo votar. Sepa ahora el pueblo, junto con sus hombres de armas, defender el presente y su futuro contra la subversión importada. No hay retroceso en el camino emprendido. La participación del Ejército responde a lo previsto por el gobierno nacional en materia de seguridad interior”. Cinco días después, se dictamina por intermedio del Decreto 261/75, el “aniquilamiento de los subversivos”.

La decisión del ejecutivo tuvo diferentes respuestas: la mayoría, entre los que se encontraban buena parte de la dirigencia sindical oficialista y la mayor parte de las elites políticas, la apoyaron, otros, vieron en ella una escalada militar que podía terminar en un golpe de Estado. Entre los primeros se encontraba el dirigente radical Ricardo Balbín, quién declaraba que “Esta decisión de participar en la lucha contra la guerrilla ha sido una decisión del PEN, es decir, que no se puede sospechar, de ninguna manera, que esta sea una intervención militar con segundas intenciones”, además ponderaba la actitud de las FF.AA. y condenaba los rumores y versiones que, a su entender, “crean una falsa imagen del gobierno y del país” (*Excelsior*, México, agosto de 1975). Entre los segundos, se alzaban dos voces minoritarias, la de Ilia, quien expresaba que “La situación del país no es peor que

la que existía cuando nosotros gobernábamos, pese a lo cual no apelamos nunca a medidas excepcionales, como la intervención del Ejército en la lucha contra la subversión. Tampoco recurrimos al estado de sitio ni a la clausura de publicaciones” (*La Gaceta*, 15/2/75), y la de Alfonsín, que se quejaba porque “la intervención del Ejército no pudo ser dispuesta sin la intervención del Congreso”, agregando que los problemas de violencia no se resolverán sin “transformaciones de fondo en lo económico y social”, a la vez que condenaba a la guerrilla por “antipopular y elitista” (*La Gaceta*, 16/02/1975).

El inicio del Operativo Independencia, a cargo en un primer momento del General Acbel Vilas, significó de hecho, el gobierno del ejército en las zonas de operaciones que comprendían el oeste y el centro de Tucumán. Fue también el preanuncio y ensayo del golpe militar de marzo de 1976, que empleando muchos de los términos que pusieron en juego las distintas corrientes políticas, respondieron a la violencia política de una forma brutal, sin precedentes en la historia argentina.²³ Las FF.AA., hicieron de la población su enemiga, a menos que hayan demostrado lo contrario. El Estado, que se supone es el garante de la ley, los derechos y la seguridad de los ciudadanos, se convirtió en el instrumento de la tortura, el saqueo, la corrupción, la persecución, el secuestro, el asesinato y la desaparición.

En lo que sigue se analiza el discurso de Bussi en el periodo que se inicia en el momento en que éste se hace cargo de V Cuerpo de Ejército y concluye con el golpe militar (diciembre 1975 – marzo de 1976). Se intenta identificar en éste tres instancias: la de la caracterización de la situación o diagnóstico, la de la propuesta programática y la de la lucha por la dirección política. Asimismo, y a partir de las referencias señaladas, el lugar del *nosotros* (o destinatario), los *otros* y el *ustedes* del discurso.

²³ “la posición del radicalismo frente al golpe de estado fue de aceptación resignada. Y hasta con cierta confianza en las posibilidades de un resanamiento del régimen constitucional que abría el golpe (...) Tal vez como pocas otras veces, la actitud del radicalismo reflejaba en buena medida la actitud de una sociedad hastiada del desorden y de la desintegración del inepto gobierno de Isabel. Porque hay que aceptar que la sociedad no solo no reaccionó frente al tan anunciado golpe militar, sino que lo aceptó como un mal menor. Frente a un futuro tan incierto y peligroso, al fatalismo que produjo la impotencia se le sumó las fascinación siempre presente en la sociedad argentina de las virtudes de la resolución militar” (Aricó, 1999: 59).

El diagnóstico de la situación:

“La República enferma”

El 19 de diciembre de 1975, el General Bussi es designado comandante del V Cuerpo de Ejército con asiento en Tucumán y pasa a comandar también el Operativo Independencia.²⁴ En el acto en el que asume ese cargo, pronuncia un discurso en el que, apelando constantemente a metáforas médico-biologistas, ofrece una caracterización de la situación, la que le sirve además para ubicar y definir a cada una de las partes intervinientes en la disputa política y para delinear el curso futuro de sus acciones.

El diagnóstico del General, era contundente: la República se encontraba “enferma” (*La Gaceta*, 20/12/75).

El empleo de este tipo de recurso retórico no era casual; como lo señala Clavreul (1983: 276) “no hay que olvidar que Hipócrates era el libro de cabecera de Himmler, y que las dictaduras de todos los países han usado y abusado de la metáfora médica: el país está enfermo”.²⁵

Las concepciones organicistas y mecanicistas, que tuvieron un papel preponderante en el nacimiento de las ciencias sociales, especialmente con el auge del positivismo, luego decayeron con los cuestionamientos de los que este último fue objeto y con la complejización de la teoría.²⁶ Sin embargo, se han mantenido con una particular fuerza en las organizaciones a las que la literatura especializada ha denominado “instituciones totales”. Estas organizaciones, que se caracterizan por tener un elevado nivel de aislamiento con respecto a su entorno, un importante grado de autonomía y por proveer a sus miembros o componentes de la casi totalidad de “insumos” materiales, simbólicos y afectivos, encuentran en los Ejércitos -especialmente en su estamento profesional-, una de sus

²⁴ “Operativo Independencia” fue el nombre que se le dio a las operaciones militares destinadas a combatir la guerrilla en el noroeste argentino, especialmente en la provincia de Tucumán. Cabe recordar que esas operaciones fueron ordenadas por un Decreto de un gobierno constitucional democráticamente elegido.

²⁵ Si bien es cierto que las metáforas médicas fueron frecuentemente empleadas por las dictaduras, también se emplearon en otros tipos de discursos. Basta recordar que a Menem, por ejemplo, le gustaba definir a su plan económico como “una cirugía mayor sin anestesia”.

²⁶ Entre las concepciones organicistas de las ciencias sociales, se puede mencionar a la de Durkheim y la de Parsons.

expresiones más acabadas. La vida en el cuartel, lleva a que se configure lo que Sigal y Verón llamaron un “auténtico sentido orgánico” (1988: 37), que es proyectado frecuentemente al conjunto de la sociedad y de la política. Por lo general, la sociedad exterior es la contraimagen exacta de la sociedad del cuartel. La primera está fragmentada por los políticos, en ella reina la injusticia, los privilegios inmerecidos, las prebendas, mientras que la sociedad militar es un ejemplo de respeto, orden y jerarquía, es en sí misma una sociedad justa, un espejo en que la sociedad debería mirarse e imitar.

El empleo de metáforas médico-biólogas se deriva de una particular visión del mundo y de toda una concepción de la sociedad, pero constituye también un recurso estratégico que ofrece ciertas ventajas a quienes pueden imponerlas. Los que logran ubicarse en el “lugar del médico”, tienen mayores posibilidades de que sus diagnósticos y prescripciones sean socialmente aceptados, para luego postularse con ventajas como potenciales “sanadores”. Cuando el diagnóstico está hecho e impuesto, poco o nada importa la voluntad y el deseo de la población a la que por lo general se la define como el cuerpo “enfermo”. Y así como la medicina -propietaria de la verdad científica-, se siente autorizada y hasta obligada a intervenir en nombre de la salubridad general -haya o no conciencia mórbida-, el autoritario puede prescindir de la voluntad de la sociedad, e intervenir en nombre de la República, la Nación y el bien común.²⁷

Pero el *nosotros* de la dictadura, expresión del bien y la positividad, no solo se construyó con el naturalismo y el cientificismo, también, al igual que el discurso médico, precisó de un complemento místico: atribuyéndose un mandato sagrado, “como soldado y General de la Nación”, y en cumplimiento de “compromisos contraídos con la República” (*La Gaceta*,

²⁷ No nos parece abusivo encontrar similitudes entre la práctica del secuestro y las desapariciones con la forma en que se detectaba y confinaba a tuberculosos y leprosos. Estos últimos dejaban de ser para la medicina enfermos y se convertían en propagadores del agente patógeno. Tampoco sería excederse comparar a los campos clandestinos de detención de la dictadura militar argentina con los espacios reservados para los padecientes de enfermedades contagiosas y psiquiátricas, en ambos los reclusos experimentaban la pérdida total de sus derechos y eran sometidos a prácticas tormentosas, todo ello en nombre del bien común y de la humanidad.

20/12/75)²⁸, Bussi se coloca a sí mismo y al Ejército como la encarnación de la verdad esencial y eterna.

Si la descripción “objetiva” de la enfermedad no dejaba márgenes para la disputa política por la caracterización de la situación vivida y reducía la población “capacitada” para la curación, el mandato sagrado circunscribió aún más la competencia por la conducción, reservándola a las personas o círculos de los “llamados” y elegidos. La construcción discursiva de la sacralidad, se realizó en este caso, siguiendo dos caminos: la invocación de la sangre y la apelación a los fundadores: “... a los soldados de nuestra Argentina no les titubea seguir ofreciendo su sangre para una Argentina mejor (...). Ejército y tucumanos, hemos recuperado a la patria chica de la Madrid y Roca, y tantos otros de esta infamia que pretendió sentar sus dominios en esta tierra de libertad” (*La Gaceta*, 20/12/75).²⁹

Situado en ese lugar privilegiado de lo sagrado y de la verdad esencial, el discurso bussista configuró el lugar del *nosotros*, el *ustedes* y del *otro*. El *nosotros*, como ya se señaló, es el lugar de los elegidos encarnado por el Ejército, pero fundamentalmente por su estamento profesional: “Como General de la Nación estoy orgulloso de poder comandar en esta última etapa de la lucha que habéis emprendido (...). Como soldado de un Ejército en operaciones deseo expresarles en primer término mi orgullo por todo lo que hasta hoy habéis hecho en procura de una Argentina mejor, librada de esta delincuencia subversiva apátrida” (20/12/75). En el primer párrafo Bussi se ubica invocando el rango militar directamente referenciado al significante Nación (“General de la Nación”), en una relación de pertenencia directa, sin mediaciones; estableciendo de paso una distancia con sus interlocutores en términos de jerarquías: de comandante a comandados; de profesional a recluta. El *nosotros* es el Ejército, pero no es un *nosotros* homogéneo, de iguales. Es un

²⁸ La totalidad de los fragmentos que se citan en el presente capítulo, fueron extractados del diario “*La Gaceta*” de Tucumán, y pertenecen a Bussi, por que de ahora en adelante, solo se señalará la fecha de publicación.

²⁹ Los Generales La Madrid y Roca fueron militares nacidos en Tucumán. El primero es uno de los héroes de la guerra de la independencia, y según la historia oficial tuvo un destacado desempeño en la “Batalla de Tucumán”, el segundo, ocupó la presidencia de la Nación y su celebridad se debe a que fue quien emprendió la denominada “conquista del desierto”.

nosotros que mantiene y enfatiza las jerarquías.³⁰ En el segundo párrafo, los términos de la ecuación quedan definidos: se equipara General con soldado y Nación con Ejército:

General	=	Soldado
Nación		Ejército

Comienza así a completarse la definición del *nosotros*, pero para hacerlo, necesitaba identificar a un otro, que en este caso tuvo calidad de enemigo absoluto: “la delincuencia subversiva apátrida”. Es que, a pesar de los constantes esfuerzos por esencializar su posición y lugar, puede advertirse en el discurso bussista que, cada vez que pretendía afirmar la identidad del *nosotros*, tenía que apelar a un *otro* que los diferencie. “El Ejército se siente orgulloso de sus soldados y está seguro de que estamos haciendo todo lo posible para liberar a la Argentina de estos apátridas que han osado sentar sus dominios en la cuna de la independencia argentina” (20/12/75). “Nosotros combatimos a esos delinquentes donde están y si no los hemos encontrado es porque se han ido” (30/12/75).

En pocas palabras (y esto vale para todo discurso político): no hay posibilidad alguna de definir a un sí mismo, sin aludir a otro, en donde ambas partes integran un esquema relacional en el que las posiciones son enteramente arbitrarias, en este caso esencializadas, más no esenciales.

Como ya se señaló, para el discurso bussista la alteridad radical y evidente la constituyó “la delincuencia subversiva apátrida”, pero ésta, en una misma operación paradójica de identificación y constitución, fue despojada de toda identidad y entidad. Las equivalencias que se establecieron con la pretensión (exitosa en este caso) de definir al *otro*, y que adquirieron calidad de rasgos descriptivos eran: “idiotas útiles”; “infamia”; “apóstatas de la delincuencia que pretenden dividirnos y enfrentarnos para el logro de sus inconfesables destinos”. La calificación de idiotas, lleva nuevamente al terreno de la medicina, más precisamente al de la medicina psiquiátrica y de la enfermedad mental, al de la incapacidad para razonar. Lo de útiles, hace alusión a que están al servicio de otros que permanecen

³⁰ En esa época, el Ejército argentino se componía de un sector profesional y de un sector no profesional, que era reclutado con carácter obligatorio entre la población civil masculina de 18 años. La diferencia era clara; por un lado estaban los militares por “vocación” y por otro, los soldados por obligación. En jerga castrense: el militar y el “colimba”.

ocultos, a que son manipulados desde las sombras. Infame, por su lado, significa carente de honra, de dignidad y de respeto a sí mismo. “Delincuencia”, que estaban al margen de toda legalidad. Es decir, el *otro* era despojado en primer término de la razón, después de la dignidad, y finalmente es colocado al margen de la legalidad: es la encarnación misma de la negatividad: ilegítimos e ilegales. Si a este despojo lo traducimos en términos políticos, la formulación podría haber sido la siguiente: los otros nada pueden decir de la realidad, privados de la razón ni siquiera pueden reconocerla, mucho menos ofrecer una caracterización de ella. Tampoco son válidas sus propuestas a futuro (sus destinos son inconfesables), sus propósitos son contranatura: pretenden dividirnos y enfrentarnos; alterar la unidad y la armonía natural. Finalmente, carecen de autoridad moral y ética (son infames) como para proponerse como conducción política.

Pero el discurso bussista iría más allá aún. Pretendió homologar a la distinción entre el *nosotros* y los *otros* con la caracterización de la situación: el simple hecho de nombrar a una u otra parte se postulaba como toda una descripción de la situación. El objetivo propuesto fue relativamente alcanzado y tuvo eficacia, pues se lograron instituir cadenas de equivalencias más o menos estables en la que se equiparaba al *nosotros* con el bien y a los *otros* con el mal. En este sentido, se puede decir que la operación consistió en convertir los adjetivos en sustantivos. Concentradas las virtudes en uno de los polos (el *nosotros*) y el mal en el otro, con solo nombrar al Ejército, se estaba invocando a la Nación, a los padres fundadores, al lugar de la razón, la claridad y la armonía; por el contrario, nombrar al enemigo implicaba el caos, la falta de razón, las sombras y el destino oculto.

En pocas palabras, el diagnóstico de la situación (el estado de enfermedad), sirvió además para configurar las figuras del *nosotros*, los *otros* y el *ustedes*, pero también a la inversa. El *nosotros* encarnaba lo que aún queda sano, lo que pudo permanecer inmune, no contaminado. Los *otros* eran el agente patógeno y la causa de la enfermedad. El *ustedes*, el cuerpo enfermo, el paciente-pasivo que debía ser puesto en manos del médico encargado de la operación. El paso lógico siguiente sería el de la prescripción y la imposición de una receta para salir de ese estado.

El programa:

un conjunto de medidas urgentes y “necesarias”

Así como el diagnóstico de la enfermedad exigía que se prescribiera un tratamiento de “saneamiento moral y físico total y hasta las últimas consecuencias” (20/12/75), el tipo de medidas a aplicar dependía de una redefinición de los lugares del discurso.

El bussismo había identificado a la “subversión apátrida” como su alteridad radical, pero esta no sería más que la cara visible (los “idiotas útiles”), los instrumentos de los verdaderos enemigos. Por eso, según sus propias palabras, “Aún resta(ba) detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión desatada. A aquellos que desde la sombra, valiéndose de jerarquías, cargos y funciones, atentan día y noche. A aquellos que con su hacer o no hacer, encubren, cuando no protegen a los delincuentes que combatimos. A los ideólogos que alimentan e instruyen a la delincuencia subversiva y también a aquellos que encaramados o infiltrados en las estructuras en los distintos estamentos de la Nación, delinquen o delinquieren, justificando o favoreciendo la subversión en cualquiera de sus manifestaciones” (20/12/75).

Esto implicaba toda una redefinición del enemigo. Se trataba de nueva configuración, que “imponía” y legitimaba la extensión y reorientación de las tareas, funciones y objetivos del Ejército (aspecto que será analizado más adelante).

El enemigo (la “subversión apátrida”), que en primera instancia fue explícitamente identificado por su actividad (la de guerrilleros o combatientes armados), por su ubicación territorial (“estos cerros tucumanos”), y por su ideología (“marxista-leninista”), perdía así su especificidad. Manteniendo únicamente la ideología y la calidad de delincuentes, estos podían ser considerados enemigos independientemente de si fueran o no combatientes, ya que la “subversión” tenía en esta nueva definición múltiples formas (“la subversión en cualquiera de sus manifestaciones”), e incluía las actividades que se realizaran o se dejaran de realizar (“con su hacer o no hacer”) y carecía de una ubicación territorial específica (podían no encontrarse en la serranía, sino en el “llano y entre la población”).

El enemigo visible pasó a ser invisible, de social y territorialmente externo pasó a ser interno, podía encontrarse “encaramado o infiltrado”. Era por lo tanto más peligroso y así como obligaba a una mayor aplicación por parte del Ejército, exigía también que “la población se movilice en repulsa a la delincuencia subversiva y colabore no dándole su apoyo, sino fundamentalmente denunciándolos” (22/12/75).

Pero, el discurso bussista no se detuvo ahí en la identificación del enemigo. En este periodo se pueden encontrar las primeras insinuaciones por las que se empieza a ubicar en la cadena de equivalencias del *otro*, a la política y los políticos. Esta relación es clara y elocuente en aquellos pasajes en los que Bussi establecía que “los grandes responsables de la subversión desatada” eran aquellos que ocupaban “cargos” y desempeñaban “funciones jerárquicas” en el Estado. Pues, aunque no hay una identificación explícita del enemigo con la política y la totalidad de los políticos, es innegable que se sugiere que el campo de la política es permeable (cuando no facilitador y propiciador) a las actividades subversivas. Si esto se inscribe en la lógica del discurso propuesto por Bussi, en la cual mantiene al Ejército como una institución pura y al margen “contaminación”, estas insinuaciones se dimensionan.

Cabe señalar además que con esta operación de redefinición del otro, inversa y retroactivamente se reafirmaba y redefinía al sí mismo. Si los otros fueron definidos como idiotas, infames, delincuentes, las sombras; a su opuesto (al sí mismo) le cabía la razón, la honra, la verdad, la legalidad y la claridad. Se trataba de una relación polar excluyente, en la que una de las partes concentraba en sí la totalidad del bien y la más pura positividad y la otra el mal y la negatividad. En este sentido, la construcción discursiva del otro era al mismo tiempo su destrucción, un despojo total no solo de derechos, sino inclusive de cualidades y entidad. Este segundo momento (el del despojo) hace “estallar” al otro (con lo cual cualquiera podía ser ubicado en el campo del enemigo y ser considerado subversivo), lo hace omnipresente, mucho más inhumano y peligroso. Solo alcanzado ese nivel de deshumanización, Bussi pudo haber proclamado, que “Ahora resta detectar a los extremistas y juntos echarlos o liquidarlos, en una tarea que podríamos llamar de desinfección” (30/12/75).

Entre ese *nosotros* esencial y los *otros* que representaban la negación de esa esencialidad, quedó el resto, que en sí no era nada, a pesar de ser numéricamente infinitamente superior. No pertenecían al ejército profesional, ese organismo heredero natural de los “fundadores” que ofrecía generosamente su sangre en el combate a muerte con el enemigo, tampoco a aquellos que consciente (“los ideólogos”) o inconscientemente (“los idiotas útiles”) habían “osado en levantarse contra la República”. Eran las personas y grupos, para los que el discurso bussista tuvo diversas nominaciones (con sus respectivas implicancias): por momentos eran nombrados “población”; en otros, “comunidad” y en otros -los menos-, “pueblo”. Sea cual fuere la nominación que se empleara, en sus variaciones se mantenían las distancias y diferencias en una relación de exterioridad con el ejército.

“Cuando salimos en febrero³¹, había hacia nuestros objetivos una total indiferencia, pero ahora la población sabe de los peligros de la subversión (...). Millones de argentinos nos observarían y nos alentarían. Es que, ahora se está a favor o en contra de la subversión” (20/12/75), decía Bussi distinguiendo y estableciendo distancias entre el *nosotros* y el *no-nosotros* (que tampoco es el otro). El *nosotros* era definido como la vanguardia que salía al frente con objetivos claros. El *no-nosotros* era simplemente población, es decir habitantes de un determinado territorio, además ignorantes (que no sabían de los peligros de la subversión) y sin capacidad de discriminación (indiferente). Si estas expresiones se insertan nuevamente en la lógica del discurso bussista, en que las posiciones se definían en términos esencialistas, la población carecería de toda entidad, ya que como se señalara, ni siquiera puede percibir las diferencias. Sin embargo, en el segundo párrafo, la población es “elevada” al estatuto de argentinos. El cambio no es menor, de una referencia geográfica (población), se pasa a otra de pertenencia a un colectivo político (argentinos); pero esa pertenencia no es directa, está mediada nuevamente por la referencia al Ejército. Es decir, la población alcanzaba el estatuto de argentinos, solo en la medida en que era capaz de discriminar, de percatarse (“nos observarían”) de la esencia, y especialmente de tomar partido (“nos alentarán”) en una elección obligada (“Ahora se está a favor o en contra de la subversión”). El resultado de esta operación era nuevamente claro: no solo el Ejército se reafirmaba en su lugar de enunciador constituyente, distante del resto (marcada

³¹ Se refiere aquí al inicio del “Operativo Independencia” en febrero de 1975.

en este caso por la instancia de la mirada: “nos observarán”), sino que era además indirectamente equivalenciado con la Argentina (Ejército = Argentina).

Si la población se acercaba al ejército, se constituía en comunidad: “Cuando la comunidad participe junto al Ejército en esa ‘desinfección’, lo que viene va a ser muy rápido” (30/12/75). Es decir, la comunidad, aquel grupo humano que se define por lo que comparte (por lo que tiene en común), solo podía alcanzar ese estatuto en la medida en que tomaba como referente a uno de los polos, al Ejército. No hubiera sucedido lo mismo si se hubiese reconocido en el otro polo; en ese caso, a pesar de compartir ese reconocimiento, se habría disgregado.

Esa comunidad, pudo convertirse en pueblo³², no solo porque se mantuvo cerca del Ejército, sino porque asumió que éste era su guía y conductor, y participó más decididamente en los episodios excepcionales, los acontecimientos bélicos: “Los recientes éxitos (del Ejército) se originaron en la oportuna información del pueblo que denunciaron la presencia de elementos subversivos. Ello es producto de la estrecha comunión de objetivos por parte del pueblo y del Ejército, manifestada a través del permanente contacto y mutua colaboración (...). Por eso convoco a este heroico pueblo tucumano, para que nos acompañe en esta parte de la lucha final y juntos, Ejército y tucumanos, podamos erradicar de la patria chica, siguiendo los pasos de La Madrid y Roca, esta infamia de la subversión. Seguro de que sabremos revivir jornadas epopéicas como las de septiembre de 1812, para devolver a la Patria grande la cuna de la libertad pura y limpia” (7/01/76).³³ Es decir, si se acompañaba al Ejército, se seguían los pasos de los “padres fundadores” -los militares La

³² El significante “pueblo” tiene una carga valorativa muy superior a población y comunidad en el imaginario político. En la retórica y simbología política nos encontramos frecuentemente con expresiones tales como “al gran pueblo argentino salud” (verso del Himno nacional Argentino), o “el glorioso pueblo argentino” (pasaje del discurso de Perón pronunciado en su regreso en 1973). Estos adjetivos nunca fueron atribuidas a los habitantes o a la comunidad.

³³ Con “jornadas epopéicas de febrero de 1812” se está refiriendo a la batalla de Tucumán, en la que el Ejército del Norte, comandado por Belgrano derrotó al ejército español. La particularidad de esa batalla, es que en la misma participó una buena parte de la población civil. Lo sugerente de esto es que, en el discurso bursista, solo se glorifican los momentos de guerra, dejando totalmente de lado, uno de los acontecimientos históricos que también aconteció en Tucumán y que en la historia argentina ocupa un lugar mucho más destacado que los acontecimientos antes mencionados. Nos estamos refiriendo al 9 de julio de 1816, en el que se reunió el Congreso de representantes para proclamar la independencia nacional. Especulamos que esto no es casual, este último acontecimiento, no fue lo que se puede denominar una gesta militar.

Madrid y Roca (nacidos en Tucumán)- y guiados por estos, asumían un rol activo en el conflicto, tal como lo hizo en la guerra de la independencia de 1812, el pueblo era considerado heroico. No alcanzaba tal reconocimiento en su vida cotidiana y rutinaria. Su estatuto -a diferencia del de el Ejército- no era esencial, dependía del papel que asumieran en las “jornadas epopéyicas”, en aquellas circunstancias especiales y de excepción en las que estaban en juego los destinos de la Nación.

Por eso, además de la distancia y exterioridad que anteriormente señalábamos como una invariante en las distintas definiciones de la sociedad civil, cabe agregar ahora que en esa relación, siempre y en todos los casos, el ejército se ubicaba por arriba y conservaba su capacidad constituyente reservándose el lugar de enunciador absoluto. Esto, al igual que la redefinición del enemigo, conducía a que se afirme y enfatice la capacidad de nominación y performativa del enunciador. Con un *otro* que había perdido su especificidad, identificado por la pura negatividad y con un *ustedes* que dependía enteramente del enunciador para su constitución, el poder se acumulaba en uno de los polos. Las pretensiones de un nominalismo absoluto, en el que lo único esencial y realmente existente era el sí mismo y en el que la existencia de los demás dependía de si eran nombrados (y de cómo eran nombrados), no quedaban espacios para la disputa y la negociación. La política misma carecía de sentido, pasaba a ser algo de lo que se podía prescindir.³⁴

Estas redefiniciones del lugar de la enunciación -y con ella de los lugares del nosotros, de los otros y el ustedes-, llevaron también a que las funciones y “tareas” del Ejército se replantearan en términos espacio-temporales. En primer lugar, era el Ejército y no los políticos quienes definían al enemigo. En segundo lugar, y derivado del primero, esta definición se hacía en los términos de la guerra y no de la lógica política. Es decir, hubo un cambio en quienes tenían la potestad de distinguir y de establecer cual era la lógica de esa distinción. No hay que olvidar que la intervención del Ejército en conflictos internos estuvo autorizada por un decreto de un Poder Ejecutivo Nacional elegido en las urnas y que,

³⁴ Cuando afirmamos que la existencia de los demás dependía de si eran nombrados y de cómo eran nombrados, no solo lo estamos diciendo solo en un sentido metafórico. Efectivamente, el que una persona fuera nombrada como subversiva, podía llevar a su desaparición física o a su muerte.

independientemente del grado de autonomía que esa decisión tuvo, al menos formalmente el Ejército se encontraba subordinado al poder político.

Autoatribuidas estas potestades, el Ejército adquirió una mayor autonomía con respecto a la política y pudo imponerse nuevas funciones y tareas, pero, como se señalara en la introducción de este apartado, estas se legitimaban a partir de una redefinición de los lugares del *nosotros*, el *ustedes* y el *otro*. Si el enemigo no era solo la guerrilla o el combatiente armado, era esperable que Bussi expresara que “La eliminación física de los últimos delincuentes subversivos que aún deambulan derrotados por estos cerros y montes tucumanos, no será, ni mucho menos, la solución a los graves problemas que afectan a la Argentina de nuestros días. Aún resta detectar y destruir a los grandes responsables de la subversión”(20/12/75). Esto “obligaba” a que la intervención del ejército se extendiera en el tiempo, pero también en términos territoriales. En palabras de Bussi, se hacía “necesario que ahora nos volquemos al llano y a la población” (07/01/76).

Pero estas no serían más que las tareas necesarias pero menores, tácticas al servicio de una estrategia mayor, de un proyecto militar para el que estaba claro que “con tiros y combates no se solucionarán los graves problemas de Argentina”. Se imponía una intervención urgente e integral: “Apurémonos pues soldados, a realizar la tarea que aún nos queda en esta parte del territorio nacional y preparémonos, junto con el Ejército, para lograr que el país todo, acompañado de sus Fuerzas Armadas, reencuentre el sentido perdido de sus grandes destino” (20/12/75), decía Bussi preanunciando el golpe militar y la resolución de la lucha por la dirección política y del poder.

La lucha por la dirección política

Quiénes serían los encargados de llevar adelante el programa y las medidas estaban ya anunciados: el golpe militar de marzo de 1976 no sería más que la trágica materialización de ello.

La caracterización de la situación, el programa y la resolución del problema de la dirección política y del poder, constituían una unidad inseparable en el discurso bussista. Con la caracterización de la situación en términos médico- biológicos, la construcción de la realidad social y política estaba monopolizada. Los que lograron imponer una mirada de ese tipo, dejaron con pocas (casi ninguna) posibilidades a otras perspectivas en la disputa por la caracterización de la situación. Con las relaciones políticas y sociales naturalizadas, la realidad pasaba a ser una sola y no había lugar alguno para otra interpretación. Supuestamente guiados por una metodología y una terminología científicas y objetivas, ocupando además el lugar de lo sagrado y de la verdad esencial, la única palabra autorizada se expresaba por boca del *nosotros*.

El programa pasaba a ser una derivación lógica y “natural” de la caracterización y el diagnóstico. Quién estaba capacitado para diagnosticar, lo estaba también para prescribir y recetar. Los programas políticos que representan otras salidas posibles de la situación, se consideraban pura charlatanería, por lo que había que imponer una receta que no obedeciera a ideologías y que respondiera a las “necesidades” impuestas por la realidad. Los *otros*, que en diagnóstico constituían el mal, el agente patógeno, debían ser aniquilados. Al resto solo le quedaba someterse -a favor o en contra de su voluntad- al tratamiento.

En cada paso y en cada instancia, las distancias entre el *nosotros*, el *ustedes* y los *otros* se agigantaban y en forma inversamente proporcional, el espacio de la política se achicaba. Con el poder acumulado en uno de los polos, aniquilada discursivamente -cuando no físicamente- la dirigencia política, el corolario inequívoco de esta lógica era el golpe militar.³⁵

³⁵ Cuando decimos corolario inequívoco de esta lógica nos estamos refiriendo a la construcción discursiva y no a un destino histórico “necesario”.

La configuración del lugar de enunciación y la lógica interna del discurso de Bussi
-diciembre de 1975 a marzo de 1976, antes del Golpe de Estado-

El conjunto de operaciones semánticas de identificación del *si mismo*, que es a la vez una constitución el *lugar de enunciación* y que define también a la “población” (o paradestinatario del discurso) y al *otro* (o contradestinatario), siguió en el discurso bussista, la siguiente lógica:

- 1) Los respectivos lugares se definieron con relación a los significantes Patria, República o Nación, elementos que a su vez se sintetizaban en el Orden, entendido este como natural y sagrado.³⁶
- 2) La Patria o la República eran definidas como entidades a la vez abstractas y esenciales, que tenían como referentes a los orígenes, a los “héroes” fundadores, todos ellos protagonistas de “gloriosas gestas militares”. La historia social y política, la pertenencia a un colectivo políticamente definido (y con ello la política y los políticos), fueron sistemáticamente negadas en el relato. Las pocas veces en que eran aludidas, se las consideraba parte de la historia pasajera, la historia de los vicios que hay que eliminar.
- 3) El Ejército, era considerado el heredero único y directo de los fundadores. Lo que encarnaba a la Patria.
- 4) La “subversión” fue definida como enemiga de la Patria a partir de una formulación paradójica: su condición de “apátridas” no solo los hacía sin Patria, sino además enemigos de ella. Es decir, la Patria, esa entidad abstracta-esencial, era la que constituía al ser (“el ser nacional”), la que daba entidad y identidad. Si no se pertenecía a esa entidad, se era enemigo de ella. Representaba además al caos, que jugaba el papel estructural de exterior constitutivo del orden y por carácter transitivo de la Patria.

³⁶ En el discurso bussista aparece recurrentemente el significante República (el propio partido que después fundaría, se llama Fuerza republicana), sin embargo, en ningún caso este significante va a aludir a lo que se alude en lo que más adelante llamaremos como “discurso democrático”, producido especialmente por el alfonsinismo. En este último la connotación de República estará dada por todo lo que tenga que ver con la vigencia de las instituciones democráticas, en el discurso bussista, en cambio, se refiere a la nación o país fundado en las “gestas patrióticas” militares.

- 5) Los demás (la población) no tenían un lugar asignado a priori, se hacían (o se deshacían), según se ubicaran en uno u otro polo de la relación de exclusión. Era una alternativa de hierro de las cuales solo una de las elecciones posibles constituía la opción válida. No había lugar para otras posibilidades, ni se consideraba siquiera la eventualidad de una posición que no sean las establecidas de antemano. No había construcción posible y, en cuanto se ubicaban por fuera del discurso oficial, perdían automáticamente toda entidad; pasaban de ser pobladores a “apátridas”.
- 6) La política se concebía como una instancia que introducía divisiones artificiales al orden natural, por lo tanto se consideraba deseable su eliminación.
- 7) El corolario anunciado: el golpe.

En pocas palabras: la Patria, República o Nación sintetizadas en el Orden, organizaron el discurso del bussismo. Los términos excluyentes (Patria – apátrida), estaban definidos de antemano, como esencia uno y como contraesencia el otro. Los terceros en cambio, eran definidos de acuerdo a su comunión con algunos de estos términos.

El discurso del
“Proceso de Reorganización Nacional”

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se inició el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, encabezado por los Comandantes del ejército, la marina y la aviación. Apenas asumieron, los comandantes ofrecieron su caracterización de la situación previa al golpe, caracterización que servía además para justificar y legitimar los actos que acababan de perpetrar: “Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía; a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional; a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole; a la falta de una estrategia global que conducida por el poder político, enfrentara la subversión; a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos; a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionara el agotamiento del aparato productivo; a la especulación y la corrupción generalizada, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe; las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado” (*La Nación*, 25/3/1976).³⁷

En el primer párrafo, en el que se establece una conexión causal entre vacío de poder y disolución-anarquía, cuya formulación positiva sería: poder igual a orden y unidad, se revelaba el espíritu decisionista de la dictadura. Para ella, la unidad y el orden se lograban por medio de una razón de poder.³⁸ Es por ello que, en el primer objetivo “programático”, la dictadura advertía que “La conducción del proceso se ejercerá con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el

³⁷ Independientemente de lo acertado o no de esta caracterización, lo cierto es que esta era compartida por una buena parte de la dirigencia política. La UCR y el propio Alfonsín, por ejemplo, tenían en rasgos generales, una apreciación similar a la del proceso. Esta es desarrollada en el capítulo destinado al análisis del “discurso democrático”.

³⁸ No estamos cuestionando esta perspectiva, la señalamos porque es uno de los puntos con los que contrasta notablemente con el “discurso democrático”, para el cual la unidad y el orden deben ser el producto del consenso y el acuerdo. Este punto será también desarrollado mas extensamente en el capítulo siguiente.

ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país".³⁹

La "firmeza" y la "severidad" no eran gratuitas. Ellas se hacían "necesarias" para la consecución de los objetivos primordiales, e incluso marcarían todo un estilo. La instauración del principio de autoridad era el primer paso a dar para un cambio estructural que inauguraba un nuevo momento: el de la "Reorganización Nacional". La dictadura se presentaba a sí misma como una nueva instancia de fundación nacional, que se basaba en la reinstauración del Orden natural, punto nodal de la trama discursiva del Proceso. Pero además ese Orden adquiriría un carácter metafísico: su ausencia, origen y a la vez resultado de todos los males, llevaba a la disolución, sin él no había ser. Su sola presencia implicaba la solución, un objetivo en sí mismo que revelaba el carácter eminentemente conservador del Proceso.

Obviamente no se trataba de un orden cualquiera. Tampoco era un "nuevo orden", sino uno que se había tenido y que se perdió por obra de los vicios en los que el país (con excepción de las Fuerzas Armadas) se encontraba sumido. Por eso el programa de la las FF.AA. era claro; en él se buscaba "Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino".⁴⁰

Restituir, reconstruir, reorganizar, remitían por un lado a un futuro en tanto intenciones, a algo que debía hacerse; pero remitían también al pasado de algo que supuestamente ya se tuvo. Era el pasado mítico al que la dictadura apelaba para echar raíces en "lo más profundo

³⁹ Junta Militar, "Proclama del proceso de reorganización nacional". En Oscar TRONCOSO, *El proceso de reorganización nacional/1. Cronología y documentación (De marzo de 1976 a marzo de 1977)*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1984, p. 108.

⁴⁰ Junta Militar, "Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional", en TRONCOSO, *op. cit.*, pp. 110-111.

de la argentinidad” (“el ser nacional”), de la argentinidad auténtica, basada en valores esenciales. El futuro era presentado como una reedición de ese pasado mítico y esencial encarnado entonces por el Proceso, por lo que todo lo que se le opusiera era considerado parte del “vicio”.

Para Barros (2000), el “vicio histórico” que la dictadura se proponía erradicar era el peronismo. El Proceso, según el autor, “se constituyó como una crítica más abarcadora de otro espacio: el peronismo. El retorno a los tiempos dorados de principios del 1900 implicaba que la ‘enfermedad’ peronista no podía ‘infectar’ nuevamente el cuerpo social. Si la Argentina iba a retornar a su destino de grandeza, las características tradicionalmente asociadas al peronismo debían ser obliteradas (...). Estas características eran la movilización política de los sectores populares y su incorporación al sistema político, el desarrollo de una estructura económica autárquica y cerrada, y la participación estatal en la regulación económica” (2000: 56).⁴¹

Para los militares la crisis del momento no tenía parangón en la historia y se extendía a todos los quehaceres y niveles: el poder, el orden social, la legitimidad política, la ética y la moral, la economía. No se trataba de una crisis más, esta vez estaba en juego la Nación. Como responsable principal de tantos males era identificado el anterior gobierno nacional en manos del Partido Justicialista, no obstante, se extendía a la casi totalidad de las fuerzas políticas y sociales que: “no supieron o no quisieron llevar al país a un destino de grandeza” (idem).

La situación estaba así planteada y los responsables, el *otro*, identificado. Sin embargo, y a pesar de que la crisis era generalizada y alcanzaba a casi todos los sectores, había un reducto que se encontraba a salvo e inmune: las Fuerzas Armadas. Estas eran las únicas capaces de escuchar el “llamado” al cumplimiento de una “obligación” que, en tanto tal, resultaba “irrenunciable”, para recuperar el “sentido de grandeza y de fe”, perdidos en manos de la política. Es que las voces imperativas del pasado esencial solo podían ser

⁴¹ Tal como lo señala Barros (2000), “la aparición de movimientos de guerrilla fue entendida también como consecuencia de las maniobras políticas de Perón, incluso cuando no todas ellas eran organizaciones peronistas” (:56).

escuchadas por los oídos de algunos elegidos, no en las urnas obviamente, sino por la voz de los fundadores, quienes dotaban de una legitimidad mayor que el voto de simples ciudadanos. Una legitimidad sagrada, podríamos decir, infinitamente superior a la electoral.

Con relación al futuro, los cursos de sus principales acciones, también estaban trazados: la erradicación de la guerrilla y el desarrollo de una nueva economía, que conjuntamente debían conducir al restablecimiento “definitivo” del Orden en la Argentina. La concurrencia de estos dos objetivos ha sido frecuentemente desatendida. Muchos de los análisis que se centraron en los aspectos económicos de las dictaduras sudamericanas no contemplaron siquiera la posibilidad de que los planes económicos implementados y la represión política fueron parte de una estrategia complementaria. El segundo aspecto -el económico-, ha sido frecuentemente subestimado por la crítica de los partidos políticos a la dictadura argentina, que se centraron, por razones entendibles, en la violación a los derechos humanos. Los dos aspectos -partes de una estrategia complementaria- fueron centrales, ya que gran parte del terror de Estado impuesto en la época, apuntaba a liquidar a la oposición a las reformas económicas que se aplicaron y a diluir las identidades políticas anteriores, firmemente asentadas en la economía de bienestar.

En lo que sigue de esta sección, se analiza lo que se puede considerar fueron las líneas de acción centrales del Proceso: el combate a la guerrilla y la instauración de una nueva lógica económica.

El combate a la “subversión”

la denominada guerra sucia

Se advirtió en la sección dedicada al análisis del discurso de Bussi en el periodo anterior a la dictadura, que la primera definición del enemigo “subversivo” sufrió importantes transformaciones: se pasó de un enemigo visible a uno invisible; de tener estos una ubicación física- territorial determinada, pasaron a estar en todos y cualquier lado. También vimos cuales eran los beneficios que aportaba esta definición vaga. La omnipresencia de la subversión “obligaba” a una omnipresencia, primero del Ejército (durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón), luego de todo el Estado (durante la dictadura). Esto lo expresaba con meridiana claridad el entonces Jefe de Estado Mayor General del Ejército, el General Suárez Mason, para quién, “ante el avance de una acción total por parte del marxismo es preciso una respuesta integral del Estado”, agregando que “sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado” (*Clarín*, 6/7/1979).

Sin embargo, a pesar de la vaguedad en la definición del *otro*, había también indicios claros para su identificación, que hacían que éste no fuera confundido con algunos integrantes del *nosotros*, los grupos violentos de ultraderecha. El Contraalmirante Guzzetti, no dejaba margen a dudas acerca de quienes eran los enemigos de la dictadura: “Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma manera que se considera un microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la acción del anticuerpo va a desaparecer” (*La Opinión*, 1/10/1976).

La definición del *otro* tenía que ver entonces con su filiación ideológica, más no con su accionar violento o pacífico. Es más, en el párrafo citado hay una reivindicación de la violencia de derecha, pues apelando nuevamente a la metáfora biológica, se asocia a la guerrilla de izquierda con un virus y a la violencia de derecha con los anticuerpos. Los anticuerpos son una formación reactiva que sirven para preservar al organismo ante los

ataques de los virus y para conservar la salud. Entonces, para la dictadura militar, la violencia política era en algunos casos negativa, pero en otros podía ser positiva, por lo tanto legítima y aconsejable.

Pero, si tiempo antes de estas declaraciones, el propio Ejército se había encargado de proclamar que la guerrilla había sido derrotada, ¿porque la dictadura se empeñaba en mantenerla en su discurso como enemigo? Porque por un lado, la proclama reiterada de la derrota de la guerrilla le servía para mostrarse ante la sociedad como un Ejército victorioso y eficaz frente a los políticos y la política derrotada e impotente. Este no era un aspecto menor, si se tiene en cuenta que el objetivo central era el restablecimiento del Orden y el ejercicio del poder. Pero, por otro, porque el mantenimiento en el discurso de la imagen del enemigo subversivo, servía para sostener una contraimagen del nosotros. Hacia de elemento externo-excluido que permitía construir la imagen del sí mismo, y era uno de los soportes (también externo) de la cadena discursiva que organizaba el significativo Orden, primordial en la retórica del Proceso. Por eso, la dictadura necesitaba mantener viva a la “subversión”, aunque sea a nivel de amenaza. Lo curioso es que, en la imagen que la dictadura creó de su enemigo, encontramos todas las características de ella misma y de su propio accionar. Se trataba de una proyección invertida (en términos ideológicos) de sí misma.

Las principales “características descriptivas” que la dictadura atribuía a la “subversión” eran las de personas que se ocultaban bajo un aspecto corriente para infiltrarse en el tejido social sin ser advertidos; que su accionar se basaba en la violencia del asesinato, el secuestro, la extorsión y el robo. La literatura que investigó la violación a los Derechos Humanos en la Argentina entre los años 1976 – 1982, ha demostrado ampliamente que ese era exactamente el accionar de la dictadura.

No se puede negar que muchas de estas acciones fueron alentadas, cuando no reclamadas por bastos sectores de la población, lo que indica que la construcción discursiva que el Proceso hizo de sus enemigos, tuvo eficacia. En algunos casos se expresaba en la denuncia

de alguien “sospechoso”, en otros con la justificación de los actos condenando a las víctimas con el “por algo será” o con el “algo habrán hecho”.⁴²

Es más, cuanto más se parecía la dictadura a la imagen demonizada que había creado de su enemigo, más se consolidaba como ideología y más se demostraba la eficacia de su discurso. Los secuestros públicos, que se realizaban ante importantes cantidades de gente, a plena luz del día y con espectaculares despliegues de armas por parte de algún “grupo de tareas” -como se les dio en llamar a los comandos militares, paramilitares y policiales-, no eran más que una muestra evidente de la violencia y peligrosidad del secuestrado. Se puede decir que el “razonamiento” de algunos individuos era: “cuán peligroso y violento será, que se lo llevaron a la vista de todos”.

Sin embargo, este cierre ideológico necesitaba, para ser posible, movilizar cuestiones más íntimas y básicas en los sujetos: el terror. El desentendimiento, la indiferencia, la sospecha, jugaron como mecanismos de preservación, pues ellos permitieron establecer distinciones para con la víctima, primero no percibiéndola como víctima, sino más bien culpabilizándola (“por algo será” o “algo habrá hecho”), y segundo marcando diferencias (“yo soy distinto a él”) que liberaban de la amenaza de sufrir lo mismo.

Pero la eficacia discursiva del Proceso tuvo consecuencias más profundas todavía: “El miedo y la falta de certezas mínimas indujo una parálisis socio-política. Ante una situación en la que las formas de representación que reglan la formación política no eran claras, y en la que lo que estaba en juego era la vida, los bienes y la seguridad de las personas, el resultado fue el de una inmovilidad generalizada. Las consecuencias más importantes de la vaga definición del contenido de la ‘guerra sucia’ fueron la despolitización de los ciudadanos y la reducción de las actividades asociativas (...). Al mismo tiempo, la incertidumbre dio lugar a la emergencia de estrategias egoístas de supervivencia que, a su vez, retroalimentaron la reducción de actividades asociativas. La sociedad argentina se transformó en una sociedad fragmentada” (Corradi, 2000: 58).

⁴² Estas dos frases se hicieron célebres durante la dictadura en Argentina, y eran frecuentemente empleadas por algunos sujetos cuando se conocían actos de secuestro o asesinato por parte del Ejército, la policía y grupos de ultraderecha.

Así la dictadura se proponía corregir el vicio que para ella tuvo su máxima expresión con el peronismo: la movilización política de los trabajadores y los sectores populares y el proceso de inclusión social y política de estos últimos. Semejante empresa “obligaba” a implementar una acción global, a todos los niveles. ¿Que mejor estrategia de legitimación que construir un enemigo que fuera omnipresente?

La reforma económica del Proceso

No se pretende realizar un detallado análisis de las reformas económicas aplicadas por el Proceso, sin embargo, se tratará de señalar sus características más salientes y de dar cuenta de cual fue la lógica con la que se constituyó como discurso. En ese sentido se puede decir que las reformas económicas, se constituyeron a partir de un principio de exclusión de todo lo que desde la perspectiva neoliberal se le atribuye a las políticas económicas de corte populista en general. En el caso que estamos tratando, el plan económico de la dictadura apuntaba a dismantelar las bases de la economía peronista, especialmente de la del primer gobierno justicialista. A saber: el relativo aislamiento de Argentina con respecto al mercado mundial, las políticas de intervención del Estado en la economía (que se expresaba entre otras cosas en la sustitución de importaciones), la protección a la industria nacional, el crecimiento del mercado interno y el incremento de salarios.

El programa encarado por la dictadura se presentó en términos antagónicos al del peronismo, y puede ser resumido en las siguientes medidas: la plena inserción de la Argentina en el mercado mundial por medio del levantamiento de todo tipo de barreras y medidas de protección, una restricción a la intervención del Estado en la economía - considerada una esfera autónoma de la política- y el estrechamiento del mercado interno y de los salarios, como medios de control de la inflación.

Cada uno de los polos de la antinomia generaba además las siguientes cadenas causales: la economía populista al ser cerrada al mercado mundial y al adoptar medidas proteccionistas, llevaba a que los medios de producción y los empresarios locales fueran poco competitivos y con el tiempo obsoletos. El mercado interno, el único disponible, se encontraba sobredimensionado, y la única variable que permitía hacerlo crecer era el incremento de salarios por vía de la emisión monetaria, generando una espiral inflacionaria, que obligaba a su vez a una mayor intervención del Estado. En contraposición a ello, la política del libre mercado, al incrementar las interacciones de la economía argentina con el resto del mundo, obligaba al sistema productivo y al empresariado a ser más competitivo y el afán de colocar productos en el exterior a mejores precios les llevaría a mejorar su calidad y a estrechar el mercado interno.

En otras palabras, una de las cadenas causales (la economía populista), representaba un círculo vicioso, la otra (la de libre mercado), el círculo virtuoso, con consecuencias en el ámbito de la economía, pero también en el de la cultura. La economía de mercado era parte del discurso del orden, ya que ella implicaba que las cosas volverían a sus causas “naturales”, de donde nunca debieron haber salido. Pero las dificultades para que esto suceda no solo estaban en los problemas técnicos que pudieran derivarse de la aplicación de un nuevo plan económico, sino en “cuarenta años de adopción sistemática de esta filosofía (la populista)”, que “crearon una educación económica en la población –funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales, estudiantes e inclusive las propias Fuerzas Armadas que en 1976 se pronunciaron por su modificación-, que resulta muy difícil de erradicar” (José Martínez de Hoz, presentación del “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”).

En la perspectiva de la dictadura, la herramienta principal para lograr el cambio cultural no era precisamente la “pedagogía”, sino la disuasión y el disciplinamiento por la fuerza y el terror.⁴³ Criminalizando cualquier demanda que atentara contra la economía de mercado, se proponía adoptar cambios estructurales y establecer las bases del nuevo programa, que supuestamente permitirían el ingreso al círculo virtuoso, el que una vez establecido, llevaría a que el conjunto de los factores se “corrigieran” casi mecánicamente. Se trataba de vencer las resistencias iniciales, que se expresaban en términos culturales y cuyo efecto más nocivo era la inflación. A ello se abocó de lleno el equipo económico del Proceso.

Sin embargo, en 1977 se hizo patente el primer fracaso del plan: la inflación se mantenía e incluso crecía con respecto al periodo anterior y con ello caía el argumento de que el control del déficit fiscal era su causa principal. Se elaboró entonces un nuevo argumento: “Hemos observado en el pasado que ciertos sectores o empresas se han aprovechado de la situación, de alguna manera monopólica o de oligopolio en el mercado, para efectuar frecuentes y grandes aumentos de precios. Quiero advertir que estas situaciones van a ser observadas muy de cerca y que, llegado el caso, sabremos adoptar las medidas necesarias

⁴³ No es que no hayan existido campañas de “formación” a favor de la economía de mercado, solo que la dictadura parecía confiar más en la fuerza que en la persuasión.

dentro de la amplia gama que tiene el Estado, para que estas empresas entren en razón y no ejerzan prácticas contrarias a una actuación leal en el mercado” (Martínez de Hoz, Boletín Semanal, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 14 de marzo de 1977).⁴⁴

Los elementos nuevos de este argumento estaban en que su centro ya no eran las causas estructurales, sino los actores económicos, con lo que se hicieron evidentes las fisuras con uno de los sectores más comprometidos con la dictadura. Los anteriores aliados incondicionales de la dictadura eran acusados de perder la razón y amenazados de sufrir las consecuencias derivadas de las “medidas necesarias”. La cadena de equivalencias, mostraba sus primeros síntomas de desarticulación, y el mito del círculo virtuoso se deterioraba.

Se aplicaron entonces medidas de control que denominaron “tregua de precios”, y tres meses después, se anunció una reforma financiera que llevó a una liberalización del sistema bancario. El crédito dejaba de estar controlado por el Banco Central y se liberaban las tasas de interés.

Las medidas implementadas para controlar los precios fracasaron, pues ni bien estas fueron levantadas, la inflación volvió a crecer, pero esa vez acompañada con recesión, aumentado los índices desempleo. La fórmula adoptada para atacar la inflación fue una mayor apertura a las importaciones, lo que llevó a que se profundizara la crisis de la mediana y pequeña industria. Muchas de ellas quebraron y el índice de desempleo creció nuevamente.

Por esos tiempos el mito del mercado libre, como fórmula mágica para arreglar todos los problemas, estaba más que deteriorado. A ello había que sumar que la desocupación era para la dictadura un problema de seguridad nacional, pues ella recreaba las condiciones en las que supuestamente la “subversión” se hacía más fuerte.

Los anteriores aliados del plan económico empezaron a retirar su apoyo: por un lado, la Sociedad Rural y los Industriales, que se vieron perjudicados por las importaciones, y por

⁴⁴ A pocos días de esta declaración, Bussi advertía en Tucumán sobre “atentados económicos”. (Clarín, 3/4/77).

otro, la reducción drástica del salario real llevó el malestar a todos los niveles. La salida del equipo económico comandado por Martínez de Hoz era inminente. Sus reemplazantes no hicieron más que profundizar la crisis.

El combate a la subversión y la reforma económica, eran dos de los pilares discursivos del Proceso que proveerían de sentido al Orden. Constituían el “argumento” que se derivaba de la cadena de equivalencias que el significante primordial ordenada y articulaba. La aniquilación de la “subversión”, entendida en la acepción vaga que le dio el Proceso, debía ser el primer paso para corregir uno de los vicios que conducían al desorden y un principio de resolución del tema de la dirección política a futuro. La profunda reforma económica, se suponía, no solo permitiría la “Reorganización de la Nación”, sino que además sería la plataforma regenerativa para la emergencia de nuevos sujetos “responsables” y en lo posible apolíticos.

La confluencia de ambas disolvería las identidades políticas pretéritas y sentaría las bases estructurales y políticas de un modo tan determinante, que aseguraría “definitivamente” a la Argentina un futuro de Orden y crecimiento económico, similar a la de principios del Siglo XX y plenamente inserta en el mundo “occidental y cristiano”.

La gobernación de Bussi (marzo de 1976 – diciembre de 1977):

“una expresión particular del espíritu del Proceso”

Con el golpe de Estado de 1976, el General Bussi llegó a la gobernación de la provincia de Tucumán. Se trataba del único caso en el país en el que un militar en actividad era puesto a cargo de una gobernación de provincia.⁴⁵ El analista político Joaquín Morales Solá, escribía en aquella época que esto “plantea, sucedáneamente, un trato especial del gobierno nacional a esta provincia”, agregando que se “trata en realidad, de unificar las decisiones políticas y militares de esa lucha contra la sedición en un solo mando” (*La Gaceta*, 23/4/76).

Este “trato especial”, se debía a que la Junta y el propio Bussi caracterizaban a la situación de la provincia de Tucumán como diferente y peculiar: la consideraban una excepción dentro de la excepción. Pero el trato especial no terminaba en el nombramiento de un militar en actividad en la gobernación de la provincia, se manifestaba también en dos aspectos que pueden parecer contrapuestos, pero que en realidad tuvieron un carácter complementario: por un lado, un nivel de militarización y represión política, que llevó a que Tucumán fuera la provincia con la mayor cantidad de víctimas de la dictadura en proporción a su población y, por otro, un sustantivo incremento en los ingresos de coparticipación, que posibilitaron un desarrollo de la obra pública -en un lapso de un año y medio-, como nunca antes había conocido la provincia. Si se sostiene que ambos elementos jugaban un rol complementario, es porque en el discurso de la dictadura y del bussismo en particular, se presentaban de ese modo.

En lo que sigue se presenta lo que fue la lógica del discurso de Bussi en el periodo en el que se desempeñó como gobernador de facto de Tucumán, para luego pasar a su análisis.

⁴⁵ En todos los otros casos se trataba de militares retirados.

La lógica del discurso de Bussi gobernador de facto

En el análisis del discurso de Bussi gobernador de Tucumán, se distinguen dos *momentos* y un cierre. Un primer momento, en el que todos los esfuerzos del gobierno se volcaron a instalar un mito fundacional y un segundo en el que se considera que el mito está suficientemente consolidado. En el cierre se intenta integrar los momentos anteriores y darles nuevas significaciones. Esta distinción, además de ser analítica, ha sido marcada por el propio Bussi, aunque no en estos términos. El General consideraba, un año después de haber llegado al poder, que se hacía necesaria una “reiteración de compromisos” y que el objetivo principal del gobierno ya no era la guerra (pues ésta se había ganado), sino la “conquista de la paz”. Si se sostiene que se trataba de dos momentos míticos es porque el final de la guerra no fue para la dictadura la derrota militar de su enemigo, sino lo que consideraron la consolidación social de su ideología.

- 1) En el *primer momento* el discurso de Bussi -inserto en el discurso del Proceso-, siguió la siguiente lógica:
 - Se produjeron cambios esperables en los lugares de la enunciación. Estos cambios se derivaron del golpe de Estado y del cargo de primer mandatario provincial que pasó a ocupar Bussi.
 - Con ello cobró fuerza y tomó cuerpo la ecuación que operaba antes del golpe. Si anteriormente el ejército era equiparado con la República, con el golpe la ecuación alcanzaba una nueva formulación: Ejército en el gobierno = República, y en el ámbito local, Ejército en el gobierno = Provincia. Esto le permitía a Bussi decir: “les adelanto mi más cálido reconocimiento en nombre de la República y de la Provincia” (encuentro con los maestros, *La Gaceta*, 25/4/769).
 - El punto nodal que ordenaba la cadena discursiva era, a nivel local, el nombre que adoptó el Ejército para su gestión a nivel nacional: Proceso de Reorganización Nacional, el cual se organizaba a su vez por medio del significante primordial Orden. Definidos todos ellos en oposición a la cadena de equivalencias que articulaba a los significantes anarquía, caos, desintegración, subversión, política.
 - Una vez establecido el punto nodal y las cadenas de equivalencias, se definió quienes constituían el *nosotros*, los *otros* y el *ustedes*. Cada uno de estos términos

eran significados a su vez por la imputación de supuestas características descriptivas: el nosotros lo constituía, en primer lugar, el Ejército, luego todos aquellos que buscaban el Orden. Entre los últimos, estaban quienes no se oponían a ninguno de los dictados del gobierno. Quienes lo hacían, o al menos los criticaban, pasaban a ser parte del *otro*.⁴⁶ Los *otros*, los generadores del caos y la disolución, estaban representados por la “subversión marxista”, por los políticos y la política. Estos últimos, en los primeros tiempos del golpe, eran aludidos pero se evitaba nombrarlos directamente. Su juicio se dejaba “en manos de la historia, la justicia y de la propia conciencia” (Bussi, *La Gaceta*, 25/7/76). Después, se los caracterizó como el enemigo principal, aquellos que generan las situaciones en las cuales la “subversión” surgía y se desarrollaba (la división y el enfrentamiento de la sociedad). La subversión pasó a ser entonces una expresión extrema y aberrante de la política. El *ustedes* seguía siendo, en este primer momento, la comunidad, definida por un lado como víctima de la “subversión” y la política, y por otro, como el “fin último” de las acciones del proceso.

- En este primer momento, sobre todo en los primeros meses, el discurso tomó la forma de acción. Las pocas verbalizaciones se expresaban en términos de directivas y de planes de acción hacia el futuro. La caracterización de la situación inmediatamente anterior aparecía solo aludida como lo opuesto a lo que se quería hacer. Por ejemplo, si en el futuro “podremos todos forjarnos un destino de grandeza” (Bussi, *La Gaceta*, 25/4/76), se estaba suponiendo que anteriormente no se seguía ese camino. En pocas palabras, el lugar del programa pasó a ser más importante que el de la caracterización de la situación.
- Todos estos elementos se ponían al servicio de la construcción de un mito, que pretendía acentuar el carácter fundacional del Proceso proyectándose hacia el futuro, pero, echando raíces en lo más auténtico de la Patria y el “ser nacional”, encarnado por los padres fundadores.

⁴⁶ Esto lo expresa claramente Bussi en el siguiente pasaje: “Vaya una reflexión final sobre algunas voces aisladas, prematuras y tendenciosamente enjuiciadoras que pretenden hacerse escuchar. Las rechazamos enérgicamente, (...) por las intenciones que alientan quienes pretenden provocar desasociados, desencuentros y frustraciones que, en última instancia, no hacen sino facilitar la acción subversiva marxista” (*La Gaceta*, 5/12/77).

2) En el *segundo momento*, muchos de estos elementos se mantuvieron, sin embargo, otros cambiaron su carácter:

- En primer lugar se expresaba que “conquistar la paz es la misión prioritaria del gobierno provincial”, pero esta formulación aparecía precedida de la proclama “Hemos ganado la guerra” (Bussi, *La Gaceta*, 2/1/77). La palabra guerra no había estado presente en el discurso de la dictadura hasta ese momento.⁴⁷
- La paz no era entendida como el resultado del acuerdo de las partes en conflicto. Era la paz *de y para* los vencedores, en la que la ausencia del conflicto se alcanzaba por medio de la eliminación del otro. El llamado a la paz no era una convocatoria para bajar los niveles del conflicto; lo que se pretendía era consolidar el poder establecido evitando el surgimiento de alguna resistencia u oposición. Pero además, definir al conflicto anterior en términos de guerra, le servía a la dictadura, por un lado, para magnificar el accionar del Ejército (que se mostraba victorioso ante sí mismo y la sociedad), frente a unos políticos y una política impotente y derrotada; y por otro, para justificar y legitimar el accionar represivo, magnificando el peligro del enemigo vencido.
- En la construcción de las partes intervinientes, el *ustedes* desapareció, los que sobrevivieron a la guerra eran aquellos que supieron incorporarse al bando ganador y pasaron a formar partes del *nosotros*. El *otro* era sostenido a nivel discursivo en calidad de amenaza constante, solo que esa vez el enemigo principal era la política, la madre de todos los males. Los términos se redujeron y se pasó a una relación binaria de tipo excluyente.
- La Patria volvía a ser un organismo unificado, sin divisiones ni desgarros.
- Se volvía a hablar del pasado inmediato, pero esa vez en términos de lo que se debía evitar. La caracterización del pasado se la realizó solo una vez que el Proceso había demostrado sus diferencias con la política, para que esta última fuera actualizada como lo ominoso. Se buscaba también con esto una legitimación retroactiva de la

⁴⁷ Analizaremos en el desarrollo del presente apartado los motivos de la aparición del significante guerra.

guerra sucia. La lectura del pasado era conveniente hacerla después de que mito estuviera consolidado.⁴⁸

- En la conclusión de su mandato, Bussi intentó integrar estos dos momentos como partes de un proceso lineal y armónico, en el que el primero aparece como condición del segundo. Para conseguir la paz, fue “necesaria” la eliminación del enemigo.

⁴⁸ La alusión más clara y detallada del pasado la realiza Bussi en el momento en que por disposición de la Junta militar, debe abandonar al cargo de gobernador de Tucumán, nos referimos al discurso de despedida del 5 de diciembre de 1977.

Refundación e Instalación del mito

En los días posteriores al golpe militar, Bussi -al igual que el resto de los nuevos gobernadores de provincia- se abstuvo de hacer abundantes declaraciones públicas. En las pocas que se conocen no hacía más que afirmar que el gobierno de Tucumán seguiría puntillosamente los pasos marcados por el estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. La idea era unificar la voz y el mando en la Junta que se había hecho cargo del gobierno nacional, como un modo de contrastar radicalmente con la polifonía -codificada como anarquía por la dictadura- del régimen anterior. Siguiendo un lema militar, el poder no solo debía *estar* concentrado, sino que además debía *parecer* unificado.

Recién en abril de 1976 (a más de un mes de haber asumido), Bussi realiza una reunión con el estamento docente, con presencia de la prensa. Esta fue su primera intervención pública en calidad de gobernador. En ella se ocupó más que nada de destacar el carácter fundacional del Proceso y de “convocar” al sector docente para que se sumara a la empresa. “Una nueva instancia se ha abierto en la República; yo diría, la última oportunidad. Podremos todos forjar un destino de grandeza para alcanzar la Patria que instrumentara San Martín y soñara Belgrano o, por el contrario, caer en una sociedad de esclavos donde la materia predomine sobre el espíritu. Yo tengo, como argentino y como soldado, una gran esperanza, un gran optimismo y una gran fe, que mis conciudadanos sabrán elegir el mejor camino y lograr para nosotros y para nuestros hijos una Patria grande. En este camino, el cierto, el único que podemos aceptar los argentinos, Uds. pueden desarrollar un papel protagónico. En la medida que cumplan con la misión impuesta y desplieguen el sacrificio que la hora impone, con el espíritu y la vocación de servicio que caracteriza al ser tucumano, para que la Argentina reencuentre el destino de grandeza” (*La Gaceta*, 25/4/76).

La importancia de la nueva fundación no solo estaba dada por ser ésta una instancia decisiva, sino además por ser la última oportunidad para el país. Se estaba ante una situación de excepción en la cual las cosas se planteaban en términos de un “ahora o nunca”. La convocatoria cobraba un carácter abstracto, mítico: se alude a los padres fundadores, San Martín y Belgrano; a la Patria Grande, al espíritu, al destino de grandeza y

a ciertas características supuestamente propias del ser tucumano; todos ellos componentes de una vía excluyente, de un único camino cierto. Lo abstracto del pasado (los fundadores) y del destino (la grandeza), servía para caracterizar por contraste, a la situación inmediatamente anterior sin aludirla directamente y se concreta en lo que pretende presentarse como convocatoria: el mandato a la obediencia (cumplir con la misión impuesta). La obediencia sería de ahí en más el mecanismo por el que las personas, individual o grupalmente, podían incorporarse al *nosotros* de la dictadura.

11 días después, en un mensaje dirigido a toda la población de la provincia se dieron a conocer las orientaciones básicas y los fundamentos doctrinarios del nuevo gobierno. En este mensaje se dejó en claro que el Proceso de Reorganización Nacional, igualado al Orden (Proceso = Orden), era el punto de referencia obligado de toda construcción discursiva. Este era un modo de expresar en la cadena discursiva, la “cadena de mandos” establecida y el nivel de disciplinamiento de los distintos estamentos militares, a cargo del gobierno.

La dictadura aspiraba a que su discurso tuviera un significado único, inequívoco, de una correspondencia plena entre el enunciado y el significado. La arbitrariedad autoritaria pretendía así suspender la arbitrariedad del signo, suspender la interpretación. La invocación a los significantes Proceso de Reorganización Nacional debía remitir directamente al Orden y este al significante Patria, lo cual los ponía por encima de toda otra norma o ley. “Toda la acción a desarrollar estará orientada y al servicio de los postulados contenidos en los objetivos básicos y en el estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, complementados por la Constitución Nacional y Provincial en tanto no se opongan a ellos. Además deberán ser tenidas permanentemente en cuenta como las bases fundamentales para la acción las ideas rectoras que sustentan la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nacional” (*La Gaceta* del 6/5/76: “Bussi dio directivas”).

Pero, el carácter excepcional de la fundación no solo obligaba a la suspensión de toda otra ley, también debía suspenderse el tiempo cronológico, condición imprescindible para ingresar en la dimensión del tiempo mítico, que es a la vez presente y eternidad. Había que

dejar de lado el tiempo mundano, ordinario, “evitar referencias a hechos pasados, susceptibles de provocar divisiones en la ciudadanía. Hay que actuar mirando hacia delante, buscando borrar las antinomias partidarias y romper con los compartimentos estancos de la sectorización política en procura de la unidad de la población alrededor de los objetivos perseguidos por el Proceso. Debemos evitar por todos los medios que los funcionarios se dejen teñir políticamente”. El tiempo de los hombres comunes atentaba contra los objetivos del Proceso, por eso era “importante evitar, en especial, referencias al futuro político del país. Deberá consolidarse la imagen de autoridad y respeto” (*La Gaceta*, 06/05/1975).

La historia cotidiana y concreta producía un retorno al tiempo de la política, y esta conducía directamente al enfrentamiento y la división. El tiempo mítico, en cambio, era el tiempo del Ejército, capaz de actualizar el pasado y proyectarlo al futuro, en el que estaban siempre presentes los fundadores, y en el cual la sociedad se encontraba en su estado más puro, el orgánico, en él las partes no se enfrentaban, reinaba la armonía y la solidaridad. Era el tiempo de la plena autoridad y respeto, manifestación del fin último, el Orden. La historia cotidiana debía suspenderse y dar lugar al tiempo de la “verdadera historia”, momento absoluto de la fundación.

La caracterización de la situación no estaba ausente, pero si se había desdibujado (pues esta era parte del tiempo “normal”, de lo evanescente), solo podía inferirse como lo opuesto a lo que el momento fundamental proyectaba. El *nosotros*, los *otros* y el *ustedes*, se definían de acuerdo a esa referencia y al papel que asumieran en el programa que la dictadura planteaba.

El Programa de la dictadura en Tucumán

Cuando el golpe de Estado fue un hecho, a la situación pasada inmediata se la daba por supuesta. No había necesidad de convencer de lo nociva que esta había sido, en todo caso era más importante convencer de lo bueno y promisorio que sería el futuro. En otras palabras, había que apuntalar el mito por medio de apelaciones al pasado glorioso y al imaginario de la iconografía y, en el caso de Tucumán, de un plan de obras públicas de dimensiones superlativas, comparado con los de gestiones anteriores. El mito, para perdurar y dejar testimonio, debía materializarse, hacerse visible, lo que además servía para acentuar los contrastes con la deliberación y los titubeos de la política. Reeditando el lema de Perón, “mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, la dictadura en todo el país, pero especialmente en Tucumán, se lanzó a construir, asfaltar, extender líneas eléctricas.

El plan de obras públicas fue presentado en forma detallada y desagregada por áreas y tenía por objetivo fundamental y explícito, no el llevar un mayor bienestar a la población, sino: “lograr la más decidida intervención de toda la población tucumana en la reorganización de nuestra provincia”. Ello supuestamente permitiría “asegurar la paz social, conciliando los intereses de todos los sectores; con la consagración del principio de autoridad en todos los órdenes”, y “buscar la consolidación del consenso logrado; perseguir a través de todos los actos de gobierno la adhesión de la población a los postulados del proceso de Reorganización nacional; incrementar una amplia convocatoria basada en los valores más puros del ser nacional. Esto permitirá aislar al oponente –definido por la subversión y la corrupción generalizada- y favorecerá su aniquilamiento. Interesará convocar la comprensión y el compromiso de la población” (*La Gaceta*, 25/7/76).

En resumen, el plan de obras públicas tenía por objetivo hacer más clara la distinción con los *otros* y generar mecanismos de reclutamiento que llevaran a incorporar al *ustedes* en el *nosotros*.

Si el tiempo en el mito era absoluto, también lo eran los lugares que las personas ocupan. Los *otros* seguían siendo la subversión y los políticos, de los cuales era mejor no ocuparse en ese momento, “porque ello será competencia de la historia, de la justicia y de la propia

conciencia” (*La Gaceta*, 25/7/76). Ahora bien, una vez que se confirmó al enemigo en su lugar, se trataba de integrar las partes desmembradas del organismo social, por eso: “en el actual Proceso no puede haber espectadores; todos los argentinos son protagonistas (...). No puede haber espectadores ni críticos, todos hemos de ser protagonistas de un nuevo amanecer” (*La Gaceta*, 27/7/76).⁴⁹

⁴⁹ Encontramos en este punto una diferencia con el discurso previo al golpe, en donde el Ejército podía prescindir de la población.

La consolidación del mito

Se adelantó, en lo que se consideró la lógica del segundo momento del discurso bussista, que algunos elementos del primero se mantuvieron, pero que otros se agregaron o cambiaron su carácter. Se destacó también que ese momento se abría con un llamado a la paz por parte de Bussi: “Hemos ganado la guerra. Nos resta conquistar la paz. Esta es la misión prioritaria del gobierno provincial, con el concurso de la ciudadanía toda” (*La Gaceta*, 31/9/1976). El punto programático “conquistar la paz” se presentaba precedido de una caracterización actual de la situación pasada: “Hemos ganado la guerra”. Se buscaba resignificar al pasado, introduciendo a *guerra* como un nuevo significante, para designar a lo que antes se nombraba como “lucha contra la subversión”.

El empleo de la palabra guerra había sido escrupulosamente evitado hasta ese momento para calificar a las acciones represivas. Pues, de haberlo hecho, hubiera significado reconocer al *otro* como fuerza beligerante legítima, lo que obligaba al ejército a ajustar su accionar a la Convención de Ginebra que, entre otras cosas, regula el modo en que tienen que ser tratados los prisioneros. Sin embargo, una vez que las principales acciones represivas ya se habían llevado adelante, plantearlas en términos de guerra resultaba conveniente en el cálculo de los generales, porque por un lado sobredimensionaban las fuerzas del enemigo, con lo que transitivamente se magnificaba la dimensión de la victoria, y, por otro, se justificaba y legitimaba el accionar represivo, evitando acciones punitivas en el futuro. No es que los militares desconocieran que ante la mirada de los “expertos” la guerra no implicaba licencia para que las partes (o una de ellas) hiciera lo que quisiera; de hecho ese no-desconocimiento es lo que los llevó a no considerarla así en el pasado. Tampoco buscaban una legalización, lo que si pretendían era una legitimación social que no dejara margen político a cualquier acción futura que tienda a enjuiciar el accionar represivo, o que, eventualmente, pudiera ponerle un freno. En este sentido, no es difícil inferir que el supuesto de los militares era que en el imaginario social la idea de guerra implicaba que en

ella “todo vale” contra el enemigo. Se trataba de instalar esa idea, la legitimación vendría por añadidura.⁵⁰

La construcción discursiva de la “paz” propuesta por la dictadura, se derivaba precisamente de lo anterior. Se trataba de la paz de y para los vencedores, y no el producto de un acuerdo entre partes en conflictos. Esto fue enfatizado reiteradamente por la dictadura. La proclama de la paz no hacía más que encubrir un llamado a la no-alteración del nuevo orden y una velada amenaza a cualquier posible resistencia. Por eso, aún después de anunciar la victoria, el otro era sostenido como amenaza y como el pasado que debía evitarse. El *nosotros*, sin embargo, tenía una nueva composición, toda referencia a la población en este periodo se la hacía del siguiente modo: “El sostenido sacrificio de la población ha fructificado en comprensión, tolerancia, solidaridad y voluntad de vencer los obstáculos en tarea común. Nuestro público reconocimiento a todos los sectores de la ciudadanía tucumana, sin cuyo concurso nada hubiera sido posible” (*La Gaceta*, 16/11/76).

Es decir, el *ustedes*, indiferente del periodo previo al golpe, víctima de la subversión y objetivo central de las acciones para ganarlos en el primer momento analizado, se esfumó en este segundo momento. Fue incorporado al *nosotros* como una parte fundamental, pues, “sin su concurso nada hubiera sido posible”. El objetivo de reintegración del organismo había sido alcanzado y la relación se reducía a dos términos, el *nosotros* y los *otros*. El primero plenamente realizado, el segundo derrotado, pero al acecho.

Pero, tras la fachada de la socialización de la victoria y la gloria, se escondía la intención de involucrar a la población, de hacerla compartir la responsabilidad sobre lo actuado, atribuyéndose con ello un plus de legitimidad.

El mito había sido consolidado, la “restauración y ejercicio de los viejos valores que conforman nuestro tradicional estilo de vida” se habían logrado, por eso se podía proclamar que “al llegar a su término el año 1976 se cierra un ciclo, sin duda trascendente en la

⁵⁰ No se puede decir que el supuesto de los militares haya sido desacertado en este sentido. De hecho, en el “lenguaje popular” nos encontramos frecuentemente con la palabra guerra cuando se quiere aludir a situaciones en las que impera una falta total de límites.

historia de nuestra querida Patria” y anunciar el comienzo de otro, “pródigo en felicidad, seguridad y bienestar. El gobierno de la provincia, inmerso en el Proceso de Reorganización Nacional, fijó como objetivo prioritario de su acción la restauración y ejercicio de los viejos valores que conforman nuestro tradicional estilo de vida, rescatando la dignidad y el decoro, reimplantando la seguridad, promoviendo el trabajo fecundo y creador, exhortando al goce de los derechos pero también al cumplimiento de los deberes, ofreciendo posibilidades a todos, sin excepción de ninguna naturaleza, para que cada uno pueda ser artífice de su propio futuro; y promoviendo el desarrollo en paz y en orden” (*La Gaceta*, 16/11/76).

Faltaba sin embargo, la realización de un cierre en el que se pudieran integrar los dos momentos (el de la guerra y el de la paz). De su integración resultaría una nueva versión de la historia, que Bussi presentaba al final de su mandato.

La conclusión del mandato:

la sutura del mito de una sociedad que no necesita de sutura

A finales de 1977, la Junta militar promovió en grado a Bussi y le asignó un nuevo destino, lo que lo obligó a dejar el cargo de gobernador de Tucumán. Pocos días antes de la partida, ofreció un nuevo discurso en el que realizó un balance de su actividad al frente del gobierno provincial. En este discurso, a diferencia de los anteriores, Bussi intentó integrar en un solo argumento los elementos del periodo anterior al golpe con el primer y segundo momento de su gobernación. Esta integración implicó a su vez una resignificación de los mismos y produjo un efecto una sutura que los hacía parecer “lógicos y coherentes”.

Los efectos de sutura llevaron a que los significantes ordenados arbitrariamente dentro de una determinada cadena de equivalencias, aparecieran como necesariamente conectados y a que a la arbitrariedad se la muestre como naturalidad. Los desfazajes sintácticos y de sentido eran obliterados en beneficio de un “sentido pleno”. Ese era el momento en que el mito operaba aparentemente sin fisuras.⁵¹ Pero para que esto sucediera, antes se tuvo que desmontar el mito anterior que suturaba otros elementos en otras cadenas discursivas, que ofrecía otros modos de organizar lo social, de entender la política y de constituir sujetos. Por eso con la vigencia de este nuevo mito, lo sujetos debieron reconstituirse dentro de él, por medio de la configuración de nuevas identidades.

Solo una vez producido este conjunto de operaciones (por lo menos en la consideración de los militares), el hito histórico de la refundación se integró a la historia cronológica. Era el tiempo de hacer referencia a los momentos “normales” de la política, los cuales, insistimos, tenían en esta ocasión nuevos significados. Por eso volvió a ser importante la caracterización de la situación, el programa dejó de ser excluyente y también era posible hablar del futuro.

⁵¹ En lenguaje coloquial argentino es el momento en que todo “cierra”.

Caracterización de la situación:

El primer esfuerzo discursivo de la caracterización ofrecida por Bussi cuando dejaba las funciones de gobernador de Tucumán fue, el de destacar la peculiaridad de situación que había vivido la provincia en el momento en el que asumió ese cargo. Dicha peculiaridad la destacaba –negativamente– del resto de las provincias argentinas. Después fusionaría esa caracterización de la situación en un “todo indiviso” con el conjunto de acciones y medidas que se llevaron a cabo. Decía el General en el párrafo introductorio del discurso del 4 de diciembre de 1976: “La situación particularísima de Tucumán en el lapso 74/75, y las medidas de excepción que debieron llevarse a cabo para la solución de su coyuntura política, socio-económica y militar, constituyen un todo indiviso” (*La Gaceta*, 5/12/1976).

Lo primero que se puede advertir en este párrafo, es que la situación descripta –correspondiente a los primeros meses de año 1976– es articulada a las acciones llevadas a cabo por el Ejército (el golpe), las que se articulan a su vez con las medidas aplicadas y los resultados alcanzados. La cadena causal –esta vez histórica– que se pretende establecer era: situación particular → medidas de excepción → solución, en la cual el nexo que unía (y conducía) a cada uno de los términos era el deber. La formulación “causal” era la siguiente: ante una situación particular, era *deber* del Ejército intervenir, aplicando medidas de excepción, con el *deber* de dar una solución.

La conexión entre situación y medidas de excepción –aún siendo éstas parte de una construcción social y política, esto es, arbitraria– se puede decir, era razonable. Por ejemplo, una inundación no prevista puede requerir de medidas también no previstas, de excepción. La amenaza de una invasión al territorio nacional puede llevar a que se tomen medidas no corrientes tales como el reclutamiento masivo, un mayor nivel de movilización de tropas militares, el desarrollo de estrategias diplomáticas, etc. Sin embargo, cuando se introduce el elemento conectivo del *deber* y el resultado es la solución, la razonabilidad da lugar al pensamiento mítico y los elementos pasan a ser inseparables. Pasan a constituir “un todo indiviso”.

El deber en la lógica militar (por lo menos en el Ejército Argentino de esa época) se desprendía de un mandato que tenía un carácter irrenunciable e infalible.⁵² Esto quiere decir que una vez que el mandato se expresaba, este no se discutía, ya que pasaba a tener un estatuto de realidad; el imperativo determinaba retroactivamente al pasado, su carácter performativo era pleno. En el deber militar no había espacio para el disenso, no se trataba de una elección; tampoco intervenía la voluntad, aunque esta era permanentemente invocada en su código. Dentro de la ideología militar, especialmente cuando se está en estado de guerra, este proceder también puede ser razonable, pues hay situaciones en las que la deliberación puede poner en peligro la vida de la tropa; pero si esta premisa es aplicada al conjunto de lo social y lo político, adquiere un carácter mítico y nefasto.

Además, el deber ocupaba, a la vez que ocultaba, el lugar de la decisión y la arbitrariedad. Estas se difuminaban detrás de la invocación a lo sagrado que hacían los altos mandos y de la obediencia que invocaban los subordinados. Sin embargo -en contra de lo que esgrimían los militares- el deber no exime de responsabilidades, al menos para quienes no se encuentran “dentro del mito”, ya que hay una decisión inicial, que es la de someterse al mandato.⁵³

Si la invocación al deber operó y fue efectiva, fue porque se suponía que en el inicio de la cadena de mandos, en los más altos de la cúpula militar, había una relación especial, una conexión con lo sagrado que iba transmitiéndose de eslabón a eslabón, hasta los rangos más bajos. Este principio mítico imprescindible, era complementado con una lógica burocrática estamental (que dicta que a las ordenes hay que cumplirlas porque emanan de un superior), que reforzaba la cadena de mandos.

⁵² La lógica del deber y del mando, propia del ámbito castrense está también presente en la Ley de Obediencia Debida, dictada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que será examinada en detalle en el capítulo siguiente.

⁵³ Este punto es extremadamente delicado, ya que fue el argumento central de la Ley de Obediencia Debida (1987), en el que el mito militar fue extendido a toda una concepción de justicia. El efecto nefasto de haber dejado en libertad a la mayor parte de los militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, es que sienta un precedente, o en términos jurídicos establece jurisprudencia por la cual cualquier persona que pertenezca a una de las fuerzas armadas o de seguridad se puede amparar.

Pero también era parte del mito y del pensamiento mágico suponer que un conjunto de acciones, por más excepcionales que estas sean, llevarían a una solución “política, socio-económica y militar” definitiva. En rigor, los problemas políticos, sociales, económicos y militares no son resolubles, se pueden alcanzar nuevas formulaciones y planteos, pueden pasar a ser secundarios en determinadas circunstancias históricas, olvidados en otras, pero jamás solucionados. Esto implicaría creer que la historia tiene una finalidad y un fin, que se puede eliminar toda contingencia.

La idea de una solución final se deriva a su vez del mito de la sociedad como un organismo, fuertemente arraigado en el estamento militar (aunque no exclusivamente en él). Para este mito, las partes tienen funciones estables, determinadas y son integrantes de un todo armónico.⁵⁴ Concebida así, la sociedad es un hecho dado que, como tal, no necesita de una instancia de sutura. La política es prescindible o, en el mejor de los casos, es pura administración. Caso contrario, será nociva, ya que introduce divisiones “artificiales”. La sociedad es para esta concepción lo natural-esencial, la política lo artificial.

Por eso para Bussi, la acción política era responsable de que “el orden público y la paz social fueran quebrados (...), fracturando a la sociedad y enfrentando a los distintos sectores” (*La Gaceta*, 06/01/1977). Por el accionar faccioso que la política tenía en esta caracterización, se la configuraba como el primer enemigo, el *otro* del Proceso en la expresión bussista. A diferencia de la construcción del *otro* que hiciera en el periodo anterior al golpe, en el que el primer enemigo identificado era la “subversión” y después los políticos y la política, en este periodo se invertía el orden. La figura del “subversivo” no desapareció, ni pasó a un segundo plano, siguió siendo central en el discurso, pero jugando más como entidad abstracta que permitía el cierre ideológico de la construcción del *otro*. La “subversión” ya había sido militarmente derrotada, pero era sostenida en el discurso militar a modo de amenaza y como el “tipo ideal” del *otro*. Esto es enteramente entendible, ya que el enemigo al que habían “golpeado” era al poder político. La legitimación del golpe “requería” que la política fuera puesta en el primer plano de la escena discursiva.

⁵⁴ Lo que constituye a su vez una construcción ideológica del organicismo, pues es perfectamente demostrable que los organismos no son necesariamente armoniosos, ni que todas sus partes tengan funciones determinadas y solidarias para con el resto.

La “subversión” era la expresión más siniestra del accionar político, pero era eso, una expresión que tenía lugar en tanto la política generaba las condiciones propicias para su emergencia. En una nueva cadena de causa-efecto, la sociedad era un organismo armónico y solidario, dividido y fracturado artificialmente por la política, generando condiciones sociales, políticas y económicas para el desarrollo de la subversión.

Esta cadena causal y el conjunto de condiciones que generaba, en la que lo político, lo social, lo económico y lo militar se fusionaban, “obligaban” a una intervención integral y a todo nivel por parte del Ejército. Su no-distinción hacia, entre otras cosas, que lo militar dejara de estar subordinado a lo político y que la lógica de una se transfiriera a las otras. En este caso la lógica militar era transferida tanto al terreno político, como al social y al económico. Los adversarios políticos eran tratados como enemigos de guerra, por lo que se hacía posible, y hasta a veces necesario y aconsejable, su encarcelamiento, asesinato o desaparición. Los dirigentes sociales corrían la misma suerte, e incluso, las actividades económicas eran decodificadas en esos términos. Solo por citar un ejemplo, el 3 de abril de 1977, ante una pequeña escalada inflacionaria, Bussi salió a la prensa a advertir sobre “atentados” económicos, amenazando a los “responsables de ponerlos ante la autoridad” (*La Gaceta*, 03/04/1977).

Por eso, con la política identificada como el ámbito en el que el enemigo se desempañaba, cualquier otra actividad podía ser “convertida” o recodificada como política, y los sujetos que las desarrollaban sospechosos de subversivos, dando lugar con ello a la intervención armada por parte del Ejército.⁵⁵

⁵⁵ Esta idea que se desarrolló en los años de la dictadura militar permaneció en imaginario político y social de Argentina. Aún hoy constituye un recurso retórico de deslegitimación el atribuir un estatuto político a las luchas sociales, o laborales. El calificativo más frecuentemente empleado ante una huelga de trabajadores es: “es un paro político”.

En los párrafos subsiguientes del mismo discurso que se está analizando, después de reafirmar las características especiales de Tucumán,⁵⁶ Bussi avanzó en la definición del enemigo subversivo, presentándolos en todo momento al lado de los políticos:

“Reflexiones aparte merece el accionar de las BDS⁵⁷, que contó con un notorio y decidido apoyo oficial. Por su gravedad, los siguientes hechos deben ser destacados:

- Los delincuentes subversivos amnistiados por Ley Nacional, fueron oficialmente recibidos por las autoridades locales. Todos ellos volvieron posteriormente a la clandestinidad, enlutando a muchos hogares tucumanos con nuevos asesinatos, atentados, secuestros, robos, extorsiones.
- La enseñanza patria fue reiteradamente reemplazada en edificios públicos por el trapo rojo de la delincuencia, ante el estupor de la población y el silencio cómplice de sectores representativos.
- La subversión urbana tuvo características de particular virulencia, penetrando en todos los estamentos del gobierno y en determinados sectores de la comunidad y pretendiendo lograr, a través del ejercicio de técnicas y procedimientos sutiles, el clima necesario para la insurrección general” (*La Gaceta*, 05/12/1977).

Quedaba en claro entonces que, más que describir a los “subversivos”, el objetivo de este pasaje era el de establecer una conexión entre éstos y los políticos (integrarlos en una cadena de equivalencias). La subversión, “contó con un notorio decidido apoyo oficial”. Lo que antes no era advertido ahora que el mito estaba operando se hacía evidente. Fueron amnistiados por Ley Nacional, obviamente elaborada por los políticos (se refiere a la Ley de Amnistía del año 1973, dictada por el gobierno del PJ a cargo de Cámpora). Conclusión: la política y los políticos eran el origen y la causa de la subversión.

Pero estas “precisiones” servían además para configurar a la tercera parte interviniente, que antes no era parte del *nosotros*, pero que en esta nueva formulación aparecía como opuesta a la figura del *otro*. La población, cuando no miraba estupefacta como se degradaban los

⁵⁶ “La situación de Tucumán al 24 de marzo de 1976, si bien se dio con mayor o menor intensidad en otras provincias argentinas, es posible afirmar que en ninguna de ellas ocurrió o hizo sentir su particular efecto negativo –concurrente y simultáneamente– como en la provincia de Tucumán” (*La Gaceta*, 5/12/77).

⁵⁷ Con estas iniciales se designaba en los discursos escritos a lo que los militares consideraban “Bandas de Delincuentes Subversivas”.

simbolos patrios, era victima del engaño de las “técnicas sutiles” de la subversión y los políticos, e incluso era asesinada, secuestrada, robada u objeto de la extorsión. Todo ello obligaba a: “la inevitable acción de las fuerzas del orden, en cumplimiento de una misión del servicio y del sagrado deber militar ” (*La Gaceta*, 05/12/1977).

La resignificación del programa

En esta oportunidad el programa no fue presentado como un conjunto de acciones planificadas a futuro, sino como hechos que demostraban la capacidad realizativa de la dictadura: “Tucumán ha reorganizado sus regímenes orgánicos funcionales, adecuándolos a su real situación, necesidades y posibilidades, y ha logrado su definitiva pacificación, sus hombres, mujeres y niños han recobrado la semblanza habitual de alegría, trabajo y paz, vuelve a ser el Jardín de la República y la Cuna de la Independencia Nacional. Las respectivas infraestructuras, han permitido rescatar los valores morales, espirituales y tradicionales del hombre tucumano. Ello significa que la generosa y activa participación de todos los sectores, no puede ni debe agotarse con el término de una gestión que ha sido transitoria y que ha estado a cargo de hombres circunstanciales impuestos por circunstancias históricas. Porque el Proceso en Tucumán carece de titulares y está al servicio de la provincia y su pueblo, plenamente integrado con el gobierno en la consecución de objetivos comunes. En consecuencia la responsabilidad moral de todos los tucumanos es brindar un incondicional apoyo a las nuevas autoridades del Proceso, con la misma generosidad que nos dispensaron a quienes hoy dejamos esta tierra entrañablemente querida” (*La Gaceta*, 05/12/1977).

La sociedad había sido reorganizada y vuelta a su estado natural. La “real” situación estaba definida, con cada quién es su lugar, “la pacificación definitiva” se había alcanzado. El pasado se integraba armónicamente con presente, por medio de la recreación de los “valores morales y espirituales del pasado”. La provincia volvía a ser el “Jardín de la República” y la “Cuna de la Independencia”. El mito se había realizado; solo quedaba advertir a quines osaran cuestionarlo: “Vaya una reflexión final sobre algunas voces aisladas prematuras y tendenciosamente enjuiciadoras que pretenden hacer escuchar, las rechazamos enérgicamente, por las intenciones que alientan quienes pretenden provocar desasosiegos, desencuentros y frustraciones que, en última instancia, no hacen sino facilitar la acción de la subversión marxista. Advertimos severa y firmemente a quienes aún persisten en tales objetivos, que el Ejército de Tucumán sigue velando sus armas –caliente aún la sangre y fresco el recuerdo de sus héroes muertos- y que lo hace hoy nuevamente

acompañado por un pueblo que, habiendo recuperado la esperanza, trabaja en paz” (*La Gaceta*, 05/12/77).

Hasta aquí presentamos lo que nos parece fue la forma en la que el discurso de Bussi se organizó y operó. En el punto siguiente se tratarán de encontrar las similitudes y diferencias más salientes con el discurso del Proceso de Reorganización Nacional, del cual el discurso de Bussi formaba parte.

Similitudes y diferencias entre el

“Proceso de Reorganización Nacional” y el “Proceso de Reorganización Provincial”

Se planteó anteriormente, que el mito que trató de construir el Proceso, se “realizaba” en dos líneas discursivas fundamentales, las que a su vez eran solidarias y complementarias entre sí: la “lucha contra la subversión” y la reforma económica. En el caso del gobierno de Bussi en Tucumán, la “lucha contra la subversión” cobró un carácter más intenso y virulento, debido a que, si bien en el momento de asumir la guerrilla había sido “aniquilada”, ésta había tenido anteriormente en la provincia una presencia más fuerte que en el resto del país. Esto hacía que Tucumán se convirtiera para la dictadura en una excepción dentro de la excepción y que fuera tratada de un modo “especial”, comparada con el resto de las provincias.

Por otro lado, la línea de la reforma económica -central en el Proceso de Reorganización Nacional”-, en Tucumán fue relativizada, lo que no significó que estuviera ausente en su discurso. De hecho, el gobierno de Tucumán de esa época, lejos de seguir la premisa liberal de la retracción del Estado en materia económica, llegó a niveles superlativos de intervención. No solo por lo que económicamente significaba la obra pública, sino además en el apoyo a la actividad azucarera, sostén principal de la economía de Tucumán, por medio de subsidios a la producción y de la implementación de aranceles a la importación de productos relacionados con el rubro.

La centralidad discursiva que las reformas económicas tenían en el ámbito nacional, era ocupada por “el discurso de la obra pública” y el de la capacidad realizativa en Tucumán, lo que no quiere decir que estos elementos estaban ausentes en el discurso del Proceso Nacional, pues, de hecho, Tucumán representaba el ejemplo, el espejo en el que la Nación toda debía mirarse.

Capítulo 3

El alfonsinismo y la definición de la democracia

En el presente capítulo se intenta dar cuenta de la trama discursiva de (¿y contra?)la que surgió el bussismo como fuerza política, sin la cual no se entenderían los efectos que este fenómeno político produjo. Se trata de demostrar que esa trama estuvo organizada por el significativo *democracia*, opuesto a *dictadura*, que fue encarnado por la figura de Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical y posteriormente primer presidente de la Argentina post dictadura.

Para ello se remonta el estudio al periodo en que se dieron los primeros indicios de apertura de la dictadura. En el se analizan los discursos producidos por Alfonsín y por el resto de las elites políticas. Se trata además de demostrar que esos momentos fueron importantes para la constitución de la hegemonía que posteriormente reemplazó a la que la dictadura había impuesto. Después se analiza el periodo que se abrió con la guerra de Malvinas y la posterior derrota del ejército argentino. Nuevamente aquí se estudia la producción discursiva de Alfonsín en comparación con los demás políticos.

La derrota en Malvinas sumió a la dictadura en su crisis terminal y tiró por tierra todo cálculo previo a cerca del desenlace que tendría el régimen autoritario. La movilización, rasgo dominante de este periodo, estuvo acompañada por la dispersión en el campo antirégimen que acababa de constituirse. La superación de esta dispersión se dio cuando se instaló en el centro de la escena política argentina la denuncia de la izquierda peronista de que un sector del sindicalismo estaba iniciando acuerdos con los militares.

Se sostiene a continuación que Alfonsín pudo capitalizar los efectos políticos de la denuncia del pacto, a pesar de no haber sido quien la formuló en primera instancia. En este

punto, se intenta dar cuenta de porque la denuncia del pacto pudo ser la instancia que permitió la constitución de una nueva hegemonía y porque fue Alfonsín quién la encarnó.

Seguidamente se analizan los discursos de la campaña electoral y como el significante democracia articuló en su cadena y dio nuevos significados a otros que anteriormente no se les relacionaba.

En el apartado siguiente se estudian los primeros años del gobierno de Alfonsín, la política económica y las consecuencias de haber ubicado como su exterior constitutivo a sindicalistas y militares. En este punto también se estudian los primeros síntomas de la dificultad que tuvo el gobierno para seguir articulando en la cadena organizada por la democracia a algunos significados que producían sus acciones.

Finalmente se aborda el periodo en el que se dieron las sublevaciones militares de Semana Santa, el fracaso del intento por introducir reformas en la organización sindical y las consecuencias de las mismas. Este periodo es considerado particularmente importante porque en él surgió el bussismo.

El nacimiento del discurso democrático:
antecedentes de la construcción de una hegemonía

Los primeros indicios de apertura política
La Multipartidaria
El alfonsinismo y la democracia

En este apartando, antes que nada se caracteriza el escenario en el que tuvieron lugar los primeros intentos de Alfonsín de instalar al significativo democracia como punto nodal de la política argentina. En diciembre de 1979, meses antes de que apareciera *La cuestión argentina*, obra en la que Alfonsín propone un acuerdo político que tuviera como centro las reglas básicas del régimen democrático, el entonces presidente de facto Jorge R. Videla, emitió un documento que denominó “Bases Políticas”. Este documento sirvió de referencia del dialogo político convocado en 1980. A este diálogo fueron convocadas personalidades políticas, siendo excluidas ex profeso las estructuras partidarias y “los corruptos y subversivos”. El objetivo explicitado de la convocatoria era “la indispensable convergencia que materialice la unión de todos los argentinos”, para después pensar en la “posible reimplantación de las actividades políticas”. El diálogo debía centrarse en la “consideración de las cuestiones estructurales, ya que por su importancia y trascendencia requieren un debate sólido”. Dentro de estas cuestiones estructurales, la economía era considerada central.

A pesar de lo restringida, la convocatoria fue bien recibida por las elites políticas. El 6 de mayo de 1980, Ricardo Balbín, la figura más destacada del partido radical, concurrió a una entrevista con el entonces ministro del Interior, el General Albano Argüendeguy. El 19 de agosto lo hicieron los dirigentes del Partido Justicialista, Raúl Matera, Delia Parodi, Tecera del Franco, Raúl Iturbe y Osella Muñoz.

En este periodo la iniciativa estaba monopolizada por el gobierno, lo cual, como lo señala Ernesto López (1994), daba a entender que los dirigentes políticos se encontraban en una posición de sumisión y en alguna medida legitimadora del régimen.

En ese mismo año, Alfonsín -quien no participaba de las conversaciones con los militares- escribió un libro que al denominó *La cuestión argentina* (1980). Esta obra, parte de un diagnóstico de la situación anterior al golpe muy similar a la que la dictadura había hecho: la argentina era un “cuerpo políticamente enfermo” que se sumía un en “círculo de imposibilidades”. La situación límite llevaba a que: “el golpe no sólo era previsible, sino que también contaba con expectativa favorable de variados sectores de la sociedad que veían con alivio la proximidad de lo inevitable, el fin de un gobierno que, nacido como esperanza democrática, terminaba su gestión en medio de una realidad desquiciante” (: 36). Sin embargo, no tuvo que pasar demasiado tiempo para que estas expectativas fueran defraudadas por un gobierno militar que “trastocó un argumento cierto en una excusa para restaurar el proyecto minoritario que, aunque tal vez no fuera el suyo, al poco andar se confundiría con él” (: 39).

Para Alfonsín, este corto período (mediados de los '70s – principio de los '80s) no hacía más que resumir la historia política del país en el siglo XX; historia que se caracterizaba por los constantes desencuentros entre las “mayorías”, hecho que aprovechaban y capitalizaban las “minorías”, de las cuales políticos y militares no eran otra cosa que sus instrumentos. El problema central era entonces que el nosotros (las mayorías) no lograba constituirse en un proyecto político (para usar terminología marxista, era un nosotros en sí), que les permitiera enfrentar al otro (las minorías) que, si bien era numéricamente infinitamente inferior, había logrado imponerse gracias a las debilidades políticas de las mayorías y a que tenían en claro cuales eran sus intereses (el otro había logrado constituirse en un para sí).

Si bien en esta obra no se encuentran definiciones precisas de cuales y quienes eran las mayorías y las minorías, Alfonsín avanza un poco en la definición de los segundos: las minorías, “más que por sus apellidos se definen por lo que hacen y por lo que están dispuestos a hacer. En lo económico, aprovechar la oportunidad especulativa antes de pensar en la producción. En lo político, excluir a los que molestan y monopolizar el poder, utilizando al Estado para crear las oportunidades especulativas” (: 120)

Las instituciones políticas y militares no eran subsumidas per sé en uno u otro campo, como ya se señaló, eran más que nada instrumentos que podían servir a unos u otros, por eso el enfrentamiento primordial no se presentaba entre militares y civiles, sino como una nueva edición de "la vieja lucha de los argentinos, entre quienes quieren terminar con el privilegio y la injusticia y los que defienden un sistema que gozan como verdaderos beneficiarios y que a través del tiempo se han dado maña para enfrentarnos sin sentido" (: 38-39).

De este diagnóstico se desprendía su propuesta programática inmediata, que consistía en avanzar sobre acuerdos mínimos -pero fundamentales-, que permitieran romper con el círculo vicioso de las imposibilidades. Estos acuerdos debían tener a la recuperación de la democracia y su posterior mantenimiento, como su eje articulador excluyente. Objetivo alcanzable como nunca antes, pues las propias minorías "en el ejercicio sin límites de su poder excluyente, ha ido plasmando la fuerza que la va a derrotar. La situación se ha invertido. Ellos nos dan ahora el argumento definitivo para el encuentro de las mayorías democráticas. A nosotros nos toca darle forma y contenido" (: 188).

El Compromiso Nacional de los Fundamentos -tal como dio a llamar a su propuesta-, debía permitir la expresión y armonización de las fuerzas sociales, poniendo por arriba de todas las diferencias un núcleo de normas básicas e intocables. Este conjunto de normas no eran otra cosa que las reglas básicas de la democracia política, pues, en palabras de Alfonsín, "es a través de la democracia que podemos resolver las cuestiones nacionales. No hay otro método" (: 201).

El énfasis puesto en las normas y reglas tenía el propósito de acotar a su mínima expresión las cuestiones ideológicas inconmensurables que podían conducir a discusiones estériles y a la dispersión. El acuerdo procedimental acompañado por reivindicaciones mínimas, en cambio, constituiría un paraguas en el cual todas las fuerzas políticas se podían cobijar, sin que ello implicara negar "la diversidad y las diferencias" (: 193) entre ellas. Se trataba de instituir un referente común, no sustantivo, transversal a todas las fuerzas sociales y políticas, que sirviera además de principio articulador ante la dispersión.

En pocas palabras: una vez identificadas las minorías como el otro que jugaba el papel estructural de exterior constitutivo, las fuerzas políticas y sociales democráticas podían dar un salto cualitativo que las hiciera superar el estadio de ser una mayoría en sí y pasaran a constituir una identidad positiva, manifiesta en el respeto, ante todas las circunstancias posibles, de las reglas del juego.

Lo importante de esto es que Alfonsín introducía en la política argentina, aunque todavía a nivel de propuesta, nuevas líneas demarcatorias. Las anteriores habían sido: desarrollo vs. subdesarrollo (en la década de los '60s.), liberación vs. dependencia (en los '70s.), orden vs. caos (a mediados de los '70s.), la cuales servían a su vez para identificar a proyectos y actores políticos concretos.

Pero lo novedoso no solo estaba dado por ello, sino además, porque era la primera vez que se proponía que fuera un sistema de reglas las que organizaran la política a modo de núcleo intocable. Anteriormente, y a pesar de los reiterados golpes de Estado, el régimen político solo había sido considerado como un medio, subordinado a objetivos últimos. Se entendía por ejemplo (y a esto nos referimos con subordinación), que el régimen democrático sería una consecuencia (ni siquiera la más importante) del desarrollo, o bien que la democracia "real" era impensable si no se conseguía primero la independencia con respecto al imperialismo.⁵⁸

En la propuesta alfonsinista, los términos eran invertidos: la democracia política -entendida hasta ese momento como método- pasaba a ser la *condición* previa indispensable para alcanzar, primero el gobierno de las mayorías, después y como consecuencia de ello, el desarrollo y la independencia.⁵⁹

Tal como veremos más adelante, cabe aclarar que, aunque la propuesta de Alfonsín implicaba una revaloración de la democracia en su aspecto procedimental, la definición de

⁵⁸ Después, cuando surge el bussismo como fuerza política, la democracia aparecerá en su argumentación como una consecuencia del orden que consiguió la dictadura.

⁵⁹ Tal como veremos más adelante, sobre todo en donde analizaremos la campaña electoral del alfonsinismo, esta lógica no solo va a permanecer, sino que será el eje de su propuesta.

la misma no se agotaba ahí. Este es un punto a destacar, pues en el debate político argentino, se hacía una distinción entre democracia en formal y sustantiva o real, estableciendo un orden jerárquico en la que la primera siempre quedaba subordinada a la segunda.

En marzo de 1981 se produjo el recambio de presidente, el lugar de Videla lo pasó a ocupar el General Viola, quién llegó con una actitud un poco más aperturista. El 17 de junio de ese año, la conducción de la UCR convocó a partidos, sectores sociales, militares e intelectuales, a elaborar una estrategia conjunta que permitiese restaurar la democracia. Este fue el primer paso para lo que después sería la Multipartidaria. Un día antes, la Conferencia Episcopal había hecho un llamado a la “reconciliación nacional”. El 1 de julio, la junta militar hizo entrega a Viola de las pautas para la continuación del diálogo político, pero con la importante diferencia de que esta vez eran consideradas las estructuras de los partidos, representados por las autoridades que tenían antes del golpe.

El 2 de julio se reunieron los dirigentes de la UCR, el PJ, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Intransigente (PI), de la cual surgió más adelante la Multipartidaria, reunida por primera vez el 28 de julio.⁶⁰

Estos acontecimientos dieron lugar a dos lecturas: 1) que los hechos indicaban que la constitución de la Multipartidaria favorecería una salida democrática (esta era la lectura que hacía la propia Multipartidaria); y 2) que en realidad, dado el grado de subordinación de los políticos, lo que se estaba gestando en realidad era una salida deseable para los militares. Esta segunda lectura, se veía reforzada por la “Convocatoria al País” lanzada por la Multipartidaria, en la que llamaba a superar las antinomias del pasado, elaborar un plan nacional, preparar un plan político para el retorno de la democracia, restablecer el Estado de Derecho y elaborar un plan político de emergencia, evitando -con la oposición del PI y un sector de la DC- pronunciarse sobre el tema de la violación de los Derechos Humanos y los

⁶⁰ Puestas en ese orden cronológico, es difícil no dar crédito a la sospecha de López (1994) de que “parece evidente que la acción del gobierno, la de algunos partidos y la de la iglesia se hallaba previamente concertada”. (38)

desaparecidos. Este conjunto de acciones debía estar a cargo de la Multipartidaria, pero al mismo tiempo debía contar con el acuerdo de los militares.

Viola inició una ronda de diálogo con los dirigentes de la UCR, el 25 de agosto de 1981, que fue interrumpida por su repentina deposición el 2 de diciembre, día en que asumió la presidencia el General Leopoldo Galtieri.

Unos meses antes de este hecho y en ocasión del simposio “La Argentina, problemas actuales y perspectivas futuras”, realizado en Alemania, Raúl Alfonsín, presentó un trabajo que tituló: “Algunas reflexiones sobre cuestiones que el neofascismo plantea a los partidos políticos para la definición de su rol bajo un régimen militar en Latinoamérica”.

En esta presentación se puede advertir como Alfonsín retomaba parte de la propuesta esbozada en *La cuestión argentina* y delineaba mas claramente las que serían las principales referencias de su discurso político de ahí en más: la de constituirse como una crítica sistemática a toda una forma de entender la política representada en términos genéricos por lo que en ese momento denominó como neofascismo (que podía tener diversas expresiones en términos de régimen político); reivindicar la necesidad política del cambio de régimen; participar de la lucha por darle nuevos sentidos a la democracia y ofrecer una lectura histórica diferente.⁶¹ Esta intervención le permitió además situarse más claramente como lo nuevo, sin que ello lo llevara a desconocer referentes históricos que lo ubicaran como heredero de toda una tradición que iba desde la Revolución Francesa hasta lo que el mismo Alfonsín denominó la “democracia moderna”. Toda esta tradición se definía en oposición, primero al absolutismo, después al fascismo y en el momento de la presentación del trabajo mencionado, al neofascismo.

⁶¹ Un cambio importante que será abordado más adelante, con respecto a *La cuestión argentina*, es que la democracia no solo era definida a partir de un conjunto de reglas.

Este intento de sintetizar la historia política en dos grandes tradiciones, se tratará de aquí en más de demostrar, se va a poner en juego en todo el discurso político de Alfonsín, tanto en la campaña electoral, como durante su gobierno.⁶²

Pero el esfuerzo sintético no se agotaba ahí, en tanto observaba las distintas falencias y debilidades de sus antecesores y trataba de generar las condiciones que pudieran convertirla en una instancia superadora que evitara las formaciones reactivas que había suscitado las etapas anteriores. Se trataba de rescatar al Estado Liberal de Derecho, que había dejado atrás al Estado absolutista, instaurando la “regulación y el control de la ley” (Alfonsín, 1981: 3) emanada de la voluntad general, la separación de los poderes, la legalidad en la administración, las garantías jurídico formales y el respeto a las libertades y derechos de los hombres. Pero este rescate debía contemplar también la superación de sus insuficiencias que se manifestaban especialmente en que la voluntad general más que una expresión del pueblo, lo era de la alta burguesía, por lo que “la ley se concibió más como la expresión de la soberanía nacional que como manifestación de la soberanía popular, que corresponde a cada uno de los ciudadanos y no a la Nación en su conjunto, entendida como un todo” (: 3).

Se suponía además que la superación de esas insuficiencias funcionaría como un antídoto ante las reacciones que propiciaron el retorno al absolutismo y cuya expresión histórica la constituyó el fascismo, que dirigía su crítica al individualismo y al abstencionismo que, en su lectura, propiciaba el Estado Liberal. El fascismo, cuya intención detrás de la cinica crítica al capitalismo, era la de eliminar al liberalismo y la vigencia de los derechos políticos y ciudadanos, lo que buscaba en realidad era reinstalar las formas más duras del capitalismo. Es decir, significaba un retroceso absoluto.

En esta secuencia histórica el alfonsinismo pretende definirse como una síntesis entre el Estado Liberal y el Estado Social de Derecho, superando al individualismo del primero y las “peligrosas tendencias” a centralizar el poder en el ejecutivo del segundo. Definición que se constituye como crítica a la otra tradición histórica, que fueron reacciones a la

⁶² Adelantamos que si bien en el trabajo mencionado no hay alusiones directas, los representantes del fascismo en el discurso de Alfonsín eran las corporaciones militar y sindical, y los representantes del neofascismo la “Patria Financiera” y todos aquellos que defendieran una concepción elitista de la democracia.

primera: el fascismo como reacción al Estado Liberal y el neofascismo, como reacción al Estado Social de Derecho. En el primero de los casos negando absolutamente a la democracia, en el segundo reduciéndola, degradándola y/o elitizándola.

Para Alfonsín, las fuerzas de las minorías se organizaban es ese entonces en el neofascismo, que “se orienta, en realidad, a defender a todo trance las formas más retrógradas del capitalismo, pero ya no lo hace en defensa de un totalitarismo que no proclama, sino amparándose en principios democráticos que no comparte y a los que no trepita en lesionar, a los que exhibe como seriamente amenazados, por cualquier concepción de avance social” (Alfonsín, 1981: 6).

Pero esta redefinición del otro, presentaba un nuevo problema: si el neofascismo no renegaba necesariamente de las formas democráticas, la capacidad de las reglas para demarcar el campo del nosotros y los otros no sería suficiente, por lo que la democracia requería de otros elementos que la hicieran diferente a los demás regímenes. Es decir, la cadena que la democracia articulaba, necesitaba ser extendida por medio de la incorporación de nuevos atributos. Se puede ver como se expresa esto en un pasaje en el que Alfonsín se refiere al accionar del neofascismo: “El propósito de destruir en el pueblo las convicciones democráticas, o la confianza en reglas que se sabotean para hacerlas fracasar y fomentar la disolución de los principios morales que nutren la democracia y la destrucción de los medios prácticos que la sostienen. Para ello alentó el egoísmo y debilitó la vocación de solidaridad, de fraternidad entre los hombres, valor ético y necesidad humana, sin los cuales la democracia no puede existir, y se atacó a las distintas formas de organización social a través de las cuales la democracia se expresa y vive, a los partidos políticos, a las asociaciones gremiales o voluntarias, a las cooperativas” (Alfonsín, 1981: 8).

La democracia pasaba a ser⁶³ algo más que un conjunto de reglas. Precisaba además de convicciones, principios morales y medios prácticos, francamente opuestos a los de su

⁶³ No estamos afirmando que en el texto de 1980 que analizamos no lo fuera, es probable que estos atributos estuvieran supuestos, la diferencia fundamental es que aquí fueron explicitados.

amenaza, el neofascismo que, en la versión que Alfonsín, se parecía bastante al neoliberalismo.

Si el acuerdo básico sobre la metodología de *La cuestión Argentina* dividía el campo del nosotros y los otros entre quienes eran partidarios de respetar las reglas democráticas y quienes no lo eran; la agregación de nuevos elementos articulados por la democracia, trastocaba las identidades del nosotros y los otros. Ubicaba así en el campo del otro denominado neofascismo, a quienes aceptaban las reglas básicas de la democracia, pero no sus principios. A quienes intentaban por todos los medios circunscribirla poniendo su control y poder en manos de una elite: “El neofascismo se tomará, en cambio, de lo que ha dado en llamarse la teoría elitista de la democracia, que (...) constriñe la democracia, otorgándole un carácter estático que la convierte en poco más que una metodología para elegir gobiernos” (Alfonsín, 1981: 10).⁶⁴

Integrados en su lectura histórica, los partidarios de la democracia elitista (los neofascistas) eran los representantes del continuismo y de las minorías en la vieja lucha de los argentinos.

La democracia, en esta nueva definición que propone el alfonsinismo, era el punto de articulación de la casi totalidad de los quehaceres de la política. A ella se articulaban la economía, las políticas de reforma del Estado y la política internacional, entre otras.

Los regímenes políticos tenían en esta lectura modelos económicos que, si bien no les eran propios, si les resultaban funcionales. El neofascismo, por ejemplo, estaba fuertemente asociado con el monetarismo y la economía de mercado; asimismo propiciaba reformas del Estado que tendían a achicarlo y debilitarlo y, en el terreno internacional, buscaban por todos los medios alinearse con las potencias capitalistas.⁶⁵ A la democracia no-limitada o

⁶⁴ Schumpeter es para Alfonsín uno de los representantes más emblemáticos de esta forma de entender la democracia (Alfonsín, 1981: 10).

⁶⁵ Encontramos numerosos pasajes de “Algunas reflexiones”, en los que se hace esta relación entre el neofascismo y la economía, las formas del Estado y la política internacional, las siguientes citas ilustran esta relación. Referidas a la economía, “Se vuelve a la proclamación de los principios capitalistas más crudos y se afirman concepciones monetaristas (...). Como dice Samuelson, no se trata de una economía de mercado, sino

moderna no se asociaban -por lo menos hasta esta instancia de desarrollo del pensamiento alfonsinista- modelos económicos o de Estado determinados, pero en tanto se constituyó como una crítica al neofascismo, podemos inferir que al menos eran distintos a los a éste se le atribuían.

Independientemente de que esta relación se ha correspondido con bastante frecuencia en la historia política argentina de los últimos años, en tanto quienes defendieron políticas económicas monetaristas y de libre mercado no solo alentaron los golpes de Estado, sino que en muchos casos integraron los equipos económicos de los gobiernos militares (Martínez de Hoz, por ejemplo), cabe preguntar si en la lógica que sostiene la relación propuesta por Alfonsín, no se les están imputando ciertos atributos al campo democrático, que no necesariamente le pertenecen. Es decir si no está operando el supuesto de que los demócratas necesariamente tienen ciertas características fijas y estables, en relación a la economía, o bien si Alfonsín sabía que no había una relación necesaria de pertenencia entre régimen y política económica, que la democracia no está a priori definida, pero que, en la medida en que se participa de la lucha por su definición, las características mencionadas podían pasar a ser constitutivas de la definición de democracia, introduciendo con ello nuevas pautas de demarcación entre un campo y otro.⁶⁶

La pertinencia de esta nueva división respondía probablemente a que Alfonsín ya avizoraba un cambio de régimen, por lo que consideraba que la lucha política no se centraba en ese punto, sino que se desplazaba a la definición de cuales serían las características específicas del nuevo régimen. En objetivo central apuntaba entonces a evitar dos desenlaces posibles: que el régimen instrumentara su perpetuación por medio de la creación de un partido militar, o que se pase del autoritarismo a lo que entonces se denominaba democracia restringida.⁶⁷

de un 'fascismo de mercado'." (Alfonsín, 1981: 13); en relación al Estado, "El ideal -del neofascismo- es Poder Ejecutivo fuerte y estado débil, subsidiario del privilegio" (: 10) y con respecto a la política internacional, "El neofascismo pretende ir más lejos aún, promoviendo el neocolonialismo" (: 6).

⁶⁶ El gobierno de Menem, entre otros, demuestra categóricamente que las políticas económicas neoliberales pueden ser aplicadas en regímenes democráticos.

⁶⁷ La primera de las posibilidades ocupó un lugar importante en el debate político de la época, sobre todo a partir del tibio intento del Almirante Eduardo Massera, integrante de la primera Junta, de fundar un partido político en alianza con ciertos sectores del peronismo.

Esta caracterización y el conjunto de actividades que se habían realizado en pro de la apertura democrática, se vieron eclipsadas por la actitud que asumió el nuevo presidente Galtieri, quién en su discurso de asunción aludió muy poco a la política interna y casi nada a la apertura. En los hechos -se comprobó más tarde-, el diálogo político había sido interrumpido.

Ante esa situación, la Multipartidaria tomó una actitud cauta. El 16 de diciembre hizo público un documento titulado “Antes que sea tarde”, en el que se pronunciaba a favor de la vigencia de la Constitución Nacional, solicitando el levantamiento de la veda política, la vigencia de los estatutos partidarios y planteó la necesidad de convocar a elecciones. El 20 de enero de 1982 dio a conocer un nuevo documento titulado “La paz tiene un precio, es la Constitución Nacional”, reiterando los puntos de documento anterior y mostrando la decisión “indeclinable de movilizar las energías del pueblo argentino a fin de ratificar los objetivos señalados en este documento”.

Por un lado estas declaraciones insinuaban una cierta disposición a defender la apertura iniciada anteriormente, pero por otro, anticipaban lo que sería una posición dominante al interior de la Multipartidaria: su voluntad de no investigar las violaciones de los derechos humanos. A eso se refería con el “precio” que se debía pagar a “cambio” de la Constitución Nacional. Es decir, el precio de la vigencia constitucional era el de su propia violación y desconocimiento.

Esto sumió a la Multipartidaria en una división (que no llegó a la fractura) entre duros y moderados. Los primeros eran proclives a acentuar las críticas a la dictadura, alentar la movilización social y abrir la Multipartidaria para convertirla en mulsectorial (en esta ala se alineaban el PI, sectores del PJ y la DC).⁶⁸ Los moderados en cambio estaban dispuestos a atenuar la crítica, controlar la movilización y mantener a la multipartidaria cerrada. Los moderados lograron mantener el control, a cambio de presionar un poco más al gobierno. Así se dispuso organizar una marcha en la ciudad de Paraná para el 19 de marzo de 1982.

⁶⁸ Alfonsín no participaba directamente en la Multipartidaria, pero se puede decir que sus posiciones estaban mucho más cerca del ala dura, que la que sostenía su propio partido, la UCR representado por el babinismo.

El 24 de marzo el gobierno dio a conocer un mensaje producido por la junta militar, en la que se expresaba la necesidad de retornar al diálogo para diseñar una transición a la democracia en forma gradual. Cabe recordar que para ese entonces la dictadura ya había dado sobradas muestras de su incapacidad para estabilizar la economía del país, pues los índices inflacionarios, no bajaban de los dos dígitos anuales y la industria nacional se encontraba en franca recesión. Por otro lado los reclamos por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se hacían cada vez más frecuentes y masivos (sobre todo en el plano internacional) y los políticos y la gente que habían prestado su apoyo incondicional al régimen, empezaban a retirarlo.

El descontento era bastante generalizado y se expresó con mayor fuerza en la movilización convocada por las CGTs.⁶⁹, el 30 de marzo de 1982, bajo la consigna de “decir basta a este Proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indigencia y la desesperación”.⁷⁰ A pesar de que la convocatoria tenía un carácter sectorial, la movilización fue masiva, ya que fue tomada por diversos sectores que querían expresar su descontento para con el régimen. La importancia capital de esta marcha estaba dada por haber sido la primer movilización masiva contra el régimen que puso en evidencia no solo el descontento generalizado contra la dictadura, sino también la menor eficacia que tenía para esa época el temor a la represión.

Todo este descontento pasó a un segundo plano pocos días después, cuando, el 10 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en Malvinas y recuperaron por un corto periodo las islas del dominio británico.

La reacción de la casi totalidad de las fuerzas políticas y sociales fue de apoyo a la medida; algunos incondicionalmente, otros con algunas reservas. La dictadura entonces intentó con éxito -aunque por poco tiempo-, articular un discurso que le permitió reordenar el espacio interno a partir de la identificación de un nuevo enemigo: el imperialismo inglés.

⁶⁹ En ese entonces existían dos Confederación General del trabajo.

⁷⁰ La Multipartidaria no convocó ni concurrió a la movilización.

La Multipartidaria expresó su total apoyo al gobierno. Contin en nombre de la UCR, Bittel del PJ, García del MID y Cerro de la DC, viajaron junto a Videla para poner en funciones al General Menéndez, nuevo gobernador de las islas. A su regreso señalaron todos que se había abierto una nueva etapa en la relación civil-militar (*Clarín*, 07/04/1982). Días después otros dirigentes de los partidos mencionados salieron al exterior a buscar apoyos para la posición argentina en el conflicto. Entre ellos se encontraban Perete, León y Mathov por la UCR, Saadi, Cafiero y Luder por el PJ y Cerro por la DC.

No obstante, ante tanta unanimidad, había una voz que expresaba su discordancia. Alfonsín, que por entonces lideraba una corriente minoritaria de la UCR, criticó a Carlos Contin, quien había expresado que “a las Fuerzas armadas, vencedoras o con un revés las hemos de recibir en triunfo porque han recuperado el prestigio del país, nosotros hemos de avalar lo que hagan las Fuerzas Armadas ya que lo importante es que hoy el país está totalmente unido” (*Clarín*, 29/05/1982).

Para Alfonsín, el reclamo por la apertura y la presión por el cambio de régimen no debían haber sido abandonados y el episodio de Malvinas “no debió sufrir el menoscabo de ser utilizado para justificar su complacencia con el régimen” (*Clarín*, 30/05/1982).

Es más, unos días después, Alfonsín publicó un boletín que tituló “Una propuesta para la transición a la democracia” en el que puso claramente de manifiesto cual era su preocupación principal: el cambio de régimen político.⁷¹ Esta posición pudo ser entendida como una declaración de principios democráticos, pero también pudo haber obedecido a un cálculo político básico: primero, reivindicar la recuperación de Malvinas le permitía no enfrentarse con el sentimiento popular que desencadenó este hecho y, segundo, presionar por la reinstauración de la democracia, lo ubicaba en una situación diferente y ventajosa, en el caso en que el ejército argentino fuera derrotado, con relación a los demás políticos que apoyaron acriticamente a los militares. Esto es lo que finalmente pasó.

⁷¹ En el boletín mencionado es claro que la preocupación de Alfonsín es el cambio de régimen, sin embargo tuvo el cuidado de reivindicar la reconquista de las islas, que contaba con un masivo apoyo popular. En ese sentido destacamos el siguiente pasaje “El acontecimiento dramático que vivimos nos solidariza con nuestros oficiales y soldados en el esfuerzo heroico que realizan contra el imperialismo y compromete nuestro agradecimiento para siempre” (boletín de Renovación y Cambio de junio de 1982).

Unos días después, el 10 de junio de 1983, las Fuerzas Armadas Argentinas firmaron la rendición ante las británicas y se abrió la que sería la crisis terminal de la dictadura. Este periodo será analizado en el punto siguiente, pero antes de pasar al mismo, se presenta en forma sucinta, cual fue el camino seguido por el alfonsinismo en la etapa analizada, y cuales sus diferencias fundamentales con el resto de las elites políticas.

En el año 1980, mientras los representantes de los partidos mayoritarios concurrían a dialogar con el gobierno con una agenda totalmente pautada y sin exigir nada a cambio, Alfonsín, que en ese entonces lideraba una línea interna minoritaria de la UCR, proponía acuerdos mínimos entre las fuerzas políticas para instituir a las reglas básicas de la democracia como un núcleo inviolable. Con esta propuesta, pretendía además establecer un criterio novedoso para la política argentina de demarcación que permitiera distinguir el nosotros de los otros. En esta distinción las mayorías eran parte del nosotros y las minorías del otro. El Ejército y los partidos según respetaran o no las reglas se ubicarían en uno u otro campo.

Un año después, mientras la Multipartidaria ya exigía señales a favor a la apertura y el eventual cambio de régimen, Alfonsín avanzaba en la definición de la democracia. En esa instancia, y a diferencia del momento anterior, la democracia debía contener ciertos atributos que fueran más allá del formalismo y permitieran distinguir entre quienes la aceptan con conveniencia, para mantener las cosas inalteradas y quienes asumían sus principios. Los primeros eran definidos como neofascistas y su objetivo supuestamente apuntaba a constreñir la democracia para que se mantengan en el poder las minorías. Los neofascistas pasaron a ser el otro. El nosotros, constituido por las mayorías, debía luchar para extender los alcances de la democracia. Esto llevaba a redefinir las fronteras que las reglas habían establecido.

Con los acontecimientos de Malvinas, nuevamente se establecieron diferencias entre Alfonsín y el resto de las elites políticas de los partidos mayoritarios. Estos últimos se alinearon acriticamente al gobierno; Alfonsín en cambio, aprovechó la instancia para

plantear nuevamente la necesidad del cambio de régimen, sin por ello dejar de reivindicar la soberanía argentina de las islas.

Estas diferencias fueron parte del capital político que contribuyó a que se configuraran imágenes y espacios que se pusieron en juego y fueron determinantes en los periodos siguientes.

La derrota militar en Malvinas:

Dispersión y constitución de una nueva hegemonía

La guerra de Malvinas
La derrota y la crisis terminal de la dictadura
La dispersión del campo antirégimen
El pacto sindical militar
El alfonsinismo y la constitución de una nueva hegemonía
La campaña electoral

La derrota de Malvinas incrementó notablemente el malestar para con la dictadura y decidió en su contra a aquellos sectores que todavía guardaban alguna esperanza en que ésta pudiera mejorar su desempeño. Esto llevó a que las fuerzas sociales y políticas potenciaron su capacidad movilizadora.

La crisis del gobierno militar se precipitó hasta llegar a un estado terminal, fuera de todo cálculo o especulación previa. La división llegó incluso a las propias Fuerzas Armadas, poniéndose de manifiesto en el recambio obligado de presidente del General Galtieri por el General (R) Bignone, pues este último llegó al cargo con el apoyo solitario del Ejército (la Marina y la Fuerza Aérea no participaron de su elección). El nuevo gobierno, pocos días después de asumir, anunció que “esta etapa del Proceso deberá indefectiblemente concluir con la institucionalización del país en los primeros meses de 1984” (*La Nación*, 23/06/1982).

La nueva articulación que se había logrado ante la guerra no hizo más que retrasar y potenciar la fragmentación y las movilizaciones en defensa de intereses particulares que estallaron después. Entre noviembre y diciembre de 1982 se produjeron diversas manifestaciones de vecinos en contra del incremento de impuestos en la provincia de Buenos Aires, los deudores hipotecarios marcharon en la Plaza de Mayo, se manifestaron jubilados, docentes y hubo una innumerable cantidad de paros sindicales.

Por esos días salió a la luz un documento de la CGT Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, convocando a una marcha multisectorial para mediados de diciembre. Surgió también una

organización sindical de la policía de la provincia de Buenos Aires -ORGAPOL-, institución que antes había sido uno de los pilares del aparato represivo del Proceso, con el objetivo de encabezar un conjunto de reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo. El 6 de diciembre se realizaron un paro conjunto de las dos CGTs. con un acatamiento de cerca del 95 %. El 10 de diciembre se iniciaban las Marchas de la Resistencia organizada por las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. El 14 se realizaron protestas en defensa del cine nacional. El 15 pararon los señaleros, sindicato que nuclea a un sector de los trabajadores ferroviarios. El 16 se concretó la marcha "Multipartidaria", que se denominó "Marcha por la Democracia y la Constitución Nacional". Esta movilización convocó a miles de personas y terminó con expresiones de violencia como la rotura de las puertas de la Casa Rosada, sede del gobierno nacional, destrozó de oficinas de gobierno aledañas a Plaza de Mayo, comercios, etc. La represión a estas expresiones cobró un muerto.

Estos hechos llevaron a que las principales fuerzas políticas se dedicaran a encausar, cuando no a frenar las movilizaciones, con el argumento de que había que evitar que la Argentina cayera nuevamente en el círculo vicioso de la violencia política.

Acorralados, con escaso poder y estrechos márgenes para la negociación, un poco antes de la marcha Multipartidaria, los militares llamaron a la concertación, con el objeto de elaborar en forma conjunta un "plan político, económico y social" para aplicar hasta tanto se cumpliera con "la institucionalización completa del país" (*La Nación*, 02/11/1982). Los puntos a concertar eran el tema de los desaparecidos, lo actuado durante la guerra de Malvinas, un plan económico y social que sirviera para evitar cambios bruscos en esos ámbitos, la estabilidad y continuidad de los magistrados por dos años después del cambio de gobierno.

Este intento desesperado de los militares y el rechazo que suscitó por parte de los distintos sectores políticos, produjo un efecto inverso al propuesto: exacerbó y multiplicó el enfrentamiento y los antagonismos, y el Proceso pasó a ser más claramente el enemigo de un nuevo espacio político que, si bien no estaba organizado hegemónicamente, si se

encontraba claramente delimitado por ese exterior. Ese espacio político hasta entonces solo podía ser definido como antirégimen o, más específicamente, anti Proceso.

El sentimiento antidictadura se había extendido incluso a aquellos sectores que en el pasado prestaron un decidido apoyo al régimen. Un claro ejemplo de ello lo dio la derecha liberal que por boca de su máximo líder, Alvaro Alzogaray expresaba, refiriéndose a "las reformas fundamentales prometidas", que el Proceso "ya no está en condiciones ni tiene la autoridad para llevarlas a cabo", alentando la formación de "una fuerza política capaz de llevarlas a la práctica" (*La Nación*, 23/06/1982).

Pero, la extensión de la oposición al régimen, se correspondía con la dispersión existente en el campo que esa oposición configuraba. Los sindicatos no estaban todavía normalizados, luego de la intervención militar a los mismos. Existían aún dos CGTs., la Azopardo y la Brasil (que tomaron sus nombres de las calles en las que se ubicaban sus sedes). La Azopardo con una conducción sospechosa de colaborar con el régimen y la otra con un perfil más combativo.⁷² El panorama en los partidos políticos no era muy diferente: el PJ se encontraba dividido entre los sectores de izquierda agrupados en Intransigencia y Movilización Peronista, más duros para con la dictadura y los sectores más moderados e incluso acusados de colaboracionistas. La UCR, que no había logrado superar la crisis de liderazgo que se produjo con la muerte reciente de Ricardo Balbín (septiembre de 1982), también estaba dividida entre los que tuvieron una actitud más condescendiente contra los más contestatarios. Incluso en los partidos de menor capacidad movilizadora y electoral, como la DC, esta división estaba presente.

Esto indicaba que la dictadura, en tanto enemigo, permitía la constitución de fronteras políticas y la configuración del campo anti régimen, pero por otro lado, contribuía a establecer diferencias a su interior entre duros y blandos, colaboracionistas y opositores. Es decir, su exterioridad no era total.

⁷² Los dirigentes más destacados de la CGT Azopardo eran Jorge Triaca y Raúl Baldasini, quienes se hicieron célebres en el momento del juicio a las juntas por sus declaraciones de que desconocían la existencia de trabajadores desaparecidos. La CGT Brasil, en cambio estaba conducida por Saúl Ubaldini.

Es cierto que las divisiones al interior del campo anti régimen no comenzaban ni terminaban por la actitud que las personas tenían o habían tenido para con la dictadura, pero también es cierto que la mayoría de las divergencias se codificaban frecuentemente en estos términos. Desde las diferencias históricas, hasta las que se producían por los temas más actuales, como las posiciones acerca de los Derechos Humanos, la economía, la forma en que debían ser organizados los sindicatos y las relaciones internacionales, entre otros, se planteaban como pro o anti régimen.

Un principio de resolución de la dispersión y de definición de los liderazgos en el campo anti régimen se dio cuando uno de sus sectores, el alfonsinismo, intervino más decididamente en la lucha política por la definición de la democracia, tomando como base los principios esbozados en *Algunas reflexiones* publicado en 1981. Esto no lo llevó a abandonar la denuncia, sino por el contrario, a multiplicar los espacios de antagonismos con el régimen y a pasar de la pura negatividad de la denuncia y la negación de la experiencia procesista, a complementarlas con propuestas a futuro, estableciendo de paso nuevas líneas de demarcación al interior del espacio anti régimen. Toda crítica al pasado era referida a una promesa a futuro y establecía con ello diferencias del valor de la democracia del alfonsinismo para con el resto.

El cambio de régimen político, de autoritarismo a democracia, estaba ya decidido, la diferencia residía en que el alfonsinismo advirtió, antes que el resto, que la lucha política tenía que orientarse a definir al tipo de democracia a la que se debía llegar. Esto le permitió articular la crítica al pasado con los contenidos de la democracia que venía, pero que no estaba enteramente definida en sus formas. Es decir, el acierto en la caracterización del momento presente, le permitió ubicarse mejor en la batalla de las significaciones a futuro.

Las propuestas de resolución a los temas que la agenda política del momento planteaba, no solo eran presentadas en términos de salida puntual, o de pro o anti régimen autoritario, se relacionaban además a que tipo o calidad de democracia conduciría una u otra resolución. Así por ejemplo, si se imponía una perspectiva que impulsara una férrea economía de mercado, que además se orientara hacia la especulación antes que a la producción, alineada

con las potencias extranjeras, llevaría seguramente a una profundización de la pobreza, por lo que se precisaría de una fuerte concentración del poder en el ejecutivo, con un aparato represor dispuesto a aplastar los reclamos que, tarde o temprano, se habrían de producir. En definitiva, si ese modelo se imponía, el régimen sería el de una democracia limitada, un simple cambio de gobierno en manos de militares a un gobierno en manos de civiles, con el poder en manos de los mismos: las minorías.⁷³

El resto de la dirigencia política y social no hacía estas relaciones programa-régimen y programa- continuidad/cambio. Por ejemplo, los sectores más duros para con la dictadura, la izquierda marxista y peronista, el PI, el movimiento sindical combativo y los Organismos de Derechos Humanos, o realizaban una crítica centrada en uno de los aspectos sin articularlos con otros (los aspectos económicos en unos casos, los Derechos Humanos en otros), o, cuando lo hacían, no lo relacionaban con el régimen a construir, sino con puntos nodales que habían articulado al discurso político en el pasado. La izquierda marxista ortodoxa refería todo el debate a la disyuntiva capitalismo o socialismo, pues la dictadura no había sido más que la expresión más cruda y salvaje del capitalismo, siendo el socialismo la única alternativa verdadera. La izquierda peronista y el PI, en cambio, referían el debate a la disyuntiva liberación o dependencia. En ambos casos, quedaba claro, el régimen seguía siendo solo un medio y por ello un aspecto subordinado de los objetivos “finales”.

La importancia de esto es que la referencia de unos (la izquierda) era el pasado, mientras que las de otros (el alfonsinismo) era el futuro.

Los demás partidos o líneas internas, o tenían una propuesta de continuar con los cambios estructurales que había empezado la dictadura, especialmente en el terreno económico (esta era la posición de la derecha liberal), o no habían tomado posiciones claras con respecto a los grandes temas del momento. A ello había que agregar el desgaste que significaba haber

⁷³ La sucesión lógica resumida aquí es la misma que Alfonsín (1981) expuso en “Algunas reflexiones” y en “Ahora: mi propuesta política” (1983).

participado en la Multipartidaria, en desuso a estas alturas por haberse quedado sin interlocutor legítimo (los militares) y porque la movilización los había sobrepasado.

Con los primeros pasos hacia la reorganización de los partidos, las divisiones empezaron a manifestarse más en su interior y se expresaron en líneas o corrientes internas, muchas de ellas no claramente definidas. El PJ se dividió entre “verticalistas” -quienes reivindicaban la conducción de la viuda de Perón- y “anti verticalistas” que propugnaban por una nueva conducción. Entre izquierda (Intransigencia y Movilización), derecha y moderados. La UCR, por su lado, en los seguidores de Ricardo Balbín expresando el ala más conservadora y tradicional del partido, que no solo había provisto de dirigentes para que se desempeñaran como funcionarios de la dictadura, sino que además se la relacionaba con la tradición golpista; Afirmación Irigoyenista que, liderada por Luis León, tenía un discurso condescendiente con el peronismo y Renovación y Cambio conducida por Raúl Alfonsín. Esta última corriente, hasta antes del derrumbe de la dictadura militar representaba un sector minoritario del partido, pero contaba con un importante capital político por haber planteado con más insistencia que nadie la necesidad del cambio de régimen y por no contar con antecedentes que lo relacionaran con la dictadura ni con ningún golpe de Estado.

En el fragor de la lucha por la conducción del PJ, en un acto realizado por ese partido en el estadio del club Atlanta, el 18 de octubre de 1982, se hizo pública por primera vez la denuncia de la posible existencia de un pacto entre militares y un sector de la conducción sindical. Los hechos fueron más o menos los siguientes: en medio del acto y sin que estuviera programado, el dirigente sindical Lorenzo Miguel tomó la palabra y fustigó violentamente a la línea interna Intransigencia y Movilización. A continuación en declaraciones a la prensa, Vicente Saadi, líder de Intransigencia y Movilización, se refirió a Miguel en los siguientes términos: “algún botón⁷⁴ tomó el micrófono para hablar y nos ha denostado”, alguien “que está en contubernio con la tiranía, como antes lo estuvo López Rega” (*La Nación*, 20/10/1982). Nilda Garré, dirigente de la misma corriente que Saadi dijo por su parte que Miguel había realizado “desde el palco una provocación como en junio de 1973, en Ezeiza”, y que se encontraba preparando “un acuerdo o concertación con

⁷⁴ En el lenguaje popular argentino, botón es sinónimo de policía.

algún sector militar” (Idem). El acto mencionado terminó en enfrentamientos violentos entre los sectores antagónicos del peronismo.

Este conjunto de hechos desencadenó una serie de consecuencias que pasaron a ser definitorias en la política argentina.

En el décimo aniversario del triunfo peronista de 1973, se realizaron dos actos. Uno en el estadio Luna Park, convocado por Lorenzo Miguel, otro en Atlanta en el que se reunió Intransigencia y Movilización. En el acto del Luna Park se repitieron las acusaciones a la izquierda peronista. En el de Atlanta, se insistió en la denuncia del supuesto acuerdo entre militares y algunos sectores del sindicalismo.

A todo esto, el diario *La Nación* del 20 de marzo de 1983, se refirió a expresiones castrenses que anhelaban “un peronismo unido, pues la mayoría de sus corrientes asegura en conjunto una valla formidable contra el peligro de un desarrollo de la izquierda”. Ese mismo día, el diario *Clarín* informaba la existencia de “diferentes reuniones en el I Cuerpo de Ejército, en Palermo, con los gremialistas Lorenzo Miguel y Jorge Triaca”. Esto daba un cierto crédito a la denuncia de la izquierda peronista, sin embargo, lo que la puso en el centro del debate político, fueron las intervenciones de las propias personas supuestamente involucradas en el acuerdo.

Por un lado, Miguel expresó a la prensa que jamás estuvo intentando un acercamiento y mucho menos un acuerdo con los militares. Esta negativa fue corroborada por el entonces ministro del Interior, el 12 de abril (*Clarín*, 12/04/1983). Las autoridades del PJ, por su parte intervinieron en este sentido.

Lo curioso es que a esas alturas y con el pacto instalado en el centro del debate político, nada se sabía acerca de los supuestos objetivos del mismo. Esto dio lugar a que se especulara sobre su contenido y, obviamente, estas especulaciones giraban en torno a los temas e intereses que más preocupaban a los sectores involucrados. Por el sector militar se apostaba a garantizar que el próximo gobierno, que se suponía sería peronista, echara un

manto de olvido sobre lo actuado en la denominada “guerra sucia”, que el presupuesto destinado a gastos militares no sufriera fuertes disminuciones y que se mantuviera la estructura de mandos existente. Por el lado sindical, se buscaba que los sindicatos quedaran en manos de los dirigentes participantes del pacto, por medio de una aceleración del proceso de normalización sindical en la última etapa del gobierno militar.

Lo que hasta ese momento había sido propiedad fundamentalmente de la interna justicialista y tema de la prensa, dejó de serlo cuando el candidato por Renovación y Cambio, Raúl Alfonsín profundizó la denuncia dando el nombre de los supuestos intervinientes: los “Generales Nicolaides, Suárez Nelson y Trimarco, con algunos hombres del sindicalismo”. Además calificó al pacto de corporativista (*La Nación*, 26/04/1983). De la Rúa, representante de la otra línea interna del radicalismo, se expresó en términos similares, solo que no dio los nombres de los intervinientes. Contín, presidente de la UCR, pidió a los imputados explicaciones y una aclaración contundente sobre la existencia o no del acuerdo.

Nicolaides y Bignone, por los militares, lo desmintieron enfáticamente, por la contraparte lo hicieron el PJ y las 62 Organizaciones. Lo significativo de estas desmentidas es que el PJ, que no había sido directamente implicado (es más, la denuncia surgió de uno de sus sectores, Intransigencia y Movilización), al intervenir se terminó autoinvolucrando.

Con el pacto ya instalado en el centro de la escena política algunas fuerzas políticas o sectores de ellas, trataron de sacarlo de ese lugar, asumiendo como verdaderas las desmentidas. La conducción oficial del PJ como ya lo señaláramos, de la Rúa y Contín, dirigentes de la UCR hicieron lo suyo. Este último se manifestó satisfecho con las desmentidas, porque ponían “las cosas en su lugar”, en tanto que de la Rúa declaró que las explicaciones dadas ayudaban a “despejar el ambiente que estaba enrarecido por versiones que venían circulando” (*La Nación*, 27/04/1983).

A diferencia de ellos, Alfonsín insistió en la denuncia, reiterando el nombre de los militares y aportando los de los sindicalistas Miguel, Ibáñez, Papagno e Iglesias. Agregó además

que los objetivos del pacto eran aquellos que las especulaciones periodísticas habían señalado.⁷⁵

Cuando el periodismo le preguntó acerca de las pruebas técnicas que tenía para mantener la denuncia, Alfonsín respondió que “La obligación de la denuncia no puede estar limitada por la existencia de pruebas jurídicas. Aquí no hay cintas grabadas ni listas de encuentros secretos. Bastante han dicho los medios de difusión sobre esta verdad contenida. Y es suficientemente revelador el empeño que han puesto en su defensa personas que sin ser mencionadas, sí se sintieron directamente tocadas” (*La Nación*, 02/05/1983).

A partir de ahí, la existencia del pacto obtuvo el estatuto de verdad en el discurso alfonsinista y, como Barros (2000) lo señala, “se transformó en la idea articuladora de la dispersión de fuerzas anti-Proceso (...). Alfonsín le dio contenido y actores al pacto en un momento en que el resto de las fuerzas políticas, incluido su propio partido, perdían interés en él” (:75).

Se intentará ahora deducir como el pacto militar-sindical pudo constituirse en un principio articulador y porqué Alfonsín, y no otros, fue el que pudo capitalizar esa articulación:

Empezando por el segundo de los puntos planteados: 1) se puede inferir que Alfonsín capitalizó la denuncia del pacto, aún cuando el no fue quien lo denunció en primera instancia, por haber sido uno de los pocos que perseveró en ella; 2) el pacto militar-sindical, era la realización real o imaginaria de lo que Alfonsín venía denunciado, en términos de contubernio de las minorías para limitar la democracia que se venía; 3) porque era uno de los pocos actores políticos que no habían participado en conversaciones ni acuerdos con ninguno de los dos sectores denunciados; 4) porque a pesar de no haber acordado con ellos, mantenía un discurso en el que no los identificaba como sus enemigos per sé (recordemos

⁷⁵ Tal fue la importancia que la denuncia del pacto adquirió en el discurso alfonsinista, que el 2 de mayo de 1983, publicaron un volante de campaña en el que se sintetizaba la conferencia de prensa que Alfonsín había dado para hablar del tema. El volante estaba titulado del siguiente modo: “Contra los pactos a espaldas del pueblo. Para afianzar la Democracia”. Desde el título mismo, insistimos, se marcaba una diferencia fundamental con los denunciantes originales.

que para Alfonsín ni los militares, ni los sindicalistas eran la contraparte del dilema fundamental en Argentina, sino las minorías); 5) porque se sabía que la parte denunciante, la izquierda peronista, estaba especialmente enfrentada tanto al sector sindical denunciado como a los militares, con quienes había llegado incluso al enfrentamiento armado en el pasado. Es decir ambos eran enemigos manifiestos y declarados del denunciante, con lo que se podía entender que lo que estaba haciendo la izquierda peronista era un intento de poner en el centro de la política argentina “sus” propias luchas, para dirimir así el conflicto con sus enemigos “eternos”.

En pocas palabras, Alfonsín pudo capitalizar políticamente la denuncia del pacto porque supo articular esa denuncia con la democracia y porque por su pasado estaba en una posición privilegiada para hacerlo.

Se infiere además que la denuncia del pacto permitió la constitución de una hegemonía porque: 1) el pacto era la síntesis de una metodología que amplios sectores de la población identificaban como lo que se debía dejar atrás; 2) a esa metodología la encarnaban en esa ocasión sectores y sujetos que habían sido identificados como responsables principales de ese pasado; 3) ya en el pasado la derecha peronista había actuado de manera coordinada con militares y grupos paramilitares, en la denominada Triple A, lo que hacía más creíble la existencia del pacto, y 4) estaba claro que los involucrados en la denuncia tenían algo que perder con el retorno de la democracia. En el pacto se juntaban lo que se consideraba eran los elementos más negativos de la historia reciente. Eran la corporización del enemigo.

En definitiva, la denuncia del pacto militar-sindical vino a “constatar”, real o imaginariamente, una sospecha que estaba en el ambiente político, encarnando así lo que Alfonsín había anticipado tiempo atrás como el acuerdo de las minorías para limitar y elitizar la democracia. Por eso, porque las sospechas ya estaban en el ambiente, las desmentidas por parte de los involucrados produjeron un efecto contrario al buscado: terminaron siendo la más categórica constatación de la “verdad” de la denuncia.⁷⁶ Alfonsín

⁷⁶ Es probable que si los involucrados no hubieran desmentido la existencia del pacto, también hubiera sido interpretado como una confirmación de la existencia del mismo.

pudo capitalizarlo en la medida en que su posición y figura encarnaban lo nuevo, la instancia de superación no solo de la dictadura, sino también de la situación vivida antes del golpe. Estos dos momentos estuvieron presentes desde la primera denuncia que se hizo del pacto. Recordemos que ella comenzó como una pelea entre la izquierda y la derecha peronista, que una de las partes la remitió al pasado, más concretamente a uno de los hechos más impactantes y dolorosos de la historia política argentina, que pasó a ser conocida como “la masacre de Ezeiza”.⁷⁷

Sin embargo, vale la pena dejar en claro que Alfonsín nunca denunció a todo el PJ como parte del pacto, por el contrario, lo ubicaba como un partido popular y parte integrante de las mayorías, pero aún así, por extensión, las sospechas involucraban al PJ, que no solo no lograba desmarcarse de una de las partes sospechadas, sino que esa parte terminó poniendo como vicepresidente del partido a Lorenzo Miguel. Es que el discurso alfonsinista, que ubicaba como su otro a los integrantes del pacto, se cuidaba de no poner en el mismo lugar al conjunto de los peronistas, ni al conjunto de los militares. El PJ era el otro pero incluido, era un adversario no un enemigo.⁷⁸ Este doble juego, le permitía por un lado no excluir y con ello interpelar a una parte del votante peronista. Pero, por otro lado, le daba la posibilidad de introducir una división al interior de ese movimiento.

Por esos días, ocurrió otro hecho que le permitió a Alfonsín marcar nuevamente diferencias con la dirigencia política de los partidos mayoritarios. Se hizo público el intento de autoamnistiarse de la dictadura. Si bien la mayoría de los dirigentes políticos rechazaron la propuesta, Alfonsín hizo de ella uno de los ejes de su campaña, pues en su concepción, si bien había que mirar hacia el futuro, la única forma de dejarlo atrás era haciendo justicia. En un boletín del 2 de mayo de 1983 fijó sus posiciones al respecto: los militares debían ser juzgados por tribunales civiles, se insinuaba la necesidad de diferenciar las

⁷⁷ Los hechos mencionados ocurrieron el día en que Perón regresaba de un largo exilio en España. Los enfrentamientos empezaron cuando un grupo de derecha del peronismo que se había ubicado en el palco comenzó a disparar a los sectores de izquierda que pugnaban por ubicarse más cerca del lugar en el que hablaría Perón. Finalmente, debido a estos hechos el avión fue desviado y aterrizó en un pequeño aeropuerto de la provincia de Buenos Aires.

⁷⁸ Es elocuente al respecto la siguiente cita: “Que nadie se confunda, estas no son bandera antiperonistas. Este es un intento responsable para preservar la unidad de las fuerzas populares” (boletín de Renovación y Cambio).

responsabilidades y la posibilidad de invocar la obediencia debida, el error y la coacción, pero además empieza a tomar forma lo que posteriormente se conociera como “teoría de los dos demonios”. Esta consistía en poner en un mismo plano de responsabilidad política al ejército con la guerrilla, a la que Alfonsín no dudaba en calificar de “terrorismo subversivo”. La referencia que los igualaba era que ambos representaban un “verdadero flagelo para la democracia”.⁷⁹

A mediados de 1983 se resolvieron las candidaturas de los partidos que irían a la competencia electoral. La UCR realizó elecciones internas en las que ganó la corriente Renovación y Cambio y proclamó candidato a presidente a Raúl Alfonsín. El PJ, en cambio, dirimió las candidaturas mediante el acuerdo de los distintos sectores. En este acuerdo la izquierda terminó siendo neutralizada y los sectores moderados y de derecha predominaron. Se proclamó como candidato a presidente a Italo Lúder, quien había ocupado el cargo de vicepresidente de Isabel Martínez después de la muerte de Perón, y que fuera denominado por el propio peronismo como un “candidato de compromiso”.

El modo en que uno y otro partido resolvió el tema de las candidaturas aportó un elemento más para la construcción en el imaginario de dos formas de hacer política, de entender la democracia y para movilizar las fuerzas internas de los partidos. Se llegó así a la campaña electoral entre los distintos partidos que aspiraban a ocupar los cargos de presidente, legisladores y gobernadores de provincias.

El PJ, que no lograba articular una propuesta más o menos coherente, apelaba a los mitos y figuras que en pasado la habían hecho una fuerza imbatible en el terreno electoral. Las siguientes declaraciones realizadas al finalizar un acto del PJ son más que elocuentes: “A las elecciones las ganaremos con la memoria de la gente. La gente tiene memoria, sabe lo que fue el peronismo” (Italo Lúder, candidato a presidente del PJ, *Clarín*, 16/09/1983), “a estas elecciones las va a ganar Perón después de muerto” (Deolindo Bittel, vicepresidente

⁷⁹ La teoría de los dos demonios fue después sostenida por la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- creada por el gobierno con el supuesto objetivo de investigar las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Este fue uno de los motivos que hicieron que algunos organismos defensores de los Derechos Humanos se negaran a participar en dicha comisión.

del PJ, *Clarín*, 16/09/1983), “ganaremos por Perón” (Lorenzo Miguel, dirigente de las 62 organizaciones sindicales peronistas, *Clarín*, 18/09/1983).

Una vez resuelta la interna partidaria, Alfonsín publicó un nuevo libro titulado *Ahora: mi propuesta política* (1983), en el que se puede rastrear el núcleo de ideas básicas de *La cuestión argentina* publicado en 1980 y de “Algunas reflexiones” del año 1981. Sin embargo, y a pesar de que ese rastreo es posible, también se encuentran en esta obra algunas novedades, especialmente una complejización de la noción de democracia por la incorporación de nuevas equivalencias articuladas.

Los nuevos significantes encadenados eran: democracia es “forma de vida”, soberanía (:53), justicia (:141), “justicia social” (:78)⁸⁰, futuro (:78), orden (:151), desarrollo (42) y antiimperialismo (:67). Es decir, la democracia que Alfonsín se proponía definir sintetizaba a los principios de la democracia liberal con todos los significantes que evocaban a los mitos movilizadores de la historia política argentina del siglo. No es casual entonces que, para sostenerla y desarrollarla, postulara la necesidad de la movilización social, que debía tomar la forma de un “tercer movimiento histórico” nacional, mayoritario, del pueblo, reformista y transformador (:83), y que tenía que culminar la obra iniciada por Irigoyen y que fuera seguida por Perón, evitando sus desviaciones e insuficiencias.

Incluidos estos elementos crecía la capacidad interpelatoria del discurso de Alfonsín y el campo que articulaba se hacía cada vez más inclusivo. Sin embargo, en los últimos tramos de la campaña electoral (septiembre y octubre de 1983), la cadena de equivalencias articulada por el significante democracia se extendería más aún.

La democracia, además de las definiciones ya dadas, implicaba: superar la decadencia y la inmoralidad, iniciar el camino de la paz y la prosperidad, superar la crisis moral, autenticidad y verdad, deber, responsabilidad, respuesta común, soluciones, sinceridad, una filosofía, dignidad, libertad, justicia social, reglas de juego, gobierno de las mayorías, Estado de Derecho, imperio de la ley, voluntad general, división de poderes, ciudadanía,

⁸⁰ La Justicia Social era, hasta ese momento, una de las banderas distintivas del peronismo.

respeto a los derechos humanos, seguridad, superación de los antagonismos, democracia sindical, fin de la usura, pluralismo, igualdad de oportunidad, pueblo, solidaridad, fraternidad, lucha nueva, marcha nueva, lealtad con el futuro, patria, superación de las discrepancias, cien años de paz, encuentro definitivo entre los argentinos. Todos ellos atributos que se sintetizaban en un slogan que se hizo célebre en la campaña de Alfonsín: “con la democracia se come se cura y se educa.”

Era una “democracia integral”, una “democracia en todas partes”, cuya capacidad articuladora parecía no conocer límites. Podía interpelar tanto a individuos, como a grupos de personas pertenecientes a un colectivo. Integraba, sin disolver la particularidad. Ofrecía la oportunidad de una nueva vida y redimía el pasado. Se podía dejar atrás al pasado sin negarlo, por medio de la superación. Ahí residía la eficacia interpelatoria el discurso de Alfonsín.

Sin embargo quedan flotando una serie de interrogantes: ¿puede cualquier significante ser punto nodal?, ¿una cadena de significados articulados puede incluir cualquier elemento?, en caso de ser así, ¿porqué otras fuerzas políticas no se dedicaron a incluir atributos en sus propios discursos, de modo que este interpele a más y más personas?

Si por definición todo significante es vacío, cualquiera de ellos puede jugar el papel estructural de punto nodal, sin embargo, el uso hace que algunos significantes se asocien a referentes empíricos o a significaciones más definidas y queden de algún modo fijados a estas. Si bien su “cristalización” es inestable, ya que su vacío y su arbitrariedad “original” nunca puede ser totalmente eliminada (por más completos o naturales que parezcan), también es difícil que estos significantes puedan constituirse en articuladores de una cadena muy extensa de significaciones. Algo diferente ocurre con los significantes que permanecen en un estado de vaciedad mayor.

Esto es lo que ocurrió con el significante democracia, que no había ocupado un lugar central en la política argentina. En rigor, la democracia, a pesar de los recurrentes golpes de Estado, no se había constituido jamás en un tema socialmente problematizado.

Probablemente, el acierto político del alfonsinismo consistió en contribuir a hacerlo y en aprovechar las ventajas de emplear un término que no se encontraba saturado de significaciones.

Pero el hecho de que no se encuentre saturado, no implica que a los puntos nodales se los pueda cargar de cualquier significación. El carácter relacional de los significantes permite construir cadenas de equivalencias, en las que los elementos se convierten en momentos de esa cadena, pero también exige que se establezcan relaciones de exclusión. Para que un significante signifique algo, tiene que renunciar a la pretensión de significarlo todo.

En el caso de la democracia que, como vimos, en el discurso de Alfonsín articuló una cantidad casi innumerable de otros significantes, tuvo que comenzar por distinguirse por medio de una relación de exclusión con la dictadura, la cual a su vez articulaba otra cadena de significantes. Esta distinción fue tomada por el resto de las fuerzas políticas aún cuando no hicieran de ella el centro de sus discursos, pero la tomaron cuando ya estaba cargada de ciertas significaciones. Una vez que democracia implicaba, entre otras cosas, elecciones sindicales libres, el peronismo, por ejemplo, tuvo serias dificultades para “apropiarse” de la democracia en la medida en que tenía en su seno a un sector sindical que se resistía esta posibilidad.

El propio Alfonsín precisó deconstruir la historia de su partido -frecuentemente relacionado con los golpes militares- y reconstruirla de otro modo. Para empezar, desligó al golpismo como característica propia de su partido y la asoció a una parte del mismo (lo cual le sirvió especialmente en la lucha por la conducción de la UCR), pero además rescató a la figura de Arturo Illia, miembro de la UCR y presidente de la Argentina derrocado por un golpe militar, hecho ante el que en la historia argentina se le atribuye una parte de la responsabilidad a los sindicatos peronistas. Es decir, en primer lugar estableció una diferenciación al interior de la UCR entre quienes tenían un pasado golpista y los que no, posteriormente desdibujó las diferencias entre los partidos, para que ninguno de ellos pudiera reivindicar que nunca había promovido un golpe de Estado.

Lo curioso es que la UCR ya había tratado de realizar esta operación con Arturo Illia, pero se encontraba con el contraargumento por parte del peronismo de que el de Illia era un gobierno ilegítimo, pues había llegado al poder con apenas el 24% de los votos y gracias a que el peronismo estaba proscrito. La diferencia estaba dada ahora en que después de la experiencia masivamente rechazada del Proceso, resultaba más problemático anteponer los argumentos del peronismo, pues más allá de la cuestionada legitimidad del gobierno de Illia, no había nada peor que un golpe militar y no había argumento que pudiera justificarlo.

Queda finalmente por señalar que, si bien la extensión de la cadena de significantes organizados por la democracia representó una ventaja para el discurso alfonsinista con respecto a los otros discursos políticos del momento, también esto pudo representar una debilidad en la articulación y una dificultad para mantenerla en el tiempo. El campo de inclusión pudo ser mayor, pero también era mayor su heterogeneidad, pues la conversión de un elemento en momento de una cadena discursiva altera la identidad de ese elemento, pero no lo despoja totalmente de los significados que anteriormente tuvo. En el apartado siguiente trataremos de analizar las consecuencias de esto en el gobierno de Alfonsín.

De la moralidad pública a la ética
de la solidaridad

La llegada de la UCR al gobierno
La explosión de demandas
Militares y sindicalistas
La economía: el Plan Austral
El discurso de Parque Norte

Las elecciones de noviembre de 1983, arrojaron un claro ganador, el Partido Radical conducido por Raúl Alfonsín. En un marco de júbilo y entusiasmo sin precedentes por la recuperación de la democracia, la UCR llegó al gobierno nacional. Esas fueron las primeras elecciones para presidente que el PJ no ganaba y la actitud que asumiría como partido de oposición era todo un dilema.

El 10 de diciembre de 1983, inmediatamente después de asumir la presidencia, Alfonsín dirigió la palabra ante el Congreso de la Nación recién constituido. En ese discurso el presidente expresó lo que sería su programa de gobierno e intentó remarcar la ruptura que significaba el nuevo gobierno con respecto al anterior y con todas las formas de hacer y pensar la política que habían imperado en la Argentina. Lo curioso es que esa ruptura era expresada en términos éticos y morales, más que estrictamente políticos: “Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública”, decía Alfonsín (Alfonsín, *Discursos Presidenciales*, 10/12/1983).⁸¹

Cada punto del programa era presentado como una oposición a lo que antes se había realizado. Pero, lo que diferenciaba uno de otro momento, no eran tanto aspectos programáticos, sino un principio que se suponía podía ser un organizador transversal: la dimensión ética de la política. Por ahí pasaba para Alfonsín la posibilidad de realizar un acuerdo nacional que permitiría sacar adelante al país: “Ayer pudo existir un país

⁸¹ En este y en el párrafo siguiente empleamos los términos “expresada” y “presentado” respectivamente, porque no damos por supuesto de que se trató de un desplazamiento intencional desde la política hacia la ética. De hecho pudo haberse tratado de un uso retórico con el que se pretendía simbolizar un momento de ruptura radical con el régimen anterior. Sin embargo e independientemente de ello, una vez producido, el discurso pudo haber sido entendido por la gente (que no siempre conoce las intenciones del que lo produce) como un desplazamiento desde la política hacia la ética.

desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles sentimientos del alma. Aún el objetivo de constituir la unión nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética” (*D.P.*, 10/12/1983).

Así como en el año 1980 creía que era necesario poner el respeto a las reglas democráticas por arriba de cualquier otra diferencia, esta vez Alfonsín pensaba que la ética debía desplazar a los aspectos ideológicos a un segundo plano; hecho que, por otro, lado facilitaría el acuerdo político entre las mayorías. Se trataba de instituir un conjunto de regulaciones de la conducta que no fuera propiedad exclusiva de ninguno de los partidos, pero, que al mismo tiempo, les fuera muy difícil y costoso rechazar. La ética articulada a la democracia, se suponía, podía convertirse en una poderosa herramienta política.

Los principios éticos llevaban, por ejemplo, a rechazar la subordinación de los medios respecto a los fines. Para Alfonsín, “el fin jamás justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios, creen que el futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de claudicaciones éticas y crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo implica que se puede dañar a otros seres humanos (...) con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano” (*D.P.*, 10/12/1983).

El gobierno proponía una ética no-finalista, pues entre medios y fines tenía que haber coherencia, la que podía darse solo si la política atendía los problemas del tiempo actual, sin por ello renunciar al futuro. Por eso, Alfonsín afirmaba que “nuestro compromiso está aquí, y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno a sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible, se establece una correlación positiva entre el fin y los medios”. Insertar la dimensión temporal en la política implicaba oponerse

al milenarismo de los autoritarios y permitía que a ella “llegaran los ecos del dolor humano” (*D.P.*, 10/12/1983).

Para el nuevo gobierno, la instauración de pautas de regulación de la conducta de los políticos era prioritaria para garantizar la gobernabilidad y hacer que la democracia funcione, era más importante y anterior inclusive a la agregación de intereses. Su percepción era que, reguladas las conductas, la conciliación de intereses sería más fácil y, en caso de que esta última no fuera posible, no se llegaría a la ruptura entre las partes en disputa.

Se puede entender que con esto el gobierno estaba tratando de hacer parte de lo que no se pudo realizar antes del cambio de régimen, por la ausencia de una transición al estilo español. La caída abrupta de la dictadura no dio lugar a una transición en la que, entre otras cosas, se definiera cuales serían las reglas principales y los actores competentes en el nuevo régimen.⁸² Pero esto, que pudo significar una debilidad para el nuevo gobierno, también pudo representar una oportunidad, en tanto en esa definición podía jugar desde una posición privilegiada, cosa que el gobierno sabía y trató de usar a su favor.

El intento de circunscribir el campo de acciones legítimas propio y de la oposición, por medio de la observación de los principios morales, entendía Alfonsín en esta instancia, debía comenzar por el gobierno. “Seremos más una ética que una ideología” decía, pero era necesario además que, la “moralidad administrativa, la sensatez, el empleo de métodos correctos y sanos principios”, se extendieran a toda la élite dirigencial.⁸³ Para los demás partidos debía implicar llevar adelante una oposición razonable, para los empresarios no poner sus intereses por encima de los intereses generales.

Con ello el gobierno no solo estaba definiendo (con o sin intención) a la democracia a partir de principios morales, también definía a estos últimos y proponía un campo privilegiado de

⁸² Para O'Donnel y Schmitter (1984), estas son algunas de las funciones más importantes que cumple una transición política.

⁸³ Esta caracterización del gobierno de que la moralización debía comenzar por la dirigencia cambiaría años después. En diciembre de 1985 manifestaría la urgente necesidad de iniciar una reforma cultural democrática, especialmente dirigida a la formación de ciudadanos.

aplicación. Pero una vez realizada, la propuesta fue objeto de disputas por la significación. La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Salvo el PJ que no dijo demasiado al respecto, los organismos de derechos humanos tomaron la palabra del presidente y se pronunciaron a favor de la propuesta, pero agregaron que no se podía hablar de ética si no se llevaba adelante un proceso de clarificación del pasado, que terminara con el “juicio y castigo” para todos los que habían violado los derechos humanos. La izquierda marxista por su lado asumió una postura semejante. Luis Zamora, por ejemplo, después de expresar su acuerdo con la propuesta de moralizar el gobierno añadió que “para nosotros no es ético que paguemos la deuda externa contraída por quienes se llevaron el dinero del país, no es ético que estén en libertad Astiz y muchos otros involucrados en el genocidio” (*Clarín*, 12/12/ 1983).⁸⁴

Estos intentos por resignificar la propuesta realizada por el gobierno, indicaban que, lejos de ser universal y neutral, la definición de la ética también podía ser objeto de disputa; formaba parte de la lucha política. Pero además de la politización de la ética, también se produjo el efecto inverso, el de la codificación de la política en términos morales.⁸⁵ Este último efecto, que pudo haber sido eficaz y beneficioso en un primer momento para el gobierno, en tanto deslegitimaba aún más a sus ya desprestigiados enemigos -las corporaciones militar y sindical-, terminó volviéndose en su contra a mediano y largo plazo.

La caracterización de inmorales de sus enemigos, llevó a que el diálogo y la inclusión de al menos algunos sectores de militares y sindicalistas en el discurso democrático fuera virtualmente imposible, pero además cerró las puertas de la negociación para el propio gobierno con esos sectores. Cuando, por ejemplo, necesitó llegar a acuerdos con los

⁸⁴ Alfredo Astiz, también conocido como el “Ángel Rubio”, se le acusa de haber secuestrado y asesinado a dos monjas francesas que estaban desarrollando tareas sociales en Argentina, del secuestro de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin y de haberse infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, desde donde organizó el secuestro de militantes de organismo defensores de los derechos humanos. Por algunos de esos actos, actualmente tiene pedidos de extradición y captura de la justicia francesa, sueca, italiana y española. Los sucesivos gobiernos democráticos negaron la extradición alegando el principio de territorialidad.

⁸⁵ Preferimos usar la expresión “codificación de la política en términos morales” y no moralización de la política porque esta última puede entenderse como que los políticos comenzaron a actuar de acuerdo a normas morales.

sindicalistas, tuvo que desmontar, al menos en parte, la imagen que de estos había creado y eso redundó en una pérdida de credibilidad para el gobierno y un fortalecimiento de los sindicalistas. Todo ello agravado por las denuncias de casos de corrupción que involucraban a funcionarios muy cercanos a Alfonsín.⁸⁶

En lo que siguió del discurso, el presidente caracterizó la situación del país apelando a una figura que, independientemente de ajustarse a la realidad o no, formaba parte del folclore político argentino: que el país estaba en la más profunda crisis de su historia.⁸⁷ “El estado en el que las autoridades constitucionales reciben al país es deplorable, catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con manifestaciones de crudo empobrecimiento. Con altos niveles de miseria y endeudamiento, con una inflación desbordada, con una educación y una salud relegadas y una cultura postergada, una situación internacional agravada. Me atrevo a decir que estamos ante una situación de crisis como antes no habíamos conocido” (*D.P.*, 10/12/1983).

Después presentó, a grandes rasgos, lo que era su programa de gobierno. Como se señaló anteriormente, cada uno de sus puntos era articulado con la democracia y contrapuesto con lo que se había hecho en la Argentina hasta ese momento.

En materia económica y social, la justicia distributiva, por ejemplo, estaba directamente vinculada con el voto: “El voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros y también en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por un grupo armado. El sufragio, por definición, constituye un límite para los sectores privilegiados y, como instrumento de las mayorías, tiende a lograr una mayor justicia distributiva. La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino también se come, se educa y se cura” (*D.P.*, 10/12/1983).

⁸⁶ Solo por citar algunos casos podemos mencionar la denuncia de la compra millonaria de pollos en mal estado llevada a cabo por el que fuera secretario de comercio exterior Mazarin.

⁸⁷ Una caracterización similar habían hecho todos los gobiernos militares y después de Alfonsín la hizo Menem. Inmediatamente todos ellos plantaron la “necesidad” de una refundación.

El tiempo se encargó de demostrar la falacia de la relación directa entre el voto y la justicia distributiva que planteaba Alfonsín. De hecho, en la Argentina, país en el que se vota regularmente cada dos años, la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza no hicieron más que crecer.

Finalmente, después de la caracterización de la situación y de la presentación del programa, el presidente manifestó cuales eran las supuestas fortalezas de la democracia naciente: “vamos a salir adelante, con la fe y el empuje necesarios, porque tenemos sin dudas los recursos, la voluntad y el coraje. Y Sobre todo, porque en este empeño estamos todos unidos” (*D.P.*, 10/12/1983).

En los primeros tiempos, el nuevo gobierno se empeñó en dar respuesta a las problemáticas que involucraban a lo que consideraba era el enemigo más letal de la democracia: el corporativismo, encarnado por militares y sindicalistas. Entre los primeros proyectos de ley que el ejecutivo envió al Congreso de la Nación estaban los de reforma militar y sindical. El espíritu de ambas era romper con la lógica corporativista de esos sectores, lo que a su vez supuestamente permitiría abrir brechas que pudieran sacar a la Argentina de lo que Portantiero (1982), tomando las palabras de Sturmhthal, había caracterizado como una situación de “empate crónico”. La lógica corporativa de estos sectores hacía que se convirtieran en cuerpos cerrados, impermeables, incapaces de entablar un diálogo de conciliación de intereses con otros sectores, pero manteniendo la “fuerza necesaria para vetar los proyectos de otros”. Esto hacía imposible la elaboración de una coexistencia estable, que pudiera “encontrar ‘un centro de gravedad’ en la sociedad, y de construir efectivamente un sistema político capaz de ordenar la complejidad” (:27).

Por eso, se trataba de circunscribir el campo de acción de militares y sindicalistas. Los militares, subordinados al poder civil y ocupados exclusivamente de las tareas de defensa territorial, los sindicatos ocupados de la defensa de los intereses de los trabajadores, e independientes de cualquier fuerza política partidaria.

El cuerpo de leyes destinado a abordar la cuestión militar, lo señala López (1994), se jugó en cuatro escenarios, dos de ellos principales y dos secundarios. Los principales: la reforma militar y el juzgamiento del pasado. Los secundarios: el gasto en defensa y la educación militar (:72).

La reforma militar apuntaba esencialmente a subordinar a los militares al poder civil. La propuesta inicial en este sentido, la realizó el radicalismo antes de asumir la presidencia (de hecho la comenzó a negociar con el General Bignone, último presidente militar, apenas se conocieron los resultados de las elecciones) y, una vez en el gobierno, tomó forma en la ley 23023/83. La reforma consistía en suprimir los cargos de Comandante en Jefe y transferirlos al presidente de la Nación. 1) El presidente pasaba a ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; 2) los organismos, antes dependientes de lo que era la comandancia, pasaban a jurisdicción del Ministerio de Defensa. Poco tiempo después (el 23 de diciembre de 1983), el decreto 280/83 profundizaría estas medidas, disponiendo el paso a jurisdicción del Ministerio de Defensa de la Dirección General de Fabricaciones Militares y de toda sociedad que tuviera una participación mayoritaria de las Fuerzas Armadas. El 7 de febrero de 1984, mediante el decreto 436/84, se establece que en el Ministerio de Defensa recaerían las responsabilidades de nombramiento, promoción, cambio de destino, bajas y retiros de la oficialidad superior de las tres fuerzas y el pasaje a la órbita del mismo ministerio de Gendarmería Nacional, que dependía del Ejército y de Prefectura Naval, que dependía de la Marina.⁸⁸ Acompañaban a esta serie de medidas la redefinición de funciones tendientes a desmontar la Doctrina de Seguridad Nacional, que legitimaba la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Mientras esta propuesta era sostenida más o menos homogéneamente por el oficialismo, en el PJ, un sector defendía la posibilidad de intervención del ejército en la seguridad interior, la misma posición tuvieron los partidos minoritarios de la derecha liberal: la Unión de Centro Democrático y el Pacto Autonomista Liberal. Ni la Confederación General del Trabajo ni la Unión Industrial se pronunciaron al respecto, mientras que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- y el resto de los organismos de defensa de los Derechos Humanos centraban su atención en el juicio a los militares.

⁸⁸ Para ampliar consultar de E. López, 1994, "Ni la ceniza ni la Gloria", Universidad Nacional de Quilmes.

Para dar respuesta a uno de los problemas más sentidos por la población, el juicio por la violación a los derechos humanos, el gobierno propuso, coherente con lo que había sostenido tímidamente en la campaña electoral, que se debían distinguir tres niveles de responsabilidad entre quienes estaban involucrados en esos hechos: los responsables de haber establecido el orden represivo y/o haber tenido capacidad decisoria de alto nivel, los que se excedieron yendo más allá de las ordenes y los que siguieron órdenes. Las responsabilidades penales debían a su vez estar de acuerdo con esta distinción.

La ley 23049 de enero de 1984 consideraba que “Si bien se esperaba que la obediencia, en un estado democrático, no sea ciega sino que presuponga el control de la legitimidad de la orden, debe admitirse que en circunstancias excepcionales de lucha contra el terrorismo se obró en un contexto de gran confusión y coerción”, y proponía:

- Crear una comisión dependiente del Poder Ejecutivo que investigara la desaparición de personas, propuesta que posteriormente se concretó en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CONADEP-.
- Que las Fuerzas Armadas se autojuzgaran ofreciéndoles tres recursos: la apelación a la obediencia debida, la apelación al error insalvable (la creencia en la legitimidad de la orden) y la no-discriminación de delitos atroces y aberrantes.

Una vez en el Congreso, la ley se aprobó, pero sufrió una modificación que le haría perder los efectos buscados. A propuesta del senador Sapag, representante de un partido provincial de Neuquén, se excluyeron de la obediencia debida los delitos aberrantes, de lesa humanidad y la sustracción de menores. Ningún legislador se atrevió a rechazar esta propuesta. Con estas disposiciones, el gobierno se proponía dar respuesta al reclamo de justicia por la violación a los Derechos Humanos, sin que ello le lleve a enfrentar al conjunto de las Fuerzas Armadas. La hipótesis del gobierno era la siguiente: que, en la medida en que las responsabilidades penales solo alcanzaran a los altos mandos, los sectores medios y bajos se mantendrían conformes y que los juicios producirían una división de hecho en las fuerzas. Esta división a su vez implicaría la desintegración del espíritu de cuerpo y la apertura de una instancia de diálogo entre algún sector de los militares y el poder político.

El 23 de abril se iniciaron los juicios a los comandantes de las juntas del Proceso, generando un malestar en las tropas del ejército. En marzo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dio una muestra categórica de su falta de disposición para juzgar los crímenes cometidos por sus camaradas: abandonaron los cargos y absolvieron a Alfredo Astiz, uno de los personajes emblemáticos de la violación de los derechos humanos durante la dictadura.

La negativa por parte de los tribunales militares a enjuiciar a sus pares llevó a que fuera la justicia civil la encargada de hacerlo. A lo que se le agregaba que la enmienda Sapag reintrodujo la posibilidad de juzgar a una buena parte de los niveles medios y bajos. Todo esto hizo que la supuesta división que produciría en el Ejército la distinción de responsabilidades, quedara sin efectos. Una vez finalizado el juicio a las juntas, la justicia civil comenzó a citar a los sectores intermedios y bajos, y esto llevó a que se produjeran los levantamientos militares de semana santa de 1987, hechos que estudiaremos más en detalle en el próximo apartado. Por su lado, la acción de la CONADEP y del resto de los organismos defensores de los Derechos Humanos que removían el pasado, impulsaba el reclamo de la población para que la justicia civil interviniera.

El gobierno no lograba conformar a quienes pedían justicia ni a los militares. Por un lado, los militares se afirmaban en su lugar de enemigos (a pesar de los esfuerzos del gobierno por debilitarlos, fragmentarlos e introducir, al menos a una parte de ellos, en el campo democrático) y, por otra, el gobierno empezaba a tener serias dificultades para evitar el enfrentamiento con los sectores que reclamaban el juicio civil a quienes habían violado los derechos humanos. Todo esto, como ya se adelantó, tuvo su punto de inflexión en 1987.

Por su parte, la ley de reforma sindical, que también fue impulsada a comienzos del mandato de Alfonsín, buscaba establecer mecanismos más directos de elección de dirigentes gremiales. Esto llevó a que el enfrentamiento con el sindicalismo recrudeciera y se trasladara al Congreso, donde la mayoría de los legisladores del PJ (que entonces tenía como vicepresidente al sindicalista Lorenzo Miguel) se opusieron a las reformas. El

proyecto de ley, conocido por ese entonces como "Ley Múcci", en alusión al ministro de Trabajo que tuvo a cargo su redacción, fue finalmente rechazado.

Los argumentos centrales con los que se justificó el rechazo fueron que las reformas eran una intromisión por parte del gobierno en un terreno en el que no debía tener competencia (las organizaciones de los trabajadores) y que se trataba de una importación de modelos de organización foráneos, lo cual conduciría a la división del movimiento obrero. Además, montados en el malestar y la movilización por una situación económica que no lograba dar muestras de mejoras, los sindicalistas apelaban a argumentos de izquierda y de derecha para frenar las reformas. Para las 62 Organizaciones Peronistas se trataba de "un disfraz que pretende esconder ideologías extrañas a la naturaleza nacional y cristiana del movimiento trabajador argentino", mientras que para el dirigente Jorge Triaca, sospechoso de colaborar con la dictadura, era un intento de "entregar un movimiento obrero dócil y sumiso a los mismos capitalistas que nos han estado atacando" (*La Nación*, 03/05/1984).

El gobierno, que había presentado las reformas sindicales como parte del cambio que vivía el país y como necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la democracia, se vio obligado a cambiar su táctica y convocó al sector sindical al diálogo; los sindicalistas no rechazaron la convocatoria, pero tampoco abandonaron los paros y las movilizaciones. Ubicados al inicio como los enemigos de la democracia, se negaban a ser integrados plenamente en un "nosotros" con el gobierno, pero utilizaban la puerta que éste les había abierto para conseguir algunos beneficios. Empleaban lo que por entonces se conocía como la táctica de "pegar y negociar".

Paralelamente, la aprobación de la ley que permitía el divorcio y las reformas educativas que tendían a recortar la subvención estatal a la educación privada, abrían otro frente de conflicto con otra de las corporaciones que más peso tenían en la Argentina: la Iglesia Católica. Esta última, también sospechada de colaboracionista durante la dictadura militar, no solo expresaba su disconformidad con las reformas antes mencionadas, también se montaba en el malestar por la situación económica en un frente común con los sindicatos.

A todo esto había que sumarle la explosión de demandas que trajo aparejada la instalación del nuevo régimen, que llevaba a una multiplicación de antagonismos en todos los niveles, profundizados por un desempeño económico que no mejoraba. En el primer año de gobierno de la UCR, la inflación llegó al 600% anual, y para los comienzos del año 1985 la situación política de efervescencia crecía en relación simétrica con la profundización de la crisis económica. En abril de ese año, la CGT propuso un plan económico alternativo al del gobierno, las organizaciones del campo se opusieron al cobro de nuevos impuestos al sector, se realizaron huelgas de los gremios de metalúrgicos y textiles. Saúl Ubaldini, conductor de la CGT tomaba uno de los argumentos del alfonsinismo y lo acusaba de promover acciones desestabilizantes. Para la derecha del peronismo, el gobierno estaba profundizando la injusticia social y la dependencia económica. Arturo Frondizi, ex presidente de Argentina y dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo -MID-, alertaba contra el caos y la anarquía que se extendían por el país. Vicente Saadi, presidente de la bancada justicialista en el senado, percibía “signos de desintegración nacional”.

La respuesta del gobierno a esta situación la expresó el presidente Alfonsín en un discurso transmitido en cadena nacional el 21 de abril, en el que se encuentran las primeras insinuaciones de los que sería el ensayo económico más importante de su gobierno, el denominado Plan Austral. Sintéticamente se puede decir que éste consistió en un programa para atacar a la inflación que combinaba políticas monetarias y fiscales de corte ortodoxo con otras de tipo heterodoxo. Por esa época y posteriormente, el plan fue entendido y explicado de diversas maneras. En los análisis posteriores se puso énfasis en explicar los porqués de su fracaso en el intento de corregir la economía argentina. Uno de los puntos recurrentes de estas explicaciones es el que señala que su debilidad estaba en que se trataba de un plan de estabilización, más que de reforma y de que su objetivo primordial no era la modificación estructural de la economía. Los políticos, en cambio, interpretaron al plan como una respuesta apropiada, pero de corto plazo, para enfrentar la coyuntura: le servía al gobierno para recuperar la iniciativa política y aprovechar el efecto sorpresa con el objeto de ganar las elecciones de octubre de ese año (Palermo y Novaro, 1996). Dentro de las lecturas políticas del Plan Austral, se pueden diferenciar claramente dos líneas, la de quienes consideran que el plan no era sino una continuación de las políticas económicas

anteriores con el único cambio de hacer prioritaria la estabilidad de precios (Palermo y Novaro, 1996: 71) y la de quienes veían en el plan un punto de ruptura en la forma en que la política argentina buscaba soluciones a las crisis, en tanto se pasaba de la búsqueda de soluciones políticas de las crisis a una búsqueda de soluciones económicas. En este sentido, el anuncio del plan permitía reconocer una separación entre la discursividad económica y la política (Sigal, 1990: 33-39).⁸⁹ En lo que sigue analizaremos el discurso de presentación del Plan Austral y trataremos de argumentar que esta última interpretación es inexacta.

La presentación del Plan estuvo antecedida de una denuncia en contra de "la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y, en definitiva, se convierten en pregoneros de la disgregación nacional". Ante esa situación, el gobierno convocaba "a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron; a quienes nos respaldan y a quienes nos critican" a reunirse en Plaza de Mayo el día 26 de abril, con el objetivo de realizar una demostración popular y masiva en defensa de la democracia. Es decir, desde un inicio y aún antes de ser presentado, el gobierno intentaba inscribir al plan en el concierto discursivo de la democracia y como un medio de defensa de esta; defensa que en ese momento era más necesaria que nunca, pues, "Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país, pero afirmo sin dudar que jamás se había atentado tanto contra la Nación Argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado". Si se quería evitar el quiebre del orden institucional, el pueblo unido debía movilizarse en contra de las minorías autoritarias de siempre. Era "absolutamente necesaria su presencia porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone en fin el ejercicio pleno y responsable de su libertad". Nuevamente la unidad nacional, del pueblo, se asociaba a la idea de democracia, pues "En la unidad de todos los que creemos en la democracia está la fuerza que necesitamos para avanzar. Es esa unidad la que hará retroceder a los enemigos del país con sus proyectos mesiánicos, sus falsas propuestas y sus

⁸⁹ El argumento de Sigal no es que la economía y la política se separaron efectivamente, sino que lo que operaba era una separación discursiva, con la que se intentaba atender a los problemas económicos desde una perspectiva más técnica y, fundamentalmente, evitar que los problemas económicos derivaran en complicaciones políticas como la inestabilidad.

trasnochadas fantasías" (Alfonsín, *D.P.*, 21 de abril de 1985). Gobierno y pueblo juntos y movilizados serían los protectores de la democracia.

Salvo en la derecha, la convocatoria del gobierno tuvo una amplia aceptación en el espectro político. El peronismo, principal partido de la oposición, dijo que no movilizaría a sus simpatizantes, pero que compartía la perspectiva del gobierno. El día 26 de abril de 1985 la Plaza de Mayo estaba colmada, cerca de 230.000 personas se habían reunido, según estimaciones de la prensa. Las primeras palabras de Alfonsín fueron para expresar su agradecimiento a la gente que había concurrido "a defender la democracia". Seguidamente, el presidente reiteró la denuncia sobre el accionar de las minorías autoritarias en estos términos: "Los que pierden con la democracia son los que quieren sacarnos la democracia. Son nada más que minorías absurdas, minorías insignificantes". Tomando uno de los argumentos del autoritarismo, pero invirtiendo su lógica, Alfonsín les respondía: "el pueblo unido también les dice que la democracia es el orden y la dictadura caos. El pueblo unido les dice que la única anarquía, que el único caos y que la única desgracia irreparable que podemos sufrir los argentinos es la pérdida de nuestros derechos" (Alfonsín, *D.P.*, 26 de abril de 1985).

El discurso siguió con un balance de lo actuado por el gobierno hasta ese momento, destacando la recuperación del prestigio internacional, el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas. El presidente se refirió luego a la situación económica, poniendo especial énfasis en lo que se había heredado del gobierno anterior. Se trataba de una emergencia que requería de una atención urgente a los reclamos populares, el reordenamiento de la estructura económica y el crecimiento de las variables macro. Y, sin que nadie lo esperara, anunció: "Esto se llama, compatriotas, una economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones". Si de guerra se trataba, la batalla principal debía librarse en contra de la inflación.

En el momento en que Alfonsín empezó a hablar de economía, los sectores de izquierda y centro izquierda se retiraron de la plaza, con el argumento de que habían sido engañados,

que habían sido convocados a defender la democracia, no a adherir a las propuestas económicas del gobierno.

Como se señaló anteriormente, este discurso de Alfonsín fue interpretado por Sigal (1990) como la muestra de una instancia en la que se marcó un desplazamiento discursivo y una separación entre lo político y lo económico, que en la primera parte del gobierno de Alfonsín habían permanecido fusionados. Era, para esta interpretación, un momento de “una distancia máxima entre ambas discursividades” (:34). El cambio no solo se habría dado con respecto a la primera parte del gobierno de Alfonsín, sino al diagnóstico que todas las agrupaciones políticas argentinas compartían desde los años sesenta en adelante: que el problema por excelencia de la Argentina era de tipo político. Como lo señala Landi (1988), se pensaba que “algo en el terreno de la cultura política debía ser alterado, en las formas de reconocimiento mutuo entre los distintos actores sociales, en las características de sus identidades y en la forma en que se definían sus intereses, en sus imaginarios colectivos” (:13). En este sentido, para la lectura de Sigal, el anuncio del Plan Austral implicaba la introducción de una novedad política: la de reconocer que la problemática económica tenía cierta autonomía con respecto a la política. Es más, para Sigal, la separación discursiva de la economía con respecto a la política, llevaba inevitablemente a que a la primera se la transformara en un problema técnico. Un ejemplo de ello lo hubiera constituido la forma en que el Plan fue presentado: primero una introducción general de Alfonsín y luego la explicación técnica por parte del entonces ministro de economía Juan Sourrouille, quien además no era miembro del partido gobernante, sino un reconocido economista académico. Para Sigal esto implicaba que la economía era “desplazada a un terreno donde el éxito depende de la calidad de los instrumentos utilizados” (:40).

Contrariamente a lo que Sigal caracteriza, pensamos que si bien se puede reconocer que en este discurso de Alfonsín la economía ocupaba un lugar más importante que en discursos anteriores, la separación tan clara entre economía y política no es tal. Desde su inicio el anuncio del Plan estuvo inscripto en una superficie discursiva más amplia, que seguía articulada por la democracia y Alfonsín puso especial cuidado en que así fuera. Se puede contra argumentar con razón que esto pudo haber sido parte de una estrategia para que el

plan económico anunciado recibiera una base de apoyo más amplia (esta fue por ejemplo la interpretación de la izquierda), sin embargo más allá de que se haya tratado de un recurso retórico, el uso de ese recurso nos está indicando que la economía seguía siendo discursivamente subordinada a la política, que en este caso tenía la forma de democracia. Si afirmamos esto no es solo por las recurrentes referencias a las “minorías absurdas”, sino por toda la lógica que subyace del discurso de presentación del Plan.

Refiriéndose a los problemas económicos de los países del tercer mundo, Alfonsín decía: “la marginalización y el hambre acosan a nuestros pueblos, pero esto no va a pasar en la Argentina, no puede pasar. Y no puede pasar aquí no solo porque el gobierno lo haya establecido sino porque la democracia no lo va a permitir, porque la democracia es votar, pero también es comer” (Alfonsín, *D.P.*, 26 de abril de 1985). Es decir, a pesar de la crisis económica que enfrentaba el gobierno, la democracia seguía siendo la salvaguarda no solo de los derechos y libertades, sino también del bienestar material.

Si se analiza ahora, uno de los discursos que se consideraron fundamentales de los primeros años de la democracia argentina y que fuera conocido como el “discurso de Parque Norte”, podremos comprobar que esta supuesta separación entre política y economía no se daba en el discurso de Alfonsín. El primero de diciembre de 1985, fortalecido por los resultados electorales de septiembre, Alfonsín habló ante la Convención de la UCR. El discurso de Parque Norte se tituló “Convocatoria para una Convergencia Democrática”. En él se mantiene a la democracia como referencia fundamental, pero se pueden advertir algunos cambios importantes con respecto a discursos anteriores. Su eje articulador fue el planteamiento de la necesidad de un cambio cultural que hiciera posible el desarrollo y mantenimiento de la democracia. En esta ocasión, las dificultades de la democracia ya no se derivaban de la debilidad institucional, sino de la manera en que estas eran entendidas por la gente: “Es un problema cultural, más que institucional”, por eso era necesario emprender una “democratización subjetiva”, decía Alfonsín, marcando una importante diferencia con su perspectiva anterior, en el que la necesidad del cambio en la moralidad y la ética debía pasar fundamentalmente por las élites dirigenciales. El desafío de desarrollar y consolidar la democracia, pasaba por incrementar la participación política, modernizar el país y

cultivar una “ética de la solidaridad”. Tal era el peso que se le daba a la cuestión cultural en ese discurso, que la inflación, por ejemplo, era entendida como un síntoma de la “inmoralidad argentina de las últimas décadas”, era “la otra cara de la violencia y el caos” y una manifestación de “la decadencia social”. Es decir, nuevamente los problemas económicos del país se codificaban en términos del pasado político autoritario y violento.

El incremento de la movilización social y la participación política eran para Alfonsín una cuestión estratégica. Estas no solo resultaban “imprescindibles (para) elaborar una voluntad democrática moderna, que esté a la altura de la necesidad de innovación, formal y sustantiva, que reclaman los tiempos”, sino que constituía el espacio de reservas para enfrentar la inercia retrógrada de las minorías agrupadas corporativamente. En una perspectiva diametralmente opuesta a la de Huntington (1973), que pensaba que “Importantes incrementos en la participación, producen inestabilidad a menos que ésta sea acompañada por cambios equivalentes en el nivel de bienestar económico” (:56), Alfonsín pensaba que la movilización social podía contribuir a la estabilidad del régimen.

El otro punto de articulación del discurso de Parque Norte era la modernización, que como lo señala Aznar (1986), no tuvo un tratamiento político tal como lo entendieron los expositores de esta teoría, o sus críticos. En primer lugar, en el discurso de Parque Norte, no se reconoce la secuencia temporal y causal entre desarrollo y democracia que establecían Lerner y Lipset, entre otros. Para Lerner (1958), “el modelo occidental de modernización exhibe ciertos componentes y secuencias cuya aplicación es global. En todas partes, por ejemplo, el crecimiento de la urbanización tiende a aumentar el alfabetismo, el aumento del alfabetismo tiende a expandir los medios de comunicación masivos, la expansión de los medios de comunicación masivos se asocia a la participación económica más amplia y a la participación política (voto)” (:56). Lipset (1963), por su lado, considera que “los diferentes aspectos del desarrollo económico -industrialización, urbanización, riqueza, educación- se hallan tan íntimamente relacionados como para constituir un factor fundamental que posee el correlato político de la democracia” (: 37). Contrariamente, para Alfonsín “de ninguna manera (se) afirma que democracia y modernización estén necesariamente vinculados históricamente”, pues “es históricamente

cierto que democracia y modernización no han marchado siempre juntas. Bajo el capitalismo y bajo el socialismo se han dado procesos de modernización autoritaria". Romper con la lógica secuencial que establecía que primero estaba el desarrollo y luego la democracia, le permitía a Alfonsín no renunciar a su prioridad: la democracia. El desarrollo era presentado como deseable, pero también como un posible logro de la democracia.

Pero también rompe con las críticas a las teorías de la modernización, que partiendo de las mismas condiciones iniciales arribaron a conclusiones opuestas a las de estas teorías. La experiencia indicaba, según los críticos, que los procesos de modernización en los países no desarrollados, lejos de fomentar el desarrollo de sistemas democráticos, generaban inestabilidad y creaban condiciones para el establecimiento de regímenes autoritarios (Huntington, 1973). En la apuesta de Alfonsín prevalece una perspectiva diferente. Si bien democracia y modernización no estaban relacionadas en una lógica secuencial, la democracia podía favorecer a la modernización y ésta ayudar a fortalecer la democracia. Se trataba de romper con el círculo vicioso de atraso - autoritarismo, que siempre había favorecido a las minorías y reemplazarlo por un círculo virtuoso de democracia - desarrollo, en beneficio de las mayorías.

La apropiación por parte de Alfonsín de la bandera del desarrollo era de suma importancia, ya que esta había sido uno de los argumentos que se esgrimieron en los momentos en que se habían dado los distintos golpes de Estado. La innovación de la relación democracia - desarrollo, que establecía Alfonsín, le permitía por un lado mantener a la democracia como instancia de articulación invalidando toda propuesta que sostuviera la necesidad de renunciar a ella o postergarla hasta alcanzar el desarrollo, y por otro lado, enfrentar a quienes supuestamente impedían el desarrollo: las corporaciones.

Esta lógica era reafirmada por la introducción de otro elemento, la ética de la solidaridad, que nuevamente era articulada por la democracia. "Frente al fracaso y al estancamiento venimos a proponer hoy el camino de la modernización. Pero no lo queremos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética. Afirmaremos que solo la democracia hace posible la conjugación de ambas exigencias" (Alfonsín, *D.P.*, 1 de diciembre de 1985). El

primer paso para implementar una ética de la solidaridad era “Cambiar la mentalidad arraigada en nuestra sociedad, eliminar sus componentes de autoritarismo, de intolerancia, de egoísmo, de predisposición a la compartimentación sectorial y de ineptitud para el diálogo y el compromiso”, para finalmente llegar a la “construcción de una nueva voluntad colectiva”. Esta reconstrucción moral sería el mejor freno para aquellos que pretenden abolir o restringir la democracia, ya que “el egoísmo ha sido el caldo de cultivo tanto del autoritarismo pseudoliberal como del mesianismo populista”. La dimensión ética de la sociedad se convertía así en un componente imprescindible para la democracia, en tanto la renuncia al egoísmo permitiría la resolución de la puja de intereses diversos en una sociedad compleja, sin llegar al conflicto.

En síntesis, la propuesta de Parque Norte daba cuenta de que en ese momento, para el alfonsinismo, el cambio de régimen no era suficiente como para que se produjera, casi automáticamente un cambio en la conducta de la gente. Se necesitaba además una tarea específica, que lleve a una reforma global en el modo de pensar y entender la democracia. Este cambio no implicó que los elementos presentes tanto en el discurso de presentación del Plan Austral, como en el discurso de Parque Norte, hayan estado ausentes en los discursos anteriores de Alfonsín. Efectivamente se los puede encontrar tanto en su intervención en el simposio de Alemania (1981) citado en apartados anteriores, como en *Ahora*. La diferencia no menor reside en que en los discursos más recientes ocupaban un lugar más importante. La inflación y los problemas de cultura política habían sido preocupación del Alfonsín, solo que ellos eran entendidos como un producto de los problemas institucionales; en esta oportunidad, por el contrario, eran entendidos como causas. La reforma ética y la modernización, que antes se pensaba serían productos derivados del cambio de régimen, en estas nuevas intervenciones se las prioriza como tareas de la democracia.

El discurso de Parque Norte, a pesar de haber estado dirigido al partido radical, tuvo una amplia y diversa repercusión en el ámbito político y periodístico. Para el diario *La Razón*, por ejemplo, “El mayor mérito de este documento fue quizás el de haber postulado un enlace esencial entre algunas ideas que hasta ahora vagaban inconexas y dispersas en la

conciencia cultural de los argentinos” (2/12/1985). En cambio, para el columnista Manfred Schönfeld, del diario *La Prensa*, el discurso de Alfonsín era un fiel reflejo de la debilidad e inseguridad del gobierno: “Un hombre de gobierno seguro habla poco y dice mucho. Esto no sucedió nunca, hasta ahora, que recordemos, con Alfonsín. Un hombre de gobierno inseguro habla mucho y no dice nada. Esta fue, hasta ahora, la característica del presidente” (3/12/1985).

Por el lado de los partidos políticos, el PJ adoptó una postura crítica ante el discurso de Parque Norte. Diego Ibáñez, sindicalista y presidente del bloque justicialista sostuvo que “el país necesita hechos y no palabras”, agregando que “las manifestaciones del Presidente no tienen asidero frente a las acuciantes necesidades de la República (...) mal se puede conducir la nación si el grueso del pueblo no tiene posibilidad alguna de mejorar o lograr una mayor justicia social”. En una tónica similar, Torcuato Fíno, diputado justicialista declaraba que “desde hace años, el gobierno radical peca de verborágico; además de faltar de iniciativa para afrontar con realismo los problemas nacionales. El discurso del presidente no cambió esa situación” (*Clarín*, 03/12/1985). A diferencia del PJ, los demás partidos se refirieron positivamente al discurso. Romero Feris, gobernador de Corrientes por el Pacto Autonomista Liberal, señaló que con la convocatoria el presidente se elevaba por encima de la estructura partidaria, agregando “que es lo que de mi parte he estado proponiendo”. Explicó, además, que “es necesario que los argentinos aprendamos a coincidir en objetivos fundamentales”. Para Carlos Auyero, diputado de la D.C., la convocatoria “fue importante desde el punto de vista doctrinario, en donde hay una cantidad de ideas síntesis que comparten todos los sectores nacionales del país” y celebró que las ideas del Presidente supongan “no un proyecto autónomo de un partido sino el acuerdo entre las mayorías nacionales”. Para Enrique Inda, del Partido Socialista Auténtico, “el propósito común de lograr la unidad definitiva, solidaria y democrática de las grandes mayorías sólo se conseguirá con un proyecto de país verdaderamente soberano”.

La casa... ¿estaba en orden?

La crisis de 1987
El fracaso de la política militar
Las sublevaciones militares
El surgimiento del burocratismo
La crisis de 1989
El triunfo del menemismo

El año 1987 fue particularmente difícil para el gobierno de Alfonsín. Las esperanzas que había despertado la implementación del Plan Austral se habían desvanecido. La situación militar, lejos de resolverse, entraba en su etapa más dramática. Los tribunales civiles comenzaban a dar lugar a las acciones legales que se iniciaron contra militares de rango medio y bajo y estos expresaron su malestar ante la situación con el autoacuartelamiento del Teniente Barrera en Córdoba, hecho que después se extendió a las unidades militares de Campo de Mayo de Buenos Aires y a otras unidades de provincias. Estas acciones pasaron a ser conocidas como los “levantamientos carapintada de Semana Santa”.⁹⁰

Los “carapintada” no hicieron público y explícito los motivos de la toma de las unidades militares. Estos se inferían por la situación procesal en la que la mayoría de ellos se encontraba, suposiciones que fueron confirmadas poco tiempo después. En un inicio, algunos sectores interpretaron el accionar militar como un intento de golpe de Estado, otros, como una presión al gobierno para detener los juicios en contra de los militares de rango medio y bajo. Para Ernesto López (1994), las sublevaciones militares obedecían a un doble propósito: por un lado detener los juicios y negociar la impunidad, por otro, oponerse a la cúpula militar caracterizada de liberal, que no pudo o no quiso proteger a sus subordinados. Esta cúpula fue acusada por los “carapintada” de entreguista (:81-86).

Cuando se difundieron las primeras noticias de los hechos, una gran parte de la población se volcó a las plazas principales de las ciudades más importantes del país para manifestarse en contra de los movimientos “carapintadas”. Las movilizaciones, se hicieron cada vez más masivas y se mantuvieron hasta que finalizó la sublevación, tres días después. El gobierno

⁹⁰ El mote de “carapintadas” se les dio porque los militares que intervinieron en los hechos se pintaron la cara como en situación de combate. El referente principal de los levantamientos era Aldo Rico.

por su parte tuvo una reacción casi inmediata, pero su posición fue cambiando en relación inversa a la de la población.⁹¹ Mientras que esta última endurecía cada vez más su postura, el gobierno, que había expresado su firmeza al inicio, terminó cediendo ante el reclamo de los sublevados.

Analicemos más en detalle cuales fueron las posiciones que adoptó el gobierno con el correr de los días. El 16 de abril de 1987, un día después de iniciada la sublevación, Alfonsín dirigió la palabra en una reunión extraordinaria del Congreso de la Nación. Destacamos los siguientes párrafos de ese discurso: “No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que apunte a restringir el ejercicio de los derechos y las libertades que hacen a la naturaleza misma de la democracia. Tampoco he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos —con o sin uniforme— a los dictados de la ley (...). Este no es el exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obligue al gobierno a convertir en materia de negociación su política. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra conciencia democrática, las normas constitucionales así como las que rigen a las Fuerzas Armadas basadas en la disciplina” (*D.P.* 16/04/1987 :77).

“Entonces aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes, pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos” (: 78).

Queda claro que, para el entonces presidente, lo que estaba en juego era la democracia misma, ya que esta no podía admitir la impunidad, ni el trato preferencial ante la ley. Las

⁹¹ La población, como se señaló, inició sus manifestaciones en las plazas públicas, pero al tercer día de la sublevación comenzó a marchar hacia los cuarteles que se encontraban tomados.

exigencias de los militares eran incompatibles con la democracia que el propio alfonsinismo había definido, aún cuando la obediencia debida era una de las propuestas tímidamente expresadas en la campaña de la UCR para las elecciones de 1983. Coherente con las declaraciones realizadas en el Congreso, Alfonsín ordenó inmediatamente la represión a los sublevados por parte de los sectores del ejército que el mismo denominó “leales”, comandados por el General Alais. Pero los “leales” mostraron su poca disposición a reprimir en tanto se movilizaron desde Entre Ríos, ubicada a unos 150 Km. de Campo de Mayo, sin llegar nunca a destino.

El día 19 de abril, Alfonsín habló ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, desde los balcones de la casa de gobierno. Sus conceptos fundamentales fueron los siguientes: “El pasado nos ha alcanzado”, por eso “todos nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República. Estamos arriesgando el futuro nuestro y de nuestros hijos, estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos.” Finalmente anunció que en minutos se dirigiría a Campo de Mayo, para “intimar la renuncia de los sediciosos” (: 83). Tres horas después, a su regreso de Campo de Mayo, Alfonsín se dirige nuevamente a la multitud que permanecía reunida, en estos términos: “Compatriotas: Felices pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de Malvinas, que tomaron esta decisión equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Hoy podemos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina” (:85).

El cambio en la caracterización de los carapintadas era evidente: en sus primeras intervenciones, se trataba de un grupo organizado que en el pasado habían violado los derechos humanos y que ahora quería imponerle su impunidad al poder civil. El delito en que habían incurrido era el de sedición. En el discurso final eran héroes de Malvinas, hombres que se habían equivocado; y la figura de sedición cambió por la de amotinamiento.⁹²

⁹² La figura de la sedición es mucho más grave que la del amotinamiento y en la justicia militar de numerosos países se castiga con la pena de muerte.

El gobierno antes de salir a negociar con los sublevados, había logrado plasmar un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, con excepción de algunos partidos de izquierda. Este se refrendó en un documento que se lo tituló “Acta de compromiso democrático”. Los puntos más importantes de la misma eran el compromiso irrestricto de todas las fuerzas firmantes de defender el sistema democrático y de aportar todo lo que fuera posible para que se alcanzara la “definitiva pacificación del país”. Obviamente que el término pacificación era uno de las formas en que se pretendía codificar a la legislación que beneficiaría a los militares sublevados.

No hubo que esperar demasiado para que se conociera lo que en verdad se había negociado con los “carapintadas” en Semana Santa y el verdadero contenido de la llamada pacificación. El 13 de mayo de 1987, Alfonsín en persona presentó ante el Congreso de la Nación una iniciativa conocida de ahí en más como ley de “obediencia debida”. En esa ocasión defendió el proyecto de ley con los siguientes argumentos:

- Que el país había estado al borde de una guerra civil.
- Que en la historia política del país *todos* los argentinos compartían la responsabilidad ante los golpes de Estado.
- Que la promulgación de la ley de obediencia debida era el producto de la fortaleza de la sociedad, y
- Que la ley mencionada posibilitaría la pacificación y reconciliación nacional.

Para Alfonsín, “Los riesgos que se corrieron durante esos días fueron inmensos. Nuestro país estuvo cerca de un enfrentamiento cuyas consecuencias todavía nos estremecen. Estuvimos al borde de la guerra civil... se expresó de manera cruda la síntesis de más de medio siglo de historias el desencuentro de civiles y militares”. Esta caracterización, más allá de ser acertada o desacertada, le permitía a Alfonsín presentar lo realizado por el gobierno durante los acontecimientos de semana santa y la ley de obediencia debida como un logro en tanto se había evitado el peor de los males: la guerra civil.

Inmediatamente después el presidente realizó una reseña histórica relacionada con la conducta de los argentinos ante los golpes de Estado. Para él había una responsabilidad

“social en los golpes”, pues, “Los golpes han sido siempre civico-militares”. Se había establecido un círculo vicioso y, para colmo, “ese grave cuadro de distorsión se ahonde con la aparición del terrorismo, forma cruel, sanguinaria y, en definitiva, elitista de la acción directa” (*D.P.*, 13/05/1987).

Esta caracterización fue cerrada con una pregunta en la que se llevaba al extremo la generalización de la responsabilidad civil ante los quiebres institucionales: “¿Quién de los que consintieron, omitieron o callaron; quién de los que temieron, dudaron o apoyaron; quién, en definitiva, de los que sufrieron y lloraron han de sentirse liberados, absolutamente liberados, de toda responsabilidad, ajenos al drama e indiferentes en esta hora de construir el futuro sin olvidar lo que pasó?” (*D.P.*, 13/05/1987). Por error u omisión, por decir o no decir, por hacer o no hacer, por apoyar o por sufrir, todos, absolutamente todos los argentinos eran, según el presidente, responsables por los golpes de Estado.

Las consecuencias políticas de esta generalización de las responsabilidades ante los golpes militares y la discontinuidad constitucional no son aspectos menores. La no-distinción de responsabilidades lleva por un lado a inculpar a quines no solo no tuvieron responsabilidades, sino que además resistieron e incluso pagaron con su vida su oposición a los quiebres constitucionales, pero, por otro lado, toda generalización de culpas atenúa la responsabilidad de quienes activamente promovieron esas conductas. Esto no quiere decir que no hubiera sido deseable que la población reflexionara acerca del papel que cada uno jugó en los golpes militares, por el contrario, lo que se está sosteniendo es que la generalización de las responsabilidades obtura esas posibilidades de reflexión. En términos de Borón (1986), las generalizaciones “impiden el reconocimiento de las notas particulares que han distinguido y enfrentado a clases, grupos e instituciones a lo largo de la historia argentina”. Esa historia que “nos enseña que no todos los actores políticos fueron autoritarios o maniqueos” (:62).

Lo que en realidad estaba por detrás de esta supuesta apertura de una instancia de reflexión social, era que el gobierno no quería asumir en soledad el costo político de la decisión.

Pero esa sociedad responsable de los golpes militares era la sociedad del pasado. La de actual ya había madurado y se encontraba fortalecida, y esa fortaleza hacía posible, en la perspectiva del presidente, que la capitulación ante los reclamos carapintados más que un retroceso fuera un avance y superación. “El concepto del mesianismo pretoriano creció, se fortaleció y se concretó en repetidos atentados a la Constitución y a la voluntad popular, porque se gestó al amparo de una sociedad débil, una sociedad dividida, a veces enfrentada, que además había perdido el respeto a la ley y en muchas ocasiones buscaba en fórmulas mágicas y no en el esfuerzo responsable, la solución a sus problemas. Esta sociedad no existe más. Así lo mostraron los hechos de Semana Santa. Hoy la sociedad argentina tiene conciencia de su fortaleza, sabe que en ella radica el poder. Por todo esto ahora es posible cambiar la concepción militar. Si no nos hubiésemos demostrado a nosotros mismos de los que éramos capaces de hacer, les confieso que los pasos definitivos hacia la pacificación que estamos dando hoy hubiese resultado más una señal de debilidad o de una concesión que de generosidad o de justicia. Superar el pasado como hoy nos proponemos, nos habría dado la impresión que otra vez se trataba de una forma de hipotecar el futuro” (D.P., 13/05/1987).

A la sociedad, anteriormente se le había transferido la responsabilidad de los golpes de Estado, ahora se les transferían las responsabilidades ante la obediencia debida. Así como en la caracterización del pasado, la figura de los políticos quedaba diluida en cuanto a su responsabilidad para con los golpes de Estado en la de una sociedad débil, ahora, la del presidente se diluía en su responsabilidad para con el indulto en una sociedad supuestamente fuerte. Pero la obediencia debida no solo era presentada como una muestra de la fortaleza de la sociedad, constituía además una instancia de “reconciliación y pacificación”, condiciones indispensables para afianzar la democracia. En palabras de Alfonsín: “si los sucesos se encadenan como lo preveo, estaremos garantizando para los tiempos la democracia de los argentinos”. En pocas palabras, para Alfonsín, en los acontecimientos de semana santa, el gobierno había evitado con su accionar la guerra civil y su corolario, la ley de obediencia debida, era una muestra de una sociedad que había superado su debilidad histórica y que, basada en su fortaleza, estaba preparada para emprender el camino de la reconciliación y la pacificación.

Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo por mostrar a la ley de obediencia debida como totalmente compatible con la democracia que él mismo había contribuido a definir, su inclusión en el discurso democrático no fue plenamente lograda, más bien fue, para la población que se movilizó masivamente por esos días en repudio a la ley, y especialmente para los organismos defensores de derechos humanos (con quienes Alfonsín había evitado por todos los medios enfrentamientos), una clara muestra de debilidad, cuando no de traición, por parte del gobierno. Con ello amplios sectores de la población que habían sido interpelados por el discurso a favor del imperio de la ley, la justicia y el respeto a los derechos humanos, empezaban a enfrentarse al oficialismo y se desvanecía uno de los puntos que a duras penas mantenía algo de credibilidad del gobierno.

Los “carapintadas” en cambio, salieron fortalecidos. Su discurso silencioso terminó siendo más eficaz que el del gobierno en el que las palabras abundaban y demostró que, a pesar de ser un sector excluido de la democracia que se había construido, mantenía su capacidad para producir hechos políticos. Con el solo acto de sublevarse daba cuenta de que la tan proclamada subordinación militar al poder civil no era tal. Los uniformes militares de combate y las caras pintadas rememoraban y reivindicaban los momentos más trágicos de la historia argentina, la “guerra sucia” y la de Malvinas y representaban un modo de participar en la lucha política por elaborar el pasado. La reivindicación del pasado, que fue un tanto descuidada por los estudios de los movimientos carapintadas en tanto estos se centraron en el reclamo de la ley de obediencia debida, no es un dato menor. En realidad este era, junto con la ley de obediencia debida, el objetivo principal de los sublevados.

Pero la reivindicación del pasado servía también para competir con el gobierno y los altos mandos en la tarea de reconstitución del ejército. Los uniformes y las caras pintadas simbolizaban hacia el interior, a su sector combatiente, que se enfrentaba a los “militares de escritorio” en la lucha por la configuración de una nueva identidad para el ejército. Las sublevaciones vinieron a recordar, independientemente de hasta donde hayan estado dispuestos a llegar, que el telón de fondo de la guerra seguía estando presente. Probablemente ahí residía la fuerza de su discurso: cuanto mayor era el rechazo popular a los levantamientos, cuanto más cerca y real se presentaba la posibilidad de un

enfrentamiento con la población que marchaba hacia los cuarteles y, a sabiendas de que eso era lo que el gobierno quería evitar, más fuerte se hacían los “carapintadas”. En otras palabras, la movilización popular, que podía ser interpretada como una fortaleza del gobierno, era el arma con la que los carapintadas contaron, independientemente de si esta posibilidad haya sido considerada o no en sus cálculos iniciales. A medida que el tiempo pasaba y la movilización popular se exacerbaba y se hacía más independiente del gobierno, las posibilidades de que los carapintadas ganaran la pulseada se acrecentaban.

Las consecuencias que las sublevaciones militares tuvieron sobre la democracia fueron más que importantes, primero, por la promulgación de la obediencia debida, segundo, porque demostraron que la violencia política no estaba totalmente deslegitimada para importantes sectores de la población y, finalmente, porque quedó en evidencia que esta seguía siendo un modo eficaz para alcanzar objetivos. Todo ello se sintetizó en el hecho paradójico de que para que se instituyera la obediencia debida, tuvo que violentarse esa obediencia.

Los dos años siguientes no fueron mejores para el gobierno. Los militares rebeldes volvieron a protagonizar acciones violentas. Esta vez encabezados por el coronel Seineldin, se enfrentaron a los sectores “liberales” del Ejército, llegando al asesinato del teniente Pita. Las acciones de Seineldin fueron interpretadas por E. López (1994) como un enfrentamiento interno, pero con importantes consecuencias políticas, ya que reivindicaba los hechos de Semana Santa, la guerra sucia y pedía mejoras presupuestarias para las Fuerzas Armadas. Estas peticiones, a pesar de las reiteradas declaraciones de Alfonsín de que el gobierno no había adquirido compromisos con los sublevados, fueron parcialmente satisfechas.

Las dificultades del gobierno para mantener su discurso de disciplinamiento del ejército al poder civil y el respeto a la Constitución, eran más que evidentes. Con la ley de obediencia debida y luego con la del “punto final”, caía una de las pocas pero importantes banderas que el alfonsinismo había logrado mantener, la de haber enjuiciado a los militares que en la

dictadura militar habían violado los derechos humanos.⁹³ La promulgación de las leyes mencionadas fue ampliamente rechazada por la población, que expresaron su sentir en movilizaciones masivas en todas las ciudades importantes del país. A las marchas organizadas por los organismos defensores de derechos humanos y estudiantiles, los partidos de centro izquierda y de izquierda, se sumaron simpatizantes del PJ, que había votado aprobatoriamente las leyes en el Congreso y de la propia UCR.

A pesar de ello, en el país aparecía un nuevo fenómeno político: se presentaban a elecciones, consiguiendo una importante cantidad de votos, tres militares que habían tenido una participación activa en la dictadura militar y que se beneficiaron con las leyes de obediencia debida y punto final. Los generales Bussi en Tucumán, Ruiz Palacios en Chaco y Ulloa en Salta, hacían su ingreso exitoso en la arena política democrática. Simultáneamente, la situación económica no daba señales de mejoras. En el año 1988 la inflación seguía creciendo, y para inicios de 1989 se había transformado en hiperinflación. Los paros generales de la CGT se hacían cada vez más frecuentes y con índices más altos de acatamiento. Los enemigos del alfonsinismo -militares y sindicatos-, mostraban su fortaleza en relación directa con la debilidad del gobierno.

Se llegó así a las elecciones de marzo de 1989, en las que la UCR presenta de candidato a presidente a Ricardo Angeloz, con un perfil distinto -cuando no opuesto- al de Alfonsín. El PJ por su lado, llevaba de candidato a Carlos Menem, quien finalmente se impuso ampliamente en las urnas. Los resultados adversos al gobierno, sumieron a la Argentina en un estado de virtual desgobierno, en abril, mayo y junio de 1989, se sucedieron huelgas, movilizaciones, e inclusive saqueos a los supermercados en las principales ciudades, que llevaron a que la entrega del gobierno, prevista inicialmente para diciembre, se adelantara para julio de 1989. El presidente Alfonsín entregó el gobierno en una situación caótica a un nuevo presidente que por su propuesta política y su perfil personal se le oponía casi simétricamente.

⁹³ La ley de punto final fue el instrumento por el cual se dejaron sin efecto las presentaciones legales en contra de los militares que no se habían realizado hasta ese momento. Esta ley va en contra del principio que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Capítulo 4

El bussismo,

una forma diferente de entender a la democracia.

La actividad política del año 1987 fue particularmente agitada. A las sublevaciones militares de Semana Santa y a las luchas sociales que se extendían por todo el país, se agregaban las elecciones de renovación de legisladores nacionales y provinciales y el primer recambio de los gobernadores de provincias desde la vuelta a la democracia.

En el panorama político tucumano, se presentaban dos importantes novedades: el Justicialismo sufría una fractura que dio lugar al surgimiento de una nueva fuerza política provincial denominada Frente de Acción Provinciana y, por primera vez desde que existía el peronismo, se planteaba la posibilidad cierta de que la UCR llegara a la gobernación por la vía del voto. Las especulaciones de las elites políticas y de la prensa giraban en torno a esa situación.

A grandes rasgos, se puede decir que los ejes de la campaña electoral eran, para la UCR, la mala administración del PJ en la provincia, para el PJ, el mal gobierno de la UCR en el ámbito nacional y, para Acción Provinciana, la recuperación del peronismo ortodoxo, del “peronismo peronista”, según rezaba su lema. La UCR llevaba por candidato a gobernador a Rubén Chebaia, quien hasta ese momento se había desempeñado al frente de la intendencia de la capital tucumana, el PJ a José Domato, ministro de Obras y Servicios Públicos de gobierno provincial del PJ y Acción Provinciana a Renzo Cernigliaro, ex ministro de Economía y Hacienda del mismo gobierno. El tema de los derechos humanos había desaparecido del discurso de los partidos políticos mayoritarios, solo era planteado por la izquierda y los organismos defensores de los derechos humanos.

En forma simultánea y paralela a la campaña, los partidos y la prensa se ocupaban de otro tema que se tornó relevante en la medida en que por primera vez en la provincia, un tercer

partido político podía conseguir un caudal importante de votos. Especialmente para la UCR, la elección indirecta de gobernador por medio de un Colegio Electoral, establecida por la Ley N° 095, vigente desde 1907, era motivo de preocupación, porque introducía incertidumbres acerca de si se conseguirían los electores requeridos -más del 50% del total- para proclamar el gobernador sin depender del voto de las otras fuerzas políticas. No se sabía cual sería el comportamiento de los electores de las fuerzas políticas que no ganaran en las urnas. Por ese motivo, la división del PJ -que en principio parecía darle ventajas a la UCR- podía convertirse en el principal obstáculo para llegar a la gobernación.

Bussi se encontraba retirado del ejército desde 1980, y las últimas noticias que se tenían de él databan de cuatro meses atrás, ocasión en la que fue detenido en la provincia de La Pampa por solicitar un tribunal de honor en contra el jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Héctor Ríos Ereñú, quién, según Bussi, no había ejercido la responsabilidad acorde a su jerarquía de “preservar la única victoria militar indiscutible del Ejército, desde la organización nacional a la fecha, incurriendo con ella en actos de deslealtad con las instituciones”. Esta preservación pasaba -para Bussi- por “hacer las gestiones necesarias para que los tribunales civiles no intervinieran” (*La Gaceta*, 26/03/1987). Mientras permanecía recluido, Ávila Gallo, un dirigente del marginal partido provincial Bandera Blanca, lo visitó para ofrecerle la candidatura a gobernador, ofrecimiento que Bussi rechazó argumentando que “no tenía pensado incursionar en la política” (*L. G.*, 29/03/1987).

En plena campaña electoral, más precisamente, 24 días antes de las elecciones del 6 de septiembre, con la ley de obediencia debida promulgada, Bussi fue citado por la justicia civil y concurrió a Tucumán para declarar por un caso de sustracción de menores durante su gobierno.¹ A la salida de los tribunales, lo esperaba una veintena de personas que coreaban su nombre y le pedían que volviera a la provincia. Horas más tarde, según versiones de Bussi, Ávila Gallo lo visitó en el Regimiento donde se encontraba hospedado e insistió en ofrecerle la candidatura a gobernador, la que fue aceptada a condición de que se organizara un acto para la tarde de ese mismo día, con el objeto de medir el grado de aceptación y convocatoria que podía tener su figura. Al anochecer, en las puertas del comité de campaña

¹ No estaba claro por ese entonces si La Ley de Obediencia Debida dictada meses antes beneficiaría a Bussi.

de Bandera Blanca se reunió una importante cantidad de personas ante las cuales Bussi dirigió la palabra por primera vez en calidad de político.

El repentino ingreso de Bussi a la arena política tucumana despertó el asombro, la curiosidad, la indignación y también las expectativas de amplios sectores de la sociedad argentina y de la tucumana en particular. Su sola presencia convulsionó todo el tablero político local, sentenciaba una editorial del diario *La Gaceta* del 13 de Agosto de 1987. Las elecciones de la provincia de Tucumán, apenas consideradas por la prensa nacional, pasaron a ser con este hecho, objeto de mayor atención y también de las más diversas especulaciones. La mayor parte de las lecturas que se hicieron en un inicio, eran que el General solo aspiraba a ocupar un cargo electivo para conseguir fueros que le permitieran eludir el accionar de la justicia en su contra por la violación a los derechos humanos. Se pensaba además que, en el remoto caso de que Bussi llegara a ocupar una banca, la usaria para reivindicar a la dictadura y con ello atentar contra la democracia. El razonamiento que seguía esta especulación era el que, cualquiera que rescatara al régimen anterior, estaba de hecho en contra de la democracia, se constituía en un golpista, ya que democracia y dictadura se definían mutuamente en una relación de exclusión. En pocas palabras, para estas lecturas, Bussi representaba a un pasado excluyente e incompatible con el presente.

Sumado a ello, las elites políticas suponían que, por representar a ese pasado, lo único que Bussi podía esperar, era un enérgico rechazo por parte de la población. En este sentido, no solo no representaba una amenaza al régimen, sino que ni siquiera era considerado un posible competidor en el terreno electoral. Los resultados de las elecciones, uno tras otros, demostraron lo contrario: Bussi no solo recibió un importante apoyo por parte de los votantes, sino en que gran parte de su accionar demostraba que podía ser un actor competente en el terreno electoral.

En los apartados que siguen, se analiza el periodo que se extiende desde la primera incursión de Bussi en la política, pasando por la fundación y consolidación del partido Fuerza Republicana, el triunfo en las elecciones de gobernador 1995, hasta el inicio de la declinación de su liderazgo al final de su mandato.

La campaña electoral de 1987
y el ingreso de Bussi a la política

Las campañas de los partidos tradicionales
Los dos peronismos
La táctica acuerdista de la UCR
El ingreso de Bussi a la arena política
Las distintas posiciones que asumía en su discurso

La regla de elección indirecta de gobernador planteaba la posibilidad de que cualquiera de los partidos pudiera necesitar de un acuerdo con electores de otros partidos, y eso llevaba a que, en las campañas de los partidos mayoritarios -especialmente de la UCR, a la que las encuestas daban como ganador-, no se desarrollaran estrategias electorales demasiado agresivas para con los otros. Tanto el PJ como la UCR se cuidaban de tender puentes para posibles acuerdos, postulando la necesidad de un gobierno que integre a las fuerzas políticas mayoritarias: el PJ mediante la conformación de “un gobierno de puertas abiertas”; la UCR por la búsqueda de coincidencias que permitan superar la crisis. Por eso, el candidato de los radicales planteaba que “el adversario de la provincia no está en los partidos políticos que legítimamente concurren al comicio, confrontando ideas, propuestas, fortaleciendo a la democracia”; sino que, por el contrario, “el gran adversario es la decadencia, el atraso, la falta de desarrollo y la pobreza”. Profundizando el diagnóstico, Chebaia caracterizaba a la situación de la provincia “como de crisis política, sobre la que se asienta la crisis económica, social y cultural”. Por lo que la salida de esa crisis debía ser también política y necesitaba de un gobierno que cuente con el apoyo de un partido fuerte y unido, cosa que el peronismo no podía ofrecer (*L.G.*, 23/7/1987). Pero, la búsqueda de coincidencias que proclamaba la UCR, no solo obedecía al cálculo de lo que podía pasar en el Colegio Electoral, respondía además a una estrategia nacional del partido que, apretado por la situación económica y militar, priorizaba el acuerdo por sobre las diferencias.²

Las estrategias de diferenciación pasaban por realizar una construcción discursiva de la de crisis en la que la responsabilidad de la misma recayera sobre los otros: para el PJ el

² Recordamos que el fracaso de las reformas sindicales (1985) y las sublevaciones militares (1987), estudiadas en el capítulo anterior, llevaron a que el gobierno nacional cambiara su estrategia de enfrentamiento con militares y sindicalistas y adoptara una política más acuerdista, cuando no conciliadora.

responsable era el gobierno nacional, del cual la provincia era una víctima, el pobre desempeño de la economía nacional afectaba a la provincia, cosa que se acentuaba y agravaba por el abandono por parte de la Nación de las provincias con signo político diferente. Pese a ese intento, el PJ no lograba disimular las enormes dificultades para presentar un discurso más o menos coherente y unificado, y las divisiones no solo se manifestaban en la fractura que había llevado a la conformación del F.AP., sino también en que la fracción liderada por Ricardo Díaz, candidato a intendente de la capital, pretendía presentar un perfil diferente al del candidato a gobernador y propiciaba el corte de boletas. Para la UCR, la situación por la que atravesaba Tucumán se debía a la mala administración de los fondos enviados por coparticipación y sostenía que un gobierno radical mejoraría las relaciones con la Nación, lo que redundaría en beneficios para la provincia.

Cirigliaro, a su vez, levantaba las banderas del peronismo ortodoxo y apuntaba sus críticas a la conducción oficial del PJ, buscando capitalizar el voto de los peronistas descontentos con el desempeño de ese partido en la gobernación y de los independientes que querían expresar su disconformidad con el gobierno nacional. En pocas palabras, Acción Provinciana pretendía ser el catalizador de la disconformidad tanto, con el gobierno nacional como con el provincial y su aspiración era la de conseguir los electores suficientes como para convertirse en el árbitro que decidiera el futuro gobernador, cosa que supuestamente incrementaría superlativamente su espacio de negociación.

El candidato de la UCR, Rubén Chebaia, un abogado de 32 años y dirigente nacional de la corriente Renovación y Cambio, llegó a esa candidatura después de imponerse ampliamente en la elección interna ante Ricardo Norry, quien representaba a la ala histórica del balbinismo. Contaba además con el antecedente de una aceptable gestión al frente de la comuna capitalina. José Domato, en cambio, cargaba con los lastres de pertenecer a la desgastada administración provincial y de las acusaciones del FAP que lo señalaban como el principal organizador de un supuesto fraude en las elecciones internas.

Los estudios y encuestas preelectorales daban, un mes antes de las elecciones, como claro ganador al Partido Radical. Las preferencias se distribuían del siguiente modo: en la capital

el 52% se inclinaba por la UCR, el 22% por el PJ, un 10% por Acción provinciana y el resto indefinido; en la zona este un 42% para la UCR, el 39% para el PJ, el 7% para Acción provinciana y un 12% de no definidos y, en la zona oeste, un 45% para la UCR, el 32% para el PJ, el 6% para Acción provinciana y el 17% de indefinidos (encuesta realizada por Nudelman Bass, *La Gaceta*, 17/08/1987). Quedaba claro entonces que, a pesar de la importante diferencia a su favor, la UCR no conseguiría reunir los electores necesarios para llevar a su candidato a la gobernación sin depender de los electores de los otros partidos.

La UCR -que ya se consideraba ganadora en las urnas- buscaba asegurar la elección del gobernador por dos caminos: por un lado, reformar la ley electoral y establecer la elección directa o, en su defecto, alcanzar un acuerdo con los demás partidos para suscribir un acuerdo para que en el Colegio Electoral se eligiera al candidato que haya sacado más votos en las urnas. Por otro, producir una fuerte polarización entre los partidos mayoritarios, que llevara a una situación en la que se pudiera prescindir de terceros. El intento de reforma de la ley no pasó del debate en la cámara baja y la polarización -como veremos más adelante- no llegó a eliminar a los partidos no tradicionales.

En ese escenario Bussi hizo su primer incursión en la política. Su presencia en un improvisado acto realizado en las puertas del partido Bandera Blanca preanunciaba lo que una semana después se haría oficial: el 25 de agosto se presentó en el más importante diario local para anunciar que aceptaba la presidencia de ese partido y la candidatura a gobernador. Aprovechando la ocasión realizó las que serían sus primeras declaraciones públicas, estableciendo importantes diferencias con el resto de los candidatos e insinuando los que serían los ejes de su corta campaña.

A la propuesta de acuerdo y la búsqueda de coincidencias entre la dirigencia política de los candidatos de los partidos mayoritarios, Bussi respondía que “por ser un hombre de servicio, mi compromiso es con la comunidad tucumana, exclusiva y excluyentemente”, aunque esto no impedía “mantener una relación cordial con todos los partidos políticos, sus dirigentes y candidatos”, siempre y cuando estos pusieran “por arriba los objetivos programáticos, dejando de lado las injurias y las ofensas”. Es decir, por un lado, declaraba

su disposición al diálogo, pero al mismo tiempo calificaba a sus posibles contraparte como hombres que no son de servicio, que privilegian los acuerdos corporativos por encima de la comunidad, a diferencia de él que tenía en claro que “por sobre las banderías políticas está el país” (*L. G.*, 25/08/1987). Lo que diferenciaba a Bussi de los políticos –en su versión–, no eran solo las características personales de uno y otros, sino la procedencia de ámbitos totalmente diferentes: el de la política caracterizado por el interés personal y sectorial y el del ejército, que se distinguía por el servicio desinteresado y general.

Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, los políticos eran definidos por Bussi como sus adversarios, pero no sus enemigos. Los enemigos eran aquellos que querían recordar el pasado de las violaciones de los derechos humanos, esas “lobas que aúllan solitarias y derrotadas. Esas voces agoreras, mensajeras del odio, el rencor y de la venganza, que parecen reclamar el regreso de sus manadas derrotadas por el pueblo y el Ejército” (*L. G.*, 25/08/1987). Los enemigos eran –en lo que parece ser una clara alusión a las Madres de Plaza de Mayo– los representantes del odio y del pasado, los que se definían en contraposición a los vencedores, el pueblo y el Ejército, ubicados en un orden inverso a como se definía el nosotros durante la dictadura.³

Su presentación y su propuesta se basaban en un recuerdo selectivo del pasado y en una permanente apelación a posiciones diferentes, según cual fuera su interlocutor: para diferenciarse de los políticos se presentaba como un soldado y un hombre de servicio, pero ante las acusaciones por su accionar en la dictadura respondía que era “tarde para imputaciones”, que la “guerra pasó” y que “el soldado dejó de ser soldado y es un ciudadano que en las urnas quiere disputar el derecho de regir a Tucumán”. Ante el mundo político se presentaba como lo nuevo, lo que venía desde afuera, libre de los vicios que suponía el ejercicio profesional de la política, pero ante la posibilidad de gobernar decía ser alguien experimentado, “un hombre que no es nuevo que viene con un programa nuevo. Soy un ex comandante del Operativo Independencia y ex gobernador a quien conocen sobradamente”. Por eso su propuesta era la de “reeditar el plan de gobierno hasta 1977” (*La*

³ Recordemos que en el discurso de la dictadura, analizado en el capítulo II, el Ejército aparecía por delante del pueblo, y este último era reconocido como tal solo cuando aceptaba la dirección del Ejército.

Gaceta, 25/08/1987). Como se verá más adelante, muchos estos elementos fueron mantenidos y desarrollados en la campaña de Bussi, pero antes examinemos cuales fueron las reacciones que generó en las elites políticas y la prensa esta presentación.

Los partidos políticos tradicionales no le dieron mayor importancia a la candidatura de Bussi. En una entrevista conjunta, los apoderados del PJ y la UCR subestimaron las posibilidades del General en el terreno político y pronosticaron que no sacaría más de 5.000 votos. Además, aparentemente, entre estos partidos existía un acuerdo de no hablar de Bussi, de “hacerle el vacío”, no reconocerlo como interlocutor válido y mucho menos como un potencial competidor. Este acuerdo se hizo evidente cuando se difundió la noticia de que el candidato del PJ había mantenido una reunión con Bussi sin consultar a la plana mayor del partido, la cual, ante esta situación, llegó a barajar la posibilidad de cambiarlo. También le valió un tímido reproche de la UCR que, mientras sus principales candidatos, “con la mirada fija en las elecciones, guardaron un sepulcral silencio sobre el tema”, por intermedio de sus dirigentes de línea media expresaba que más allá de no querer inmiscuirse en asuntos internos de otros partidos, les parecía que la reunión no había aportado nada positivo a la política (*L. G.*, 27/08/1987).

Las reacciones que produjo la reunión Bussi-Domato, revelaron la fragilidad de la posición de la UCR y el PJ, pues si este simple hecho llevó a que se planteara la posibilidad de cambiar al candidato del partido en el gobierno, la importancia de la presencia de Bussi era más que evidente. Lo que no percibían -o no querían percibir- los partidos mayoritarios era expresado por la prensa, que, en sucesivas editoriales, planteaba que “la candidatura de Bussi introduce importantes cambios en el escenario político” (*La Tarde*, 26 de Agosto de 1987). Estos cambios se manifestaban no solo en el debate en el que se sumió el peronismo después de la mencionada reunión. También planteaba incógnitas para Acción Provinciana, que hasta ese momento se presentaba como la única alternativa al bipartidismo y como potencial capitalizador del voto independiente y de los descontentos. Para la Alianza de Centro (que nucleaba a los partidos que defendían la liberalización de la economía y que en el pasado habían apoyado activamente a la dictadura), la candidatura de Bussi significó la virtual fractura entre quienes proponían apoyar al General y los que querían mantener “la

pureza del ideario liberal" (*L.G.*, 25/08/1987). También para la izquierda, la presencia de Bussi en la arena política era importante e hicieron de la denuncia a la violación de los derechos humanos uno de los ejes de su campaña, al tiempo que denunciaban al supuesto vacío de los partidos mayoritarios como "silencio cómplice".

La presencia de Bussi actualizaba el debate sobre los derechos humanos que a toda costa los partidos mayoritarios -que acababan de aprobar la ley de obediencia debida en el Congreso de la Nación-, querían eludir. Pero, faltando 7 días para las elecciones tuvo lugar un hecho que obligó a que todas las fuerzas políticas se pronunciaran sobre el tema: en la pequeña ciudad de Tafi Viejo, estaba prevista la realización de un acto de Bandera Blanca con la presencia de Bussi. Algunos partidos de izquierda y los organismos defensores de los derechos humanos organizaron una marcha en su contra y en momentos en que ésta avanzaba en dirección al lugar en que estaba emplazado el palco para los oradores, algunos simpatizantes de Bussi sacaron sus armas y abrieron fuego contra los manifestantes, hiriendo a dos jóvenes, uno de los cuales falleció días después en un hospital de la capital.

Las noticias de los acontecimientos ganaron inmediatamente las primeras planas de la prensa y, en cuestión de horas, la casi totalidad de las fuerzas políticas, organizaciones civiles, sindicatos y organismos de derechos humanos organizaron una marcha para repudiar los hechos. Para participar de esa marcha se hicieron presente en Tucumán dirigentes políticos y de organizaciones de derechos humanos nacionales: Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Hebe de Bonafinni, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Marcelo Parrilli del Centro de Estudios Legales y Sociales, Patricio Echegaray, dirigente del Partido Comunista, Silvia Díaz del MAS, Luis Cáceres de la UCR, los presidentes de la Federación Universitaria Argentina, de Córdoba y Rosario, entre otros.

En la organización de la marcha se pusieron nuevamente en evidencia las diferencias entre los partidos mayoritarios por un lado y los organismos de derechos humanos y la izquierda por otro. Los primeros se mantenían en la posición de "no politizar el acto" con el objeto de mantener la unidad de la protesta y de no producir una posible polarización entre Bussi y el resto de los candidatos en las elecciones que se aproximaban. Para las organizaciones de

derechos humanos y la izquierda, en cambio, el acto debía tener un carácter eminentemente político y representaba una oportunidad, no solo para impugnar la candidatura de Bussi, sino también para rechazar nuevamente las leyes de obediencia debida y denunciar el papel que jugaron para su aprobación los partidos mayoritarios. Finalmente, la primera posición prevaleció y la marcha se realizó bajo la general y abstracta consigna de “Por la Paz y la Justicia”, sin mencionar a Bussi, ni a los hechos que la originaron. Se acordó además que no hablarían representantes de los partidos políticos y que el único orador sería el presidente de la Federación Universitaria de Tucumán (en manos Franja Morada, corriente universitaria de la UCR), quién leería un documento acordado por los convocantes.

La marcha tuvo una concurrencia multitudinaria y, a pesar de los esfuerzos de un sector de la dirigencia, la mayor parte de las consignas que se cantaron se dirigieron en contra de Bussi, del silencio de los grandes partidos ante su presencia en Tucumán y de la ley de obediencia debida. Las tensiones originadas y la posición en la que quedaron las dirigencias de los partidos mayoritarios los obligó a llevar adelante algunas acciones para reparar su imagen. Insistiendo en su estrategia de no hablar de Bussi, el PJ organizó una misa para pedir por la salud del joven herido en Tañi Viejo. La UCR también organizó una misa en memoria del padre del candidato a gobernador, secuestrado y desaparecido durante el gobierno de Bussi. Estas acciones, lejos de reparar la imagen de los partidos mayoritarios, fueron tomadas por quienes esperaban una repuesta más decidida y enérgica, como una muestra de oportunismo y falta de compromiso. Estaba claro entonces que los partidos mayoritarios se negaban a identificar a Bussi como un enemigo político, por un lado, porque supuestamente este no representaba una amenaza a sus intereses inmediatos, que eran los de ganar las elecciones que se avecinaban, por otro, porque cualquier enfrentamiento podía volverse en su contra, en tanto ellos mismos -apenas cuatro meses atrás- habían aprobado la ley por la que se lo eximió de toda culpa. Recordemos además que en el momento de aprobación de la ley de obediencia debida, el propio Alfonsín desmontó en parte la imagen de enemigo que anteriormente había construido de los militares de la dictadura.

Lejos de sentirse intimidado por esos hechos y por el repudio que ellos generaron, Bussi acusó a “quienes tienen miedo de enfrentarlo en las urnas” y quieren impedirle “el derecho democrático a ser candidato por medio de metodologías que pertenecen al pasado”. A los partidos mayoritarios acusaba a su vez de permitir este tipo de manifestaciones mediante el silencio cómplice. En un acto realizado en la ciudad de Concepción reiteró que “no vengo como político, sino como un soldado más que combatió a la subversión y que pretende ver que cada individuo sea el producto de sí mismo”, a lo que agregó que, como muestra de buena voluntad y, “como un aporte más para la pacificación”, ese sería el último acto público que realizaría antes de las elecciones (*La Gaceta*, 20/08/1987).

A partir de ahí, su proselitismo se limitó a las publicaciones propagandísticas en diarios y en la televisión. En medio de una ruidosa campaña electoral, los avisos publicitarios de Bussi en la TV consistían en una leyenda en la pantalla que, sin música ni voz de fondo, decían: “este es un espacio pagado por Bandera Blanca, para que Ud. descanse y pueda reflexionar, Bussi gobernador”. En los diarios *Siglo XXI*, *La Tarde* y *La Gaceta*, publicó tres mensajes a página impar completa. El primero, del 27 de agosto, llevaba el siguiente título: “Hubo un tiempo en que los tucumanos estaban orgullosos de su provincia”, seguido por la leyenda “Hoy renace la esperanza” y una foto suya en el centro, con un gesto serio, adusto, cruzada por una faja con una leyenda que sentenciaba, “BUSSI HA VUELTO”, cerrada por la frase “por el bien de todos”.

En esta publicidad, Bussi explotaba un hecho que las fuerzas mayoritarias querían ignorar: que su sola presencia en Tucumán constituía un acontecimiento político importante. Remarcando la presencia con su foto y con la leyenda “BUSSI HA VUELTO”, daba cuenta por un lado de una campaña centrada en la persona, pero por otro, de alguien que no necesitaba de demasiadas palabras ni presentaciones, pues sus destinatarios –“los tucumanos, todos”- “sabían” quien era, su presencia en el pasado había sido tan importante, que su posterior ausencia produjo un vacío que entonces, con el regreso, volvía a llenarse. Su mensaje redentor y de esperanzas se dirigía a todos, sin distinciones, a los cuales se les presentaba la posibilidad de recuperar el autoestima y el orgullo de otras épocas, sin que se necesitara hacer demasiadas aclaraciones de cual era ese tiempo, pues nuevamente aquí, sus

interlocutores “sabían” a cual periodo se refería. Ese pasado era objetivo, operaba como dato, como un hecho que no podía ser puesto en cuestión ni necesitaba de aclaraciones. En pocas palabras, esta publicidad apuntaba más que nada a reinstalar contundentemente la figura de Bussi y a establecer con sus destinatarios una relación estrecha, en tanto productor y receptores del mensaje, compartían la misma percepción y conocimiento. Pero a la vez esa relación también era distante y asimétrica, pues la figura del líder redentor, se colocaba muy por arriba de la otra, la beneficiaria de la reparación.

El segundo mensaje publicitario, salió 3 días después en los mismos diarios y es notable que se complementaba con el anterior. Su título era: “Hubo un tiempo en que todo el país admiraba a los tucumanos”, con el subtítulo “En solo 17 meses se realizaron estas obras. Ahora júzguelo Ud.!”. Después se enumeraban 48 obras públicas que supuestamente se habían realizado durante su gestión en la dictadura. La leyenda estaba acompañada por una imagen de Bussi atravesada por una banda con la leyenda “BUSSI gobernador” y finalmente la página era cerrada con la frase “por el bien de todos”.

A pesar de que en ambos avisos se mantenía al registro de la mirada como la instancia constituyente (en ambos se apela a la percepción), a diferencia del título del aviso anterior en el que se aludía a la autopercepción de los tucumanos en otros tiempos, este se refiere a la percepción que los otros tenían de los tucumanos. El orgullo (aludido en el primer aviso) no era producto del engaño o la ilusión, la admiración que se despertaba ante la mirada de los otros -todo el país- constituían la prueba. Nuevamente se buscaba un interlocutor general, pero esta vez el mensaje se desagregaba y focalizaba en cada uno. Es decir, era general en tanto se dirigía a todos los tucumanos, pero también era particular en la medida en que buscaba interpelarlos como individuos y no solo como un colectivo. Se les pedía que juzgaran lo realizado en tan solo 17 meses, supuestamente se apelaba así a la razón. Pero este juicio fue solicitado cuando se suponía que la creencia y el mito ya estaban operando, en realidad no se trataba más que de una constatación de algo que “ya todos sabían”. Las pruebas del milagro eran presentadas solo una vez que la fe y la esperanza habían renacido. La vuelta, para ser completa, debía coronarse con la gobernación, para “el bien de todos”. Esta haría realidad el retorno del orgullo propio y la admiración ajena. Ni en

este, ni el primer mensaje, habían alusiones a la guerra sucia y tampoco estaba explicitado cual era el contradestinatario, aunque fácilmente podía inferirse que eran aquellos que le habían quitado la esperanza, los motivos de orgullo y de admiración a los tucumanos.

El último aviso, publicado el 4 de septiembre, día de cierre de la campaña electoral, fue una carta abierta titulada “BUSSI a los tucumanos”, a los que convocaba a “vencer la miseria, la mentira, la injusticia, el desorden, la frustración y la desesperanza”. El destinatario general era remarcado en el encabezado del primer párrafo, que reiteraba “Tucumanos”. Este primer párrafo estaba dedicado a demostrar la disposición de Bussi a jugar en el terreno político democrático y era un intento por capitalizar para sí los hechos violentos que habían tenido lugar en Taí Viejo, sin hacer referencia directa a ellos. Su estrategia discursiva fue la de ubicarse en el lugar de víctima del ataque de la “irracionalidad de unos pocos”, que era respondida -por él- con el gesto de suspender voluntariamente sus presentaciones públicas, lo que demostraba su disposición a “contribuir con la convivencia democrática”, cosa que – en la versión de Bussi- era totalmente coherente con su conducta en el pasado. Aprovechando la oportunidad para ofrecer una nueva versión de la historia, diametralmente opuesta a la que definía a la democracia en oposición a la dictadura del Proceso, Bussi se definía como un defensor de la convivencia democrática “por la que siempre luché y seguiré luchando”. Su actitud no solo era una “prueba” de su disposición para defender la democracia en el presente, también redefinía retroactivamente al pasado y lo integraba en un todo coherente. El enemigo, antes omnipresente, ahora reducido a “unos pocos”, pero que contaban con “la complicidad de otros muy pocos pero con medios de comunicación y acceso a los resortes del poder”, hacían de él una víctima, tomándolo “como sujeto y objeto de una acción psicológica y propagandística -nacional y provincial- que tergiversa hechos del pasado y hechos presentes”, también se definían como enemigos de la democracia en tanto querían impedir que él, “como simple ciudadano, solo con mis verdades y el fervor de millares de tucumanos”, pudiera “ejercer el derecho constitucional de disputar en las urnas de un país que pretende y debe ser civilizado, la voluntad de los tucumanos para salvar a su provincia del desaliento, pobreza e inseguridad”. Los irracionales atacándolo a él no solo atentaban contra la democracia, su accionar impedía que el país fuera civilizado y que la provincia pudiera salir del estado en que se encontraba.

El salvador, defensor de la democracia y la civilización, representante vivo del orden, la justicia y la esperanza, definía su lugar de enunciación e invertía toda la lógica con que una buena parte de la población argentina había construido la historia y la memoria y trastocaba parte de la historia oficial que lo identificaba como uno de los dos demonios.

En el segundo párrafo se dedicó a caracterizar breve, pero contundentemente, a la situación de Tucumán apelando a una fórmula que ya empleara en 1976 y que también fuera usada por Alfonsín en 1983. Decía que “Hoy la provincia se encuentra envuelta en una crisis social y económica que, acaso, no encuentre parangón en la historia”. Esta pintura catastrófica, tan frecuentemente empleada en la política argentina, debe ser leída en forma complementaria con los avisos anteriores en los que se destacaban las bonanzas de su gestión al frente del ejecutivo provincial durante el Proceso. El contraste debía ser notable, entre una actualidad de crisis sin parangón y un tiempo pasado en el que los tucumanos se sentían orgullosos de sí mismos y eran admirados por el resto del país. Pero además esta situación tenía sus responsables: “LOS PARTIDOS POLÍTICOS llamados mayoritarios” que habían “demostrado en el ejercicio del poder su incapacidad para encontrar soluciones”. Los partidos con “su accionar electoralista y su ineficacia administrativa, han convertido a esta querida provincia en una suma de anhelos frustrados”. Pero el general, en esa configuración del adversario sería más preciso aún, radicales y peronistas no representaban una salida y su desempeño al frente del gobierno nacional y provincial respectivamente era la prueba más categórica de ello. Sus propuestas y promesas electorales no eran más que un “engaño”. A diferencia de ellos, Bussi proponía conformar una “Nueva alternativa política para una nueva alianza social, integrada por todos los sectores y grupos de la sociedad que sienten realmente a su provincia, para sacar a Tucumán de su actual situación”. La clave estaba en el “esfuerzo de todos los tucumanos”.

La mejor garantía que ofrecía, era aquello que lo diferenciaba de sus adversarios, algo que estos no podían ofrecer: ser alguien que no pertenecía al mundo de la política y estar motivado únicamente por la vocación de servicio. Eso solo hacía la diferencia. “NO SOY UN HOMBRE POLITICO y, por lo tanto, no soy propenso a formular promesas

electoralistas”, decía el General, estableciendo una relación de causalidad entre los políticos y la promesa incumplida y oportunista.

“SOY UN HOMBRE DE SERVICIO, que no promete; realiza hasta donde humanamente es posible realizar” –parafraseaba a Perón-⁴ y se remitía a las evidencias: “Allí están, la conoce todo Tucumán, una obra de gobierno que, en solo 18 meses, llevó a cabo una gestión que marca un hito en la vida política de la provincia, reconocida por toda la Nación”.⁵ Lo que parecía necesario enumerar y recordar en el segundo aviso, en este aparece invocado como un conocimiento ya incorporado en el sentido común. Lo que en este aviso se considera un hito en la vida política, en el pasado era un logro de una dictadura que se empeñaba en responsabilizar a la política de todos los males.

Tomando y dándole nuevos significados al tibio argumento con el que la oposición pretendía relativizar la importancia de la obra pública durante la dictadura, en tanto esta se había realizado en una situación diferente, Bussi replicaba haciendo de este argumento una verdad. Reconocía que “Las circunstancias no son las mismas”, pero agregaba a favor suyo que “lo hicimos durante una guerra, con una economía de guerra”. El argumento de los partidos mayoritarios terminaba volviéndose en su contra y sirviendo a quien querían descalificar, no solo porque se trastocaba su significado, sino además porque en este argumento había una aceptación implícita de la magnitud que Bussi pretendía darle a lo realizado durante la dictadura en términos de obra pública y, peor aún, porque implícitamente se aceptaba que el autoritarismo podía ser más eficaz que la democracia. Con el objeto de quitarse de encima la responsabilidad del pobre desempeño de sus gestiones, los políticos se la transferían –con o sin intención- al régimen, pues su argumento de las “circunstancias distintas” podía interpretarse como que “Bussi pudo hacer lo que hizo porque no tuvo las dificultades que la democracia supone”. Bussi, que no contraponía Proceso a democracia y no entendía las distintas circunstancias en términos del régimen, aprovechaba la oportunidad para darle un carácter popular a lo realizado. En su

⁴ “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” reza una de las conocidas como las “dichas verdades de Perón”.

⁵ La diferencia de un mes que puede advertirse entre el aviso anterior y este no sabemos si se debe a un error de tipado del diario, o a que la gestión de Bussi durante la dictadura, fue de un poco más de 17 meses.

versión, “ELLO (la obra pública) FUE POSIBLE PORQUE LO HICIMOS CON TODOS LOS TUCUMANOS, verdaderos artífices del resurgimiento de la provincia”.

Remarcaba en el párrafo siguiente: “NO SOY UN HOMBRE POLÍTICO, soy un hombre de servicio y, por lo tanto, comprometido sólo con la sociedad tucumana”. Los elementos que eran presentados en párrafos anteriores en forma separada –no político, vocación de servicio y compromiso social–, aparecen en esa ocasión articulados en una sucesión que pretende ser una deducción lógica y que, aunque no explicitada, se contrapone a otra sucesión, también lógica, entre político, interés particular y compromiso sectorial o corporativo: (no político → vocación de servicio → compromiso con la comunidad) opuesta a (político → interés particular → compromiso sectorial o corporativo). Esta deducción lo llevó a negar su participación en una de las acciones que definen a la política: la negociación. “Se equivocan quienes especulan o pretenden comprometerme con componendas políticas, pactos o arreglos de cualquier naturaleza”, decía Bussi tratando de reafirmar su supuesta relación privilegiada y directa con la comunidad. “El único compromiso que hoy adquiero es con todos los hombres y mujeres de Tucumán”, agregaba, tratando de configurar más claramente aún al destinatario privilegiado de su discurso, cosa que no hacían los demás políticos que se mostraban más preocupados por los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar en el Colegio Electoral.

Establecidos el lugar de enunciación, los destinatarios privilegiados de su discurso y el lugar de los oponentes, Bussi se disponía a exponer su propuesta que, en lugar de tener la forma de un programa a ser ejecutado por su partido en el gobierno, era expresada en términos de una convocatoria personal. El subtítulo denominado “MI COVOCATORIA”, contenía tres puntos. En el primero, proponía “No volver sobre lo realizado” enfatizado con un enérgico “basta de revisionismos”. Este punto, en el que aparentemente se propone un empezar de nuevo, debe ser leído en el texto en el que se encuentra inserto y en relación a la totalidad del discurso de Bussi desde su retorno. El propósito no revelado de esta operación era el de construir una memoria selectiva (cosa que probablemente se hace en toda construcción de memoria), en la que se dejara atrás aquello que no favoreciera a Bussi en ese momento, pero rescatando lo que podía constituirse en su principal capital político.

de hegemonía que la democracia tenía en la Argentina, en todo caso, daba cuenta de que su potencial articulador seguía vigente. Sin embargo, su integración no era pasiva, haciendo de catalizador de demandas sociales tales como el reclamo de orden, justicia y bienestar, trató con relativo éxito de explotar los significados residuales de la democracia que las elites políticas trataban de eliminar, reduciendo su definición al sistema de partidos y al juego de acuerdos que en éste podía darse.

Pero esta explotación de sentido no siempre la hacía introduciendo nuevos significantes, sino tomando aquellos que circulaban, ordenándolos de otra manera. La voluntad popular, por ejemplo, era invocada por unos y otros, pero mientras para las elites políticas esta servía para apuntalar el sistema de partidos existente, para Bussi servía para atacarlo, quitarles crédito y legitimidad. Si para las elites políticas: voluntad popular = fuente de legitimidad del sistema de partidos, para Bussi, voluntad popular = compromiso con la comunidad. Pero su interpretación de la voluntad popular iría más allá, además de ser una pauta para diferenciarse de los demás políticos -sus adversarios- y establecer una relación directa con sus interlocutores privilegiados -la comunidad-, le permitía blanquear su accionar en el pasado, durante el cual -en su versión- contaba con el apoyo de la gente.

En otras palabras, Bussi intentaba no solo luchar por la dirección política, sino también redefinir a la democracia, anteponiendo a la cadena de equivalencias que las élites habían establecido entre los términos democracia = voluntad popular = sistema de partidos = negociación = acuerdo entre elites, otra que relacionaba democracia = voluntad popular = compromiso con la comunidad = orden = eficacia.

Pero además, como Bussi pretendía interpelar a amplios sectores de la población tenía que hacer un doble esfuerzo para despejar dudas acerca de cual sería su actitud para con el régimen, por eso no solo remarcaba en el programa su compromiso con la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, sino que también se ocupó de ofrecer una versión de la historia en la que Proceso y democracia eran parte de una continuidad, en contra de toda la formulación que los presentaba como términos que se excluían. Esta reformulación le

permitía hacer de una parte del pasado –la obra pública y la eficacia- su capital político más importante, al cual, por medio de una memoria selectiva, proponía recordar.

El “bautismo de votos” de Bussi
y la fatídica elección del gobernador

Los resultados de las elecciones
Las primeras reacciones
Las negociaciones en el Colegio Electoral
El discurso de Bussi: la no-negociación
La elección de gobernador
El pedido de renuncia o no asunción por parte de Bussi
El silencio de la UCR

Se llegó a las elecciones del 6 de septiembre para renovación de 5 bancas de diputados nacionales, 10 de senadores y 20 de diputados provinciales, la totalidad de concejales e intendentes municipales y la primera sucesión constitucional de gobernador en 25 años. Trece candidatos que representaban a la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, Bandera Blanca, la Democracia Cristiana, el Partido Federal, el Partido Intransigente, el Movimiento al Socialismo, el Partido Obrero, el Partido Nacionalista, el Frente de Acción Provinciana, la Alianza de Centro, la Unidad Socialista y el Frente Amplio de Liberación, disputaban la gobernación con desiguales posibilidades.

Eran 664.342 los ciudadanos –334.164 mujeres y 330.178 hombres- en condiciones de votar para elegir a los 60 electores, quines a su vez elegirían al gobernador. Para esta elección, la provincia fue dividida en tres secciones: La Sección I que comprendía la Capital, con un total de 274.150 votantes, elegía 24 electores; la Sección II, que correspondía a la zona Este, con 146.030 votantes, elegía 16 electores y la Sección III correspondiente al Oeste, con 244.162 votantes elegía 20 electores. El sistema aplicado en la elección era el D'Hond pero, para acceder al derecho de tener electores, los partidos debían alcanzar un mínimo del 10% del padrón electoral por sección.

Los escrutinios provisorios de las elecciones realizadas el día 6 de septiembre, arrojaron, en la categoría electores a gobernador, los siguientes resultados:

Partidos	Sección I	Sección II	Sección III	Totales	%
U.C.R.	81.913	33.264	55.592	170.769	33,68
Justicialista	38.471	38.815	46.854	124.114	24,48
Fte. Acción Provinciana	30.368	27.148	41.669	99.185	19,56
Federal	364	403	338	1.105	0,22
Intransigente	589	23	39	651	0,13
Alianza de Centro	1.812	543	1.026	3.3381	0,67
Democracia Cristiana	2.072	662	1.304	4.038	0,80
FRAL	1.057	350	763	2.170	0,43
Unidad Socialista	1.243	430	886	2.559	0,50
Bandera Blanca	54.841	14.417	23.363	92.621	18,27
Obrero	533	325	324	1.182	0,23
M.A.S.	640	301	380	1.321	0,26
Nacionalista	110	56	114	280	0,06
En blanco	1.282	738	1.297	3.317	0,65

Estos resultados indicaban que la concurrencia de votantes superaba en cerca de 50.000 a la de las elecciones de 1985, que la UCR retrocedía en 52.668 votos, mientras que el PJ perdía 94.299, pero que en forma conjunta con la otra expresión peronista, ganaban 969 votos.

El mismo 6 de septiembre, y apenas se conocieron los resultados parciales, el periodismo entrevistó a distintas figuras políticas para que dieran sus impresiones sobre las elecciones. Lo primero que dijo el candidato de la UCR fue que “nosotros creemos que hay un nuevo gobernador en Tucumán y es el que le está hablando”, tratando de presionar a los electores de los demás partidos para que en el Colegio Electoral se eligiera al candidato que más votos había sacado en las urnas. Consultado sobre el caudal de votos conseguidos por Bussi afirmaba –en contra de todas sus apreciaciones anteriores- que “las encuestas indicaban que iba a tener una importante presencia electoral”, pero minimizó el hecho señalando que “lo que realmente me sorprendió es la elección del justicialismo” (*La Gaceta*, 7/09/1987).

Las figuras públicas del PJ no hicieron declaraciones y prefirieron esperar los resultados con las puertas de su sede electoral cerradas. Renzo Ciriigliaro, candidato del Frente de Acción provinciana, por su parte, declaraba –pensando en que el juego para la elección de gobernador se trasladaba al Colegio Electoral- que “en Tucumán ganó el peronismo, puesto que sumados los votos del PJ y del FAP llegan a 230.000, con lo cual supera los de la UCR” (*La Gaceta*, 7/09/1987).

Si antes de las elecciones los partidos tradicionales se cuidaban de atacar a Bussi con los argumentos de no darle espacios y de evitar que la elección se polarizara en su favor, en esa ocasión, en la que se presentaba la posibilidad de necesitar de sus electores en el Colegio Electoral, las pocas declaraciones que acerca de él se hacían, se acercaban al halago y al reconocimiento implícito. En este sentido, la figura principal de la UCR de la capital, el candidato a intendente Raúl Martínez Aráoz, se refería a Bussi en estos términos: “yo lo conozco y sé que tiene condiciones, de modo que tampoco es una sorpresa el número de votos conseguidos por él, que era previsible que se diera en Tucumán” (*L.G.*, 7/09/1987).

Era evidente que los partidos mayoritarios estaban pensando más en la elección del gobernador y en las negociaciones en el Colegio Electoral que en realizar un balance serio de las elecciones. A diferencia de ellos, Bussi trabajaba para su futuro y aprovechaba el buen momento que vivía por las elecciones para afirmarse en el terreno político y lanzar una amplia convocatoria para formar una nueva fuerza política. Interpretó y tradujo su desempeño electoral como un “triunfo de la civilidad”, que había logrado expresar “su sentimiento” a pesar de haber sido “apabullada por una acción psicológica tremenda, por una publicidad costosísima”. Este triunfo de la civilidad se materializaba -según la interpretación de Bussi-, en la cantidad de votos que había conseguido su candidatura, cosa que, además de producir la satisfacción del General, lo llevaba a considerarse “el ganador moral de las elecciones”, ya que, “En una campaña normal, en igualdad de condiciones y de posibilidades, particularmente en materia de medios de comunicación, en un comicio garantizado por la ley y el orden, y con reglas garantizadas por todos los candidatos, los resultados hubieran sido muy superiores a los logrados. Esta victoria moral se hubiera convertido en una victoria material y física” (*L.G.*, 7/09/1987).

Estaba claro que Bussi quería sacar el mayor provecho político de las elecciones e hizo de ellas el eje principal de su campaña propagandística, un trampolín que le permitiera hacer más grande su figura. Para eso se encargó de marcar las dificultades que supuestamente debió afrontar en las elecciones, cosa con la seguía estableciendo diferencias con el resto de los partidos. “En solo 7 u 8 días, periodo en el cual hice dos o tres presentaciones públicas en el interior –que después suprimí voluntariamente para no convertirme en referencia de

nada ni de nadie- logré canalizar el importante caudal de votos de que informan las cifras. No tuve espacio y una televisora local me negó el espacio comprado. Se luchó contra todas las argucias, contra el matonerismo, el gangsterismo, que todavía tienen cabida en esta democracia que quiere ser y todavía no lo es, y contra las argucias políticas que aplicaron ayer (refiriéndose al día de las elecciones)” (*La Gaceta*, 7/09/1987).

Bussi pretendía demostrar que, no solo podía jugar competentemente con las reglas de juego de la democracia, sino que además las respetaba más que sus adversarios. Usando el mismo argumento que tantas veces se había empleado en su contra, acusaba a los políticos de que con su accionar atentaban contra la realización plena de la democracia. Por eso los votos conseguidos por él eran cualitativamente más importantes que los de los otros, provenían de ciudadanos que no se había dejado intimidar ni engañar por campañas de mentiras y argumentos espúreos, y esto le daba pie para que levantara las banderas que hasta el momento se suponía no solo les eran totalmente ajenas, sino que además lo definían como su opuesto. El triunfo moral serviría para que “podamos vivir sin persecuciones de ningún tipo, con libertades plenas y donde cada uno sea protagonista de sí mismo, en un clima de paz, de trabajo y tranquilidad, donde solamente no tengan cabida ni los vagos ni los delincuentes” (*La Gaceta*, 7/09/1987).

Pero, aparentemente, el militar había realizado un aprendizaje en todo el proceso electoral: si aspiraba a consolidar su capital político y a llegar al gobierno de la provincia, necesitaba dedicarse más decididamente a la actividad política –profesionalmente, se podría decir- y además, fundar y desarrollar un partido para que respaldara y sostuviera su figura. Esto sin dudas generaba una paradoja con el discurso (que tanto rédito le había retribuido en la campaña) en contra de los políticos que, por pertenecer a partidos le debían obediencia a éstos postergando los intereses generales. Paradoja que Bussi pretendía salvar por medio de dos operaciones: 1) Invertiendo la lógica que él atribuía a la relación político – partido. Si para Bussi el problema estaba en que los políticos se sometían a los dictados de los partidos, los que a su vez defendían intereses corporativos, él proponía fundar uno que se sometiera a sus intereses, que no eran otros que los de todos de los tucumanos. Por eso, después de declarar que “de ahora en más me convierto en un hombre de la política

tucumana, con proyección nacional”, agregaba “Vamos a reunirnos con todos los tucumanos que crean que Bussi debe gobernar por el bien de Tucumán”; y 2) Haciendo pasar las relaciones de su partido por valores y hábitos -como la amistad y el amor a la provincia- que supuestamente no son estrictamente políticos. “Ahora me reencontraré con mis amigos políticos, vamos a replantearnos la plataforma política y a convocar a los mejores hombres de Tucumán, que más quieran a su provincia” decía, dejando en claro que él era quien determinaba quienes eran los mejores y los que más quieren a la provincia. Agregaba refiriéndose a los electores: “Estos hombres que son mis amigos, merecen toda mi confianza y tengan la seguridad que actuarán consecuentemente” (*La Gaceta*, 7/09/1987). Es decir, Bussi era el constituyente, sostén y garantía de las cualidades y conductas de los otros y, su relación personal de amistad -no así las coincidencias programáticas por ejemplo-, los hacía buenos, consecuentes y dignos de confianza.

Una vez que dejó en claro por quien y por donde pasarían los criterios de reclutamiento de adherentes, Bussi convocó a constituir una “alianza que podrá estar integrada por todos los partidos democráticos” (*L.G.*, 7/09/1987). Ofreciéndose como prenda de unidad decía venir “en son de paz, porque quiero contribuir a la integración de toda la sociedad tucumana, donde tengan cabida todos los grupos, personas y sectores, tras un objetivo común que es el bienestar, la tranquilidad y el trabajo para todos”. Aclaraba que “Es tan amplia nuestra convocatoria que incluye hasta a aquellos que, una década atrás, creyeron encontrar en las madrigueras del monte o en los aguantaderos de la ciudad la forma de revertir nuestro sistema y estilo de vida. Si están arrepentidos y dispuestos a trabajar, hasta ellos tendrán una especial acogida” (*La Gaceta*, 7/09/1987). La generosa convocatoria incluía a sus anteriores enemigos a muerte y, como el pastor bíblico, sin resentimientos se disponía a recibir de forma especial a sus hijos pródigos, antes descarriados, ahora arrepentidos.

Su autoatribuida capacidad para corregir los vicios de la política y para superar las divisiones que esta generaba, le permitía postularse para gobernar, a pesar de ser la fuerza política con menos electores: “Nosotros estamos convencidos de nuestros derechos y títulos para ejercer la gobernación de Tucumán, si hay iniciativas de acuerdos, éstas deben surgir de los otros partidos”, decía (*L.G.*, 7/09/1987).

La disposición de Bussi a integrarse al juego político democrático estaba planteada, y no dejaba pasar oportunidades para reafirmarla. Ante la visita de Aldo Rico, líder de las sublevaciones militares de Semana Santa, a la provincia de Tucumán le sugirió a él y por su intermedio a Seineldin, que abandonen sus planteos en calidad de militares y se sumen a la lucha política en una nueva corriente que los invitaba a conformar (*L.G.*, 13/09/1987).

Pasado ocho días de las elecciones, se constituyó el Colegio Electoral, en una situación nunca antes vista en la provincia: ninguno de los partidos que contaba con electores reunía el número suficiente (31) como para poder elegir gobernador sin necesitar del apoyo de otra fuerza política y, mucho menos, para constituir el quórum exigido (40) para el inicio de las sesiones. La UCR contaba con 22 electores, el PJ con 14 y el FAP y Bandera Blanca con 12. A partir de ahí se abrió un infernal proceso de negociaciones que llevó alrededor de 90 días y sumió a Tucumán en una grave crisis institucional.

Una vez que se iniciaron las sesiones del Colegio Electoral, la primera estrategia que desplegó la UCR fue la de presionar para que se eligiera al candidato más votado en las urnas. “Quien ganó debe gobernar” decía Alfredo Terraf, su vicepresidente, agregando que “el triunfo de la UCR en Tucumán es contundente y deberá ser ratificado por el Colegio Electoral, caso contrario se atentaría contra la voluntad popular y la democracia”. El PJ, apenas recuperándose de su pobre desempeño electoral, empezaba a hablar de peronismo para acercar posiciones con el F.A.P.. Los electores de este frente, también se habían expresado en este sentido, pero no descartaban acuerdos con ningún otro, aunque consideraban que la UCR se encontraba a una mayor distancia “ideológica y programática”, que el propio Bussi. Con relación a este último, Cirnigliaro declaraba tener algunas coincidencias, por lo que no descartaba las posibilidades de un acuerdo (*L.G.*, 14/09/1987).

Bussi, por su lado, repetía que sus electores votarían por él, “para no traicionar la voluntad y la confianza de la ciudadanía” y, remarcando las diferencias con los otros partidos, declaraba que sus electores no iniciarían ningún tipo de negociaciones o acuerdos, que si estos tenían lugar, debían surgir de la iniciativa de las demás fuerzas políticas. En cualquier caso, el acuerdo que se pudiera alcanzar debía partir de un punto innegociable: que Bussi

debía ser el gobernador elegido. Él sabía que estaba poniendo una condición inaceptable para los demás partidos, pero eso le permitía mantener en su discurso una instancia abierta a la negociación y se cubría ante las acusaciones que seguramente le harían de que con su actitud trababa cualquier salida, llevando con ello a la crisis institucional. El cálculo era sencillo: la UCR tenía más electores, pero no los suficientes como para imponer el gobernador, el PJ y el FAP, por más que llegaran a un acuerdo, tampoco reunían los electores suficientes, por lo que cualquier elección exigía que una de las partes –la UCR o el peronismo unificado- votara por la otra, con el consiguiente costo político –para el peronismo dejar el gobierno, para la UCR no poder imponer el gobernador aún cuando había ganado las elecciones-. En cualquiera de los casos, Bussi apostaba a ser el que capitalizara la crisis institucional que seguramente se abriría si el proceso se dilataba demasiado o, si no se llegaba a la selección del gobernador y se convocaba a nuevas elecciones. La crisis alcanzaría a los otros partidos, por elegir o por no elegir gobernador.

Cuando la UCR confirmó que los demás partidos no necesariamente votarían por el candidato que más votos tenía en las urnas y advirtió que el acuerdo con alguna otra fuerza política le sería sumamente difícil, jugó tibiamente otra carta: propuso la creación de un “polo democrático” que reuniera a todos los partidos con electores con excepción de Bandera Blanca. El acuerdo consistía en llevar a la gobernación al candidato radical, componer un gabinete con los demás partidos y poner de intendente de la capital –que también se elegía en colegio de electores- al candidato del PJ. La propuesta tuvo una cierta acogida en el PJ y el FAP, pero finalmente no prosperó y, nuevamente, fue el bussismo el que mejor la aprovechó. Tomando los términos de los que tuvieron la iniciativa, Bussi caracterizó a la propuesta de antidemocrática, en tanto se trataba de un “acuerdo espurio” que “traiciona la voluntad de los ciudadanos”, a la vez que la exclusión de su partido le servía como “prueba” ante la gente, de que el suyo era un proyecto político distinto. Si no lo invitaban a formar parte del acuerdo no era por diferencias de principios democráticos, sino porque sabían que él no traicionaría a sus votantes, decía Bussi (*L.G.*, 28/09/1987). La distinción la había hecho los otros, él la aprovechó cambiándole el contenido.

El PJ, por su parte, jugaba con la idea de que tanto para el FAP como para B.B. se les haría muy difícil llegar a un acuerdo con la UCR y reivindicaba la gobernación para el peronismo, que en forma conjunta había recibido más votos.

Cuando el panorama parecía más oscuro y la elección del gobernador más lejana, los electores de B.B. publicaron un aviso en el diario *La Gaceta* del 11 de octubre de 1987:

“LOS ELECTORES DE ANTONIO DOMINGO BUSSI a la ciudadanía. Nuestro compromiso:

- 1.- Más de 100.000 Tucumanos nos honraron con su voto para llevar a la Gobernación de la Pcia. de Tucumán a ANTONIO DOMINGO BUSSI.
- 2.- Cumpliremos ese mandato sin entrar en componendas de trastienda que subalternicen la voluntad popular, defraudando a los ciudadanos.
- 3.- Tucumán no merece un gobernante debilitado por acuerdos extraños y condicionado por negociaciones espúreas, que solo sirven –a pesar de todas las declaraciones en contrario– para desacreditar las instituciones de la República y de la Provincia.
- 4.- Hace falta un verdadero triunfador. Un gobernante con consenso y fuerza para hacer resurgir a nuestra Provincia de la profunda crisis en la que sobrevive, y de la peligrosa desorientación social y política que la amenaza.
- 5.- Por ello nuestro voto se fundamenta en los más altos intereses de la Provincia y el bienestar de todos. Si esto no fuera posible hoy, deberá llamarse a una nueva elección para que surja con claridad el gobernador que la Provincia necesita y quiere”.

Lo destacado de este aviso es que, además de ser el primer contacto de B.B. con la población después de las elecciones a modo de rendición de cuentas sobre lo actuado, en él se reafirman algunas posiciones anteriores que se venían sosteniendo y se introducen otras novedosas. Interpretar los resultados de las elecciones como un mandato que obliga a votar solo por el candidato del partido al que pertenecen los electores y entender que de no ser así se estaría subalternizando o defraudando la voluntad popular, significaba cuestionar de hecho la validez de toda regla de elección indirecta. Esta perspectiva ya había sido planteada por Bussi en declaraciones anteriores, aunque no asociada, como en esta oportunidad, a la debilidad de un gobierno elegido por el acuerdo entre los partidos y al

descrédito institucional que ello generaría, planteo que le servía a su vez para argumentar algo que mantendría de ahí en más como uno de los puntos centrales de su propuesta política: que la única salida a las crisis se podía dar con un gobierno con *fuerza*, la cual se adquiriría solo con el respaldo del voto popular.

Para la UCR, el aviso de los electores de Bussi resultó incontestable. Ellos mismos habían empleado argumentos similares al intentar cambiar el método de elección de gobernador y, una vez que este intento fracasó, presionaron para que se eligiera al candidato más votado, con el objeto de que no se traicionara a la voluntad popular. Pero, a pesar de esta coincidencia, las expresiones del bussismo tocaban a la UCR en tanto ésta había propiciado y formado parte de negociaciones con los demás partidos para que se eligiera gobernador a su candidato. Pero una vez que advirtieron que las presiones no produjeron el efecto buscado no se atrevieron a empujar lo suficiente como para que se convocara nuevamente a elecciones, supuestamente por el temor a perder más votos en beneficio de Bussi.

Quien sí respondió fue el PJ, cuya representación fue asumida en esa oportunidad por el senador Hugo Lazarte, que, tomando en parte los argumentos de Bussi, expresaba: “Todas las declaraciones de Bussi son fruto de un desconocimiento total de las instituciones democráticas y del valor intrínseco del individuo como persona”, agregando que su intención era la de “hacer abortar la conspiración encabezada por Bussi destinada a negar el pueblo tucumano el resultado de su voluntad expresada en las urnas” (*L.G.*, 13/10/1987). La repentina memoria del senador del PJ acerca del pasado de Bussi y su intento de descalificarlo no producirían mayores efectos. En términos institucionales, el hecho de que los electores votaran por el candidato de su partido era enteramente legal, pues no había ninguna disposición que los obligara a votar por otro candidato; con relación a la opinión pública, no es difícil inferir que el voto por Bussi no se trataba precisamente de un premio a su conocimiento acabado de las instituciones democráticas. Obviamente tampoco el PJ estaba en las mejores condiciones para levantar las banderas del respeto a la voluntad popular expresada en el voto, en todo caso era más que evidente que ésta se invocaba por conveniencia, sobre todo viniendo de un partido que se había negado a reformar la regla de elección indirecta.

Las idas y vueltas en el Colegio Electoral se extendían y los diarios especulaban acerca de diferentes acuerdos que se hacían y deshacían entre distintas fuerzas políticas; salvo en el caso de los electores de Bussi que mantenían su posición inalterada. Se llegó así al 12 de Octubre, fecha en la que se extinguía el plazo para que el Colegio eligiera gobernador y nuevamente ninguno de los candidatos alcanzó los 31 votos requeridos. El candidato de la UCR mantuvo los 22 votos de los electores de su partido, el del PJ 14, el de Acción Provinciana -que en dos oportunidades anteriores se había retirado en beneficio de Domato- 12 y Bussi 12. Ante esa situación, la prensa daba por sentado que se disolvería el Colegio Electoral y que se convocaría a una nueva elección, sin embargo, por pedido de la UCR y el PJ, intervino la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y dictaminó que el Colegio Electoral seguía en funciones y que estaba obligado a llegar a una decisión. Agregando que la elección se debía realizar entre los dos candidatos más votados y que, si aún así ninguno de ellos conseguía los 31 votos exigidos, la elección se definiría por mayoría simple. Sin lugar a dudas, la decisión de la Corte iba en contra de todos los argumentos a favor de que las elecciones indirectas alientan la conformación de gobiernos contramayoritarios y de coalición, dejando en pie solo sus aspectos más cuestionados, es decir, aquellos que señalan que se favorece el acuerdo entre las elites sin que estos reflejen necesariamente las preferencias y aspiraciones de los votantes. En pocas palabras, se abría la posibilidad de elegir un gobernador que no contara ni con el acuerdo mayoritario de los partidos, ni con el voto mayoritario de los ciudadanos. Y esto es lo que finalmente pasó.

La falta de acuerdo entre los partidos de extracción peronista manifestada en la última sesión, llevó a que la dirección nacional del PJ amenazara con intervenir la filial Tucumana desplazando a toda la directiva en funciones si no se llegaba un acuerdo con el FAP. Al dirigente de este último partido se le ofreció la senaduría nacional, cargos en el nuevo gobierno y un pronto llamado a elecciones internas en caso de llegar a un acuerdo, pero de no ser así, se le amenazó con cerrarle definitivamente las puertas del PJ e impedirle cualquier posibilidad de retorno. El inminente acuerdo entre los peronistas llevó a que la UCR intentara un nuevo acercamiento con Bussi. Como gesto demostrativo, eligieron a un diputado de Bandera Blanca autoridad segunda de la cámara baja y ofrecieron importantes cargos en la provincia y el municipio de la capital. El cargo en la cámara de diputados fue

aceptado por Bandera Blanca y esto fue tomado por la UCR como una aceptación tácita del acuerdo propuesto. Alfredo Terraf, vicepresidente de la UCR aprovechó la oportunidad para declarar que lo sucedido en la cámara de diputados era una muestra de la disposición de la dirigencia para salir del empañamiento institucional y “destacó el sentido patriótico” de los diputados de Bandera Blanca, quienes además, “en una muestra de madurez política” –según las versiones de Terraf- hubieran estado dispuestos a elegir en el Colegio electoral al candidato más votado en las urnas (*L.G.*, 25/11/1987). Los que antes eran excluidos por la UCR del polo democrático, demostraban en esa ocasión, para este mismo partido, su sentido patriótico y de madurez política. El mismo día y en la misma columna en que se dio a conocer esta noticia salió una declaración de Bussi que desmentía cualquier acuerdo con la UCR para elegir gobernador y aclaraba que la única forma de sacar a la provincia de ese estado era “convocando nuevamente a elecciones y no participando de componendas de ninguna naturaleza” (*L. G.*, 25/11/1987).

Finalmente se llegó al día de la elección de gobernador. El 2 de diciembre, casi tres meses después de las elecciones generales, en una sesión caótica, en la que primero Chebaia obtuvo los 22 votos de su partido, el PJ 26 (producto de la suma de los suyos con los del FAP) y 12 en blanco de los electores de Bandera Blanca, quienes estaban inhibidos de votar por su partido, y dado que ninguno de candidatos llegó a los 31 votos exigidos, se pasó a elegir por mayoría simple. En medio del escándalo fue elegido gobernador el candidato del PJ José Domato. Su proclamación se realizó con la ausencia de los electores de la UCR y de Bandera Blanca quienes se retiraron apenas terminó la votación.

Al día siguiente, Bussi convocó a una conferencia de prensa en la que definió a la elección como una “farsa político-jurídica” y arremetió contra “la dirigencia política caduca que demostró su total incapacidad para el manejo de la cosa pública, a la que todo este tiempo no le alcanzó para afinar todas las argucias que llevaron, mediante oscuras componendas, a burlar la buena fe de sus comprovincianos”. Agregó a ello que la sesión de elección de gobernador había sido “un hecho bochornoso”, propiciado por la Corte Suprema que ordenó su realización y de una dirigencia política, “esta minoría marginal que no vaciló en

utilizar al Poder Judicial para sobrevivir, aun a costa de subvertir los valores éticos y de privar al pueblo del derecho a votar” (*L.G.*, 03/12/1987).

Mientras la UCR permanecía en silencio “para no aportar más malestar en esta crítica situación”, según las expresiones de uno sus voceros (*L.G.*, 5/12/1987), las declaraciones de Bussi confluían con la opinión de la mayoría de la población que, según una encuesta publicada por *La Gaceta* el 5 de diciembre, consideraba en un 82% al nuevo gobierno como ilegítimo. Ahondando más aun las diferencias, envió una nota al gobernador electo invitándolo a no hacerse cargo del gobierno, para “producir la solución constitucional a la acefalía”. El argumento del pedido tenía dos fundamentos: 1) que la elección se había realizado “mediante un acto espúreo de un Colegio Electoral ficticio”, por lo que contaba con una “escasa adhesión de la ciudadanía”, y 2) que los acuerdos alcanzados habían obligado a un “reparto del poder público que el pueblo delega para su gobierno”, que “lejos de mitigar los sufrimientos de millares de compatriotas, catapultará a la provincia hacia males irreparables” (*L.G.*, 5/12/1987). El segundo fundamento dejaba más en claro aún, a que se refería en el aviso pago del 11 de octubre cuando hablaba de la necesidad de un gobierno con fuerza y cual era la idea que Bussi tenía de lo que era un gobierno fuerte. según él, necesario para salir de la crisis.

La coyuntura fue hábilmente explotada por Bussi quién no solo consolidó su figura y su capital político, sino que además consiguió incrementarlo a expensas de sus adversarios que se debilitaban. El discurso de diferenciación con las demás fuerzas políticas y la caracterización que de estos hacía en la campaña electoral, parecían confirmarse de forma categórica. La retórica en contra de los partidos mayoritarios parecía alcanzar el estatuto de verdad irrefutable. Mientras los demás partidos solo se preocupaban de resolver quien sería el gobernador o que beneficios conseguirían en el proceso de su elección, Bussi se mostraba como un ferviente defensor de los principios y las reglas democráticas, proponiendo la convocatoria a un nuevo llamado a elecciones e introduciendo la idea de un gobierno fuerte como condición para salir de la crisis. La evaluación de cuan importante resultó esta coyuntura se la puede apreciar comparando como salió el bussismo de ella en contraposición a los partidos tradicionales, pero se la puede apreciar mucho más aún si se

compara lo que pasó después con el FAP, fuerza que al igual que BB se postulaba como alternativa ante el bipartidismo. Todas las idas y vueltas del FAP en el Colegio Electoral que se contraponían diametralmente con la firmeza que mostraron los electores de Bussi y, sobre todo, el acuerdo que finalmente concretó con el PJ –partido al que había hostigado agresivamente en la campaña- a cambio de una senaduría, minaron su credibilidad a tal punto que, a pesar de los esfuerzos de sus dirigentes por sostenerlo, desapareció de la escena política en poco tiempo.

**La consolidación del bussismo y
la fundación de Fuerza Republicana**

Lo que quedó después de la elección del gobernador
El vaciamiento de la UCR
El lanzamiento de Fuerza Republicana
La crisis del gobierno provincial
La convocatoria a Asamblea Constituyente
Las elecciones

Los partidos tradicionales salieron sumamente desgastados de todo el proceso de elección de gobernador. La UCR, que había ganado las elecciones y tenía un discurso triunfalista se mostró impotente a la hora de llevar a su candidato a la gobernación y terminó convalidando la elección de Domato. El PJ, que logró retener la gobernación, no contaba con el apoyo de una población que, según una encuesta de *la Gaceta*, consideraba en un 82% al nuevo gobierno como ilegítimo. El FAP, que se presentaba como una alternativa peronista y que gran parte de su campaña la había dirigido contra la conducción oficial del PJ, perdió toda credibilidad al terminar votando al candidato de ese partido a cambio del cargo de senador nacional para Renzo Cirmigliaro, su principal dirigente. En definitiva, las dilatadas negociaciones que llevaron a la elección del gobernador, lejos de ser vistas por la población como una instancia para la conformación de gobierno compartido y de coalición, fueron percibidas como un campo propicio para los acuerdos oscuros, una batalla de intereses sectoriales detrás de una especie de botín.

El accionar de los partidos y dirigentes tradicionales, parecía confirmar palabra por palabra la pintura que Bussi (y los partidos de izquierda) había hecho de ellos. Todo el escenario político parecía preparado para beneficio de Bussi que, a pesar de asumirse ahora como un hombre político, seguía golpeando a los partidos tradicionales con su discurso y aprovechaba en su favor la coyuntura. Su doble juego consistía en, por un lado demostrar su disposición para jugar en el terreno político pero, por otro, mantener sus diferencias con los desgastados partidos mayoritarios. El hueco entre la opinión de una importante parte de la población y los partidos tradicionales empezaba a llenarse con el bussismo, que hacía de la renuncia a la negociación -componente propia de la política- una de sus virtudes.

Todo ello alentó a Bussi a lanzar “su” partido político y la primera acción en este sentido fue romper con Bandera Blanca y despegarse de su dirigente histórico, Ezequiel Ávila Gallo. Rodeado de la gente de su confianza y de antiguos colaboradores, fundó Fuerza Republicana. El primer nombre sugería una idea de potencia, que contrastara con la supuesta debilidad de los otros partidos y, en buena medida, resumía el espíritu de su propuesta de gobierno, el segundo, la reivindicación provincial frente a la centralidad de Buenos Aires. Los colores azul y blanco, del emblema, evocaban la argentinidad. Sus principales dirigentes, gente cercana a Bussi en su primera gestión, a la que se le sumaban otros dirigentes de organizaciones intermedias y empresarios.

En contra de lo que la mayoría de los primeros análisis caracterizaban, las intenciones de Bussi no eran las de fundar un “partido militar”, ni tampoco una fuerza liberal de derecha. Por eso, desde un inicio trató de tomar distancia tanto de las tendencias militaristas presentes en el partido, como de los intentos por relacionarlo con el tradicional liberalismo de derecha de la UCD, el Partido Conservador y el Partido de Centro. Los militaristas autodenominados “halcones”, perdieron su batalla cuando Bussi jugó a favor de la denomina ala institucionalista a la hora de definir la conducción y las figuras públicas del partido en formación. Este hecho, más su despegue de los partidos liberales y minoritarios, que aspiraban conformar un frente con él a la cabeza, ponía en claro que Bussi pretendía conformar una fuerza política con una capacidad de interpelación e inclusión mucho mayor, capaz de llevarlo a la gobernación de la provincia y eventualmente proyectarlo a nivel nacional. Su estrategia para con las fuerzas políticas liberales fue la de sumar a sus dirigentes, con los cuales negociaba personalmente. De hecho una buena parte de las figuras de la Alianza de Centro terminaron en las filas de Fuerza Republicana y ayudaron a conformar la rama juvenil de este partido.

Por si quedaban algunas dudas, el programa del nuevo partido, en general contenía definiciones vagas y poco elaboradas, pero algunas de ellas francamente opuestas a la propuesta liberal. Por ejemplo, en las denominadas “Bases de acción política-declaración de principios-plataforma electoral”, la Fuerza Republicana, se expresaba a favor de defender “los derechos del trabajador, según se hallan expresados en el art. 14 bis de la

Constitución Nacional”, asumiendo el compromiso de volcar todos los esfuerzos en su “concreción y superación: respeto al salario justo y digno y al incremento del llamado salario mínimo, vital y móvil. Condiciones dignas de trabajo y jornadas limitadas: descanso y vacaciones pagas, protección del empleo y organización sindical libre y democrática, derecho de huelga, conciliación y arbitraje, convenios colectivos de trabajo, interpretados a nivel empresa o sector de manera de optimizar los beneficios de la agremiación. Indemnización por despido injustificado y por accidente de trabajo”, todos ellos inspirados en “el principio primario de la justicia social” (apartado 11 de las “Bases de acción política de FR). Esta sola declaración, ponía a FR en las antipodas del liberalismo, que hacía de la necesidad de reformar la constitución en materia laboral una de sus principales banderas. Para el liberalismo, los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional obedecían a una filosofía obsoleta que tenía que dejarse atrás en beneficio de la denominada “flexibilización laboral”.

Pero las bases programáticas no solo servían para distanciarse de los liberales, también en ellas se diferenciaba de los partidos mayoritarios, a los cuales los hacía responsables de la situación por la que atravesaba la provincia y toda la Argentina. Esta situación fue caracterizada como de “grave crisis provocada por la falta de comportamientos honestos de los funcionarios públicos, inmersos en escándalos que aparecen casi diariamente empujados por la corrupción adoptada como método de trabajo”. Tal era la importancia que Fuerza Republicana daba al comportamiento de los funcionarios públicos, que hizo de la “necesidad de moralizar la vida pública y privada” y del entendimiento de que “la política es una creación ética”, el primer punto de su programa.

En los demás ítems de la propuesta programática de Fuerza republicana, se retoman la mayoría de las propuestas que los partidos mayoritarios habían empleado con éxito como consignas de movilización y que se encontraban inscriptos en la memoria política argentina como las conquistas sociales más importantes. Se pronunciaba así por una educación y una salud accesibles a todos los sectores sociales y una acción social y de vivienda por parte del Estado que tendiera a mitigar las desigualdades. Paralelamente, en las bases de acción política, se destacaban y enfatizaban dos puntos con los que se creía se podía cerrar el paso

a posibles críticas que pudieran relacionar al nuevo partido con el pasado de su máximo dirigente, a los que se le agregaba otro, que de ahí en más pasaría a ser una de sus principales banderas. Los primeros se refieren a la “Independencia del Poder Judicial” (punto 7), la cual debía constituir un “valor fundamental de la sociedad argentina” y una manera de “terminar con las actuales permisividades producto de la subordinación política y como garantía de la vida y los bienes de los ciudadanos”; y la “defensa a ultranza de la libertad de expresión” (punto 9), ya que “no es posible la existencia de un sistema democrático sin el correlato que solo le otorga una efectiva libertad de expresión”. El énfasis puesto en estos dos puntos, sin dudas jugaba el papel de neutralizar las críticas que atribuían a Bussi aspiraciones autoritarias. En otro punto que se destacaba en las bases de acción política se proponía “lanzarnos decididamente a la reconquista del federalismo para que las provincias puedan recuperar todas las facultades que expresamente no delegaron en la Nación y que esta les arrebató” (punto 6)”. A partir de esta propuesta, el partido de Bussi podía apelar a la tucumanidad, atacar a la centralidad de los partidos mayoritarios que obedecían a las ordenes de Buenos Aires y sostener que solo una fuerza surgida de las “entrañas de la Nación” podía defender el federalismo y los intereses provinciales ante la actitud despojadora del centralismo.

La fecha elegida para el lanzamiento público de Fuerza Republicana, coincidió con un nuevo aniversario de la declaración de independencia argentina, que en 1916 tuvo lugar en Tucumán y servía para que el acto político se tiñera de patriotismo. La mayoría de los puntos del programa fueron reiterados en esa ocasión, con lenguaje de tribuna. Bussi nuevamente caracterizó a la situación como una crisis, producto de un “estado generalizado de corrupción y desorden”, que imputó a “una seudo dirigencia radical que gobierna la nación” y a una similar del peronismo “que administra la casi totalidad de las provincias argentinas”. Aclaraba sin embargo, que “el radicalismo actual nada tiene que ver con la institución política de Irigoyen, Sabattini, Balbín e Illia” y que el peronismo demostraba su “incapacidad para recuperar los contenidos auténticamente populares que le dio origen”. Coherente con el rescate que hacía en el programa de las consignas movilizadoras de los partidos mayoritarios, en esa ocasión buscaba interpelar a sus simpatizantes reivindicando su historia y atacando a su dirigencia por traicionarla. Después arremetió contra los

liberales; quienes habían sido históricamente blanco de la retórica peronista y radical, eran descalificados en por el General porque “todavía profesan convicciones dogmáticas en materia de libertad económica a despecho del hombre y su familia” (L.G., 10/07/1987).

Las intervenciones de Bussi parecían obedecer al siguiente cálculo político: si se pretendía construir un partido de masas éste debía interpelar a los simpatizantes de los partidos mayoritarios. Eso a su vez exigía una operación que por un lado le permitiera diferenciarse de esos partidos y justificara la creación de uno nuevo pero, por otro, tendiera puentes entre unas identidades políticas que se abandonaban y otra que se adoptaba. El mensaje dirigido a los simpatizantes del PJ y la UCR, podría ser expresado en estos términos: “no les pedimos que renieguen de su historia; Uds. no estuvieron equivocados. Fueron víctimas de unos dirigentes que los traicionaron”.

Los únicos que acusaron recibo de las palabras de Bussi fueron los dirigentes de la U.C.D., para quienes las palabras de Bussi no hacían más que revelar su “desconocimiento completo de la doctrina liberal” (L.G., 11/07/1987). Los partidos mayoritarios no se pronunciaron.

El radicalismo de Tucumán atravesaba por un proceso de acelerado vaciamiento. A la crisis de ese partido a nivel nacional, en el ámbito local, se le agregaba una sensación de frustración: “Hemos perdido una oportunidad histórica, que difícilmente se vuelva a repetir” se quejaba el dirigente Gumersindo Parajón (L.G., 03/02/1987). Frustración que buena parte de sus militantes y simpatizantes percibieron como una “traición” por parte de los dirigentes que, ni presionaron para que se convocara a nuevas elecciones, ni movilizaron a la población para que se respete el resultado de las elecciones generales y que finalmente terminaron callándose ante la oscura elección de Domato. Hechos que fueron entendidos por la gente como una tácita convalidación.

El peronismo retuvo el gobierno, pero eso no lo ayudó demasiado para superar sus divisiones. El precario acuerdo alcanzado en el Colegio Electoral estalló, entre otras razones, cuando el PJ no cumplió la promesa de concederle la senaduría nacional al líder de

Acción Provinciana. A esta división se le agregaron aquellas que provocaba un desempeño gubernamental que lo único que lograba era la profundización de la situación heredada de la administración anterior. El retraso de tres meses en el pago de haberes a los empleados estatales llevó a que esos sectores conformaran una coordinadora gremial que denominaron “coordinadora interestatal de lucha” y se declararan en estado de movilización permanente. Las agremiaciones más dinámicas de esta coordinadora las constituían aquellas que nucleaban a los sectores cuya protesta tenía un mayor impacto social: los gremios de docentes primarios -que con su paro de actividades ponía en peligro la validez del año lectivo-, involucraba en su medida a los padres que no querían que sus hijos perdieran el año, la agremiación de empleados municipales -que suspendieron la prestación de servicios básicos como la recolección de basura, la limpieza y el alumbrado público-, involucraba a la mayoría de los vecinos. El malestar llevaba además a que los dirigentes gremiales, en su mayoría de extracción peronista, tuvieran que enfrentar a un gobierno de su signo político. A esto se le sumaba que, ante la situación de virtual cesación de pagos en la que se encontraba la provincia y el municipio, los empresarios proveedores del Estado acordaran el corte de todo suministro, con lo que se terminó de paralizar la obra pública y la prestación de servicios por parte del Estado. Por si fuera poco, casi diariamente se hacían públicas distintas denuncias de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno provincial, incluido el propio gobernador.

Con un partido organizado de un modo que imitaba la estructura del PJ, un programa de acción política y, fundamentalmente, una situación que parecía confirmar sus caracterizaciones y pronósticos, Bussi se aprestaba a enfrentar las elecciones de 1989, que en Tucumán se realizaban en forma separada entre las que elegían autoridades nacionales y provinciales. En las nacionales, se ponían en juego la primera renovación del presidente de la Nación desde la vuelta de la democracia y un tercio de las bancas de la Cámara de Diputados. Los principales candidatos eran, Carlos Menem por el Frente Justicialista Popular -FREJUPO-, encabezado por el PJ y Ricardo Angeloz por la UCR, mientras que Fuerza Republicana, en un acuerdo con otros partidos provinciales, llevaba como candidato a presidente y también a diputado nacional a Bussi, quien aprovechaba la oportunidad para levantar nuevamente las banderas del federalismo y la posibilidad de sacar ventajas para la

provincia. “Los otros partidos ven en estas elecciones una oportunidad para congraciarse con sus dirigencias, Fuerza republicana ve una oportunidad para Tucumán. En un Colegio Electoral que estimo equilibrado, Tucumán va a ser el factor desequilibrante”, decía esa vez autoatribuyéndose la representación de toda la provincia (L. G., 07/04/1987). Finalmente, en Tucumán, los resultados de las elecciones del 14 de Mayo fueron los siguientes:

Partido	Presidente	Diputado Nac.	% Pres.	Electores
FREJUPO	228.388	202.337	41,33%	11
UCR	98.960	82.879	9,26	4
FR	153.614	190.034	27,94	6
CFI ⁶	51.307	43.726	9,26	2

Cuando se suponía que las elecciones presidenciales no le serían demasiado favorables a Bussi, por la polarización entre los candidatos de la UCR y el PJ en todo el país, Tucumán constituyó la excepción y Fuerza Republicana pasó su primera prueba duplicando la cantidad de votos con respecto a la elección anterior, llevando a la UCR al tercer lugar y, demostrando además, que gran parte de los adherentes a Fuerza Republicana (el 80%), estaban dispuestos a votar por ese partido en la categoría presidente aún sabiendo de sus escasas posibilidades. Pero estas elecciones no solo le sirvieron a Bussi para consolidarse electoralmente, también le permitió legitimarse en su nuevo rol ante las elites políticas de los principales partidos nacionales, que trataron de negociar con éste antes de las elecciones y ante la eventualidad de necesitar del voto de sus electores en el Colegio Electoral.

El triunfo del peronismo que llevó a Menem a la presidencia y el pobre desempeño de la UCR en la provincia, sumieron a este último partido en una situación en la que nunca antes se había encontrado y de la que le costaría muchos años recuperarse. El PJ provincial, por su parte, a pesar de haber ganado las elecciones, no pudo repetir su desempeño de 1983 y, por sobre todo, no le alcanzaba para disimular sus divisiones y mucho menos el pobre desempeño de su gobierno.

⁶ La Confederación Federalista Independiente, presentaba a Angeloz de candidato a presidente y a Cristina Guzmán para vicepresidenta como candidata extrapartidaria de la UCR. La mayoría de los análisis posteriores a las elecciones atribuían a la confusión en la selección de boletas por parte de los electores la cantidad de votos alcanzados por este partido en Tucumán.

Buscando debilitar a quien evidentemente sería el principal competidor en las elecciones de fin de año, el PJ local hizo de Bussi y Fuerza Republicana el blanco predilecto de sus críticas. Subestimado, ignorado y no merecedor de mención alguna en las elecciones de 1987, en esa ocasión Bussi era para, el PJ, el principal responsable de todos los males que vivía una provincia que había heredado una situación desastrosa del Proceso de Reorganización Nacional, teniendo que enfrentar juicios millonarios generados por los abusos a las personas y la propiedad. El uso evidentemente oportunista de un argumento que no solo constituía una estrategia retórica del PJ para desprestigiar a su adversario, ya que la provincia tuvo que indemnizar por un valor superior a los 500 millones de dólares a damnificados por expropiaciones que no se ajustaban a las disposiciones legales realizadas durante el Proceso (López Echagüe, 1991), terminó por desprestigiar y restar credibilidad al propio argumento. Un emisor no calificado despojaba de veracidad al mensaje y terminaba beneficiando al contradestinatario del mismo. Sin embargo Bussi no solo era atacado por su actuación en el pasado, también se le atribuyó responsabilidad en un incidente protagonizado por policías provinciales en la legislatura durante una marcha llevada a cabo el 15 de junio para reclamar un incremento salarial. La respuesta de Bussi no se hizo esperar y no solo repudió los actos calificándolos de “vandalismo perfectamente organizado”, sino que responsabilizó al gobierno por “su incapacidad para mantener el orden público” y “la disciplina en las fuerzas de seguridad que no solo luchan contra la delincuencia, sino que día se ven obligados a enfrentar la vida con magros salarios”, agregando que “la democracia se defiende con coraje cívico y no con acusaciones calumniosas, como pretende el gobierno” (*L.G.*, 17/07/1989).

Pero el acceso repentino y a la vez tardío de memoria de los dirigentes del PJ no se detuvo ahí, el pasado de Bussi pretendía además ser usado para debilitar las luchas sociales que se libraban contra el gobierno, con el argumento de que estas “desacreditan al gobierno y benefician directamente a Bussi” (*L.G.*, 06/07/1989), el diputado del PJ Rodolfo Vargas Aignase, emparentaba de hecho las demandas legítimas de los trabajadores con quién ahora era su principal adversario.

Cuando se aproximaban las elecciones del 5 de noviembre de 1989 de renovación de legisladores provinciales, la UCR y el PJ acordaron modificar la Constitución provincial, por lo que en las mismas elecciones además senadores y diputados se elegirían convencionales constituyentes. Según voceros de ambos partidos, “el objetivo central de la reforma es dotar a la provincia de una carta magna moderna, acorde a nuestros tiempos y que fortalezca la democracia evitando crisis institucionales como las que vivimos en las últimas elecciones” (L.G., 03/08/1989). Sin embargo, y pese a estas declaraciones, la sospecha generalizada era que la reforma constitucional buscaba imitar lo que se había hecho en Catamarca: introducir una cláusula constitucional que impidiera a Bussi ser candidato por haber ocupado el cargo de gobernador durante el Proceso.⁷ Nuevamente la extemporaneidad del intento terminó beneficiando a quien se quería excluir, pues si se hubiera establecido en el momento en que se instauraba la democracia muy probablemente hubiera sido ampliamente aceptada, sin embargo, en el momento en que se quiso hacer y, sobre todo, después de que se le había permitido a Bussi ser candidato en otras elecciones, quedaba claro que lo que se buscaba era la exclusión de un competidor que amenazaba con despojar del gobierno a sus inspiradores, que se movían por el cálculo electoral y no precisamente por principios democráticos. Esto es lo que le permitió a Bussi calificar a la posibilidad de su exclusión de cualquier candidatura como “proscripción” y erigirse en defensor del “derecho de la ciudadanía a elegir a quien crea más le conviene” (L.G., 12/08/1987).

Todo este panorama llevó a Bussi a caracterizar la situación como de “crisis en el orden político, social, económico y, fundamentalmente moral, que ha invadido todo el aparato estatal”. Por eso, el eje de su campaña electoral y el principal punto de su propuesta, pasó a ser “la moralización de la vida pública y privada” (L.G., 19/08/1987), haciendo de esta propuesta un subtítulo del nombre de su partido, que a partir de ahí se llamó “Fuerza Republicana, la fuerza moral de los tucumanos”. La moralización de la política, que al debilitado gobierno de Alfonsín le habían cerrado caminos de negociación con la oposición,

⁷ En la provincia de Catamarca la Constituyente reunida en mayo de 1989 introdujo una regla con rango constitucional que prohibía a quienes habían sido gobernadores y ministros durante el Proceso a postularse para cargos electivos. Esta regla fue removida dos años después en una nueva Constituyente en la que la UCR tenía la mayoría y le permitió llegar a la gobernación a Amoldo Castillo, candidato de esc partido en el año 1992.

le servía a Bussi para fortalecer una posición que le había producido un importante rédito político y para ahondar más aun las diferencias con un gobierno sumamente desprestigiado.

Pero, además de buscar el desprestigio de quién era referencia central de toda su prédica, el PJ intentó capitalizar el triunfo de Menem en las elecciones anteriores y con el mismo argumento que la UCR había empleado años anteriores, trataba de seducir al electorado planteando la conveniencia de tener un gobierno provincial y nacional con el mismo signo político y con la amenaza de “no sufrir las discriminaciones que nos tocó en el pasado” (*L.G.*, 21/08/1989).

Se llegó así a las elecciones del 5 de noviembre de 1989, las que arrojaron los siguientes resultados:

Partido	Senador Prov.	Diputado Prov.	Conv. Constit.	% Conv. Const.
FRE.JU.PO	176.683	178.741	182.382	39.33
U.C.R.	29.948	30.823	30.837	6.66
F.R.	234.412	236.073	240.385	51.83
U.C.D.	12.929	10.456	10.118	2,19

Las cifras no dejaron lugar a dudas acerca de cual de los discursos tuvo más receptividad en la gente. El bussismo a solo dos años de su surgimiento ganaba su primer elección y conseguía 31 de los 60 convencionales que tendrían a cargo la reforma de la Constitución provincial vigente desde 1907. Una vez que la constituyente comenzó a sesionar, la lucha política se trasladó a ese terreno, primero para decidir cual era el número mínimo exigido para la aprobación de las mociones, después para definir el contenido concreto de las reformas. Una vez que se impuso el criterio de la mayoría simple propuesto por FR, que no estaba dispuesta a “soltar la manija que nos ha dado la mayoría de la ciudadanía” –según declaraciones del constituyente Raúl Topa- (*L.G.*, 22/02/1989), el debate se trasladó al interior de ese partido. Finalmente, las reformas más importantes que se llevaron a cabo fueron: la modificación de la ley electoral – se eliminó el Colegio Electoral y se impuso la regla de la mayoría simple-, la creación del cargo de vicegobernador y la eliminación de la cámara de senadores, estableciéndose el sistema unicameral, “para que las leyes necesarias se sancionen con mayor celeridad”. Esta cámara tendría a su cargo el prestar acuerdo

vitalicio a los jueces ante propuestas del Poder Ejecutivo, lo que equivalía a la desestimación de la propuesta de la UCR de crear un Consejo de la Magistratura. Además, se mantuvo el art. 24 de la antigua constitución que sostenía que “el gobierno provincial cooperará al sostenimiento del culto católico, apostólico y romano” y la obligatoriedad de que los candidatos a gobernadores pertenecieran a este culto.

Las reformas implementadas fueron duramente criticadas por políticos y constitucionalistas. Ambos coincidían en que FR había abusado de su condición de mayoría y que, en lugar de buscar el consenso, redactó una constitución para Bussi. Los puntos centrales de esa crítica eran, para algunos, el sostenimiento del culto católico por parte del Estado, para otros, especialmente para los peronistas, la eliminación de la Cámara de Senadores, hecho que, según esta interpretación obedecía exclusivamente al cálculo electoral. Sin esta modificación, muy difícilmente FR -que tenía concentrados a la mayoría de sus electores en la capital- podía alcanzar un gobierno unificado.⁸ Pero al General no le afectaban demasiado estas críticas, al contrario, una constitución a su medida despejaba toda duda de si sería capaz de reeditar un gobierno como el del Proceso. A menos de un año de la elección, con la UCR fuera de combate y con el PJ a cargo de una gobernación que tenía la casi unánime reprobación de la población, el camino hacia la gobernación parecía totalmente despejado para FR.

⁸ El concepto de gobierno unificado es tomado de Colomer (2000), para designar a aquellas formas en las que el ejecutivo y el legislativo pertenecen al mismo signo político.

Una “esperanza en marcha” que
desesperó al General

El operativo Ortega
y el factor Menem
La intervención federal
La ley de lemas

Tan fuerte era la percepción de que nada detendría a Bussi en su camino hacia la gobernación y de las dificultades que tenía el PJ de recuperarse, que el pragmático presidente Carlos Menem empezó a barajar la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Fuerza Republicana y por lo menos un sector de PJ, para postular a Bussi para gobernador y a Renzo Cirnigliaro, el líder del desaparecido Frente de Acción Provinciana, para la intendencia (*El Informador Público*, 24/02/1990). La idea del presidente era que Bussi no se quedara con la suma del poder local y que, si bien esto implicaba la salida del PJ de la gobernación, esta al menos siguiera siendo menemista.

La noticia desató una tormenta en las filas del PJ tucumano, para algunos una alianza con FR implicaba la imposibilidad de seguir ocupando cargos en el estado provincial -el propio Bussi se había expresado en ese sentido-, para otros, directamente afectados por la represión de los años '70 se trataba de una cuestión de principios. No obstante, este impacto negativo llevó a que una parte del partido se movilizara y comenzara a desplegar estrategias que, por un lado cerraran el paso al posible acuerdo Bussi-Menem, y por otro, de ser posible, consiguiera el apoyo de este último en las elecciones de octubre de 1991. Nació así el denominado “operativo Ortega”.

En marzo de 1990, una corriente interna del PJ envió a Miami una comisión encabezada por el diputado provincial Miguel Nacul, para que convenciera al popular cantautor Ramón “Palito” Ortega ser el candidato a gobernador por el PJ en las elecciones del 4 de Octubre de 1991.⁹ Una vez que Ortega dio las primeras señales de que aceptaría la oferta, Menem le

⁹ Ramón Ortega más conocido como “Palito” era un conocido ex cantante popular que debía parte de su celebridad a la pegadizas y optimistas letras de sus canciones y a un pasado de condiciones humildes en un pequeño pueblo del interior de Tucumán.

ofreció el respaldo desde la presidencia y mostró su disposición a “hacer todos los esfuerzos para que ganara” (*L.G.*, 25/05/1990). Bussi desestimó la candidatura de Ortega, sin embargo, cuando este último y Menem se pronunciaron, su reacción fue inmediata el mismo 25 de Mayo, dijo que Ortega “no solo está impedido constitucionalmente a aspirar al cargo de gobernador por no cumplir el requisito de la residencia que fija la Carta Magna”, sino además porque “la aguda crisis que vive la provincia no es para chambones”, agregando que desconocía “los títulos y las idoneidades que puede haber alcanzado (Ortega) en estos 30 años que falta de la provincia” (*L.G.*, 25/08/1990).

Pero no solo Bussi se encontraba molesto por la novedad, también el diputado y aspirante a la candidatura de gobernador por el PJ Rodolfo Vargas Aignase aseguraba que en su partido “no se tolerarán designaciones a dedo” y que “quienes pretendan gobernar la provincia, deben estar enterados de las angustias del pueblo y seguirlos de cerca”, al tiempo que exigía que cualquiera sea el candidato, este debía salir de la elección interna del partido (*L.G.*, 26/05/1990). Ortega, que aún se encontraba en Miami, se negó a concurrir a una compulsa interna con el argumento de que él sería el “candidato de la gente y de un partido político”, con lo que no solo eludió una elección con resultado incierto, sino que además se despegó del desprestigiado PJ. Finalmente, las diferencias se zanjaron con la propuesta de Menem de decidir las candidaturas por medio de una encuesta. En el sondeo, que estuvo a cargo de la consultora Mora y Araujo, no solo se exploró la intención de voto hacia los aspirantes peronistas, también se incluyó en el a Bussi. Los resultados fueron más que sorprendentes: Bussi obtuvo el 50% y Ortega, sin haber puesto un pie en la provincia y sin campaña electoral, consiguió un 40%. A pesar de las protestas de Vargas Aignase, estos resultados devolvieron el entusiasmo al peronismo y provocaron la ira del General, quien no dudó en calificar a la estrategia de Ortega como “un engendro perpetrado por un ex subversivo”, refiriéndose a Ricardo Díaz, presidente del PJ tucumano y ex militante montonero.

Por sin quedaban algunas dudas acerca de la decisión de Menem de apoyar a Ortega, el 8 de septiembre de 1991, la Nación intervino el Poder Ejecutivo y el Partido Justicialista de Tucumán. El gobernador interventor Julio César Aráoz llegó a la provincia con objetivos

claros: ordenar la provincia, mejorar la imagen del PJ y encolumnarlo detrás de la candidatura de Ortega. Las primeras medidas que el nuevo gobierno adoptó fueron, la conformación de una mesa de diálogo con los sectores estatales en lucha, asumiendo el compromiso de liquidar en menos de un mes los salarios adeudados, a la vez que anunciaba la implementación de un ambicioso plan de obras públicas. La mayor parte de la población aceptó con beneplácito la intervención, salvo Bussi, que denunciaba su carácter electoralista y anunciaba que derogaría todos los decretos-leyes que esta dictara (*L.G.*, 25/03/1991).

A pocos días de la intervención, ya se veían los primeros resultados: la suspensión de la casi totalidad de las protestas de los trabajadores estatales y la reanudación del diálogo del gobierno con los partidos políticos y organizaciones empresariales. A solo un mes de gestión, el gobierno anunciaba que la zafra azucarera -actividad económica principal de la provincia- se realizaría sin problemas debido a “la buena voluntad del presidente que autorizó una línea de crédito del Banco Nación para financiarla”, agregando que se había logrado un equilibrio fiscal producto del crecimiento de un 30% de la coparticipación federal y un 100% de la recaudación fiscal, lo que permitía -después de años- otorgar un aumento salarial a los empleados públicos (*L.G.*, 11/04/1991).

Esa situación fue aprovechada por Ortega para emprender su retorno, después de pasar por Buenos Aires “para saludar al presidente Menem”, el 14 de abril de 1991, llegó al aeropuerto de Tucumán donde lo esperaba una entusiasta multitud. Al día siguiente, Bussi se presentó ante la justicia para registrar una denuncia en contra del delegado comunal del distrito en el que se encuentra emplazado el aeropuerto, por el delito de emplear recursos estatales en la organización de la bienvenida de Ortega y contra el secretario de gobierno de la provincia Oséar Adre, por incumplir con la promesa de “prescindencia electoralista de la intervención federal tantas veces proclamada por el interventor Julio César Aráoz” (*L.G.*, 14/04/1991). Quien antes era el punto de referencia de todo el discurso político de Tucumán, se veía ahora obligado a seguir el ritmo del audaz experimento impulsado desde la presidencia de la Nación.

En las primeras declaraciones públicas de Ortega en Tucumán, reiteró su deseo de “ser el candidato de la gente y no de algún partido político en particular”, por lo que “aceptaba y agradecía el apoyo del PJ”, pero como una expresión importante dentro de lo que sería una nueva estructura electoral, el Surgimiento Innovador –SI-. El SI fue lanzado el 20 de abril de 1991, ocasión que Ortega aprovechó para distanciarse de la administración de Domato, manifestando que durante la misma, “la provincia se encontraba al borde del abismo y la falta de dirección”, por lo que los peronistas “lamentablemente éramos el rostro de la vergüenza” y, después de halagar al presidente Menem y a la gestión de la intervención federal, convocó a “todas las fuerzas políticas y sociales que estuvieran dispuestas a consolidar lo logrado y avanzar en el mismo sentido que la Nación” (*L.G.*, 21/04/1991).

El primero en concurrir a la convocatoria de Ortega-Menem fue el dirigente Sisto Terán de la U.C.D., detrás de él llegaron el P.I., la D.C., el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Movimiento Patriótico de Liberación, el MID y el P.S.P.. El eco que tuvo la convocatoria llevó a que, en lugar de que las fuerzas políticas se integraran al SI, se decidiera fundar un frente que, inspirado en el título de una de las canciones del flamante candidato, adoptó el nombre de Frente de la Esperanza -FE-¹⁰. Además de estos partidos, a la “esperanza en marcha”, se sumaron sectores independientes que, sin tener demasiadas coincidencias ideológicas, pensaban que era forma de evitar que Bussi llegara a la gobernación, contando también con el apoyo de algunos organismos defensores de los derechos humanos.

La heterogeneidad del FE, ampliaba sus potencialidades interpelatorias e indudablemente le daba mayores posibilidades electorales, sin embargo también le generaba innumerables problemas. A las dificultades para presentar un discurso relativamente articulado y coherente, sin que esto implicara un estrechamiento de la variedad ideológica de sus componentes, se le agregaba la casi imposibilidad de distribuir las candidaturas y los posibles cargos en el Estado sin que ninguno de los partidos se sintiera afectado y desertara. Bussi trató de explotar esta supuesta debilidad del FE calificándolo de “una bolsa de

¹⁰ La canción mencionada se titulaba “Yo tengo fe”.

gatos¹¹”, que “nunca llegará a un acuerdo y que lo único que puede ofrecer es más caos para Tucumán” (*L.G.*, 06/05/1991).

El FE, sin embargo, tomó dos caminos que no solo le permitieron hacer de las debilidades para articular un discurso una de sus fortalezas, sino además el principal argumento con el que enfrentarían a su adversario. 1) Redoblando la oferta redentora de Bussi, hizo de la fe el eje de su campaña. Ubicando a su candidato en el lugar de “testimonio vivo” invitaba a toda la provincia a seguir su ejemplo, y 2) Puso a la heterogeneidad de sus componentes como un ejemplo categórico de convivencia política y la tolerancia democrática. El problema de las candidaturas lo solucionó mediante un decreto ley de la intervención, por el que se adoptaba la regla electoral denominada “ley de lemas” en las elecciones que se venían. Bussi convencido de que esta regla solo llevaría más confusión a los electores del FE y fortalecería la imagen de unidad alrededor de su figura que su partido tenía, la aceptó sin objeciones.

Paralelamente, los amplios márgenes de negociación con los que contaba Ortega, al tener el apoyo de los gobiernos provincial y nacional, que se expresaba concretamente en créditos para la actividad azucarera le permitió “convencer” al prestigioso dirigente de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán –UCIT- Julio Díaz Lozano, para que lo acompañara como candidato a vicegobernador.

Ante la avasallante campaña del FE, que explotaba la imagen de salvador de un hombre que había abandonado su bienestar personal en Miami por el bien de “los hermanos tucumanos”, el General decidió cambiar el contenido que su mensaje -también redentor- había tenido en las elecciones anteriores y optó por hacer del orden, la racionalidad, la experiencia y la capacidad política los ejes de su propuesta.

¹¹ La frase bolsa de gatos es usada en Argentina para graficar una situación caótica y de descontrol, pero además en Tucumán la palabra gato se emplea como sinónimo de ladrón.

Se llegó así al día de las elecciones en las que se presentaban 132 boletas encabezadas por el lema del FE y Ortega gobernador y una por FR, que postulaba a Bussi. El engorroso conteo de la elección arrojó, varios días después, los siguientes resultados:

Partidos	Gobernador	Dip. Nac.	Leg. Prov.	% Gob.
FE	284.479	254.173	232.999	51,12
FR	247.802	235.565	219.312	44,59
UCR	23.424	31.088	34.166	4,21

A pesar de haber conseguido 7000 votos más que en la elección anterior, a Bussi se le escurrió de las manos la gobernación, que solo un año atrás, daba por asegurada.

El gobierno de Ortega y el largo camino hacia las elecciones de 1995.

Bussi al gobierno o el inicio de su caída

La exclusión de Bussi
Los republicanos no eran tan diferentes
Las denuncias de fraude en FR
Las divisiones del FE
El nuevo ascenso y el ocaso del General

El triunfo de Ortega fue objetado por FR, que acusaba al FE de haber llevado adelante “un monumental fraude” electoral, pero estos últimos tomaron a las denuncias como una “actitud desesperada de quienes vieron aguada una fiesta que daban por segura” (*L.G.*, 17/09/1991). Sin el reconocimiento de Bussi, el gobierno de Ortega comenzó contando con un fuerte respaldo de la presidencia de la Nación y empalmó con las bonanzas de los primeros años de la convertibilidad que el plan económico del ministro Domingo Cavallo había establecido. La estabilización de la economía, la caída abrupta de los índices inflacionarios y las nuevas posibilidades de crédito, tanto para los gobiernos, como para los ciudadanos, generaban una sensación generalizada de confianza y descomprimía la tensa situación social.

La ríspida relación entre FR y el FE se agudizó en tanto el ministro de gobierno, encargado de la política interna y de la relación entre gobierno y partidos políticos, era un enemigo manifiesto de Bussi. Hermano de un militante de la izquierda peronista asesinado por Bussi en persona, el ministro Ricardo Falú, no dejaba pasar oportunidad para expresar sus diferencias y recordar el pasado del líder de FR. Encargado de conformar una mesa de diálogo con los partidos políticos, Falú excluyó expresamente de la misma a FR, con el argumento de que esta fuerza política no había reconocido el triunfo del FE, por lo que tampoco reconocía al legítimo gobierno. Sin embargo, y con el objeto de introducir divisiones en las filas de FR, el ministro si invitó al bloque de legisladores de FR, al que “considero un interlocutor válido, al admitir de hecho el triunfo del FE con su presencia en la legislatura” (*L.G.*, 13/10/1991).

La iniciativa política de Falú produjo efectos. Los alicaídos integrantes de FR, parecían no estar dispuestos a esperar otra oportunidad incierta después cuatro largos años, sin negociar con un gobierno que, a diferencia de los anteriores, parecía lleno de vida. En la Cámara de legisladores y en los Concejos Deliberantes municipales, estaba pendiente el tratamiento de las dietas, con lo que, a pesar de las diferencias ideológicas, se presentaba la oportunidad de acordar alrededor de un tema que era de común interés. Por otro lado, los intendentes y jefes comunales de FR necesitaban del apoyo del gobierno provincial, tanto en lo que hace a la distribución de los fondos de coparticipación, como de infraestructura.

Bussi permaneció en silencio durante los seis meses que siguieron a las elecciones y la táctica de FR se limitaba a reaccionar denunciando discriminación o el empleo electoral del aparato del Estado. Quedaba claro que la iniciativa política estaba del lado del gobierno provincial. A principios del año 1992, FR sufrió dos golpes contundentes: por un lado, los legisladores en la primera reunión del año de ese cuerpo alcanzaron un acuerdo unánime para incrementarse las dietas, decisión que el poder ejecutivo vetó, haciendo uso de las facultades que la Constitución bussista le otorgaba. El intento de los legisladores recibió una amplia reprobación por parte de la población, pero, como lo reflejaba *La Gaceta* (12 de enero de 1992), “los que han quedado con el sayo más salpicado son los hombres del bussismo, quienes enarbolan como bandera intocada el lema de ser ‘la fuerza moral de los tucumanos’”. Consultado, Bussi se desentendió del tema, seguramente para evitar enfrentamientos con los legisladores de su partido. Obviamente, ante la opinión pública y la prensa, los laureles se los llevó el gobierno. Por otro lado, a pocos días de estos acontecimientos, el intendente de la localidad de Yerba Buena, Domingo Vera denunció haber recibido presiones por parte de Bussi, para que retire las felicitaciones que le había expresado al gobernador en la oportunidad en que este último visitó su comuna. El intendente acompañaba la denuncia con una nota por la que públicamente renunciaba al partido FR (*L.G.*, 28/01/1992).

Seguramente, fue la preocupación por esa situación la que llevó a que Bussi reapareciera en la escena pública, y cambiara sus tácticas de enfrentamiento sin diálogo. Aprovechando que Ortega se encontraba fuera de la provincia, el General visitó la casa de gobierno y se

entrevistó con el vicegobernador a cargo del ejecutivo. Consultado al terminar la reunión, sobre las razones de su cambio de actitud, Bussi respondió que “ante el flagelo del cólera todo se minimiza, lo que no quiere decir olvido”¹², agregando que, en caso de ser invitado, el no tendría problemas en reunirse con Ortega (*L.G.*, 07/02/1992). Paralelamente, los legisladores nacionales de FR intentan acercamientos entre Bussi y Menem con el objeto de “dejar en claro que las diferencias son con algunos sectores del peronismo local y no con el presidente” (declaraciones del Dip. Nac. de FR Alberto Germanó, *L.G.*, 05/04/1992). La reunión finalmente se concretó el 27 de abril y, en ella, el presidente consiguió que Bussi se pronunciara a favor de la reforma de la Constitución Nacional, que Menem venía buscando para poder ser candidato nuevamente.

Paralelamente, con el propósito de reactivar la vida partidaria y de calmar las diferencias internas, la Convención provincial de FR decidió iniciar un conjunto de cursos de formación política y convocar a sus primeras elecciones internas, para definir quienes ocuparían los cargos de conducción partidaria y las candidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. El 4 de Julio, dos listas, una encabezada por Bussi y la otra por la legisladora Josefina Fariña disputaron la presidencia del partido y el primer lugar en la lista de Convencionales. Los resultados oficiales del partido arrojaban un categórico ganador, la lista de Bussi consiguió el 97% del total de votos de la elección. Los resultados fueron cuestionados por Fariña, quien denunció que “lo realizado por mis propios compañeros de partido fue más vergonzoso que lo del 8 de septiembre de 1991 y después pretendemos hablar de la ‘la fuerza moral de los tucumanos’, es increíble”, enfatizó la legisladora (*L.G.*, 06/07/1992). Esta impugnación le valió el calificativo de “hija pródiga de FR” por parte de Bussi. A pesar de que las denuncias de Fariña fueron desestimadas por la justicia electoral, las sospechas de fraude ganaron credibilidad cuando fiscales de la propia corriente oficialista expresaron su sorpresa ante los resultados dados a conocer por el partido.

Los acuerdos de los legisladores para incrementar sus dietas, las negociaciones de Bussi con Menem, las denuncias del intendente Vera y, sobre todo, las denuncias de fraude en las

¹² Se refería con esto a la amenaza de una epidemia de cólera que afectó al norte argentino en el verano de 1992.

elecciones internas, empezaban a cambiar la imagen intransigente e inmaculada que los republicanos habían construido de su líder y de su partido.

En el Frente gobernante también se empezaban a notar las primeras diferencias. La política de desregulación económica aplicada en el ámbito nacional, impactaba negativamente en la actividad azucarera y llevaba a que entre Ortega, defensor acritico de esta medida, y el vicegobernador Julio Díaz Lozano, representante de la Unión de Cañeros Independientes, y además presidente de la Cámara de Legisladores, se produjeran virulentos enfrentamientos. Díaz Lozano estrechó filas y liderando al bloque de legisladores del PJ y a una importe corriente de ese partido, acusó a Ortega de “no defender los intereses de la provincia con la energía debida” (*L.G.*, 02/02/1994). Las divisiones llegaron a un punto que la dirección nacional del PJ decidió la intervención de la expresión local de ese partido, por intermedio del menemista Jorge Yoma.

Bussi aprovechó esa situación para retomar la iniciativa política y para reunificar a su partido detrás de la consigna “una voz de Tucumán en la Constituyente” y, con la propuesta de legislar para dar rango constitucional a una ley de defensa de la industria azucarera, recuperó terreno en las apreciaciones de la gente. Los radicales también trataron de sacar partido y, además de acusar a Ortega de “descuidar la atención de los problemas de la provincia”, proponían por intermedio de su candidato -el prestigioso rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Rodolfo Campero-, hacer todos los esfuerzos “para reparar los daños que la desregulación han producido en la provincia” (*L.G.*, 03/05/1994).

Con esa situación de fondo, las elecciones de Convencionales Constituyentes para reformar la Constitución Nacional, arrojaron los siguientes resultados:

Partido	Conv. Nac. Constituyente	Porcentaje
Frente de la Esperanza	201.691	39 %
Fuerza Republicana	234.405	45%
Unión Cívica Radical	41.553	8%
Frente Grande	18.315	3,6%

La caída del desempeño electoral del FE, era solo un síntoma de los problemas por los que atravesaba el gobierno y del desorden que la intervención del PJ no podía remediar. Los cuestionamientos al liderazgo de Ortega se profundizaron cuando, a mediados de año, el sector liderado por el diputado nacional José Vitar anunciaba la ruptura con el partido y su incorporación al Frente Grande, liderado a nivel nacional por Chacho Alvarez.

A medida que la fecha de las elecciones para la renovación de gobernador se acercaba, la capacidad de aglutinación de Ortega se debilitaba. Impedido constitucionalmente para renovar su mandato, al gobernador el poder se le escurría de las manos, al tiempo que las denuncias de corrupción contra su gobierno tomaban cuerpo: primero, la propia esposa de Ortega tuvo que asistir a la justicia para aclarar un supuesto desvío de fondos realizado en el plan de asistencia social que administraba, denominado “Por amor a la gente”. Después estalló un escándalo por la turbia privatización del servicio de agua potable que terminó con una rebelión de los usuarios que se negaron a pagar por el servicio.

El deterioro del FE daba vida al bussismo y, en menor medida, a la UCR, que a esas alturas parecían vivir más de los males ajenos que de sus propios méritos. Cuando los primeros estudios electorales daban ganador a Bussi para las elecciones a gobernador de 1995, el FE intentó una maniobra para reformar nuevamente la constitución, con el objeto de remover la cláusula que prohibía la reelección de Ortega. La iniciativa no prosperó y como un bumerán se volvió contra sus filas que se sumieron en una despiadada lucha por la sucesión. La imposición por parte de la intervención en el sentido en que el candidato a gobernador del FE debía ser del PJ, llevó a que algunos socios menores como el PI y una fracción de la DC emigraran del frente.

El panorama no podía ser mejor para Bussi, que, no estando dispuesto a correr nuevos riesgos ni a ser sorprendido como en 1991, gestionó un acercamiento con Menem para acordar que éste no interviniera en las elecciones de Tucumán, a cambio del apoyo de Bussi en la reelección del presidente. La irremediable situación del PJ tucumano y el pragmatismo del presidente definieron las cosas a favor del acuerdo. Con el camino despejado, el General emprendía la campaña electoral retomando algunas de las propuestas

de las elecciones de 1987, a las que se agregaba la denuncia de la corrupción del gobierno de Ortega, cerradas por un certero “Ahora sí, Bussi gobernador” (*L.G.*, 20/07/1995).

El PJ, finalmente postuló para gobernadora a la senadora Olijela Rivas y la UCR a Rodolfo Campero. Los resultados de las elecciones del 2 de julio, fueron:

Partido	Presidente	Leg. Prov.	Gobernador	% Gob.
F.E.	215.531	191.916	181.931	32,26
F.R.	64.005	119.542	267.688	47,45
U.C.R.	71.137	68.897	90.940	16,12
FREPASO	167.796	108.354	7.944	1,4

El sueño de Bussi se hizo realidad, pero también se iniciaba en ese momento el camino hacia su ocaso. Con una gobernación que evidenciaba innumerables problemas para solucionar los problemas más acuciantes y dar respuestas a las demandas sociales, con la profundización de la crisis de la industria azucarera y una legislatura que, dominada por la oposición, trababa gran parte de las leyes con iniciativa del ejecutivo, la imagen de Bussi se erosionaba poco a poco.¹³

La tan proclamada ejecutividad y eficacia se ponían en dudas y, por si eso fuera poco, su incorruptible imagen se vio manchada cuando, por investigaciones de la comisión de juicio político de la legislatura, se descubrió que el General tenía cuentas bancarias en Suiza, no registradas en su declaración jurada. Sin embargo, faltaba todavía que el General recibiera algunos golpes: en mayo de 2000, su hijo Ricardo Bussi, perdió la elección de gobernador en manos del PJ y, meses después, la Cámara de diputados de la Nación le rechazaba el pliego que lo acreditaba como diputado por “inhabilidad moral”.

Actualmente (agosto de 2003), después de ganar por el escaso margen de 17 votos la intendencia de la capital tucumana, Bussi se encuentra detenido, esperando ser extraditado a España, donde enfrentará los cargos de terrorismo, genocidio y corrupción.

¹³ Pero, a pesar del deterioro y del empobrecimiento de su imagen, en su gestión se respetó la libertad de prensa, de asociación, la legislatura y el poder judicial siguieron funcionando normalmente y había una competencia electoral de partidos real.

¿Rebote autoritario o expresión border-line de la democracia?

Breve reseña de las interpretaciones a las que dio lugar el bussismo

La incursión de Bussi en la arena política democrática, después de la sorpresa, dio lugar a una serie de interpretaciones y lecturas. Una revisión de estas, nos permite identificar claramente dos perspectivas: una -en la que se ubica la casi totalidad de los análisis-, que lo considera un fenómeno político autoritario y otra, que lo caracteriza como una expresión democrática. Se reseñan a continuación estos estudios, considerando *cómo* caracterizan al fenómeno que nos ocupa, el *porqué* o las razones que justifican esas caracterizaciones y las *causas* o motivos que se proponen como explicación de su surgimiento y consolidación.

La primera investigación sistemática sobre el bussismo la realizó el periodista político Hernán López Echagüe quien, en 1991, publicó un libro dedicado a la temática, denominado “El enigma del general”. Si bien en esa obra se trata de resumir tanto el pasado de Bussi, como los avatares de su incursión en la política, nos parece que es necesario rescatar las siguientes afirmaciones, porque éstas no solo sintetizan el espíritu de la investigación de López Echagüe, sino porque además, son el referente y presupuesto que atraviesa a todas las otras investigaciones que citamos más adelante y que consideran al bussismo como un fenómeno autoritario. Para el autor, “El Bussi de nuestros días es, abierta y manifiestamente, el Bussi de 1976, intérprete sin esbozo del estilo, el ideario y los objetivos que habían sido cara y cruz de la dictadura militar encabezada hace más de una década por Jorge Rafael Videla. Se ha convertido en el exponente más lúcido de una causa sin solución de continuidad” (: 12). La razón suficiente para caracterizarlo de este modo estaría dada en que “El militar fundamentó su campaña en el pasado. Hizo hincapié en dos recuerdos: la guerrilla aniquilada y su acción de gobierno” (: 95).

Coincidentemente con esta perspectiva, Dolores Marcos (2002), asevera que “se puede considerar que aún cuando el acceso al poder por parte de estos líderes –refiriéndose a Bussi y a otros militares que incursionaron en la política- sea a través de elecciones democráticas, no por ello dejan de ser autoritarios, tanto por el pasado del que provienen como por la cultura y los valores políticos que encarnan” (: 13), agregando que “Bussi no

solo proviene de las filas del ejército, sino que su propuesta política se afianza en su perfil autoritario y ejecutor, probado de manera sobrada durante la dictadura. Más que respetar las normas de funcionamiento de la democracia, -Bussi- hace usufructo de los intersticios y las concesiones hechas por los gobiernos civiles para instaurar una fuerza política que descrea en todo mecanismo de negociación y de deliberación para zanjar las diferencias. El partido tiene los mismos mecanismos de funcionamiento que el cuartel, y la población civil, una vez más es ubicada desde sus dirigentes, en el lugar de la ignorancia y la inoperancia que las Fuerzas Armadas han dado desde siempre a los ciudadanos. El lugar que históricamente han ocupado los militares en la Argentina, haciéndose cargo a través de sucesivos golpes de estado del mando de la nación, apareciendo como los salvadores de un orden quebrantado por los gobiernos democráticos y populares, es asumido desde el partido de Bussi como propio, legitimado por la 'apertura' que esta democracia ha brindado a quienes compiten por cargos políticos, sin distinguir entre procedencias, situaciones jurídicas o autoridades morales. Por ello, -agrega la autora- consideramos que Fuerza Republicana hace uso de las reglas que la democracia provee para instaurar una opción política autoritaria representada por su líder y aquellos que lo secundan, por su modo de operar y por su mensaje" (. 54).

Todo ello indicaría, que "El modo en que el general entiende la política y la competencia también responde a un esquema militar. Sus reivindicaciones de la 'guerra contra la subversión' no solo incluyen al enemigo de entonces sino que también se refieren a los adversarios presentes, una especie de continuidad de la lógica amigo-enemigo, pero por otros medios" (Marcos, 2002: 51).

Para Fernando Hevia, "la tendencia natural del bussismo se dirige hacia la consolidación de formas verticalistas y autoritarias del ejercicio de la política. Está en la tradición y preferencias de su líder, en su reivindicación del pasado y en los conflictos internos de su propio movimiento". Por lo que "la expansión de esta fuerza política está en contradicción con la estabilidad de las formas democráticas. Su advenimiento está reñido con los principios elementales que rigen el estado de derecho". El bussismo, para el autor, "Marca el advenimiento de un movimiento político que está expresando a una porción creciente de la sociedad en la búsqueda de una salida de ruptura, a través de un modelo que, favorecido

por una crisis política y social, surge y convive con el sistema, para modificarlo o si se hace necesario, para suplantarlos, con la finalidad de estabilizar y brindar seguridades al bloque tradicional de poder” (Hevia, 1989: 33).

Emilio Crenzel (2001), también caracteriza al bussismo como una expresión autoritaria que en su “discurso político anudó la reivindicación del pasado dictatorial –el orden, las obras públicas, la derrota subversiva- a la crítica a la dirigencia política local y al estado de cosas existente, localizándose desde una aparente exterioridad con respecto al escenario político.” (: 281). Por eso, “lo que expresa el bussismo como continuidad, como versión nueva de lo viejo, es la prolongación de la tradición autoritaria, a escala provincial de la historia política Argentina pero, de manera más substantiva, es la expresión de un cambio, de una originalidad dentro de esa continuidad autoritaria: la emergencia con apoyo popular de una fuerza, de una identidad política exitosa que logra articular perfiles autoritarios tradicionales y otros de constitución más reciente y moderna en términos histórico-políticos” (: 281).

Esquemáticamente se puede decir que, para los autores mencionados, el bussismo es un fenómeno político autoritario porque:

- Hizo una reivindicación del pasado de su líder y de la dictadura,
- Bussi era militar y encarnaba una cultura y unos valores autoritarios, especialmente los de orden, autoridad y respeto,
- Descree de los mecanismos de negociación y deliberación,
- En su accionar domina una lógica de amigo-enemigo,
- El partido adoptó mecanismos de funcionamiento similares a los del cuartel,
- La población civil es ubicada en el lugar de la ignorancia y la inoperancia,
- Bussi cultivaba una imagen de salvador,
- Era la tendencia “natural” de su líder y
- Es parte de su tradición y preferencias.

Estas características atribuidas al bussismo, estarían indicando que esa fuerza política es una “continuidad, una versión nueva de lo viejo”, una expresión que “hace uso de las reglas

de la democracia para instalar una opción política autoritaria”, por lo que lógicamente su expansión estaría “en contradicción con la estabilidad de las formas democráticas”.

Ahora bien, en el estudio de las causas a las que los mismos autores atribuyen el nacimiento y la consolidación del bussismo, también encontramos importantes coincidencias, aunque no en todos los casos se le dé el mismo valor a los factores que en ellas se consideran. Causas que para los autores explican al bussismo:

- La *crisis de los estilos de representación tradicionales*: si bien no es desarrollada con el mismo nivel de detalle en todos los estudios, es mencionada como un presupuesto, como un dato básico de un fenómeno político nacional actual que tiene sus raíces en el pasado.
- Una *estrategia comunicacional distorsionante* de lo ocurrido durante la dictadura que hizo que personajes como Bussi fueran políticamente aceptables. Para Dolores Marcos, por ejemplo, “Si Bussi obtiene simpatías y apoyos como líder en la democracia, es porque en el procesamiento de los recuerdos de su gestión hay hechos que se relativizan o se leen de una manera parcial, que no tienen que ver con la injusticia o el atropello, sino que reivindica un accionar ‘necesario’ a favor de la salud de la nación y de la región” (2002: 100). Pero a esta “falta de una estrategia comunicativa veraz” (:107), por parte de los distintos gobiernos democráticos de la post dictadura, se le agregaría una actitud por parte de la gente que Crenzel describe así: “ha sido endeble de parte del resto de la sociedad civil, la manifestación y despliegue de una voluntad de saber que implique el desenvolvimiento de un proceso de conocimiento que de cuenta, con mayor certidumbre y claridad, de las responsabilidades particulares y colectivas en el proceso de violencia política que vivió el país y en la dictadura misma, específicamente en su génesis y el desenvolvimiento del proceso social de desaparición de personas” (Crenzel, 2001: 285).
- La *crisis económica y social*, que los gobiernos democráticos no solo no habrían resuelto, sino que además la profundizaron, y que en gran medida se relaciona, a veces como causa, otras como efecto, con la crisis de representación mencionada en el primer punto.
- Una histórica *relegación de las provincias por parte de Buenos Aires*, que supuestamente habrían convertido a Tucumán y a otras provincias en una versión argentina de Macondo, en la que se reproducen las formas precapitalistas y feudales de la época de la colonia. “Una tierra vasta y lejana de la metrópoli, así como una población nativa sometida y

maltratada, constituyeron un caldo adecuado para cultivar ciertas pautas de conducta despóticas y corruptas” (Marcos, 2002: 14), y que por sedimentación configuraron,

- Una *matriz cultural provincial con rasgos autoritarios y paternalistas* dominantes. Esta matriz, que todos estos autores consideran el telón de fondo y la “vía regia” explicativa del bussismo, tendría sus orígenes en la historia más remota del país y especialmente de la provincia y se combinaría con formaciones históricas más recientes, como el período de abierta violencia política producto del cierre de 19 ingenios azucareros que tuvo lugar después de 1968 y, especialmente, con el que inauguró la dictadura militar con la instalación del terrorismo de Estado.¹⁴ Quién más exhaustivamente trabajó las causales culturales del bussismo fue Marcos (2002). La autora señala que “Sin caer en el determinismo cultural, no puede dejarse de lado en el análisis político de una región periférica, las condiciones culturales que tiñen la vida política de una fuerte tendencia hacia la búsqueda de referentes paternalistas asociados a la autoridad más que al juego libre del debate democrático. El caso que nos ocupa, la provincia de Tucumán, situada al Noroeste de la Argentina, cuenta con una tradición de prácticas autoritarias asociadas a la cultura del azúcar, en el cual el dueño del ingenio tiene no solo una relación de patrón con respecto a los obreros sino también una relación paternal, que se refleja en las relaciones personales y políticas de la región” (: 11). Ese arraigado paternalismo, indicaría “el perfil conservador de la sociedad” y sería la explicación de la aceptación social que tuvo la propuesta de Bussi de “orden, respeto y autoridad” (: 122). Pero además del paternalismo, la matriz cultural tenía otro componente no menos importante: la primacía de una “lógica del amigo-enemigo”, que hacía “imposible acudir a mecanismos menos extremos o menos violentos para buscar la coincidencia” (:16), por eso, “Si alguna matriz tiene la cultura política local debemos buscarla, más que en las ideologías forjadas a lo largo de nuestra historia, en esta lógica del enfrentamiento que dificultó: la estabilidad de las leyes sobre los intereses particulares de grupos y líderes poderosos; el consenso entre posiciones diferentes por sobre las luchas encarnizadas contra el enemigo; y la capacidad para tolerar el disenso por sobre el ansia de un orden, cualquiera fuera, capaz de poner fin a la inestabilidad, consecuencia de esta

¹⁴ Si bien todos los autores mencionados consideran la determinación de las distintas formaciones culturales a la hora de explicar el bussismo, el peso relativo que se le da a cada uno varía de unos a otros.

misma lógica antagónica”¹⁵ (: 17). En este sentido, “El éxito de un militar de la dictadura en elecciones democráticas, reflejaría la supervivencia de valores y actitudes frente al poder que reivindican estilos autoritarios y despóticos” (:26), por eso, “Bussi no constituye una novedad sino un emergente, una nueva manifestación de esas tendencias históricas, que a nivel local, en el noroeste argentino, se muestran con mayor contundencia que en otras zonas del país” (: 129).

Otros estudios, entre los que se pueden mencionar a los de Cossio (1996), Isla y Taylor (1995), Marañón y Cerviño (2001), comparten tanto las caracterizaciones que los autores mencionados realizan del bussismo, como las causas que se le atribuyen a su éxito político.

En una posición diferente a las reseñadas, se encuentra en soledad el estudio realizado por Marcos Novaro (1994), quien considera que “FR reconoce la Constitución Nacional y los derechos en ella protegidos, y por lo tanto no cabría considerarlo un partido anti-sistema”. Agregando que “muchas de sus posiciones y argumentaciones no son extrañas a la tradición nacionalista, conservadora o populista, por lo que sería un exceso llamar antidemocrático al bussismo y no extender el calificativo a muchos otros partidos y grupos. Además, ubicar a FR a partir de ciertos parámetros ideológicos no es sencillo, ya que su estrategia no se asienta en un sólido conjunto de creencias, cerrado, articulado internamente. Ni siquiera el nacionalismo cumple un papel importante (por ello, y por la ausencia de movilización de masas, se diferencia de los movimientos fascistas), y sus posiciones en el terreno económico son por momentos liberales, por momentos corporativistas y por momentos indefinibles”. Por eso, para “caracterizarlo parece más conveniente atender a la forma de sus interpelaciones, que lo colocan, en el límite del sistema democrático” (:131). Si el reconocimiento de la Constitución Nacional permite ubicar al bussismo al interior del campo democrático, sus posiciones ambiguas acerca de los tres rasgos centrales que caracterizan a la democracia, a saber, la competencia de partidos, el pluralismo político y el equilibrio de poderes, lo llevarían hacia los límites de este sistema (Novaro, 1994: 130).

¹⁵ Coincidentemente con esta perspectiva, Isla propone que cualquier estudio sobre Bussi debe comenzar por tener en cuenta que papel cumplió “la violencia inscripta en los sectores populares; como comprender las razones de los apoyos, consentimientos y complicidades que la sociedad, o sectores de ella brindan a estos personajes.” (Isla, 2001: 209).

En cuanto a las causas que explicarían al bussismo, el autor destaca la crisis de representación de los partidos tradicionales de las provincias periféricas, que sustentaban sus vínculos políticos en el clientelismo y el caudillismo, lo que los hacía incapaces para enfrentar la reducción de los recursos estatales, la agudización de los problemas de gestión, el incremento de las demandas sociales y los cambios en las expectativas (:93). En las provincias periféricas, se habrían recreado -según el autor-, un peculiar modelo de representación que no incorporó cambios importantes en la transición y que combinó una fuerte tradición populista, con una ausencia de alternativas al bipartidismo; una debilidad de las organizaciones de intereses, con la posibilidad de acordar entre los partidos mayoritarios la distribución de los recursos disponibles. Este conjunto de factores habría llevado a que el sistema resultara insuficiente e ineficaz a la hora de aplicar programas de gobierno de largo plazo que pudieran responder de manera estable a las demandas sociales, provocando un debilitamiento de las identidades partidarias. Esto habría conducido a una situación en la que las provincias periféricas se enfrentaron a una alternativa de hierro: o se transformaban por medio de la intervención de un actor externo, o una parte del sistema reaccionaba para incorporar modificaciones y encontraba un nuevo equilibrio (: 94 - 96).

En la crisis del estilo tradicional de representación política intervinieron, para el autor, múltiples factores, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: 1) el efecto perverso que tuvieron las redes clientelares en la gestión gubernamental, que trajeron como resultado un 2) auge de las movilizaciones sociales que aceleraron la ruptura de las lealtades partidarias, 3) la ausencia de mecanismo de colaboración y competencia leal entre partidos, que agregadas a las inexistentes diferencias ideológicas y programáticas hicieron que se estableciera una lógica de competencia simulada impermeable, y finalmente 4) los cambios demográficos, económicos y culturales que produjeron una sustantiva expansión y modernización de los centros urbanos, que derivaron en fuertes cuestionamientos a las formas políticas tradicionales (: 98-104).

En el capítulo siguiente, después de realizar un resumen de los discursos estudiados en los capítulos II, III y IV, se revisan críticamente las lecturas que se hicieron del bussismo.

Capítulo 5

Balance

y discusión final

En esta última sección, se resumen los discursos estudiados a lo largo de la tesis, después se presenta un esquema en el que se sistematizan esos discursos de acuerdo a ciertas dimensiones que se pusieron en juego en su análisis. Estas dimensiones son: el contexto en (y del) que surgieron los distintos discursos, el lugar de enunciación que configuraron sus principales emisores, los elementos que los organizaban, los elementos que hacían de opuesto (exterior constitutivo) de esos puntos nodales, los elementos que se articulaban en cadenas de equivalencias, la caracterización que se hacía de la situación, las propuestas centrales de las distintas ofertas políticas, la forma en que cada discurso proponía dirimir las diferencias políticas, las características que se le atribuían a los amigos o al nosotros, a los enemigos u otros y al ustedes, y la forma en que cada discurso significaba el pasado. Estas dimensiones se relacionan a su vez con las premisas centrales de nuestro marco teórico, que pueden ser entendidas como una forma de operacionalizar los conceptos de discurso, hegemonía, identidades políticas, posición de sujeto, punto nodal, exterior constitutivo, articulación, dislocación y mito. Después se discuten las distintas lecturas que se hicieron del bussismo, reseñadas en el apartado final del capítulo IV, a la luz de una perspectiva comparada en la que se hace interactuar a los distintos discursos y dimensiones de análisis. Finalmente, se propone una nueva forma de entender al fenómeno del bussismo.

Resumen de los discursos de Bussi militar, del alfonsinismo y del bussismo en democracia

En este apartado se exponen en forma sintética los discursos analizados en los Cap. II, III y IV. Después se realiza una esquematización de los mismos, teniendo en cuenta las dimensiones de análisis propuestas en el Cap. I.

El discurso de Bussi durante la última dictadura militar

El *con-texto* en el que surge el discurso de la dictadura estuvo pautado por la violencia política. En la Argentina de los años setenta, sobre todo después de la muerte de Perón (1 de julio de 1974), se abrió un periodo de enfrentamiento armado entre la ultra derecha peronista encabezada por el entonces ministro de Acción Social, José López Rega, que por medio de la organización paramilitar Triple A -Alianza Argentina Anticomunista- intentó eliminar a la dirigencia política y sindical de izquierda y la organización Montoneros, quienes después de la desaparición de Perón pasaron a la clandestinidad y retomaron la lucha armada, que habían iniciado a finales de la década de los '60. Antes de que se conociera la decisión de Montoneros, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), un pequeño grupo de extracción trotskista nacido en Tucumán y conducido por el estudiante de Ciencias Económicas Mario Santucho, anunciaba que emprendía el camino de la acción revolucionaria armada. Pero estas no eran otra cosa que la expresión más radicalizada de toda una lógica política imperante en una convulsionada Argentina. Dos proyectos políticos opuestos se enfrentaban en una lucha a muerte, sin que ninguno de ellos pudiera tener una clara supremacía sobre el otro.¹⁶ La ausencia de un discurso inclusivo que tuviera un espectro de interpelación más amplio, acentuaba las dificultades para constituir una *hegemonía* que demarcara el campo de la política y encauzara el conflicto entre intereses contrapuestos, llevaba a una situación de empate que pretendía ser superada por medio de la acción violenta. La respuesta estatal del gobierno de Isabel Martínez de Perón, que se complementaba con el informal apoyo a la Triple A, fue la de incrementar la violencia

¹⁶ Hablamos de dos grandes proyectos para simplificar el argumento, pero en rigor, lo que estaban en juego eran múltiples proyectos con sus formas de entender y hacer la política. No solo estaban quienes creían que la violencia no era una salida válida, sino que, entre quienes pensaban que sí lo era, había posiciones muchas veces contrapuestas, como en el caso de Montoneros, que tenía enormes diferencias con el ERP. Igualmente en el campo de la reacción se podían encontrar tendencias de corte nacionalista y otras más ligadas al ejército que defendían el liberalismo económico y la alineación con los EE.UU.

autorizando la intervención del ejército en asuntos de seguridad interior, achicando más aún el espacio de la política. Este hecho, que contó con el apoyo de algunas importantes figuras políticas de la oposición y que tuvo el objetivo declarado de “aniquilar a la subversión apátrida”, puede ser interpretado como un último intento de evitar el golpe de estado.¹⁷ El cálculo pudo haber sido que, cediendo parte del poder y ampliando las competencias de los militares no solo se restituiría la gobernabilidad del país, sino que además se calmarían sus demandas. Los militares sin embargo, no se conformaron con lo conquistado, vieron a las autoridades civiles como un estorbo para sus planes que excedían largamente la eliminación de la guerrilla. Abierta o encubiertamente apoyados y alentados por algunos civiles y políticos, aprovecharon la oportunidad para desalojar del gobierno a la desgastada administración de Isabel.

Consideramos que en cualquier estudio de la dictadura y especialmente de su expresión más acabada, el bussismo, es imprescindible tener en cuenta este contexto de violencia que, más allá de que su extensión e intensidad pueda ser ahora objeto de discusión, había logrado instalarse en el centro del escenario político y se convirtió, junto con la economía, en uno de los problemas centrales que demandaban una pronta solución.¹⁸ De ahí provienen buena parte de los insumos discursivos y las demandas de orden, los pre-textos que le permitirían a la dictadura legitimar el brutal terrorismo de Estado que implementó durante su gobierno.¹⁹ Creer que el discurso de la dictadura no reconoce antecedente alguno, sería suponer que este surgió de la nada, que se trató de una creación *ex nihilo*, con lo que, poco o nada se pueden indagar las condiciones históricas y discursivas específicas en las que (y de las que) surgió. Considerar estos antecedentes no implica justificarlo ni adherir a la “teoría de los dos demonios” sostenida por la CONADEP y el Alfonsinismo,

¹⁷ El contexto anterior a la dictadura y el papel que jugaron las elites políticas en ese momento se describen en la introducción del Cap. II de este trabajo.

¹⁸ Numerosos estudios sostienen que la capacidad operativa de las fuerzas insurgentes no ameritaban la intervención del ejército ni mucho menos justifican el golpe militar de 1976. Para ampliar ver López Echagüe (1996).

¹⁹ Los insumos discursivos a los que nos referimos son todas las formas en las que se reivindica la eliminación del otro, o en las que se lo caracteriza como carente de toda positividad. Un claro ejemplo es que el apelativo de apátrida, tan frecuentemente empleado por la dictadura, estaba ya presente en el decreto de Isabel Perón que autoriza la intervención de las FF.AA. en asuntos de seguridad interior. En cuanto a las demandas de orden, cabe recordar que el propio Alfonsín reconocía que esta era una de las reivindicaciones más sentidas en el momento del golpe. Ver Cap. III.

sino dar cuenta de que su eficacia y capacidad interpelatoria pueden ser explicadas en parte, en tanto el discurso militar hizo suya la demanda de orden sentida por una buena parte de la población, demanda que se constituyó en el objetivo central de sus acciones y se transformó en el eje articulador, la pauta que le permitía codificar todo su discurso. En su proyecto integral, la seguridad pública, la economía de mercado, la política cultural y educativa, la alineación internacional con los EE.UU., eran partes de la restitución del orden.

Con el golpe de Estado, el ejército no solo se apoderó del poder estatal, ubicándose en el lugar de único *enunciador* legítimo, también pretendió adueñarse del poder de la palabra. Igualó los términos ejército y patria (o nación, o república), e hizo de este último el lugar de una verdad única y esencial que reducía las *posiciones de los sujetos* a la dupla excluyente patria-antipatria, encarnando una la pura positividad y la otra la negatividad. Este era el punto de partida con el que la dictadura se disponía a reestablecer el *orden natural* perdido que, en tanto se suponía natural, podía prescindir de una operación de sutura y no necesitaba de la política como instancia de construcción de un orden provisorio. En todo caso esta era entendida como productora de divisiones artificiales, por lo que se buscaba su eliminación. La patria, encarnada por el ejército, representaba a la vez lo natural y lo sagrado, el *orden primordial* que se definía en oposición al *caos*, representado en primera instancia por la “subversión” y después por la política toda. A partir de estas premisas, la dictadura se autodefinía como lo honesto, lo claro, lo racional, lo sano, lo eterno y, por oposición, se identificaba a la política -propiciadora de la subversión-, como la delincuencia, lo oscuro, lo irracional, lo enfermo y lo eliminable. Apelando al discurso médico-biológico y ubicados en el lugar del sanador, los principales representantes de la dictadura diagnosticaban que la “república estaba enferma” y posicionaban a sus *enemigos* (los otros o contradestinatarios del discurso) como el agente patógeno, el cuerpo extraño que había infectado a la población, siendo esta última el enfermo que debía ser sometido a tratamiento. De ahí se desprende su programa de acción: “el saneamiento físico y moral”, que comenzaba con la eliminación del agente patógeno y que debía ser aplicado independientemente de los deseos y la voluntad del enfermo. Como el médico, se sentían autorizados y hasta obligados a intervenir en nombre de la humanidad y el bien común. La población, en un principio incapacitada por su situación de distinguir entre el bien y el mal,

debía someterse al tratamiento pasivamente, pero una vez que la “conciencia mórbida” se hizo presente se le reclamó colaboración. La conciencia de enfermedad y la relación que se tuviera con el sanador, cambiaba el estatuto del paciente, que primero era considerado como *población* (en el estado de desconocimiento de la enfermedad), luego como *comunidad* (cuando ya era conciente del mal que la aquejaba) y finalmente como *pueblo* (cuando, siguiendo al ejército colaboraba en la erradicación de los focos infecciosos). Este cambio se trasladaba a los agrupamientos políticos que la dictadura distinguía: la *población*, ese conjunto identificable únicamente por el lugar de residencia, no era parte ni del nosotros ni de los otros, la *comunidad*, en cambio daba muestras de ciertos grados de cohesión y pertenencia que la alejaban del agente disolutorio, y finalmente el *pueblo*, el todo unificado que seguía los dictados y adhería fervientemente a los valores de su cabeza, el ejército, con quien constituían el nosotros, reduciendo la ecuación a solo dos términos, el nosotros y los otros. En su elaboración del pasado, la dictadura distinguía claramente dos periodos: uno sagrado, el de los orígenes y los padres fundadores de la organización nacional, poblado de gestas militares gloriosas y el otro, el del pasado más reciente, dominado por los vicios. Por eso el objetivo de la dictadura era volver al pasado originario y no dejar huellas de esa otra historia espuria.

El alfonsinismo

El discurso alfonsinista, en cambio, nació en un contexto radicalmente distinto. Los primeros escritos de Alfonsín datan de principios de los años '80, cuando la dictadura no solo controlaba el poder, sino que daba pocas señales de que lo abandonaría. A pesar de ello y de la actitud complaciente de la casi totalidad de las élites políticas, Alfonsín cuestionaba la legitimidad de la dictadura y hacia del cambio de régimen el eje central de su programa político, proponiendo que la lucha por la democracia -definida en esta oportunidad como un sistema de normas y reglas-, se convirtiera en el punto en el que debían confluir todas las fuerzas políticas populares.²⁰ La democracia, entendida como procedimiento, debía ser el principio organizador de la política; el tópico que permitiera definir los agrupamientos políticos entendidos por Alfonsín en términos de mayorías (el

²⁰ Para ampliar, se puede consultar Cuestiones Argentinas, de Alfonsín (1980), analizado en el Cap. III del presente trabajo.

nosotros) y minorías (los otros). A diferencia de lo que sucedía en el contexto en el que nació la dictadura, la forma que debía tomar la lucha política propuesta tenía que ser coherente con el objetivo a alcanzar, por lo que la violencia (entendida como lucha armada), definida como opuesta y excluyente con los procedimientos de la democracia, quedaba descartada y los enemigos (las minorías), debían ser neutralizados en su accionar (a través de la unión de las mayorías) pero no eliminados. Al año siguiente (1981), el contexto cambió, el fracaso del plan económico de Martínez de Hoz empezó a poner en dudas las intenciones de perpetuarse del régimen, y Viola –sucesor de Videla- mostró una actitud más aperturista. Una de las primeras acciones de su gobierno fue convocar al diálogo con los principales partidos políticos, quienes por iniciativa de la UCR formaron la Multipartidaria. Alfonsín, quien dirigía la minoritaria corriente Renovación y Cambio y no era parte de las negociaciones, publicó por ese entonces un documento titulado “Algunas reflexiones sobre cuestiones que el neofascismo plantea a los partidos políticos para la definición de su rol bajo un régimen militar en Latinoamérica” (1981). En ese documento se plantea más enfáticamente la necesidad de un cambio de régimen en la Argentina, pero la democracia ya no solo se la define procedimentalmente. Las normas y reglas ya no resultaban suficientes para demarcar el campo de amigos y enemigos, ya que estos últimos podían aceptarlas con el propósito de traicionar los principios democráticos. La democracia era redefinida por medio de la agregación de atributos, que Alfonsín los sintetizaba en la vocación de solidaridad, la fraternidad, la vigencia de valores éticos y morales, la organización social, de los partidos políticos, de las asociaciones gremiales y el rechazo a ciertas formas económicas que supuestamente fomentarían el individualismo (Ver Cap. III: 97, 98). Con esta reformulación, Alfonsín no solo profundizaba su crítica a la dictadura, sino que ésta también alcanzaba a aquellos sectores más condescendientes de la Multipartidaria, que junto a los militares podían estar pensando en una apertura controlada. Estas diferencias se harían más evidentes cuando la Multipartidaria tomó una actitud cauta ante la disposición del General Galtieri -sucesor de Viola-, de interrumpir el diálogo político, pero se agudizaron más aún ante el apoyo acritico que la casi totalidad de los políticos de los partidos mayoritarios dieron al gobierno en el momento de la guerra de Malvinas. Mientras la dirección oficial de la UCR, el PJ, el PI, la DC y el MID dejaban de

lado las demandas de democratización, Alfonsín reclamaba con más fuerza el cambio de régimen y criticaba a quienes con el pretexto de la guerra legitimaban a la dictadura.

La derrota del ejército argentino en Malvinas, cambió nuevamente el contexto y sumió a la dictadura en un estado de crisis terminal. El gobierno quedó en la más absoluta soledad y la totalidad de los partidos y organizaciones sociales pasaron a conformar un extenso y amorfo campo anti régimen del cual la multipartidaria pretendía ser su representante, para evitar desbordes y negociar con el debilitado gobierno las pautas de la transición. El problema que se le presentó a la Multipartidaria fue que, para la mayoría la población, el gobierno no representaba un interlocutor válido, por lo que sus intentos de mediación fueron interpretados como un apuntalamiento al desprestigiado gobierno.

En medio de una explosión de demandas sociales, a mediados de 1982, el gobierno levantó la veda política y convocó a elecciones para noviembre del año siguiente. Una buena parte de la lucha política se encausó por medio de las líneas internas de los partidos que comenzaban a reorganizarse. Con la certeza de que el cambio de régimen era inevitable, Alfonsín arremetió contra la dirección de la UCR planteando que ya no había nada que negociar con los militares y que la totalidad de la transición debía ser diseñada por las fuerzas democráticas, para evitar que el moribundo régimen condicionara a la democracia que se venía. El peronismo por su lado se encontraba profundamente dividido en numerosas líneas internas y no podía articular un discurso coherente y relativamente unificado. Parecía más aplicado a saldar antiguas cunetas pendientes entre las corrientes internas de izquierda y derecha. Una expresión de la disputa interna del PJ, tuvo lugar cuando en un acto de campaña, la izquierda de ese partido acusó a un sector del sindicalismo de estar tramando un pacto con los militares para que dejaran en sus manos el proceso de normalización de los sindicatos, a cambio de que, si ganaba el peronismo, no se investigaran las violaciones a los derechos humanos. En un principio casi toda la dirigencia política no peronista hizo suya esa denuncia, no obstante Alfonsín fue el único que persistió en ella y pudo capitalizar su rédito político en la medida en que la reformuló como la síntesis del dilema político del momento: se avanzaba hacia una democracia plena (definida por Alfonsín como “democracia moderna”) o ésta se truncaba en una democracia

restringida, limitada. La denuncia del pacto le permitió a Alfonsín diferenciarse nuevamente de los demás dirigentes políticos y establecer nuevas pautas de distinción entre quienes estaban a favor de una democracia plena y quienes trataban de restringirla, aún antes de nacer. La bandera de la democracia, que se podía pensar que perder algo de convocatoria cuando la caída de la dictadura era inminente, era levantada por Alfonsín más alta que nunca, en esta ocasión para definir la calidad del régimen que se venía. La fuerza con la que la denuncia del pacto militar-sindical se instaló en el centro del escenario político fue tan intensa, que todo el debate giraba en torno a ella. Convertido en “el paladín de la democracia”, Alfonsín ganó con comodidad la elección interna desplazando al balbinismo de la conducción de la UCR, en tanto el PJ definió sus listas de candidatos por medio del acuerdo de sus corrientes internas. Establecidas las candidaturas, el PJ se limitaba a invocar la memoria por Perón y a proponer una reedición de su pasado glorioso. El alfonsinismo en cambio proponía una ruptura radical con el pasado y un futuro de goce pleno de las libertades y derechos que excedían ampliamente los beneficios de una democracia procedimental. Vaciada de su contenido específico, la democracia propuesta por Alfonsín fue la superficie de inscripción de las demandas sociales de educación, salud y bienestar, entre otras. La ampliación de la definición de la democracia por medio de la incorporación de atributos, fue uno de los factores que le permitieron al discurso alfonsinista extender sus fronteras interpelatorias y ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 1983.

El nuevo gobierno, aprovechando la legitimidad que le daba el hecho de haber llegado al poder por medio del voto y el entusiasmo que generaba el retorno a la democracia, redefinió a esta última en términos éticos y se propuso encarar dos problemas, que involucraban a las corporaciones militar y sindical -quienes habían sido considerados los enemigos de la realización de la democracia moderna- y cuya resolución se consideraba decisiva para el futuro del régimen: la cuestión de la violación a los derechos humanos y la democratización de los sindicatos. El inicio del juicio a las Juntas de comandantes y la falta de definición de lo que pasaría con los mandos medios y bajos del ejército, por un lado y la iniciativa de ley de reforma sindical, por otro, llevó a que las relaciones del gobierno con los militares y los sindicalistas se deteriorara más aún. La reacción de la burocracia sindical

no se hizo esperar, montada en el malestar creciente que generaba una situación económica que no solo no había resuelto los problemas heredados de la dictadura, sino que los había profundizado, comenzó a movilizar a sus sindicatos en contra del gobierno, a la vez que los legisladores del peronismo ortodoxo operaban en el Congreso para desactivar la iniciativa de ley del oficialismo. Los juicios a los comandantes lograron llevar tras las rejas a los principales responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, la situación de la oficialidad de menor rango no se resolvía, generando inquietud en las filas de los uniformados. Paralelamente, la presión ejercida por los sindicatos obliga al gobierno a implementar un ensayo económico ecléctico denominado “Plan Austral” (abril de 1985) en el que se combinaban recetas monetaristas clásicas con medidas para reformar el estado y planes de contención social. El plan fue codificado en términos de democracia en tanto se suponía que este pondría freno a uno de los mecanismos más perversos de exclusión social: la hiperinflación. Los efectos de shock fortalecieron temporariamente al gobierno que aprovechó para anunciar un plan integral para profundizar y consolidar a la democracia. En el célebre discurso de Parque Norte (diciembre de 1985), Alfonsín anunciaba lo que sería el proyecto más ambicioso de su gobierno: redefinir la democracia sobre las bases de una ética de la solidaridad social y transformar la cultura del pueblo por medio de una Reforma Intelectual y Moral. El proyecto incluía ahora a los sindicalistas, quienes ante el fracaso del intento de democratización de los sindicatos, habían dejado de ser identificados por el gobierno como uno de sus principales enemigos. El convite fue aceptado por la burocracia sindical y sin dejar de presionar al gobierno aprovechaban la puerta que éste les abrió para negociar. “Pegar y negociar” eran las tácticas con las que contaban los antiguos enemigos declarados del alfonsinismo. Pasado un año y medio del anuncio del plan austral, sus efectos de shock comenzaron a diluirse y la inflación contenida crecía poco a poco. El año siguiente, los militares que no habían sido enjuiciados por la justicia militar fueron obligados a comparecer ante la justicia civil, hechos ante los cuales se producen las sublevaciones “carapintadas” de Semana Santa (marzo de 1987). La primera posición adoptada por el gobierno fue la de un enérgico rechazo a los planteamientos militares, y acompañado por la movilización de gran parte de la población y de todos los partidos, con excepción de la derecha liberal, declaraba su disposición a aplastar a los sediciosos. Pocos días después capitularía aprobando junto con el peronismo y algunos partidos provinciales

una ley por la que se exculpaba a la mayoría de los que habían violado los derechos humanos, invocando la figura de la obediencia debida. Aunque el gobierno trató de presentar lo dispuesto como totalmente compatible con la democracia que el mismo había definido, la medida llevó a que una buena parte de quienes más fervientemente habían sido interpelados por su discurso lo enfrentaran. Los dos años siguientes no fueron meros turbulentos: la inflación se desbocó y, a los frecuentes paros de la CGT, se le agregaron los saqueos por parte de la población más empobrecida en las principales ciudades del país. Esto redundó en una contundente derrota electoral de la UCR en las elecciones presidenciales, que obligaron a que Alfonsín entregara el gobierno a Menem seis meses antes del cumplimiento de su mandato.

Todo este proceso, que se inicia con las primeras propuestas de Alfonsín de hacer de la democracia el eje central de la política argentina, hasta la configuración hegemónica en el periodo de caída del autoritarismo, a pesar de mostrar serios signos de deterioro en los últimos años del gobierno radical, no fue totalmente desarticulado ni muchos menos reemplazado por una nueva hegemonía que se definía como su opuesta. Aunque fue sustancialmente redefinida por el menemismo, muchos de sus principios y valores permanecieron como parte del sentido común.

El discurso del bussismo en democracia

Tres meses después de que se dictara la ley de obediencia debida surge el bussismo en la provincia de Tucumán (agosto de 1987). En el escenario político local dominado por la campaña electoral de renovación de gobernador se presentaban dos novedades importantes: el peronismo concurría al comicio dividido en dos fuerzas (el PJ y el FAP) y, por primera vez en la historia, la UCR podía llegar a la gobernación por la vía del voto. La vigencia de una ley que establecía la elección del gobernador por medio de un Colegio Electoral, más la estrategia acuerdista de la UCR, hacía que los partidos mayoritarios cuidaran que los adversarios no se sintieran demasiado agredidos por sus mensajes. La UCR proponía un gobierno de consenso y el PJ uno de “puertas abiertas”. El discurso más confrontacionista era el del FAP, que atacaba a la política económica del gobierno nacional, a la administración provincial y al peronismo oficial, al que acusaba de imponer un candidato

por medio del fraude. Su propuesta central era volver a un peronismo ortodoxo, el “peronismo de Perón”. Las diferencias entre los partidos mayoritarios pasaban más por el perfil de sus candidatos y por su interpretación de la crisis (de la que el PJ responsabilizaba al gobierno nacional y la UCR a la administración provincial), que por las propuestas para resolverla. Tres semanas antes de las elecciones, cuando ya todo parecía definido y la atención de los políticos y la prensa se centraba en los cálculos de lo que podía suceder en el Colegio Electoral, apareció Bussi como candidato de Bandera Blanca, un partido conservador marginal. Su presencia, además de asombrar a casi todos, reconfiguró el escenario político: mientras los partidos de izquierda y los organismos de derechos humanos retomaban la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y a los partidos mayoritarios que pocos meses antes habían aprobado la ley de obediencia debida, a la derecha liberal se le presentaba el dilema de mantener sus candidaturas o retirarlas para apoyar a Bussi. Los únicos que parecían no advertir la importancia de la presencia del General eran los partidos mayoritarios, confiados en que éste no sacaría demasiados votos. No lo consideraban un adversario digno de atención. Sin embargo, el asesinato de un joven militante de izquierda, que participaba de una movilización que pretendía impedir la realización de un acto del partido de Bussi en Tafi Viejo, los obligó a participar de una manifestación en repudio de esos hechos. Aún así y con el pretexto de no polarizar a la población entre Bussi y el resto de los candidatos, impusieron que la marcha se realizara bajo la consigna general “por la paz”. Este hecho fue interpretado por los concurrentes como una muestra de debilidad y claudicación ante el militar. Los hechos de Tafi Viejo llevaron a que Bussi suspendiera sus presentaciones en público y desarrollara su campaña en la prensa escrita y en la televisión. Los ejes de esa campaña eran: la crítica a las élites políticas de los partidos mayoritarios a las que acusaba de que, por haber defender intereses sectoriales y personales, habían llevado a la provincia a una situación de “crisis sin parangón” en la historia. Ante ellos se presentaba como militar, un hombre que, por no pertenecer al ámbito político, podía representar a todos los tucumanos y buscar el bien común. Proponía además reestablecer el orden, el respeto y la seguridad, respetando los derechos civiles y políticos y la vigencia de la democracia. Reivindicaba al Proceso y su pasado presentándolos como la instancia que hizo posible la vigencia de la democracia. Aún así y “para bien de la Nación” proponía recordar la obra

pública y olvidar la “guerra sucia”. Ante las acusaciones por las violaciones a los derechos humanos, decía ser un civil que lo único que pretendía era que se le respetara el derecho de competir en las elecciones.

A pesar del escaso tiempo de campaña, en las elecciones del 6 de septiembre de 1987, Bandera Blanca consiguió 100 mil votos. Entusiasmado por ese desempeño, Bussi se proclamó el ganador moral de las elecciones, anunció su disposición a fundar un nuevo partido y a hacer de la política su profesión. Con posterioridad a las elecciones se abrió un periodo de negociaciones en el Colegio Electoral en las que los otros partidos parecían hacer todos los esfuerzos para confirmar las caracterizaciones que Bussi había hecho de ellos. Después de tres meses de oscuros acuerdos y de innumerables idas y vueltas de los electores de los demás partidos, se llegó a la definición de quien sería el gobernador: el justicialista José Domato era elegido con los votos de su partido y los del FAP. Mientras la UCR demostraba impotencia y frustración ante esa situación, Bussi le pedía públicamente al nuevo gobernador que renunciara antes de asumir, ya que su elección había sido producto de acuerdos espúreos, de un contubernio que la mayoría de la población rechazaba. Fortalecido ante la opinión pública, el 9 de julio de 1988, fecha en que se conmemora la declaración de la independencia argentina, lanza Fuerza Republicana, su partido político. En este lanzamiento convoca a todos los tucumanos, a los independientes, a los radicales de Irigoyen, Sabatini, Illia y Balbín y a los peronistas que querían mantener las conquistas sociales, a sumarse a su proyecto político. Al año siguiente (1989) respaldado por el partido, siendo referencia de todas las otras fuerzas políticas y bajo el lema “La fuerza moral de los tucumanos”, participa en la contienda política en la que se elegían diputados, senadores y convencionales constituyentes provinciales. FR consiguió el 51% de los votos, relegando a la UCR a un lejano tercer puesto (6,6 %). Con mayoría propia y sin acordar con los demás partidos, los convencionales bussistas reformaron la Constitución Provincial introduciendo los siguientes cambios: se estableció la elección directa de gobernador, se creó al figura de vicegobernador, se adoptó el sistema unicameral eliminado la cámara de senadores y se prohibió la reelección del primer mandatario. A pesar de que se declaraba la libertad religiosa y de culto, se mantuvieron sin reformas las

disposiciones por las que se establecía la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas y la obligatoriedad de que el gobernador profesara la fe católica.

El triunfalismo que se apoderó de FR contrastaba con la desesperación del PJ. Sumidos en el debate interno y cuestionados por el pésimo gobierno provincial, algunos dirigentes peronistas comenzaron a buscar un salvador fuera del partido. Las elecciones de 1991 se aproximaban y si no se orquestaba rápidamente una estrategia, la supremacía que FR alcanzaría en el legislativo, sería solo el preludio de su desembarco en la gobernación. Surgió entonces el nombre de Ramón "Palito" Ortega, un tucumano que había salido de la pobreza a fuerza de cantarle loas a la fe y al amor. Inmediatamente se armó una comitiva y viajaron a Miami -lugar de residencia del cantautor- para convencerlo de que volviera a su tierra y disputara el gobierno de la provincia. Los enviados volvieron con un si condicionado de Ortega. La idea entusiasmó tanto al presidente Menem (que a esas alturas especulaba con alcanzar un acuerdo con Bussi), que cambió su decisión de dejar que el gobierno provincial y PJ tucumano murieran por inanición: el 8 de septiembre de 1991 en uso de sus facultades de presidente de la Nación ordenó la intervención federal de la provincia y como presidente del partido, la intervención del PJ local. Ambos -gobierno y partido-, fueron puestos a disposición de Ortega. Esto produjo ciertas inquietudes en Bussi, quien se empeñaba en denunciar el carácter electoralista de los actos de gobierno de la intervención y la ineptitud política del cantor. Pero estas inquietudes se convirtieron en enojo cuando veía que Ortega crecía en las apreciaciones de un electorado que era interpelado con algunas de sus estrategias discursivas: se presentaba como un crítico de las elites políticas (especialmente de las que habían gobernado la provincia) y redoblaban las apuestas redentoras. Las diferencias estaban en que Ortega no se presentaba como extraparlítico, sino como *peronista extrapartidario* y en que, en lugar de proponerse como único redentor, convocaba a todas las fuerzas políticas y sociales a conformar un amplio frente de salvación. Esta convocatoria terminó materializándose en el Frente de la Esperanza. Una vez que la estrategia menem-orteguista cuajó, el gobierno de la intervención federal convocó a elecciones de gobernador para noviembre de 1991 e introdujo una modificación en la ley electoral, por la que se implementaba el sistema de lemas. Esta modificación le permitió al FE resolver el problema de las candidaturas sin

poner en peligro su integridad, ya que podía contener en su interior una infinidad de corrientes y tendencias (que iban de izquierda a derecha), postulando un único candidato en la categoría gobernador.

Ante la avasallante campaña del FE, Bussi decidió cambiar su estrategia discursiva: su mensaje perdió parte del carácter redentor y se centró más en el orden, la racionalidad, la experiencia y la capacidad política. Pero esto era solo una muestra más de que las pautas políticas en Tucumán las imponían ahora los otros y de que la gobernación -que solo diez meses atrás parecía asegurada- se le escurría de las manos. Las elecciones confirmaron esta tendencia: el PJ consiguió el 51% de los votos, FR el 44,59% y la UCR el 4,21%. Se abría ahí la primera crisis del bussismo.

La estrategia que el nuevo gobierno implementó por intermedio de su ministro de gobierno fue la de aislar a Bussi. Convocó a una mesa de diálogo político y social excluyendo al General con el argumento de que éste no había reconocido la legitimidad del gobierno de Ortega. Se invitó inclusive a los legisladores e intendentes del bussismo, los que en su mayoría respondieron afirmativamente. FR, ese bloque monolítico, empezaba a mostrar sus primeras fisuras, sin que su conductor indiscutido reaccionara. Sumado a ello, meses después, en las primeras elecciones internas de renovación de autoridades partidarias, una integrante de la lista opositora a Bussi denunció fraude. La moralidad de FR comenzaba a parecerse a la de los otros partidos. Sin embargo, las debilidades del bussismo pudieron disimularse cuando en el frente gobernante se comenzaron a profundizar las diferencias y las divisiones. La adhesión acrítica de Ortega a las medias desregulatorias que el gobierno nacional implementó y que impactaron negativamente en la actividad azucarera, lo alejó de su vicegobernador y de todas las entidades vinculadas al sector. Lo enfrentó también a sectores del PJ. Bussi aprovechó la coyuntura, reordenó el partido y retomó la iniciativa política reubicándose ante la opinión pública. Bajo la consigna “una voz de Tucumán en la Constituyente” y con la propuesta de dar rango constitucional a una ley de defensa de la actividad azucarera, encaró las elecciones de Convencionales Nacionales Constituyentes de mayo de 1994. Los resultados ubicaron a FR 6 puntos por arriba del FE.

Los cuestionamientos al liderazgo de Ortega se incrementaron y el PJ -a solo un año de las nuevas elecciones de gobernador- no lograba cohesionarse. Impedido constitucionalmente para renovar su mandato, la capacidad de convocatoria del gobernador era ínfima. El panorama parecía aclararse nuevamente para Bussi. Sin embargo, como ya no estaba dispuesto a correr riesgos, acordó con Menem la prescindencia de este último en las elecciones de Tucumán, a cambio del apoyo de FR a sus aspiraciones de reelección en el cargo de presidente. El PJ llevó de candidata a gobernadora a la resistida senadora Olijela Rivas, representante del “ala histórica” del partido y Bussi, que había retomado el estilo de su primer campaña electoral, se impuso en las elecciones con el 47% de los votos. El General era por segunda vez gobernador de Tucumán, solo que en esta ocasión llegaba a ese cargo por medio de mecanismos democráticos.

El gobierno de Bussi no fue muy diferente a los que antes fueron blanco predilecto de sus críticas. Aunque es justo señalar que en él se respetaron en lo sustancial las libertades civiles y políticas, de expresión, de asociación, de prensa y se mantuvo la independencia de los poderes, la imagen del Bussi incorruptible, terminó seriamente deteriorada. Casi al final de su mandato, se descubrió que el General tenía depósitos en Suiza que no habían sido asentados en su declaración jurada. Esto le valió que la legislatura lo suspendiera por dos meses en el desempeño del cargo de gobernador. Para colmo de sus desgracias, su hijo Ricardo perdió las elecciones de gobernador y la cámara baja de la Nación le rechazó, por “inhabilidad moral”, el pliego que lo acreditaba como diputado nacional por Tucumán. De ahí en más, FR pasó a ser dirigida por Bussi hijo y se mantiene como segunda fuerza política de la provincia.

Más recientemente, en el mes de Julio de 2003, Bussi ganó las elecciones para intendente de la Capital de Tucumán por el estrecho margen de 17 votos. Días después, fue detenido a pedido del juez español Baltasar Garzón, para responder ante las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, terrorismo y corrupción. Paralelamente, en Argentina se discute, por iniciativa del ejecutivo, la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. De ser así, el General deberá comparecer por los mismos cargos ante la justicia argentina.

Esquema comparativo a partir de distintas dimensiones de análisis

Discurso/ dimensiones	Bussi militar	Alfonsinismo	Bussi político
<i>Contexto en el (y del) que surgió:</i>	De marcado desprestigio del gobierno de Isabel, a lo que se le agregaba la ausencia de un centro de gravedad y una hegemonía que organizara la política, agravado porque algunos grupos pretendían superar esta situación por medio de la lucha armada. La democracia no era un tema socialmente problematizado ni era referencia central del discurso político.	Sus orígenes se remontan al período en que la dictadura mantenía un férreo control del poder político (1980), pero cobra fuerza cuando esta, después de los sucesivos fracasos económicos y la derrota de Malvinas (1982), entra en descomposición. Este último periodo, puede ser caracterizado como de dislocación del orden establecido.	De vigencia del estado de derecho y de las libertades públicas, en donde la democracia seguía siendo la pauta que organizaba la política, pero que, debido a sus fracasos y también a sus logros, se prestaba para ser redefinida. Contaban además la crisis económica y el desgaste de los partidos políticos mayoritarios.
<i>Lugar de la enunciación que (pretendió) configuró:</i>	El de la verdad única y esencial de la Patria, la que era igualada al Ejército. Lugar del médico que pretendía ser absoluto, monológico.	El de "paladín de la democracia", con competencias para proponer cual debía ser el principio articulador de la política, cuales los términos que lo definirían, cuales se le oponían y quienes los sujetos competentes.	Se desdoblaba en el militar que "supo conducir una gesta histórica" y el político que, como civil, aspiraba a conducir los destinos de Tucumán. El lugar de enunciación se configuraba de acuerdo al destinatario del discurso. Ya no era la encarnación de una verdad única y esencial.
<i>Elementos que organizaban el discurso (puntos nodales):</i>	Orden natural, Proceso de Reorganización Nacional, Patria, República y Ejército, que ocupaban lugares intercambiables. La democracia no estaba presente en el discurso de la dictadura.	La democracia era el eje articulador de toda la actividad política. En el periodo preelectoral de 1983 se constituyó en una hegemonía política en la Argentina. El orden era entendido como un producto, un derivado de la democracia.	Democracia <i>con</i> orden, seguridad, respeto y moralidad. No pretendió suplantarse la hegemonía vigente, pero sí la redefinió incorporando nuevos términos y cambiando el orden de los ya existentes. La democracia era entendida históricamente como una consecuencia del orden impuesto por el Proceso.

Elementos que hacían de opuesto o ext. constitut.	Caos, subversión, desgobierno, anarquía, corrupción, ineptitud.	Autoritarismo, que sintetizaba una historia de desencuentro y violencia en la política argentina.	La corrupción, el contubernio y la traición a la voluntad popular.
Elementos articulados como equivalencias	Verdad, claridad, racionalidad, bien, honestidad.	Primero, un conjunto de reglas y normas, a la que después se le agregaron valores y principios, y finalmente, acceso al bienestar, a la salud, a la educación, ("con la democracia se come, se cura y se educa"), a la justicia, a la paz, etc.	Orden, seguridad, bien común, eficacia, ejecutividad y moralidad.
Caracterización de la situación:	Apelando al discurso médico se diagnostica un estado de enfermedad de la república.	De crisis, la más profunda de la historia.	De "crisis sin parangón". Una democracia "que quiere ser y no es".
Propuestas centrales del programa político:	Eliminar al agente patógeno para que se restituya el orden natural. A nivel nacional era complementado con los principios de una economía monetarista de claro corte neoliberal.	Durante la dictadura se proponía que las mayorías acordaran respetar un núcleo de reglas y normas democráticas básicas. Después, en la campaña electoral, ampliar los alcances de la democracia. Una vez en el gobierno, propuso la reforma militar y la democratización sindical. En lo económico propuso un plan heterodoxo para contener la inflación. Después hizo de la Reforma Intelectual y Moral el eje de su propuesta política.	Reeditar los logros conseguidos en la primera gestión, especialmente en materia de obra pública. Modificar la ley electoral para implementar la elección directa del gobernador e introducir reformas constitucionales tendientes a simplificar los procedimientos entendidos por el bussismo como trabas innecesarias que atentaban contra la eficacia de los gobiernos.
Como concebían la <i>lucha política</i>	Debía ser resuelta por medio de la fuerza. Al principio se la llamó "lucha contra la subversión", al final, "guerra contra la subversión".	Se debía dirimir de respetando las reglas del juego democrático. El consenso de las fuerzas democráticas era un medio y a la vez un objetivo de la acción política.	Se debía dirimir respetando la "voluntad popular", expresada por el voto de la población que cedía todo su poder a sus gobernantes para que estos solucionaran los problemas de interés general.

El <i>nosotros</i> , los amigos o destinatarios del discurso:	En un primer momento era el Ejército, al final de su mandato era el Ejército y el pueblo (en ese orden jerárquico).	En la primer formulación eran las mayorías, después los demócratas de valores y principios.	Los hombres de bien, los que quieren a Tucumán, los amigos merecedores de confianza y el pueblo que sabe de la honestidad y la capacidad realizativa de Bussi.
Los <i>otros</i> , los enemigos o contra destinatarios:	En las primeras formulaciones era la subversión apátrida, considerada el agente patógeno, despojada de toda cualidad y positividad a la que se debía eliminar. Después pasó a ser también la política, propiciadora de la subversión.	Primero eran las minorías, definidas después como neofascistas y finalmente las corporaciones involucradas en el pacto militar-sindical. A estas había que neutralizarlas y en lo posible desarticularlas para sumar a algunas de sus partes al proyecto democrático.	Los que habían sido derrotados en el pasado. Los "autotitulados" partidos mayoritarios, que defienden intereses sectoriales.
El <i>ustedes</i> o para-destinatarios:	Primero la <i>población</i> (definida por referentes geográficos ocupando el lugar del cuerpo enfermo), después la <i>comunidad</i> , a la que se le reconocen atributos sociales y finalmente el <i>pueblo</i> que, en la medida en que aceptaba la conducción del ejército, se fundía con este en el nosotros.	El ciudadano común y los partidos populares, en los que se debía cultivar el espíritu solidario y los valores democráticos, por medio de una reforma intelectual y moral.	Los tucumanos, "todos", muy cercanos al nosotros.
La forma en que era significado el pasado:	Se invocaba el pasado de la organización de la República, el de los orígenes de los padres fundadores, todos ellos militares. Se reivindicaba para sí una instancia refundacional.	Se postulaba una refundación que reconocía algunos antecedentes (el Estado Liberal de Derecho y el Estado Social, en Argentina, el Irigoyenismo y el peronismo), pero, el pasado, representaba especialmente aquello que se debía dejar atrás.	Se intentaba una construcción selectiva de la memoria. Por un lado, el pasado de la dictadura debía ser reivindicado como antecedente de la democracia y como época de plena realización de la obra pública, pero por otro debía ser olvidado en lo que hace a la no vigencia de las instituciones y los derechos humanos.

Discusión de las distintas lecturas

que se hicieron del bussismo²¹

Se revisan en primer lugar aquellos estudios que consideran que el bussismo es un fenómeno político autoritario. Se había identificado que uno de los supuestos comunes de ese conjunto de lecturas era que el Bussi político era el *mismo* que el Bussi de la dictadura militar. Dado que lo que interesa aquí no son las características personales ni psíquicas de la persona Bussi sino su posicionamiento político, la comparación de sus discursos en los distintos momentos en los que se emitieron, demuestra que el supuesto sostenido por los autores carece de sustentos. Con esto se quiere decir que no hay *un* discurso de Bussi, sino *dos*, claramente identificables, a pesar de que entre ellos también se puedan detectar algunas continuidades.

El contexto, por ejemplo, en (y del) que uno y otro discurso surgieron eran totalmente diferentes. Una de las deficiencias que presentan los análisis reseñados es no considerar esta dimensión o, en el mejor de los casos, tenerla en cuenta solo el momento en el que surgió el segundo Bussi.²² Si se pretenden estudiar las similitudes y diferencias entre dos formaciones discursivas (o de una misma formación en periodos de tiempo diferentes), no alcanza con comparar la lógica interna de los discursos, además se tiene que tener en cuenta la mayor cantidad de componentes de los textos previos en los que esas formaciones políticas se inscriben. Esto es: cuales eran los problemas que se plantaban en la agenda política, cuales eran las demandas sociales más importantes, los términos en los que se definía la política, el modo como se debían resolver las diferencias, etc. La consideración de estas componentes informan cuales eran las condiciones de producción que pudieron incidir en los discursos en cuestión y cómo ese discurso pudo haber sido socialmente significado. Caso contrario, se estarían ignorando algunos componentes básicos que definen a todo discurso, a saber: 1) que estos no son creaciones *ex nihilo*, 2) que estos

²¹ La reseña de estas lecturas figura en el apartado final del Cap. IV. De este trabajo.

²² Entendemos que la consideración del contexto no solo es necesaria en los estudios basados en el análisis del discurso.

siempre se inscriben en textualidades más amplias, (Laclau, 2002) y 3) que todo discurso es por definición dialógico (Bajtín, 1982).²³

Solo por mencionar algunas diferencias contextuales, se puede decir que el “primer” discurso de Bussi surgió en medio de un clima de época en el que la violencia era parte de la cotidianeidad. En este discurso se retoman una serie de elementos y toda una lógica que ya estaban puestos en juego por la mayoría de las partes involucradas en la disputa: la definición del oponente en términos de enemigo absoluto y la creencia de que la forma de dirimir los conflictos era por medio de la eliminación del otro, no solo eran parte de la jerga de los sectores que asumieron abiertamente la lucha armada, también estaban presentes en el lenguaje oficial manifestado taxativamente en, por ejemplo, el decreto dictado por el gobierno constitucional de la viuda de Perón que, con el apoyo de importantes figuras políticas de la oposición, ordenaba el “exterminio” de la “subversión apátrida”. Este era el pre-texto de la dictadura más brutal que vivió la Argentina, heredera de una época en la que las formas o los medios estaban absolutamente subordinados a los objetivos finales. El “segundo” discurso de Bussi, en cambio, surge en un momento político en el que se resaltaban los valores democráticos y se censuraba cualquier propuesta que pretendiera dirimir las diferencias por medio de la violencia. No es casual entonces que las propuestas dialoguistas en los ‘70s. no fueran ni siquiera escuchadas, o que el segundo Bussi convocara a la reconciliación nacional y descalificara a sus enemigos tildándolos de ser los mismos que en el pasado pretendieron sembrar la violencia.²⁴ Estos eran los textos previos en los que se inscribían uno y otro discurso, dándoles sentidos diferentes, más allá de su contenido específico. Los discursos son además un diálogo con su contexto. Por más monológico que parezca, todo discurso es siempre una respuesta, una interpretación de otro discurso e imagina o anticipa las respuestas que producirá de parte de sus oponentes y adherentes. En pocas palabras, no considerar el contexto de enunciación, es suponer que los

²³ Para Bajtín por más monológico que sea un enunciado, por más que se centre en su objeto, no puede dejar de ser una respuesta a aquello que ya se dijo acerca del mismo tema, aunque el carácter de la respuesta no recibiese una expresión externa bien definida. Todo enunciado está lleno de “matices dialógicos” porque el pensamiento se origina y se forma en un proceso de interacción y lucha con otros pensamientos, lo cual no puede dejar de manifestarse en la forma de la expresión verbal (Bajtín, 1982).

²⁴ Estos fueron los términos con los que calificó a los militantes de los organismos de derechos humanos que intentaron frustrar su acto en Taif Viejo, comentado más ampliamente en el Cap. IV.

discursos se construyen en soledad, que no se dirigen a nadie y que su significación depende pura y exclusivamente de su productor.

Pero, además de las diferencias contextuales, hay otras importantes de destacar. Se puede examinar, por ejemplo, cual era el papel que el *orden* jugaba en uno y otro momento de Bussi. En el periodo autoritario el *orden* era entendido como natural y sagrado, jugaba el papel estructural de ordenador de todo su discurso, su restitución constituía el objetivo central al cual se subordinaban los medios e inclusive justificaba la eliminación del enemigo. También en las diferentes campañas electorales, el bussismo hizo del *orden* uno de los elementos centrales, sin embargo en esas ocasiones aparece como un atributo de la democracia en una formulación que podría ser expresada como “democracia con orden”, en donde el *con* no indicaría una sumatoria simple de un atributo más, sino un condicional, del tipo “no hay democracia sin orden”. Ahora bien, ya que Bussi consideraba que en el momento en él que se presentó como candidato por primera vez no había orden, tampoco había democracia. Esto no significa que consideraba al régimen vigente como autoritarismo (en realidad esta categoría no estaba presente en su discurso), para definirlo proponía una formulación dinámica: “una democracia que quiere ser y no es”. Esta relación entre democracia y orden, sistemáticamente soslayada en todos los estudios sobre el bussismo, nos parece no solo establece una diferencia importante con respecto al discurso de la dictadura (en tanto el segundo no supone la subordinación de los medios y no justifica la eliminación del enemigo); además marca diferencias con el discurso alfonsinista que consideraba que el orden era un producto del juego democrático. Este, que parece ser un juego de palabras, no lo era a la hora de definir las prioridades de la agenda política: si para el alfonsinismo todos los esfuerzos del Estado y la población civil debían aplicarse a la consolidación y profundización de la democracia, para Bussi el primer esfuerzo debía volcarse a establecer el orden.

Ahora bien, reconsiderando los contextos se puede inferir porqué dos discursos (el alfonsinista y el del bussismo) que entendían de una manera diferente al orden tuvieron una importante capacidad de interpelación. En el momento en que el discurso alfonsinista cobró fuerzas, las demandas sociales más sentidas eran la libertad y la vigencia de los derechos

humanos, civiles y políticos. Mayoritariamente se aspiraba a salir de ese orden asfixiante que había impuesto la dictadura. En cambio, cuando surge el bussismo como fuerza política, en todo el país se vivía una sensación de desorden. Alcanza con recordar que unos meses antes habían tenido lugar las sublevaciones militares, que la CGT impulsaba la movilización y los paros generales para resistir los planes económicos con los que el gobierno intentaba sin éxito contener la inflación, situación que presentaba signos muchos más agudos en la provincia de Tucumán, producto de la reducción de los fondos de coparticipación, de la crisis del precio del azúcar, de los enfrentamientos del gobierno con los trabajadores estatales, de la bancarrota del banco provincial, del incremento de la delincuencia y de los sucesivos acuartelamientos de las fuerzas policiales, entre otras cosas. No es casual entonces que el único discurso político que propuso restituir el orden y el principio de autoridad tuviera acogida entre la población. Este hecho fue interpretado por casi todos los estudios políticos mencionados como un indicador inequívoco de que se estaba ante un discurso autoritario (y de una demanda de autoritarismo por parte de la población), lo que lleva a preguntarnos si en ellos no se está desconociendo que la democracia - como cualquier otra forma de gobierno- implica, entre otras cosas, la construcción de un orden y la instauración de principios de autoridad, obviamente diferentes a los del autoritarismo y el totalitarismo. No se desconoce que la propuesta de orden en boca de quien había asesinado a miles de personas en su nombre podía generar temores y sospechas, sin embargo este solo hecho no autoriza a que se deriven automáticamente las conclusiones a la que los autores mencionados arribaron. Tampoco se puede creer que por el simple hecho de que la dictadura haya hecho del orden su *lei motiv*, este deba ser considerado un valor autoritario.²⁵

Mucho menos debe pensarse que, porque en el bussismo primaba una lógica política de amigo-enemigo, tenga que caracterizárselo como autoritario. En primer lugar porque según una de las premisas que se sustentan en este trabajo, toda actividad política se define a partir de la distinción amigo-enemigo. De hecho la democracia definida por Alfonsín

²⁵ Tardíamente, las fuerzas políticas mayoritarias entendieron que las demandas de orden eran sentidas por la población y que debían incorporarlas a sus propuestas políticas. La UCR, por ejemplo la incorporó como consigna de su campaña electoral de 1989, y José Vilar, candidato a diputado por el ortegismo, llamaba a votar por el Fe, con el argumento de que este era la única garantía de orden en la provincia. (La Gaceta, 3 de marzo de 1991).

también identificaba a los integrantes del pacto sindical-militar y a los que postulaban la necesidad de la lucha armada como enemigos. Hasta los regímenes más pluralistas y abiertos reconocen enemigos. Es más, esta es una condición de posibilidad de la constitución de toda identidad, sea esta democrática o autoritaria. Lo que sí puede informar acerca de las características autoritarias o democráticas de una formación política no es la distinción entre amigos y enemigos, sino la forma en que se define al enemigo y lo que se pretende hacer con estos.²⁶ Vale la pena comparar los discursos del bussismo en este punto. En los primeros momentos del periodo dictatorial el enemigo era la “subversión apátrida”, después la política y los políticos, que con su proceder, generaban las condiciones para que esa subversión surgiera y operara. Eran además los agentes patógenos omnipresentes que infectaban a la sociedad; despojados de identidad y entidad, representaban la encarnación misma de la negatividad, por eso el primer objetivo de la dictadura era su eliminación. En el discurso del Bussi político, en cambio, los enemigos eran en primer lugar los organismos defensores de los derechos humanos que, a diferencia de los enemigos de la dictadura se reducían a “unos pocos”, no representan una amenaza seria en tanto ya habían sido derrotados en el pasado. Tampoco se planteaba su eliminación. Es más, fueron especialmente invitados a sumarse al proyecto político de Bussi, si daban muestras de arrepentimiento.²⁷ En segundo lugar, se identificaba como enemigos a los “autotitulados partidos mayoritarios”, que defendían intereses sectoriales y traicionaban la voluntad popular por medio del contubernio y los acuerdos espúreos a espaldas del pueblo. Tampoco se proponía eliminarlos, sino desalojarlos del poder por medio del voto.

No se puede compartir tampoco la lectura que se hace acerca del lugar que la población civil ocupa en el discurso del Bussi político, ya que nuevamente se extrapola lo que había sucedido en la dictadura. Efectivamente para el Bussi militar, en los primeros tiempos de la dictadura, la *población* civil definida en términos geográficos, ocupaba el lugar de la ignorancia y la inoperancia. Esta se encontraba enferma y no solo no comprendía ni valoraba los esfuerzos del ejército, sino que ni siquiera era capaz de distinguir entre quienes

²⁶ Si bien esta nos parece una referencia importante, tampoco nos parece suficiente para caracterizar de autoritario a una expresión política. En el apartado final, se exponen los que se consideran parámetros adecuados para caracterizar al bussismo.

²⁷ Esta convocatoria la plantea Bussi poco tiempo después de la elección de 1987, en el momento que anuncia la creación de una nueva fuerza política. Ver Cap. IV.

intentaban salvarla y quienes eran los que la disgregaban. Pero en un segundo momento, la población civil era definida como *comunidad*, ya que daba muestras de la presencia de lazos que la cohesionaban, lo que le permitía repeler a los cuerpos extraños. Finalmente, esa comunidad era nombrada como *pueblo*, en la medida en que aceptaba ser guiada por el ejército y decidía sumarse a su empresa. En todo momento la referencia para definir de un modo u otro a la población civil era el ejército. En cambio, en el discurso de Bussi político, la población civil es definida desde un inicio como pueblo que, a pesar de las campañas y las mentiras de los políticos, “sabe” -porque lo vivió como una experiencia propia-, de las cualidades, las capacidades y las intenciones de su líder, quien en su primera aparición en la arena política no necesitaba de mayores presentaciones. Bastaba con anunciar “Bussi ha vuelto”. Esto no significa que la relación entre Bussi y el pueblo haya sido planteada en términos simétricos, ya que en un sentido había cercanía y comunión, una relación privilegiada en la que las élites políticas eran el tercero excluido, pero en otro había distancias. Uno ocupaba el lugar del salvador, del redentor que volvía para devolverles a los tucumanos la dignidad y el orgullo, los otros, eran ubicados muy por debajo, como sus beneficiados.

Si se puede acordar con las lecturas del bussismo, en que éste hizo una reivindicación de la dictadura y especialmente de su líder. Sin embargo no se trató de una simple reivindicación, fue más bien una reformulación del pasado, un intento de reconstruir la historia oficial elaborada en la democracia. No impugnó totalmente a esa historia oficial que postulaba la “teoría de los dos demonios”, solo desdemonizó a una de las partes, al Proceso.²⁸ Además, el bussismo reivindicó a la dictadura pero no por la dictadura misma sino como un antecedente necesario de la democracia. A diferencia de cómo la había definido el alfonsinismo, en el discurso de Bussi la democracia no se opone a la dictadura, es parte de un mismo proceso armónico, de una continuidad sin rupturas. “Existe una perfecta coherencia entre mi actuación anterior y mi intervención en la arena política a través del camino democrático. Yo luché -como todo el ejército- para hacer posible la restauración democrática” (*El Cronista Comercial*, 21/9/1987), decía el General. Apelando

²⁸ Así como Bussi tomó parte de la historia alfonsinista para proponer la propia, el alfonsinismo había tomado la parte de la versión histórica del Proceso que demonizó a la guerrilla.

a una memoria selectiva, proponía recordar (y reeditar) parte del pasado, especialmente en lo relativo a la obra pública y la instauración de orden, y olvidar la otra parte, la de la no vigencia de las instituciones democráticas, de los derechos políticos, y la violación a los derechos humanos.

En pocas palabras, el error sistemático en el que caen los estudios que consideran al bussismo un fenómeno político autoritario, se deriva del supuesto básico que les es común: que “El Bussi de nuestros días es, abierta y manifiestamente el Bussi de 1976” (López Echagüe, 1991: 12). Este supuesto les impide detectar las diferencias sustanciales entre un discurso y otro, y los lleva a reducir las distintas posiciones que Bussi fue adoptando a una sola, a la que asumió durante la dictadura. Para los autores ese es el único y “verdadero” Bussi, marcado por su “tendencia natural”, “su tradición” y “sus preferencias”.

Reconocer estas diferencias no significa que no haya ciertas continuidades, ni que Bussi se haya arrepentido de su pasado. Todo lo contrario, este fue reivindicado-reinventado y usado como capital político. Tampoco implica que se haya “transformado” en un democrata respetuoso de los derechos humanos, ni que haya dejado de ser un asesino repudiable. Es muy probable que la mayoría de sus posiciones las adoptó por conveniencia, sin embargo esto no lo diferencia de la mayoría de los políticos. Aparte lo que interesa centralmente aquí no es explorar las convicciones de Bussi, sino tratar de dar cuenta de como se configuró su discurso político y de porqué pudo haber sido creíble para una importante parte de la población tucumana.

Si se revisa ahora la lectura que Novaro (1994) hace del bussismo, se puede compartir con ésta que se trató de un fenómeno difícil de encuadrar en las tipologías políticas más clásicas. También se puede compartir que para caracterizarlo “parece más conveniente atender a la forma de sus interpelaciones” (:131). No obstante, y a pesar de que se puede coincidir con la apreciación de que Bussi “reconoce la constitución Nacional y los derechos en ella protegidos” (:128), esta parece ser más que nada un buen indicador, pero no una razón suficiente como para ubicarlo automáticamente dentro del sistema democrático. La

historia argentina está poblada de manifestaciones de este tipo por parte de personajes o sectores que terminaron encabezando o incitando golpes de estado. Por eso, para caracterizarlo se deben considerar otras dimensiones que Novaro no tiene en cuenta y que serán expuestas al final de este capítulo. La caracterización que hace Novaro del bussismo, es cuestionada en los trabajos de Marcos (2002) y Crenzel. Para este último, Novaro “restringe al reconocimiento de la constitución (...) las condiciones para asignarle un carácter democrático a una identidad política ” (:145), agregando que las limitaciones de esta mirada normativa se ponen de manifiesto cuando se revela la genealogía histórica de sus dirigentes. Cita a continuación un trabajo de Jaeger (1995) en el que se vincula el pasado de algunos dirigentes de FR con distintas agrupaciones nazis de Tucumán. Si bien la crítica de Crenzel resulta atendible, tampoco parece ser que las razones que expone sean suficientes para negar la caracterización de Novaro. Si el pasado de algunos dirigentes fuera tan definitorio, probablemente el peronismo, el radicalismo, la UCD, el PI, la MID, el PSD, PSA y el PC, entre otros, tendrían que ser considerados autoritarios, ya que de un modo u otro algunos de sus dirigentes estuvieron involucrados con algún golpe de estado. Quizá el déficit que comparten ambos análisis sea que, a pesar de que llegan a conclusiones opuestas, no tienen en cuenta que en la historia argentina algo había cambiado, la democracia, que nunca antes había constituido un problema, era en esta oportunidad un referente central, casi ineludible de la política. Con esto se quiere decir que ella delimitaba un campo en el que se posibilitaban y restringían los discursos (y las acciones) políticos. Pronunciarse por la democracia no generaba los mismos compromisos en los años '60s., cuando este era un tema absolutamente secundario, casi accesorio, que hacerlo después de la dictadura.

Otra debilidad que se puede señalar en el trabajo de Novaro, es que en éste solo se considera el discurso del Bussi político; de su pasado solo hay menciones generales que sirven para presentar al personaje, pero no se tiene en cuenta que ese pasado jugó un papel importante en la configuración del bussismo en democracia. En su afán por demostrar que el bussismo era parte de un fenómeno político más amplio (cosa con la que en parte se puede estar de acuerdo), ha terminado equiparándolo a otras expresiones políticas nuevas, como el orteguismo, o el que tuviera lugar en Santa Fe con la incursión en la política del

piloto automovilístico Carlos Reuteman. Pasar por alto el pasado de Bussi, priva al análisis de la posibilidad de detectar las particularidades del fenómeno político que se generó alrededor de su figura y de las reacciones que ese fenómeno produjo. Si la simple presencia de Bussi en la arena política producía sorpresas, esperanzas y rechazos, era porque se trataba de un personaje conocido, con un importante peso en la historia reciente de Tucumán. Su pasado, independientemente de la valoración que de él se hiciera, jugaba un papel importante, decisivo en la configuración y en las posibilidades de interpelación de su discurso.²⁹ En pocas palabras, se advierte que, así como los estudios antes mencionados reducían y fijaban a Bussi en la posición de militar, Novaro lo hace en la de político, cuando en realidad éste jugaba con ambas posiciones.

Finalmente, si se analizan lo que los diferentes autores consideran como las causas que explican el éxito político de Bussi, se encuentran en éstos algunas inconsistencias, especialmente en aquellos que explican el fenómeno a partir de la existencia de una matriz autoritaria. Para Marcos, Hevia, López Echagüe, Isla y Coosio, la génesis de esa matriz se remonta a los orígenes del país y especialmente del noroeste argentino; para Crenzel, en cambio, se remite al pasado más reciente, a la época de la dictadura.

Marcos sostiene que la matriz autoritaria es un producto de la sedimentación de un conjunto de prácticas propias de la “cultura del azúcar” en las que la relación entre el dueño del ingenio y sus empleados no es exclusivamente del tipo patrón-trabajador, sino también un vínculo paternal, “que se refleja en las relaciones personales y políticas de la región”. Este tipo de cultura también reconocería antecedentes en la relación del tipo centro-periferia, entre las provincias y Buenos Aires. Todo ello habría configurado patrones de conducta típicas del periodo precapitalista y feudal, en las que el sometimiento y las demandas de autoridad de tipo paterno serían su rasgo característico. Esto explicaría en parte porque la población optó en democracia por una propuesta política autoritaria como la de Bussi. Ahora bien, esta explicación presenta al menos dos problemas, a saber: 1) que el supuesto de que en Tucumán existe una cultura de tipo feudal es discutible, y 2) que en

²⁹ Que lo consideremos decisivo no implica que estemos suponiendo que el pasado determinó al presente en una forma lineal o mecánica.

caso de ser así no se estaría contribuyendo demasiado al entendimiento del bussismo, ya que éste recibió más votos y adhesiones en los sectores urbanos medios y altos que entre los trabajadores del azúcar.³⁰ Sostener que en Tucumán domina una cultura de tipo feudal es un prejuicio que se ha venido repitiendo sistemáticamente en casi todos los estudios en los que se quiere explicar algún fenómeno político nuevo de esa provincia. El prejuicio de la cultura feudal se deriva del conocido trabajo *Tierra y conciencia campesina en Tucumán* de Francisco Delich (1970). En una de las tesis centrales de este trabajo se sostiene que el modo en que se realiza la explotación del azúcar en Tucumán corresponde al tipo feudal, apreciación a mi criterio inexacta.³¹ En primer lugar porque la explotación del azúcar es típicamente capitalista, sobre todo en su fase industrial: los ingenios son grandes fábricas en las que trabajan miles de trabajadores que venden su fuerza laboral a un patrón con el que muy difícilmente pueden tener una relación personal. La tipificación de feudal de esta relación responde probablemente a un uso no técnico del concepto con el propósito de acentuar la explotación brutal a la que frecuentemente son sometidos los trabajadores. Sin embargo la explotación define también al capitalismo e inclusive ésta puede ser más brutal que en el feudalismo. Pero lo que sorprende más aun es la afirmación de que toda esta cultura habría configurado sujetos sociales pasivos, “sumisos” ante el poder. Un somero repaso por la historia de las luchas sociales en la Argentina, desmiente categóricamente esta apreciación y demuestra que Tucumán fue y es una de las provincias más convulsionadas y con mayores índices de movilización. Solo por mencionar algunos ejemplos: las luchas salariales de los trabajadores del azúcar a principios del siglo pasado, las luchas por el goce del derecho a vacaciones pagas de los años 1930; a finales de los ‘40s., la FOTIA fue el primer sindicato que realizó una medida de fuerza contra el gobierno de Perón (quien después de 45 días de paro intervino el sindicato por intermedio de la Secretaría de Trabajo de la Nación). En los años ‘60s comenzaron las luchas estudiantiles que tuvieron su mayor

³⁰ Si se revisan cuidadosamente los datos electorales reseñados en el Cap. IV, se puede advertir que los votos a Bussi provinieron preponderantemente de electores asociados anteriormente con la UCR y se concentraba en las zonas en las que viven los habitantes de mayores ingresos de la capital. Los estudios de Adrogué (1993) demuestran que los votantes de FR se distribuyen en todos los sectores sociales, con una preeminencia de las capas urbanas medias y altas y de mayor nivel educativo.

³¹ Cabe señalar que la consideración de que en Tucumán predominan rasgos feudales, típicos de “provincias periféricas” es compartida por todos los autores que estudiaron al bussismo, incluido Novaro, con excepción de Crenzel, quien en su trabajo *El Tucumanazo* (1997), dedica una importante sección a discutir la tesis de Delich. El autor demuestra además que en Tucumán no solo no predominan las formas feudales, sino que fue una de las provincias con desarrollo capitalista más extendido y temprano en Argentina.

expresión en 1968 en los hechos que después se conocieron como el “tucumanazo”. Años antes se fundaban en la localidad de Taco Ralo las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), una de las agrupaciones que años después pasaron a integrar Montoneros. Tiempo después surge en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán el ERP. Finalmente y en tiempos más recientes (período 1983-1989), Tucumán registró el mayor número paros, movilizaciones y manifestaciones por razones políticas o sociales de toda la Argentina (Luciani, 1993: 93). Teniendo en cuenta estos señalamientos nos preguntamos si la opción por Bussi no sería más explicada por las dificultades para construir un orden más o menos estable y duradero, que por las características supuestamente pasivas de los tucumanos.

Cuestionar esta causalidad, lleva también a problematizar la caracterización que de ella se desprende, como una consecuencia lógica: si el bussismo se explica por una cultura predominantemente precapitalista, entonces este habría representado un retroceso histórico. No hay dudas de que la opción por Bussi en términos éticos no era un salto hacia adelante, pero no se puede estar tan seguro de que sea un retroceso en los términos en los que los autores lo plantean, en tanto el bussismo en democracia hizo de la crítica al clientelismo y al patrimonialismo, una de sus principales banderas, replanteando con ello las relaciones existentes entre la sociedad civil y el Estado. En este sentido, e independientemente que en su segunda gestión de gobierno no eliminó las prácticas clientelares y patrimonialistas, introdujo elementos tales como la eficiencia y la eficacia, totalmente ausentes hasta ese momento en la política tucumana.

La que si parece ser una explicación más plausible del bussismo, es la crisis de la representación política. Sin embargo, también en este punto se pueden establecer algunas diferencias con los autores que las señalan. Se apuntó en la reseña que Novaro (1994) es quien la plantea de un modo más desarrollado y que, para él, el bussismo interpelaba a aquellos sujetos que habían empezado a cuestionar las formas de representación clientelares y caudillistas, sustento principal de los vínculos políticos de los partidos tradicionales en las

provincias periféricas.³² Según el autor, la crisis económica y la escasez de recursos estatales llevó a que las relaciones entre los viejos partidos -conducidos por dirigentes octogenarios- y sus adherentes se deterioraran. Los partidos tradicionales de las provincias periféricas empezaban a sufrir las consecuencias de no haber renovado sus dirigencias o sus estilos en la época de la transición. “Con el restablecimiento de la democracia, ciertos ámbitos de la vida política nacional se renovaron, mientras que otros retomaron simplemente sus funciones tradicionales. Entre estos últimos se encuentran los sistemas políticos de las provincias periféricas” (Novaro, 1994: 93). Pero, hay que recordar que el discurso bussista interpelló -sobre todo en las primeras elecciones- a la base de la UCR, partido que en Tucumán no tenía las características que Novaro le atribuye a la dirigencia tradicional. La renovación de sus dirigentes durante la transición fue total, el aplastante triunfo de la línea Renovación y Cambio llevó a la conducción partidaria a Chebaia, Robles, Parajón, Terraf y Martínez Aráoz, todos ellos jóvenes que además eran parte de la conducción nacional de la corriente liderada por Alfonsín.³³ Pero además el radicalismo (que nunca ocupó la gobernación de la provincia), jamás pudo establecer redes clientelares para establecer lazos con sus adherentes. La crisis a la que hace mención Novaro se aplicaba más al peronismo, que no solo basaba sus relaciones en el clientelismo, sino que además mantenía a una buena parte de sus viejos caudillos al frente del partido (el mismo Riera, primer gobernador de la post dictadura tenía cerca de ochenta años en el momento en que ocupó ese cargo). Si bien esto generó una crisis de las identidades peronistas, no es tan claro que los peronistas fueran interpellados por discursos más “modernizantes” (en el sentido en que proponían replantear la relación sociedad civil – estado), con el consiguiente abandono de las viejas costumbres (: 102). Todo lo contrario, el FAP, “la alternativa” peronista, proponía revivir esas “viejas costumbres”, volver al “peronismo de Perón”. La crisis llevaba a que los peronistas se refugiaran en las antiguas formas y en sus identidades más esencializadas. El error en que nuevamente cae Novaro es el de tratar de encajar al bussismo en un proceso regional con el que, insisto, tienen muchos puntos de encuentro,

³² Marcos (2002) retoma punto por punto la lectura de Novaro en la consideración de la crisis de representación.

³³ Rubén Chebaia, candidato a gobernador por la UCR, tenía 32 años en el momento de la elección, y cuatro años menos cuando llegó a la intendencia de la capital.

pero también otros que los diferencian.³⁴ Pero, a pesar de todos estos señalamientos, destacar la crisis del clientelismo y el caudillismo, no es enteramente desacertada. En nuestra lectura, este factor sí contó, solo que de un modo diferente a como lo plantea Novaro. En los momentos en que Bussi hace su incursión en la política, amplios sectores de la población sentían la necesidad urgente de modificar radicalmente la lógica con la que se guiaba el gobierno provincial y una posibilidad de hacerlo era la UCR, pero ésta, además de sufrir el desgaste por el gobierno nacional, se encontraba compenetrada con un estilo de representación que hacía del pacto político su principal herramienta, prefería “intentar la concertación entre los sectores en pugna y buscar soluciones de compromiso” (Novaro, 1994: 59), antes que enfrentarse con decisión a esa forma de entender la política y de gobernar.³⁵ Este estilo basado en el consenso fue interpretado como debilidad y falta de decisión. Después, cuando el radicalismo –ganador de las elecciones de 1987– no pudo llevar a su candidato a la gobernación, como impotencia y frustración. Eso explica porque el radicalismo perdió votos en las elecciones de 1987, el vaciamiento que sufrió después del Colegio Electoral y porque sus adherentes, que pocos años atrás vivaban a la democracia alfonsinista, terminaron engrosando las filas del bussismo.

³⁴ Probablemente la idea de Novaro sea más apropiada para explicar el orteguismo.

³⁵ Es curioso que las principales críticas que se le pueden hacer a Novaro, se sustentan en elementos que el mismo autor ofrece. Creemos que el problema central de su lectura es no haber advertido que el radicalismo en Tucumán había sufrido una importante renovación durante la transición.

Conclusiones preliminares

El bussismo surge en momentos en los que en la democracia -tal como la entendía el alfonsinismo-, se comienzan a hacer evidentes el carácter convencional de algunas relaciones que la definían y que, una vez que se instaló como mito, parecían naturales e inmutables. Ella seguía siendo el goce de las libertades, pero no garantizaba ni hacía efectivos en forma automática los derechos a comer, curarse y educarse, entre otros. Esto hacía que las fronteras políticas y las pautas de demarcación que había establecido se debilitaran, que se hicieran permeables a nuevas propuestas de articulación, en algunos casos usando los mismos términos que anteriormente se habían empleado para definirla pero alterando su orden, en otros, introduciendo elementos que no habían sido considerados o que directamente fueron excluidos. En este sentido, se puede decir que la democracia se mantenía como el elemento articulador de la política y que seguía jugando un papel hegemónico, solo que esta vez podía ser redefinida por los medios mencionados precedentemente y por sujetos que anteriormente, habían sido ubicados en posiciones de enunciación desventajosas.³⁶ Por eso, la primera conclusión parcial que se puede extraer de este análisis es que la lucha política no solo se reduce a establecer los puntos nodales que totalizarán el campo, como lo entiende Zizek (1992: 126), sino que ésta también puede jugarse en torno a cuales serán los elementos que se excluirán o se incluirán en esa totalidad y quienes serán los sujetos competentes para esas operaciones.³⁷

El incremento de las posibilidades de redefinir la democracia y de que nuevos sujetos fueran considerados legítimos para esa operación, no solo se debía a que esta no había cumplido con muchas de sus promesas, sino también a sus logros.³⁸ En la mayoría de los trabajos en los que se estudió el surgimiento del bussismo, se hace hincapié en la “decepción” (Novaro, 1994: 63), que casi invariablemente sobrevino a la explosión de

³⁶ El propio alfonsinismo, que en primera instancia ubicaba a los sindicalistas en el tugar de enemigos de la democracia, despojándolo con ello de capacidad para definirla, posteriormente y sobre todo a partir de la propuesta de invitarlos a ser parte del pacto de consolidación democrática, los dotaba de capacidad de nominación. Ello no se debió a que el alfonsinismo estaba dispuesto a ceder gentilmente espacios de poder, sino a que la presión que los sindicalistas ejercían sobre el gobierno obligó a este último a negociar y reconocerlos como interlocutores legítimos.

³⁷ Zizek (1992) sostiene que “lo que está en juego en la lucha ideológica es cual de los ‘puntos nodales’, *points de capiton*, totalizará, incluirá en su serie de equivalencias a los elementos flotantes” (126).

³⁸ Todo régimen político (más aun la democracia) es por definición abierto y sujeto a redefiniciones, pero hay momentos en que esa apertura sea más evidente.

demandas sociales y a la “borrachera democrática”, propias de los periodos de apertura y liberalización política. En este sentido, se puede coincidir con la apreciación de que el desgaste que sufría el proyecto que hegemonizaba el campo político en el momento de surgimiento del bussismo es un dato central para cualquier explicación de este último fenómeno, sin embargo, esas explicaciones no serán satisfactorias si además no se tienen en cuenta los logros que se pudieron haber conseguido. Muchas de las demandas que eran planteadas con carácter de primordiales y urgentes a finales de la dictadura (las libertades civiles y políticas, por ejemplo), bien o mal fueron satisfechas, consumiendo parte de su capacidad movilizadora y cediendo el lugar a otras que antes no parecían tan importantes. Tener en cuenta los dos factores –fracasos y éxitos-, que intervienen en este proceso, es fundamental por tres razones: 1) porque permite dar cuenta de una forma más acabada de las razones que posibilitan una mayor apertura de una hegemonía –para ser cuestionada, redefinida o eventualmente suplantada-, 2) porque informa acerca de las características de las nuevas formulaciones que competirán para reorganizar el campo de la política, en tanto estas frecuentemente se constituyen a partir de una crítica, postulándose como una nueva posibilidad para satisfacer las demandas sociales no satisfechas o no consideradas, pero incorporando como “información básica” las conquistas alcanzadas³⁹, y 3) porque esto indica que todo proyecto político –alcance o no los objetivos planteados-, está “condenado” a agotarse tarde o temprano, lo que hace que la política sea siempre un proceso inacabado que, si pretende tener capacidad interpelatoria, tendrá que reinventarse una y otra vez.

Ahora bien, si a nivel nacional la democracia empezaba a abrirse a redefiniciones, en el ámbito local, en donde la decepción parecía pesar más que el agotamiento, esa apertura era aún mayor. Con escasísimo logros para mostrar, los problemas –lejos de solucionarse–

³⁹ No se sugiere con esto que la política sea un proceso de acumulación y evolución constante y lineal, lo que se plantea es que, en la medida en que no se nieguen las conquistas alcanzadas es, probable que la interpelación de un discurso político sea más amplia. Esto explicaría en parte los sucesivos fracasos de los proyectos políticos que proponían eliminar las conquistas que se habían logrado en los primeros gobiernos de Perón, y el éxito del discurso alfonsínista que incorporó los logros conquistados, nutriéndose de la mayoría de los mitos movilizadores de la historia política argentina (desarrollo, justicia social, por ejemplo) a los que articuló con la democracia. Aún aquellos gobiernos que, en los hechos terminaron produciendo algunos retrocesos, invocaron los derechos conquistados antes de llegar al poder. Por ejemplo, los ejes centrales de la primera campaña electoral del menemismo eran el “salarioazo” y la “revolución productiva”, combinados con la democracia, los de la Alianza la erradicación de la corrupción, manteniendo la estabilidad económica y la convertibilidad de la moneda.

parecían multiplicarse. A esto se le agregaba el hecho de que ninguno de los partidos mayoritarios podía presentarse como una alternativa creíble que pudiera reencausar el descontento y renovar las expectativas. A la UCR le llegaba el desgaste de una cuestionada administración nacional y el PJ, cargaba en sus espaldas con todo el desprestigio de una pobrísimo gobierno provincial, agravado por las denuncias de fraude que produjeron su fractura. Ninguno de ellos había logrado renovar su discurso, ni dieron muestras de estar dispuestos a escuchar las nuevas demandas ciudadanas. La UCR no pudo desprejarse de la imagen del gobierno nacional, en parte porque su candidato se encontraba profundamente comprometido con el proyecto alfonsinista y al PJ no le habían llegado con suficiente fuerza los aires de renovación por la que atravesaba ese partido en el ámbito nacional. Este conjunto de factores configuraba un escenario en el que la representación de los partidos mayoritarios estaba seriamente cuestionada por la población. Las identidades partidarias se habían aflojado y estaban disponibles para otras interpelaciones. Dos propuestas alternativas al bipartidismo surgieron en ese contexto: el Frente de Acción Provincial y el bussismo. El primero proponía un retorno al peronismo ortodoxo (el “peronismo de Perón”), una reconstitución de los antiguos lazos políticos, a diferencia del segundo, que proponía un cambio, una creación de nuevas identidades. Ambas propuestas tuvieron una importante acogida entre los votantes, lo que indica que la disolución de los lazos sociales y las crisis políticas, a pesar de presentar oportunidades, no siempre conducen a una renovación y que el proceso político no necesariamente implica una evolución.

Pero que el bussismo tratara de configurar nuevas identidades, no significó que en todos los casos haya apelado a símbolos, nociones o conceptos que nunca antes se habían empleado en la política argentina. Lo novedoso radicaba en que tomó esos elementos y los articuló de un modo diferente. En este sentido, se puede compartir con Crenzel (2001) que Bussi en su “discurso político anudó la reivindicación del pasado –el orden, las obras públicas, la derrota subversiva- a la crítica a la dirigencia política local y al estado de cosas existente” (: 281). Sin embargo, lo que pasa por alto el autor es que también estos elementos estuvieron anudados a la democracia y a la moralidad. Con este anudamiento, se puso en cuestión la forma en que el alfonsinismo había construido el pasado y la democracia misma. Si el pasado era definido como el opuesto de la democracia, en el discurso de Bussi aparecía

como la condición de posibilidad del presente. Si entre autoritarismo y democracia había ruptura, ahora había continuidad, por lo que, si anteriormente toda persona vinculada a la dictadura era automáticamente descalificada por no ser un actor político democrático, en esta nueva formulación aparecía como competente. Pero la democracia no solo era redefinida de acuerdo al proceso histórico, también lo era en cuanto a los elementos que articulaba y con ello de las demandas que debía atender. En el periodo de transición, el orden, por ejemplo, no había desaparecido del discurso de Alfonsín, pero ocupaba un lugar secundario, subordinado a la democracia, de la cual se suponía se derivaría. En la propuesta de Bussi, en cambio, el orden era una *condición* de la democracia, y con ello una tarea primordial del momento. Hacia además de superficie de inscripción de otras demandas, que tenían que ver con la seguridad pública, la limpieza, la administración racional de los recursos, o la calidad de los servicios que presta el Estado. En otras palabras, el discurso de Bussi no era una réplica exacta del discurso de la dictadura; tampoco era una versión más del discurso alfonsinista. En todo caso, se puede decir que se trataba de una conjugación y una alteración de ambos discursos, un texto en el que se puede reconocer una intertextualidad.⁴⁰ Esta intertextualidad era encarnada por Bussi en un juego en el que alternativamente podía ubicarse fuera de la política, ocupando la posición de militar -cuando quería marcar diferencias o directamente impugnar a las elites políticas-, o bien ubicarse en la posición de ciudadano y político -cuando reclamaba el derecho a competir en elecciones o cuando se le recordaba su pasado de violador de los derechos humanos-.

Esas estrategias discursivas del bussismo se complementaban con otras, no menos importantes. Para facilitar la transmutación de identidades políticas, tendió puentes entre las existentes y las que venía a proponer. Invocando las figuras y los mitos movilizadores que anteriormente habían sido distintivos de los otros partidos rescató a los radicales Irigoyen, Sabatini, Illia y Balbín y al esfuerzo social del peronismo e hizo suya, aunque significándola de otro modo, la premisa moral del alfonsinismo. Con esta estrategia, por un lado se apropiaba de parte de la historia de los otros partidos y por otro cuestionaba a la dirigencia

⁴⁰ Todo texto es por definición intertextual, sin embargo lo que nos interesa señalar aquí es que en el discurso de Bussi se puede reconocer claramente la confluencia de dos textos: el de la dictadura y el de la democracia.

que había desnaturalizado y traicionado sus orígenes y, de paso, les enviaba un mensaje a sus bases de que para sumarse a su proyecto no se les exigía que renegaran de su historia.

Estas potencialidades políticas no fueron advertidas en un inicio por las elites políticas. Convencidas de que un personaje vinculado a la dictadura no tendría cabida ni posibilidades en la democracia y de que el sistema bipartidista no corría peligro, decidieron ignorarlo en la campaña electoral de 1987. Al no representar una amenaza “real” para sus aspiraciones, Bussi no calificaba para ser considerado un adversario a tener en cuenta ni un interlocutor válido. Se suponía que la historia ya estaba escrita, el sistema lo suficientemente aceitado y los anticuerpos desarrollados como para que alguien como Bussi pudiera tener posibilidades: por sus antecedentes y por su discurso era un verdadero extraño, que el sistema político rechazaría a través del mecanismo del voto. Solo una vez que Bussi demostró que podía competir por el poder, empleando las mismas reglas que ellos, las elites políticas lo consideraron. Lamentablemente para ellos, ya era demasiado tarde, pues el juego político se jugaba ahora a su ritmo.

Considerado el contexto, la forma en que articuló su discurso político y las estrategias desplegadas, se intentará a continuación dilucidar si el bussismo fue un fenómeno autoritario o si se lo puede incluir en el campo democrático. En apartados anteriores se cuestionaron los factores y las causas que consideraban los distintos autores para caracterizar al bussismo de autoritario. También se señaló que declarar la adscripción a la Constitución Nacional y a los derechos en ella consagrados, era un buen indicador, pero no una razón suficiente como para ubicarlo en el campo democrático, como hace Novaro (1994: 131). Además se advirtió que se debían tener en cuenta otros parámetros y que se tenía que leer el fenómeno a partir del contexto del que había surgido. Cualquier parámetro que se proponga es un tipo ideal que puede ser cuestionado, ya que se deriva de *una* de las concepciones posibles de la democracia, no obstante es mejor adoptar algunos puntos de referencia. Entre las opciones disponibles se decidió apelar a lo que Robert Dahl (1992) considera que son las condiciones mínimas de la poliarquía. Nos inclinamos por ellas porque a pesar de que se le han detectado problemas, cuentan con un gran consenso en el campo académico y porque casi todas están incluidas en otras definiciones menos

“exigentes”. Ellas permitirán evaluar si se confirman o disipan las sospechas de que las declaraciones del bussismo eran pura retórica, una estrategia para reubicarse y conseguir la legitimidad suficiente, para después atentar contra la democracia y eventualmente suplantarla por el autoritarismo (Hevia, 1989: 33). Si se evalúa el desempeño del segundo gobierno de Bussi⁴¹ (1995-1999), hay que aceptar que, 1) se respetó la libertad de prensa, 2) se garantizó el derecho a protestar y manifestarse (las movilizaciones sociales continuaron, sin que se las reprimiera con mayor intensidad que en los gobiernos peronistas), 3) las asociaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos siguieron funcionando normalmente sin que se tomaran medidas que pudieran obstaculizar su actividad, 4) el poder judicial, compuesto por jueces que en su totalidad fueron nombrados en el gobierno de Ortega, no fue intervenido ni se tomaron medidas que limitaran sus facultades, 5) la cámara de legisladores se mantuvo en sus funciones, e incluso llegó a suspender por dos meses a Bussi en el ejercicio del cargo de gobernador cuando se comprobó que tenía cuentas en Suiza que no habían sido registradas en su declaración jurada, y finalmente 6) la renovación parcial de legisladores provinciales y municipales, se realizaron por medio de elecciones limpias, en las que había una competencia real entre los partidos, con resultados inciertos a los que, en todos los casos, se los respetó.⁴²

Esta evaluación puede ser objetada por “formal” y excesivamente normativa. Sin embargo, la literatura en torno a la democracia política ya se encargó de destacar la importancia de los aspectos procedimentales en cualquier caracterización de los regímenes.⁴³ Otra objeción que se podría plantear es que el bussismo es un fenómeno provincial, por lo que estaba obligado a respetar ciertas normas con vigencia nacional. Ante ella no nos queda más que reconocer que nuestro objeto de estudio es una formación política específica en un período de tiempo también específico. No es el propósito de este trabajo especular que habría

⁴¹ Cabe aclarar que los demás estudios, salvo el de Marcos (2002) y el de Crenzel (2001), se realizaron antes de que Bussi llegara a su segunda gobernación (1995), por lo que no contaban con las posibilidades de evaluar su desempeño a la luz de los referentes que proponemos en este trabajo.

⁴² En rigor, las condiciones de la poliarquía son la existencia de: 1) autoridades electas, por medio de 2) elecciones libres y limpias, mediante el 3) sufragio universal, con 4) derecho a competir, libertad de expresión, de 5) acceso de información alternativa y libertad de asociación (Dahl, 1956). Para elevar el nivel de exigencia, decidimos combinar estas condiciones con algunos indicadores de la relativa separación de poderes.

⁴³ Para ampliar ver Portantiero “Los dilemas del socialismo”, en Controversia N° 6, año II, Suplemento “La democracia como problema”, México, mayo de 1980.

pasado si Bussi hubiera llegado a la presidencia de la Nación, ni vaticinar cual será el derrotero de su fuerza política.

Pero, si además de las condiciones de la poliarquía, se consideran los rasgos salientes del “estilo” de interpelación del bussismo, se puede precisar más aún esta caracterización. Frecuentemente se ha interpretado que la actitud crítica de Bussi hacia los demás partidos era una clara muestra de su desprecio por el pluralismo. Para algunos este constituía un factor más para ubicar a Bussi en el autoritarismo, para Novaro (1994), en cambio, lo situaba en los límites de la democracia.⁴⁴ Es decir, para ambos, era una pauta antidemocrática. El problema de ambas lecturas es que si se considera este elemento aisladamente, los masivos movimientos sociales que, en menos de dos meses, tumbaron cuatro presidentes a finales de 2001 en Argentina, tendrían que ser considerados antidemocráticos, pues una de sus inspiraciones centrales fue un fuerte rechazo hacia los partidos. Sin embargo, si se lo considera inserto en un concierto más amplio, su valor diferencial se hace más evidente. En el caso de Bussi, el ataque a los partidos mayoritarios debe ser entendido como una impugnación al sistema de partidos existente, con el objetivo de insertarse en él y eventualmente hacer de la suya la fuerza dominante. No proponía una apertura que diera como resultado una conformación más pluralista. Esto queda en claro si tenemos en cuenta su ambigua concepción acerca del rol que cumplen los partidos: por un lado entiende que estos dividen a la sociedad (a más partidos, mayor división), pero, por otro, fundó una fuerza política para disputar el gobierno. De ahí la pretensión de que su partido representara a toda la sociedad, (hablaba en nombre de todos los tucumanos y reclamaba para sí el gobierno en 1987, aún cuando no había ganado las elecciones) y la escasa importancia que le da a la deliberación política. Pero además esa representación de “todos”, era también “plena”, en tanto el pueblo por un lado dotaba al gobierno de legitimidad y, por otro, le transfería todas sus fuerzas, para que éste decida y haga por él. La voluntad popular se debe limitar al momento en el que el pueblo elige a “su” gobierno.

⁴⁴ Mientras los demás estudios reseñados sobre el bussismo consideran que la dura crítica de Bussi hacia los demás partidos es un indicador inequívoco de su autoritarismo, para Novaro (1994), es una muestra de su desprecio hacia el pluralismo.

Por eso, así anteriormente como anteriormente se señaló que el bussismo puede ser considerado un fenómeno políticos democrático, ahora se puede agregar que su concepción de la democracia, a diferencia de la del alfonsinismo, no se basaba en el pluralismo, en el consenso, en la deliberación y la movilización social.

Pero, sobre todo para aquellos que no simpatizamos con el bussismo, más importante que lograr una caracterización acabada de este fenómeno, es tomar en cuenta cuales son las lecciones que se pueden extraer de todo el proceso que lo constituyó. Una de ellas es que, si las corrientes más democratizantes y progresistas aspiran a alcanzar el poder alguna vez, tendrán que incorporar entre sus propuestas políticas uno de los temas sobre el que pocas veces pudieron articular un discurso: el del orden y la seguridad.⁴⁵ Este es un desafío que por un lado las obligaría a superar una serie de prejuicios históricos (que el orden y la seguridad debe ser una preocupación y un tema de la derecha y de los fascistas), y que, por otro, la llevaría a replantear teóricamente la relación entre cambio y orden. De no incorporar estas demandas, difícilmente se pueda romper con la lógica siniestra que establece la relación de que para tener orden se necesita de “mano dura” y represión y de que, para mantener la estabilidad y la gobernabilidad, la democracia se debe restringir.

Lechner (1986), ya advirtió que las nacientes democracias sudamericanas debían incorporar la idea de orden de un modo más decidido, para que dejara de ser “un tema conservador frente al cual las izquierdas se limitan a levantar las banderas del cambio” (: 3). Pero recomendaba además que ese orden debía ser entendido como un “proceso conflictivo”, crítico a aquel que lo concibe como la unificación armoniosa de la sociedad (: 4).⁴⁶

⁴⁵ Nos referimos aquí a las fuerzas políticas progresistas de Argentina.

⁴⁶ Para Lechner (1986), el problema del orden es tan central, que basa el él la explicación acerca de porque las dictaduras militares tuvieron cierta aceptación social. A pesar de ser esta un tanto psicologista, vale recordarla: “el principio legitimatorio que invocan todos los golpes militares es: orden *versus* caos. La consigna cala tan hondo porque expresa un sentimiento generalizado. La situación pregolpe es percibida como un desmoronamiento no sólo y no tanto de las instituciones políticas como del conjunto de los límites mediante los cuales los hombres se distinguen entre sí, entre lo bueno y lo malo, lo lícito y lo prohibido, lo propio y lo ajeno, lo racional y lo loco. La gente se siente amenazada por un estado de locura... La gente se defiende contra un estado de cosas donde todo es posible. Cuando *todo es posible*, ello es percibido como caos. En tal desestructuración social los militares pueden presentarse eficazmente como ‘fuerzas del orden’” (:10).

Otra lección que se puede extraer es que, parafraseando a Aricó (1999), en la vida política no hay “perros muertos” mientras ciertas instancias de la sociedad o ciertas experiencias históricas no hayan alcanzado su punto de consumación. Esta lección, que tanto les costó asimilar a las elites políticas que consideraban que Bussi no podía competir en democracia, conduce a otra que se le relaciona estrechamente: que toda “nueva era”, por más refundacional que se postule, por más que quiera por todos los medios establecer un “año cero”, surgirá de formas anteriores y en ellas sobrevivirán nociones y figuras que tarde o temprano pueden reciclarse y, finalmente, que la democracia, como cualquier otra forma de gobierno, siempre estará abierta a redefiniciones, muchas de las cuales se inspirarán en ideas opuestas a las “originales”.

Estas lecciones se expresan con meridiana claridad en el proceso político argentino actual, que funda su legitimidad en un conjunto de ideas y acciones que pocos años atrás hubieran parecido obsoletas, e imposibles de realizar. Nos referimos, por ejemplo, al resurgimiento del discurso estatista, de la problemática de los derechos humanos y de la supremacía de la política ante la economía.

Lo que hasta hace muy poco parecía imposible, casi olvidado, hoy no solo parece factible, sino una de las pocas vías para recomponer la sociedad.

Finalmente queda por agregar que todo este trabajo puede ser descripto como un proceso de guerra sin cuartel entre mis razones y pasiones. Razones que pueden aportar algunas explicaciones del fenómeno que estudiamos y que me llevaron a conclusiones que no dejan de incomodarme. Por eso, a pesar del esfuerzo, el malestar persiste y ahora, más desde el estómago que desde la mente, insiste en preguntar ¿cómo pudieron votarlo? El listado que se presenta a continuación quizá explique ese malestar.

Nómina de desaparecidos en la provincia de Tucumán (febrero de 1975/diciembre de 1977) Fuente: CONADEP

Loto, José Teodoro; Mirad, Ana María; Medina, Pedro; Díaz, Guillermo; Caldera, Hugo M.; Decima, Julio Vicente; Salazar, Lidia F.; Juárez, Oscar; Santucho, Francisco R.; Mansilla, Olga; Yáñez, Tirso Luis; Herrera, Juan D.; Reinoso, José A.; Zalazar, Antonio E.; Abad, Ricardo R.; Villagra, Aldo E.; Gutiérrez, Arnaldo S.; Kofman, Jorge; Cadima, Edgar C.; Colon, Daniel A.; González, Víctor H.; Jeger, Maurice; Sion, José J.; Albornoz, Carlina; Rojas, Abelardo; Lescano, Manuel R.; Porven, Segundo O.; Ruiz, José Z.; Díaz, Raúl V.; González, Ricardo; Ilerrera, Roberto J.; Zapata, José R.; Yapur, Eduardo E.; Cuesta, Berta; Rodríguez, Ambrosio A.; Pacheco, Fidel A.; Vega, María L.; Gómez, Vicente; Ovejero, Víctor M.; Soria, julio E.; Juárez, Carlos J.; Morneo, Miguel A.; Luna, Juan M.; Teves, José A.; Mercado, Adel. D.; Mercado, María; Revilla, Andrés; Rocha, Antonio E.; Amaya, Luis S.; Palacios Ricardo J.; Palacios, Ilda I.; Martínez, Segundo L.; Lavalle, Hugo A.; Barcala, Graciela O.; Abregu, Guillermo A.; Ghigliazza, Ricardo M.; Atim, María I.; Merzbacher, Diego E.; Cazón, Santiago A.; Barboza, Carlos; Casco, Leónidas; Liscovich, Adolfo C.; Salim, Carlos J.; Sapac, Simón; Moavro, Amalia C.; Patino, Iléctor M.; Slemenson, Claudio A.; Secco, Luis R.; Brito, Raúl A.; Redondo, Víctor II; Herrera, Víctor E.; Molina, Juan S.; González, Irene S.; Mercado Manuel A.; Gómez, Miguel A.; Toledo, Oscar A.; Guerrero, Jorge L.; Zurita, María R.; Ruiz, Raúl R.; Sosa, Daniel E.; Alderete, Segundo S.; Jaroslavsky, Máximo E.; Molina, Domingo C.; Zapata, Rubén I.; Correa, Manuel F.; Molina Jesús J.; Rosales, Francisco P.; Valero, Félix; Correo, Pedro E.; Montenegro, Raúl E.; Bustamante, Juan C.; Vega, José B.; Zaragoza, Néstor, O.; Córdoba, José E.; Politi, Víctor J.; Vázquez, Néstor G.; Cortez, Juan; Moreno, Rómulo R.; Martín, julio A.; Coronel, Juan B.; Cabrera, Gallego, Carrizo, Juan A.; Coria, Víctor H.; Díaz, José C.; Noriega, Juan C.; Torres, Juan C.; Cirio, Marcos; Barraza, René Á.; Jaramillo, María C.; Agüero, Jorge; Giménez, Hugo; Peralta, Luis A.; Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel A.; Feijó, Héctor M.; Poli, Carlos B.; Poli, José F.; Castilla, Manuel G.; Castilla, Gabriel F.; Fernández, Juan D.; Pérez, Marcos A.; Suárez, Blanca C.; Castilla, Margarita de; Castilla, Fernando; Romero, Samuel G.; Villagra, Roberto M.; Gramajo, Alberto; Uruena, Víctor O.; Díaz, Francisco E.; Arias, Segundo B.; Juárez, Arturo B.; Sosa, José A.; Millán, Rosa L.; Vázquez, Harly J.; González, Manuel

A.; Martínez, Juan C.; Cano, José A.; Fochi, Gustavo A.; González, Jesús A.; López, Francisco R.; López, Juan Carlos; López, Ramón F.; López, Ricardo E.; López, Rosa C.; Romero, Rolando A.; Molina, Juan A.; Pérez, Marcos; Gargiulo, Héctor H.; Gómez, Carmen; Pérez, Alicia; Soria, Miguel R.; Nieva, Marcos E.; Núñez, Alberto A.; Durango A.; Barrionuevo, Nemesio H.; Medina, Manuel B.; Astorga, Juan M.; Brito, Juan A.; Baca, Juan A.; Farfan, Victor O.; Nieva, Oscar R.; Salinas, Juan M.; Chebaia, José G.; Tajan, Manuel A.; Tenreyro, Juan E.; Vargas, Guillermo C.; Gerez, Luis R.; Cerviño, Teresa M.; Sánchez, Modesto; Vázquez, Pedro; Lobos, Guillermo P.; Oyarzábal, Mario D.; Santana Alfredo A.; Costas, José D.; Reyes, Manuel Z.; Herrera, Luis M.; Bulacio, Eduardo O.; Colombetti, Liliana T.; Almerico José; Morales, Humberto R.; Reyes, Humberto; Romano, Horacio E.; Romano, Humberto N.; Bianchi, Ramón O.; Del Castillo, Julio A.; Granero, Angelina; Medina, Carlos R.; Romero, Jorge L.; Fernández, Eliseo R.; Barrionuevo, Mario; Quinteros, Rosa del C.; Lescano, Arturo A.; Torres, Juana; Ahumada, Claudio R.; Herrera, Miguel G.; Reinaga, Raúl; Tula, Miguel S.; Zárate, Ramón A.; De la Cruz, Juan A.; Pérez, Osvaldo H.; Santillán, Raúl C.; Furth, Federico A.; Velázquez, Hugo A.; Curia, Fernando R.; Curia, Gloria C.; Tartalo, Manuel A.; Racedo, José; Gianfrancisco, Manuel A.; Ortiz, Ramón A.; Morales, José R.; Morales, Mercedes del V.; Romero, Toribia del T.; Gallo, Juan C.; Ferreyra, Antonio M.; Morales, julio C.; Ontivero, Juan C.; Pardo, Héctor R.; Macor, Susana I.; Salazar, Antonio E.; González, Emilio R.; Trejo, Juan C.; Hohnquist, Luis A.; Fernández, Enrique R.; Giménez, Oscar; Aguilera, Segundo A.; Luna, Roberto M.; Araya, Ramón B.; Corral, Ana C.; Díaz, Hugo A.; Díaz, José L.; Tula, Héctor G.; Pisculich, Ricardo A.; Pisculich, Rolando de J.; Santillán, Carlos A.; Véliz, Domingo N.; Talaba, José D.; Ortiz, Fidel J.; Calabro, Elda L.; Leches, Raúl M.; Ledo, Alberto A.; Coronel, Alfredo A.; Figueroa, Gloria S.; Figueroa, Miguel A.; Méndez, Angel A.; Medina, Serapio R.; Tartalo, Rubén L.; Sunico, Rafael M.; Costa, Sixto F.; Barcia, Adriana C.; Soldati, Berta M.; Arias, Rubén O.; Carrazana, Ruben H.; Burgos, Luis; Córdoba, Leandro R.; Reales, Domingo F.; Alarcón, justo A.; Tejeda, Ana M.; López, Alberto B.; Cabrera, José M.; Canseco, Rubén E.; Espinosa, Juan C.; Jarma, Juan G.; Molina, Rubén; Narváez, Hugo A.; Merchan, Daniel R.; Martínez, Alberto E.; Ojeda, Hugo F.; Ramírez, Noemí del V.; Iramain, María T.; Jugo, julio A.; Lizarraga, Humberto A.; Báez, Rosita; Soria, Federico G.; Arndor, José

R.; Morón, Elías M.; Oesterheld, Diana I.; Manfredi, Angel V.; Martínez, Roberto; Sosa, Ana M.; Martínez, Bernardino; Martínez, Luis B.; Soria, Carlos D.; Nagues, Juan A.; Sorio, Federico; Díaz, Hugo M.; Rosales, Segundo P.; Plaza, Amito; Rodríguez, Enrique O.; Canas, José T.; Centurión, Javier I.; Jacobé, Ricardo R.; Corbalán, Félix V.; Ferreyra, Alberto C.; López, julio M.; Yáñez, Rafael B.; Romero, Raúl R.; Díaz, José II.; Genero, Teresa; López, José E.; Díaz, Manuel J.; Gómez, Dardo A.; Rodríguez, José M.; Decima, Martín R.; Falú, Luis E.; Sánchez, Enrique A.; Carreras, Juari F.; González, Hernán E.; Murúa, Miguel A.; Osore, Carlos R.; Romano, Dardo H.; López, Elsa R.; Safarow, Víctor H.; Vacca, Raúl A.; Luis, Alejandro D.; Cosetitino, Alba L.; Pastori, Juan C.; Vega, Hugo; Córdoba, Roque E.; Rodríguez, Pedro P.; Castilla, S.; Zalarrayán, Raúl; Díaz, Enrique L.; Berón, Omar, R.; Díaz, Domingo C.; Díaz, Lisandro I.; Díaz, Enrique G.; Paz, Antonio D.; Valdez, Luis A.; Amaya, Ramón A.; Armella, Luis P.; Olivera, Juan M.; Brizuela, Roque M.; Madrid, María S.; Vizcarra, Manuel T.; Campopiano, Julio C.; Lago, Alejandro O.; Alarcón, Rosa R.; Cerrota, Alicia D.; Ramos, José E.; Sánchez, María E.; Bermejo, Azucena R.; Cenador, María; Rondoletto, Pedro; Rondoletto, Jorge O.; Rondoletto, Silvia M.; Sánchez, María T.; Villegas, Aída I.; Zurita, Julio O.; Gerván, Luis O.; Di Lorenzo, Juan C.; Toledo, María del P.; Andrada, Juan C.; Chamas, José R.; Costas, Ignacio A.; Danun, Juan A.; Danun, Raúl R.; Silvia, Pedro B.; Jiménez, Ramón A.; González, Mario; González, María C.; Navarro, Rodolfo C.; Fote, Fortunato L.; Gramajo, Germán N.; Medina, José; Juárez, Hugo P.; Suárez, Hugo P.; Salas, Ri&prdo; Molina, Dardo F.; Elías, Víctor H.; Vázquez, Héctor R.; Pegneguy, Pierre A.; Araújo, María C.; Giménez, Eduardo N.; Santillán, Norma L.; Argañaraz, Rosario; Márquez, Damián O.; Ramírez, José A.; Conoto, Pedro G.; Corroto, Pedro G.; Rodríguez, Abraham E.; Rodríguez, Rubén D.; Rodríguez Pedro R.; Correa, Arnaldo C.; Uruena, Felipe A.; Abdelnur, Jean; Chávez, Elba A.; Pastor, Enrique A.; Cabral, Oscar R.; Giménez, Juan A.; Rodríguez, Juan F.; Díaz, Manuela M.; Argañaraz, Roque R.; Campos, José S.; Alarcón, Arcelía D. C.; Alarcón, Argentina; Alarcón, Adelina; Alarcón, Hugo M.; Alarcón, Miguel A.; Alarcón, Molina S.; Olivera, Virginia R.; Sosa, Argentina A.; Ríos, Roberto; Rodríguez, José C.; Palavecino, Domingo V.; Martínez, Domingo A.; Moreira, Víctor M.; García, Silvestre M.; Alarcón, Pedro A.; Ponce, José R.; Villalba, Bernardo S.; Dupuis, Nelly; Ponce, Horacio N.; Santillán, Gustavo R.; Somaini, Ricardo D.; Uribe,

Héctor A.; Quiroga, María J.; Rocha, Carlos A.; Ferreyra, Horacio; Mitrovich, Adriana; Bustamante, Graciela; Castro, Juan C.; Torres, Ricardo G.; Sosa, Manuel R.; Apaza, Carlos R.; Egloff, Víctor F.; Bejas, María C.; Soraire, Armando R.; Vega, Julio A.; Barrionuevo, María T.; Carrizo, Luis R.; Astorga, julio F.; Toloza, José F.; Bustamante, Héctor R.; González, Víctor H.; Ibáñez, Luisa A.; Ordóñez, Mario A.; Espeche, Enrique E.; Jiménez, María L.; Soldati, Enrique J.; Fontanarrosa, Daniel E.; Ponce, Humberto R.; Arino, Joaquín; Lezana, Manuel A.; Villegas, Jorge; Fuensalida, Lauro A.; Berón, Oscar R.; Villareal, Sixto P.; Dip, Humberto A.; Heredia, Enrique V.; Ruiz, Fidelino W.; Burdisso, Alicia R.; Garmenia, Angel M.; Sosa, Luis A.; Ponce, Ime R.; Pereyra, Ezequiel M.; Bordon, Dante E.; Quinteros, Wenceslao; Morgante, Manuela; Romero, Raúl R.; Romero, Reyes A.; Valenzuela, Lucio R.; Rojas, José D.; Mercado, julio C.; Alvarez, Nicolás E.; Plaza, René J.; Puentes, Juan C.; Ojeda, José E.; González, Francisco C.; Rodríguez, Guillermo B.; Basualdo, Ernesto M.; Cisterna, Pasto;- R.; Cisterna, María A.; Rojas, Luis; Agüero, José G.; López, Estela J.; Rojas, Dalmiro; De la Masa, José L.; Romero Juana A.; Adris, Ismael.

Figuran en este registro Luis Gerván, un cura tercermundista al que le gustaba llamar “el flaco” a Jesús y que distanciado de los jerarcas de la iglesia dejó los hábitos para dedicarse a hacer política en los cañaverales tucumanos; Yolanda Borda, una joven estudiante de bioquímica y Juancito Carreras, un estudiante de derecho que en las vacaciones convertía a su casa en una escuela para adultos que no sabían leer. Todos ellos eran originarios de Belén -un pequeño pueblo de Catamarca- y desaparecieron cuando Bussi gobernó Tucumán durante la dictadura.

Bibliografía:

- ADROGUÉ, Gerardo. 1993, "Los ex militares en política. Bases sociales y cambios en los patrones de representación política", Desarrollo Económico N° 131. Buenos Aires.
- ADROGUÉ, Gerardo. 1995, "El nuevo sistema partidario argentino", en Acuña, Carlos, *La nueva matriz política argentina*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- ALFONSÍN, Raúl. 1986, "Discurso de Parque Norte". En Aznar, L. y otros; Alfonsín: discursos sobre el discurso, EUDEBA-FUCADE. Buenos Aires.
- ALFONSÍN, R. "El pacto de los que se creen patrones del movimiento obrero y una conducción militar comprometida con el desastre de la Nación", comunicado en conferencia de prensa, 2 de mayo de 1983.
- ALFONSÍN, R. 1980, *La cuestión argentina*, Torres Agüero Editor. Buenos Aires.
- ALFONSÍN, R. 1981 *Algunas reflexiones sobre cuestiones que el neofascismo plantea a los partidos políticos para la definición de su rol bajo un régimen militar en Latinoamérica*, publicado por la Unión Cívica Radical, Buenos Aires, Argentina.
- ALFONSÍN, R. 1983, *Ahora: mi propuesta política*. Colección pensamiento político, Sudamericana /Planeta, Buenos Aires.
- ALFONSÍN, Raúl, *Discursos presidenciales*, Subsecretaría de Comunicación Social, Dirección General de Difusión. Buenos Aires.
- ARICÓ, José. 1999, *Entrevistas, 1974-1991*, Ed. del Centro de estudios Avanzados de la Univ. Nac. de Córdoba. Córdoba, Argentina.
- AZNAR, L., 1986 "La coalición democrática y el campo popular", en *Alfonsín, Discursos sobre el discurso*, publicado por Eudeba, Buenos Aires.
- BAJTIN, M. M., 1982, *Estética de la creación verbal*, Siglo XXI. México.
- BARROS, S., 2000, *Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991*, tesis doctoral en gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra.
- BARTHES, Roland. 199, *Mitologías*, Siglo XXI ed., México.
- BORON, A. 1996, "¿"Postmarxismo"? Crisis, recomposición o liquidación del marxismo en la obra de Ernesto Laclau", *Revista Mexicana de Sociología*, 58, 1.
- BORON, A., 1986, "Los dilemas de la modernización y los sujetos de la democracia", en *Alfonsín, Discursos sobre el discurso*, publicado por Eudeba, Buenos Aires.

- BRAND, G. 1981, *Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein*, Madrid, Alianza Editorial.
- CATTERBERG, E., 1986, "Las teorías de la democracia y el discurso de Parque Norte", en *Alfonsín, Discursos sobre el discurso*, publicado por Eudeba, Buenos Aires.
- CLAVREUL, J. 1983, *El orden médico*, Barcelona, Argot.
- CONADEP, 1984, *Nunca Más*, UDEBA, Buenos Aires.
- CORRADI, Juan. 1987, "The culture of fear in civil society". En Mónica Peralta Ramos y Carlos Waisman (eds.) *From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina*, Boulder, Westview Press.
- CORRADI, Juan. 1997, "Military government and state terrorism in Argentina". En Loveman, Brian y Davies, Thomas (eds.): *The Politics of Antipolitics. The Military in Latin America*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources.
- COSSIO, Ana María. 2001, "El discurso político del bussismo: una construcción del concepto de tucumanidad, 1987 - 1995", presentado en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores. Santiago del Estero, Argentina.
- CRENZEL, Emilio. 1997, "Crisis social y transformación de la subjetividad social: la emergencia de fuerzas políticas autoritarias de masa. Tucumán, 1995: el bussismo", Actas del VI Congreso de Historia, Tucumán, Argentina.
- CRENZEL, Emilio. 1997, *El tucumanazo*, Centro editor de América Latina, Biblioteca política Números 312 y 313, 1991-1997. Buenos Aires.
- CRENZEL, Emilio. 2001, *Memorias enfrentadas: el voto a Bussi en Tucumán*, Diálogos, pub. De la Fac. de Filosofía y Letras de la Univ. Nac. de Tucumán.
- DAHL, Robert. 1992, *La democracia y sus críticos*, Piadós, Barcelona.
- DELICH, Francisco. 1970, *Tierra y conciencia campesina en Tucumán*, Ed. Signos, Buenos Aires.
- GERAS, N. 1987 "Post-Marxism?", *New Left Review*, 163.
- HEVIA, Fernando. 1989, "Tucumán y el impacto del bussismo", *Norte Andino* N° 4, Tucumán, Argentina.
- HUNTINGTON, S. 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University press, New Haven.

- ISLA, Alejandro. 200, "Los apoyos de Bussi. Valores domésticos, espacios públicos en el presente tucumano", en Svampa, Maristella: *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Biblos y Univ. Nac. De Sarmiento, Buenos Aires.
- LACLAU E. y MOUFFE, Ch. 2000 "Posición de sujeto y antagonismo: la plenitud imposible", en Arditi Benjamin: *El reverso de la diferencia*, Caracas, Nueva Sociedad.
- LACLAU, E. 1985, "Tesis acerca de la forma hegemónica dela política", en Labastida, J. *Hegemonía y alternativas políticas en América latina*, México. Siglo XXI.
- LACLAU, E. 2002 "El análisis político del discurso", en deSignis 2, publicación dela Federación Latinoamericana de Semiótica, 359-365.
- LACLAU, Ernesto. 1996, *Emancipation(s)*, Verso, Londres.
- LACLAU, Ernesto (ed.). 1994, *The Making of Political Identities*, Verso, Londres.
- LACLAU, E. y MOUFFE, Ch. 1987, *Hegemonía y estrategia socialista*, Madrid, Siglo XXI editores.
- LACLAU, E. y MOUFFE, Ch. 1990, "Post-Marxism without apologies". En Laclau, Ernesto: *New Reflections on the Revolution of Our Time*, Londres, Verso.
- LACLAU, E., 1996, *Emancipation(s)*, Londres, Verso.
- LACLAU, Ernesto. 2002, "El análisis político del discurso: entre la teoría de la hegemonía y la retórica", entrevista publicada en deSignis, N° 2, abril. Gedisa ed. Barcelona.
- LANDI, O. 1988, *Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política*, Buenos Aires, Puntosur.
- LERNER, D. 1958, *The passing of Traditional Society*, The Free Press, New York.
- LIPSET, S. 1963, *El hombre político*, EUDEBA, Buenos Aires.
- LÓPEZ ECHAGÜE, Hernán. 1991, *El enigma del general*, ed. Sudamericana, Buenos Aires.
- LÓPEZ, E. 1994, *Ni la ceniza ni la gloria*, ed. de la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- LUCIANI, T. 1993, *El rey. Ortega: un fenómeno argentino*, BEAS, Buenos Aires.
- MARAÑÓN, Lelia. 2001, *Discurso. De ideologías y pasiones*, Ed. de la Fac. de Filosofía y Letras de la Univ. Nac. de Tucumán. Tucumán, Argentina.

- MARCOS, Dolores. 2002, *Autoritarismo y democracia en el noroeste argentino: el caso Bussi*, tesis de maestría en Ciencia Política en Iberoamérica, Universidad Internacional de Andalucía. España.
- NOVARO, Marcos. 1994, *Pilotos de tormentas*, Ediciones Letra Buena, Buenos Aires.
- PALERMO V. y NOVARO M. 1996, *Política y poder en el gobierno de Menem*, Norma – FLACSO. Buenos Aires.
- PORTANTIERO, Juan C. 1982, *Transición a la democracia en Argentina. ¿Un trabajo de Sisifo?*. México, Documento de trabajo – FLACSO.
- SCHMITT, Carl, 1991, “El concepto de lo político”, Ed. Alianza, Madrid.
- SIGAL, S. y VERÓN, E. 1988, “Perón o Muerte”, Buenos Aires, Hyspamérica Ed.
- SIGAL, S., 1990, “Démocratie el crise économique. Itinéraire du discours politique”, CEMS (EHESS), CNRS, Paris.
- TRONCOSO, O. 1984, *El proceso de reorganización nacional/1. Cronología y documentación (De marzo de 1976 a marzo de 1977)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- STATEN, H. 1984, Wittgenstein and Derrida, Lincoln y Londres, University of Nebraska Press.
- ZIZEK, Slavoj. 19992, *El sublime objeto de la ideología*. Siglo XXI, México.

Periódicos y revistas:

- *Clarín*, Buenos Aires.
- *Controversia*, México D.F.
- *Crónica*, Buenos Aires.
- *El Cronista Comercial*, Buenos Aires.
- *El Informador Público*, Buenos Aires.
- *La Gaceta*, Tucumán.
- *La Nación*, Buenos Aires.
- *La Prensa*, Buenos Aires.
- *La Razón*, Buenos Aires.
- *La Tarde*, Tucumán.

- *La Opinión*, Buenos Aires.

- *Siglo XXI*, Tucumán.